

Los gobiernos progresistas y de izquierda en América
Latina: apuntes para un debate y un balance necesarios

Roberto Regalado (compilador)

Prólogo de Alberto Anaya Gutiérrez

Índice

Prólogo de Alberto Anaya Gutiérrez

América Latina en tiempos de Trump:
el caso de Honduras como espejo para México
Katu Arkonada

Intento de fractura hegemónica en Bolivia 2018
Helena Argirakis

Venezuela enfrenta la agresión de los Estados Unidos
con la unidad del pueblo y más democracia
Roy Daza

Las revoluciones en la América Latina del siglo XXI: limitaciones,
potencialidades y desafíos
Hugo Moldiz

Los gobiernos del Partido de los Trabajadores: legado y futuro
Gleisi Hoffmann

La Argentina de Néstor y Cristina; la restauración conservadora y el futuro en
disputa
Jorge Drkos

Lugo: ¿progresismo político en el Paraguay?
Roberto Codas

La izquierda chilena en su laberinto
Daniel Martínez

El FMLN en el gobierno y su resistencia a la estrategia
desestabilizadora del imperialismo y la oligarquía salvadoreña
César Villalona

El imperio contraataca
Orlando Núñez

Reflexiones acerca del ejercicio de gobierno
por partidos de izquierda y progresistas
Marcelo Caruso

Los desafíos no resueltos del progresismo
en la telaraña institucional del capital
Antonio Elías

Ensayo sobre cómo abrir nuevamente la ventana
Valter Pomar

El flujo y reflujo de la correlación de fuerzas entre izquierda y derecha
en América Latina: un análisis crítico constructivo
Roberto Regalado

Prólogo

Con motivo de la celebración del XXII Seminario Internacional «Los partidos y una nueva sociedad», los días 8, 9 y 10 de marzo de 2018, coauspiciado por decenas de fuerzas políticas progresistas y de izquierda de todos los continentes, y cuyo organizador y anfitrión es el Partido del Trabajo de México, mucho me complazco en prologar la antología *Los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina: apuntes para un debate y un balance necesarios*, compilada y editada por el politólogo cubano Roberto Regalado, fundador y activo participante de nuestros seminarios.

Con catorce ensayos elaborados por solicitud del compilador a dirigentes e intelectuales orgánicos, hombres y mujeres, de la gran familia que todos los años se reúne en este evento, desde su primera edición en febrero de 1997, ofrecemos a nuestras lectoras y lectores una visión panorámica de la situación y perspectivas de los gobiernos y las fuerzas políticas progresistas y de izquierda de nuestra región, que hoy enfrentan con firmeza la ofensiva de las fuerzas imperialistas y reaccionarias que, por todos los medios, buscan desplazarlas de los espacios institucionales conquistados por los pueblos a lo largo de las últimas décadas, con el oscuro propósito de restablecer el monopolio del poder político que históricamente ejercieron, para su exclusivo beneficio y en detrimento de las grandes mayorías y minorías oprimidas.

Una parte de los trabajos aquí contenidos exponen, analizan y reflexionan principalmente sobre experiencias nacionales, otra sobre la problemática del subcontinente en su conjunto, y una tercera combina ambas perspectivas. Las opiniones expresadas en cada uno de ellos son de la responsabilidad exclusiva de cada autor o autora. La aclaración es válida porque quienes se interesen por estos temas encontrarán aquí opiniones diversas y, en ocasiones, respetuosamente divergentes. Al ser esta una antología elaborada por encargo, nadie, ni el compilador, sabía de antemano cuál sería el contenido específico de cada ensayo, y el resultado ha sido muy positivo, tal como se deseaba y se esperaba: un abanico de posiciones, muchas de ellas elaboradas «en tiempo real», en el fragor de la lucha cotidiana, que sirve para motivar un amplio debate y un necesario balance de las experiencias positivas y negativas

acumuladas por los procesos de reforma progresista y transformación revolucionaria en nuestra región.

Para las mexicanas y los mexicanos democráticos, progresistas y de izquierda, el debate que se propone en esta antología resulta muy oportuno. Al concluir un sexenio más, tal como hemos hecho desde 1988, el domingo 1 de julio de este año 2018 vamos a competir por la Presidencia de la República, en esta oportunidad, por tercera vez con nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador. En esta elección será mucho más difícil que la derecha, por medio de uno de sus dos grandes partidos, nos robe la victoria, como ha hecho en ocasiones anteriores. Esto sitúa a la izquierda mexicana ante la posibilidad real de ejercer el gobierno federal y, aunque cada situación nacional es singular y no existen recetas, sin duda alguna, es para nosotras y nosotros de gran utilidad conocer lo que han hecho y las dificultades que han encontrado quienes ya transitan por esta senda durante los últimos veinte años.

En nombre de todos los partidos coauspiciadores del Seminario Internacional «Los partidos y una nueva sociedad», en nombre del Partido del Trabajo de México, y en el mío propio, deseo que esta antología sea de interés y utilidad para ustedes.

Alberto Anaya Gutiérrez

Dirigente Nacional del Partido del Trabajo

América Latina en tiempos de Trump: el caso de Honduras como espejo para México

Katu Arkonada*

Vivimos tiempos interesantes, a la par que confusos. Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, afirma que estamos ante el fin de la globalización neoliberal.¹ Sustenta su tesis en dos eventos en los dos países donde se dio inicio al modelo neoliberal (después de que los Chicago Boys utilizan el Chile de Pinochet como laboratorio): el Brexit en el Reino Unido y la victoria de Trump en Estados Unidos. Dichos eventos, cuanto menos, suponen un frenazo a la globalización de los mercados y un retorno a formas de proteccionismo económico que la ortodoxia neoliberal había desterrado. Los países donde se dio inicio al neoliberalismo cierran el círculo y cortocircuitan el desarrollo del modelo a escala global.

La crisis de una Unión Europea de los Estados y el capital, por encima de los intereses de los pueblos, y la decisión de abandonar la misma por parte del principal aliado de los Estados Unidos en la OTAN, es síntoma también de que el orden geopolítico que conocíamos hasta ahora ha comenzado a difuminarse.

El auge de Rusia como potencia geopolítica, a partir de sus movimientos en los tableros de Ucrania y Siria, y la consolidación de China como el otro actor determinante en Asia, África y América Latina, restan la hegemonía mantenida hasta el momento por Estados Unidos a escala planetaria.

No hay que olvidar que China ya es primera potencia económica mundial si medimos el PIB por paridad del poder adquisitivo (PPA), y pronto lo será en términos absolutos, siendo poseedora, además, de la mayor parte de la deuda externa estadounidense. En la medida en que consolida una mayor expansión geopolítica, mediante la nueva Ruta de la Seda, su complemento marítimo, y la mayor parte de obras de infraestructura en América Latina y el Caribe, se

* Katu Arkonada es vasco de identidad, boliviano de nacionalidad, y latinoamericano de corazón.

¹ Álvaro García Linera: «La globalización ha muerto», (<http://www.jornada.unam.mx/2016/12/28/opinion/013a1pol>).

convierte en un competidor que, a cada paso que da, resta hegemonía planetaria a Estados Unidos.

El surgimiento y posterior implosión del engendro llamado Estado Islámico/ISIS/Daesh, en cuyo surgimiento y fortalecimiento tuvieron un rol fundamental las agencias de inteligencia estadounidenses, son otro de los síntomas del declive de dicha hegemonía.

La propia llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ganando (no en votos, pero sí en la mayoría de distritos electorales) a Hillary Clinton, candidata de Wall Street y el complejo industrial-militar, parece lo indicado para cerrar el círculo abierto por Ronald Reagan en los ochenta.

Estados Unidos en tiempos de Trump

Es necesario recordar que Obama tiene el dudoso honor de ser el primer presidente en toda la historia de los Estados Unidos que más tiempo ha ejercido su mandato con el país en guerra.² No solo mantuvo las operaciones en Irak, Afganistán y Siria, si no que incursionó militarmente en Libia, Pakistán, Yemen y Somalia. Frente a ello, Trump no ha abierto ningún nuevo frente de guerra, aunque sí ha propuesto³ incrementar el presupuesto militar un 9%, 54 000 millones para un total de casi un billón de dólares.

El America First de Trump es real. Hay un repliegue hacia el mercado interno, un intento de mantener o reindustrializar el país al mismo tiempo que se sale del TPP (que era el campo más visible de disputa con China en el ámbito comercial).

Si observamos otros indicadores geopolíticos, podemos afirmar que, hasta el momento, no hay un cambio en la política exterior estadounidense, cuando ya se ha cumplido más de una cuarta parte del mandato de Donald Trump.

- A pesar de pelearse vía Twitter con Corea del Norte y sus bravuconadas nucleares, no se ha dado ningún paso más para materializar un ataque real

² «El inesperado legado de Obama: ocho años de guerra continua» (<https://www.nytimes.com/es/2016/05/18/el-inesperado-legado-de-obama-ocho-anos-de-guerra>).

³ «Trump propone aumento de 54 mil mdd en presupuesto militar» (<http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-propone-aumento-de-54-mmdd-en-presupuesto-militar.html>).

- No se ha certificado el acuerdo nuclear con Irán, pero este sigue en pie hasta el momento
- Se mantiene el *statu quo* con Rusia, en medio de acercamientos y alejamientos, y tampoco varía la política hacia Ucrania
- Se ha calificado de obsoleta la OTAN, pero no se ha variado la participación ni la postura de EEUU como miembro principal de la Alianza Atlántica
- Se ha decidido trasladar la Embajada en Israel a Jerusalén (era una propuesta de campaña debido a la presión del lobby judío) pero nada hace indicar que vaya a haber ningún cambio de postura en la política hacia Palestina, manteniendo a Israel como su principal aliado en Oriente Medio

Es decir, hasta el momento, y salvo alguna variación más de forma que de fondo, se mantiene la política exterior estadounidense que responde tanto al lobby financiero de Wall Street, como al complejo industrial militar.

El ciclo progresista en América Latina

Mientras tanto, a pesar de que Estados Unidos mantuvo su política imperial sin modificaciones en los últimos años, América Latina sí cambió.

Solo podemos pensar el momento actual, de una América Latina en tiempos de Trump, si analizamos las diversas etapas que ha mostrado el ciclo progresista que convirtió a América Latina y el Caribe en la única región del mundo donde se comenzó a construir una alternativa al sistema capitalista, o al menos a sus patrones de acumulación más agresivos, desarrollados por medio de las políticas neoliberales.

Fase previa, o acumulación originaria del ciclo progresista (1989-1998): las resistencias al neoliberalismo

Caía el muro de Berlín, se desintegraba el proyecto histórico de la izquierda comunista mientras las fracciones más concentradas del capital arrasaban con las conquistas históricas de las y los trabajadores y los pueblos. Sin embargo, al tiempo que nos decían que había llegado el fin de la historia y de la lucha de clases, en el Sur del mundo comenzaba a germinar una resistencia al neoliberalismo todavía embrionaria durante el «caracazo» (1989) y ya más organizada en el levantamiento zapatista (1994), así como otros procesos de

resistencia contra las consecuencias de las políticas neoliberales primero y de lucha contra esas mismas políticas después.

**Primera fase del ciclo progresista (1998-2003):
la irrupción heroica del posneoliberalismo nacional-popular**

La potencia plebeya de resistencia al neoliberalismo se transforma en proyectos políticos que apuestan no ya por la resistencia, sino por la toma del poder, o al menos de los gobiernos como primer paso. Ello se da dentro de las formas constitucionales o institucionales vigentes, como parte de una estrategia que se teje dentro de un período contrarrevolucionario abierto luego de la derrota de las fuerzas revolucionarias plasmadas en las dictaduras cívico-militares de mediados de los setenta.

La destrucción social del neoliberalismo y la crisis provocada por la pérdida de hegemonía de las élites políticas y económicas dejan un vacío político que es aprovechado por los proyectos nacional-populares para llegar a los gobiernos. El comandante Hugo Chávez en Venezuela (1998), Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil (2002) y Néstor Kirchner en Argentina (2003) abren el camino para el cambio de época en América Latina y el Caribe.

Al final de esta primera fase se refuerza la disposición de lucha desde abajo y desde arriba y la construcción heroica del posneoliberalismo con la derrota infligida por el pueblo de Venezuela al golpe de Estado contrarrevolucionario de abril de 2002.

**Segunda fase del ciclo progresista (2004-2006):
pico de acumulación política**

A Chávez, Lula y Kirchner se les suman Evo Morales en Bolivia (2005) y Rafael Correa (2006), en Ecuador, al mismo tiempo que se derrotaba el proyecto imperial conocido como ALCA, en noviembre de 2005, poco después de que los gobiernos revolucionarios de Cuba y Venezuela, con Chávez y Fidel como arquitectos de la integración, impulsaran, en diciembre de 2004, el ALBA, y nacieran, también en ese período de dos años, valiosos instrumentos al servicio de la liberación de los pueblos como Telesur o la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad.

Se producen algunos «golpes de timón» claves que muestran el cambio de rumbo en los escenarios políticos nacionales, como las nacionalizaciones de

los hidrocarburos en Bolivia, las asambleas constituyentes en Bolivia o Ecuador, o el pedido de perdón por parte del Estado argentino por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar.

Al auge del antimperialismo en la región, se suma la afirmación del carácter socialista de la Revolución Bolivariana. En este horizonte del Socialismo del Siglo XXI se alinean la Revolución Democrática y Cultural de Bolivia y la Revolución Ciudadana de Ecuador, con el socialismo comunitario y el «Buen Vivir» como horizontes de época.

Tercera fase del ciclo progresista (2007-2012): la estabilización del proyecto posneoliberal

Al núcleo duro de gobiernos progresistas se suma Centroamérica con la llegada de los sandinistas al gobierno nacional de Nicaragua (2007, aunque Daniel Ortega gana las elecciones en noviembre de 2006) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador (2009). También constituyen un avance en la correlación de fuerzas políticas favorable a los pueblos la llegada al gobierno de Fernando Lugo en Paraguay (2008) y el viraje hacia posiciones progresistas del gobierno de Manuel Zelaya en Honduras.

En esta fase son derrotados, gracias a la movilización popular, los intentos de golpe de Estado en el núcleo duro bolivariano: Bolivia (2008) y Ecuador (2010), aunque no logran ser frenados los golpes a los gobiernos populares de Honduras en 2009 (cuando se incorpora al ALBA), y Paraguay en 2012, inaugurando así la nueva estrategia de «golpes blandos» de la derecha, perpetrados desde las propias instituciones del Estado liberal.

Estas piedras en el camino de la construcción progresista y revolucionaria de Nuestra América tienen su contracara en las nuevas constituciones aprobadas en referéndum que consolidan la refundación de los Estados posneoliberales en Bolivia y Ecuador (con el antecedente de Venezuela en 1999). En los nuevos textos constitucionales se logra cristalizar el cambio en las correlaciones de fuerzas sociales y políticas a favor de los pueblos.

Al mismo tiempo, América Latina y el Caribe entran de lleno en la transición al mundo multipolar, con una presencia, cada vez mayor, de Rusia y sobre todo de China en la región, además del nacimiento, en junio de 2009, del BRIC (Brasil, Rusia, India y China, al que se sumaría Sudáfrica en abril de 2011), que

contrarrestan la hegemonía yanqui en su tradicional patio trasero y generan condiciones para un desarrollo económico endógeno con mayores grados de soberanía.

Cuarta fase del ciclo progresista (2013-2016): reflujo y crisis

La muerte del comandante Chávez (marzo de 2013) abre de manera simbólica una etapa de reflujo, de crisis en el bloque nacional-popular, que se traduce en un pico de desacumulación política y social, que culmina con tres derrotas electorales para la izquierda y los proyectos nacional populares o el progresismo (de distinto signo, pero derrotas al fin y al cabo), en Argentina (octubre de 2015) —el único gobierno de izquierda y/o nacional-popular perdido en las urnas desde 1998—; Venezuela (diciembre de 2015) y Bolivia (febrero de 2016), además de un golpe político-institucional-mediático contra el gobierno brasileño de Dilma Rousseff (mayo de 2016).

Esta fase deja un debate no saldado para la izquierda, el del Estado. Decía René Zavaleta Mercado, sociólogo marxista boliviano, que la historia de las masas es una historia que se hace contra el Estado. Pues este históricamente expresa las relaciones de dominación, y aunque aparenta estar por encima de los intereses de las distintas clases y ser árbitro, produce los instrumentos institucionales necesarios para la reproducción de la clase dominante. Lo mismo afirma el también boliviano Jorge Viaña; por lo tanto, todo Estado, en última instancia, niega a las masas, aunque pretenda expresarlas. Probablemente esto se ve más claro en los procesos del segundo anillo progresista, y nos ayuda a entender parcialmente lo sucedido en Argentina o Brasil.

Sin embargo, en el caso de los procesos que se han planteado cuestionar el poder de la clase dominante y al sistema mismo, el Estado se constituye como «de transición», casi como un «Leviatán a contramano», pues expresa nuevas correlaciones de fuerzas que permean las instituciones, modifican las reglas de juego y se proponen apuntalar la construcción de poder popular.

En la dialéctica contradictoria de las transiciones, la lógica de la inercia estatal obstaculiza, al tiempo que potencia, las experiencias populares autogestionarias. Es un Estado que se reforma a sí mismo; por ejemplo, mediante las reformas constitucionales del núcleo duro bolivariano, lo que no

sucedió en ninguno de los países del segundo anillo progresista, en los cuales ese viejo monstruo y sus lógicas de arbitrio bajo envolturas sumamente democráticas favorecieron la reconstitución de la iniciativa cultural, económica, institucional, comunicacional de las fuerzas restauradoras del orden neoliberal; al tiempo que las fuerzas políticas que condujeron los gobiernos populares de este segundo anillo priorizaron la lucha desde arriba desvalorizando la auto organización popular, salvo en los momentos de agudización del enfrentamiento en que intentan apelar a la movilización de las masas. En cambio, en el primer anillo se apela constantemente a la lucha desde abajo como reaseguramiento del proceso revolucionario y como senda de construcción del socialismo.

Quinta fase del ciclo progresista (2016-): guerra de posiciones entre el posneoliberalismo y el capitalismo *offshore*

Si bien hemos entrado en una fase de crisis del ciclo progresista, no se puede hablar de su fin. En primer y evidente lugar, porque si bien la clase dominante ha logrado desalojar del gobierno y del aparato del Estado a algunos gobiernos populares mediante elecciones (Argentina) o maniobras leguleyas y judiciales (Brasil), no ha caído el núcleo duro del cambio de época progresista: Bolivia y Venezuela, a quienes acompañan Nicaragua y por supuesto la heroica Revolución Cubana. Aunque hayan perdido dos procesos electorales parciales y, sobre todo en Venezuela, se hayan agudizado las contradicciones, el enfrentamiento y la polarización social, no se ha detenido la construcción revolucionaria expresada fundamentalmente en las comunas, con el apoyo del Estado revolucionario.

Los dos proyectos, junto con Nicaragua y Cuba, que se plantearon ir más allá de las relaciones capitalistas en el largo plazo son los que están en pie, lo que indica que la batalla estratégica de nuestro tiempo es la defensa de esos procesos.

La fase en la que entra el ciclo progresista se caracteriza entonces por una guerra de posiciones en la que la izquierda debe hacer un buen diagnóstico y balance del breve ciclo de derrotas electorales, de lo sucedido en Brasil, y Ecuador con la traición de Lenin Moreno al legado de Correa, y en general del

reflujo en la capacidad de resistencia y movilización política de las fuerzas de izquierda en el continente.

América Latina en tiempos de Trump

Para pensar Nuestra América en tiempos de Trump, es necesario hacerse una pregunta:

¿Sabe Trump donde está América Latina?

Vamos a suponer que sí, o al menos que sus asesores del Pentágono y el Comando Sur sí lo saben. Entonces viene una segunda pregunta:

¿Ha cambiado la política exterior estadounidense en lo que respecta a América Latina respecto a la administración Obama?

Todo parece indicar que la respuesta es no. Veamos también algunos indicadores que nos permitan sustentar esta afirmación:

- Se mantiene y renueva el decreto ejecutivo de Obama declarando a Venezuela un peligro para la seguridad de los Estados Unidos
- Se mantiene la política injerencista contra Bolivia y otros gobiernos progresistas. No olvidemos que hay un hilo conductor entre el golpe parlamentario en Paraguay contra Fernando Lugo (2012) y el *impeachment* contra Dilma (2016), la presencia en ambos países de Liliana Ayalde, exdirectora de USAID y embajadora en cada uno de esos países. Actualmente, Ayalde es directora civil adjunta para Asuntos de Política Exterior del Comando Sur.⁴ Otro hilo conductor lo podemos encontrar en el nombramiento de Philip Goldberg como encargado de negocios en Cuba. Goldberg, experto en contrainsurgencia y ex embajador en Kosovo, ya fue expulsado de Bolivia por su rol de buscar la balcanización del país durante el empate catastrófico que se vivía en el país andino-amazónico durante 2007-2008
- Respecto a Cuba, y a pesar de bruscas declaraciones y movimientos políticos, parece que hasta el momento los cambios son más de forma que de fondo

⁴ (<http://www.miamidiario.com/politica/miami/florida/comando-sur/comando-sur-de-los-estados-unidos/liliana-ayalde/371948>).

- Se mantiene la misma política de bases militares y ejercicios militares conjuntos, como la reciente operación AmazonLog⁵ en la Amazonía entre las fuerzas armadas de Estados Unidos, Brasil, Colombia y Perú
- Se mantiene el rol de la OEA como policía cipaya del imperialismo para golpear a los gobiernos progresistas
- Otra de las principales promesas de campaña, el famoso muro de Trump, es una realidad en buena parte de la frontera con México, donde ya existen más de 1 000 kilómetros⁶ de muro y vallas sobre los 3000 km de frontera conjunta

Relaciones Estados Unidos – América Latina

Partiendo de la premisa de que hasta ahora no ha cambiado mucho entre Estados Unidos y América Latina, nos hacemos entonces otra pregunta:

¿Va a cambiar la política exterior estadounidense hacia Nuestra América con Trump en el poder?

Entrando en el terreno de la prospectiva política, la gira del secretario de Estado Rex Tillerson, exCEO de Exxon, por varios países de América Latina, permitió subrayar dos elementos estratégicos para los Estados Unidos en su mirada a la región: los recursos naturales en suelo latinoamericano e intentar frenar la presencia cada vez mayor de China, manteniendo un control político sobre los gobiernos de derecha latinoamericanos.

En base a estos dos elementos, son dos los procesos políticos que pueden modificar la política estadounidense hacia América Latina.

El primero de ellos es Venezuela. La revolución bolivariana y chavista sufre desde 2014 un recrudecimiento de la guerra económica, política y mediática, y si bien la administración Trump no ha variado sus posiciones, la no participación de la mayor parte de partidos que componen la Mesa de Unidad (MUD) en las elecciones presidenciales del 22 de abril allanan el camino a que Nicolás Maduro revalide la presidencia, pero también a una posible intervención militar impulsada por Estados Unidos y operada desde algún país vecino.

⁵ (<https://www.alainet.org/es/articulo/189101>).

⁶ (<http://www.bbc.com/mundo/media-37850439>).

El segundo escenario es México. La frontera sur de EEUU podría pasar de tener un gobierno lacayo del Departamento de Estado a tener un gobierno progresista en la figura de López Obrador que, sin traer una segunda revolución política a la tierra de Zapata y Pancho Villa, sí desde luego va a recuperar la soberanía en política exterior, generando un movimiento del tablero geopolítico y de la integración latinoamericana y caribeña nada favorable a los intereses estadounidenses.

Este último escenario está en desarrollo, con una campaña electoral que comienza oficialmente el 30 de marzo, y unas elecciones presidenciales el 1 de julio, sin segunda vuelta.

En ese sentido, es importante analizar lo sucedido en las últimas elecciones de 2017 en América Latina, las de Honduras, donde podemos extraer algunas enseñanzas del fraude cometido, para evitar que se reproduzca en México, algo de suma importancia no solo para el país norteamericano, sino para toda Nuestra América.

El espejo hondureño

Hegel decía que todos los grandes hechos (y personajes) de la historia universal, aparecen dos veces. Marx le complementó añadiendo que una vez como tragedia y otra como farsa.

Lo sucedido en Honduras nos confirma la tesis de los viejos filósofos de que la historia siempre se repite dos veces: el golpe de Estado a Mel Zelaya en 2009 como tragedia y el fraude electoral de 2017 como farsa.

El 28 de junio de 2009 militares encapuchados sacan en pijama al presidente Zelaya y lo deportan ilegalmente, tras pasar por una base militar conjunta entre Honduras y Estados Unidos,⁷ a Costa Rica. Zelaya era acusado de intentar realizar un plebiscito para consultar la posible convocatoria de una Asamblea Constituyente, aunque su verdadero delito fue un viraje desde los postulados que le habían llevado al gobierno como representante del Partido Liberal en 2006, para girar en 2008 y promover el ingreso de Honduras primero

⁷ Honduras tiene un acuerdo con Estados Unidos desde los años 50 por el que este último país puede utilizar libremente cualquier base militar o aeropuerto hondureño. Tan solo en la base militar de Palmerola se calcula que hay alrededor de 500 marines.

en Petrocaribe y después en el ALBA, lo que le permitió ese mismo año elevar el salario mínimo un 60%.

El ataque no era solo contra un gobierno progresista, sino contra el eslabón más débil del ALBA, después de una década de ascenso de los gobiernos de izquierda en la región. Honduras además tiene una posición geopolítica clave en Centroamérica, que fue utilizada por la CIA en los años ochenta como plataforma para entrenar a la contra nicaragüense, y se convirtió en 2009 en un laboratorio del *smart power* que defendía Hillary Clinton, en aquel entonces secretaria de Estado; la combinación de *hard power* (golpe de estilo clásico, uso de las Fuerzas Armadas) con el *soft power* (impulso político desde el Poder Judicial junto a manipulación mediática y apagón informativo).

Ocho años después, Libre se presentaba a las elecciones en una Alianza de Oposición junto al Partido Innovación y Unidad (PINU) y el Partido Anticorrupción (PAC), con el líder de este último partido, el conocido presentador de televisión Salvador Nasralla, como candidato a presidente. Enfrente, Juan Orlando Hernández, candidato del Partido Nacional y presidente desde 2013, que se presentaba a una reelección que prohíbe la Constitución hondureña en su artículo 239.⁸ Por mucho menos que eso Mel Zelaya fue objeto de un golpe de Estado.

EL 27 de noviembre, un día después de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral hace público un informe de resultados donde al 57% del recuento realizado, Nasralla y la Alianza de Oposición obtienen una ventaja de más de 5 puntos sobre JOH. En la mayor parte de sistemas electorales del mundo, una ventaja de 5 puntos con más del 50% del recuento realizado se considera tendencia irreversible. Pero no en Honduras, donde tras una más que sospechosa caída del sistema informático, donde se dejan de retransmitir 5 000 actas, se ofrece un nuevo recuento donde JOH supera por 1.6 puntos a Nasralla. El fraude se consolida el 18 de diciembre cuando el TSE ofrece los resultados finales otorgando la victoria a JOH por 42,95% frente al 41,5% de Nasralla. Todo ello en medio de un toque de queda decretado el 1 de

⁸ *El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de toda función pública.*

diciembre, que ha dejado hasta el momento más de 30 personas muertas por disparos de las fuerzas de seguridad.

El fraude fue tan descarado que incluso la propia OEA, nada sospechosa de simpatías por los gobiernos progresistas, cuyo jefe de Misión Electoral era el boliviano Tuto Quiroga, exvicepresidente del dictador Banzer (menos sospechoso aún), se ve obligada a emitir un informe,⁹ el 17 de diciembre, respaldado por un comunicado de prensa de su Secretaría General que señala:

Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacen imposible determinar con la necesaria certeza al ganador.

Pero no solo eso. Existe un informe de respaldo encargado por la misma OEA al profesor de la prestigiosa universidad estadounidense de Georgetown, Irfan Nooruddin, que analiza estadísticamente los resultados del procesamiento de actas, y que resalta como en varios departamentos se produce un aumento brusco de la carga de votos a partir de la caída del sistema, aumento que favorece a Juan Orlando Hernández frente a la Alianza de Oposición.¹⁰ Por ejemplo, en el Departamento de La Paz, en el último tercio de carga de votos, que pasa del 68% al 73%, y ese «aumento» en la participación coincide con un aumento de los votos a favor de JOH de 44% a 56%, mientras que los de Nasralla descienden del 32% al 16%.

Nooruddin afirma que: «Las diferencias son demasiado grandes como para haber sido generadas por casualidad y no son fácilmente explicables, lo que desata dudas sobre la veracidad del resultado». Sin embargo, y a pesar de todas estas pruebas evidentes, el fraude se consumó, y sería bueno detenerse un momento a analizar las razones de este hecho. Podemos encontrar tres elementos para el análisis:

⁹ (<http://www.oas.org/fpdb/press/segundo-informe-preliminar-moe-honduras-18dic-final.pdf>).

¹⁰ (<https://www.oas.org/fpdb/press/Nooruddin-Analysis-for-OAS-Honduras-2017.pdf>).

- El control territorial de las casillas. En cualquier elección es vital la defensa del voto en el lugar que se produce el mismo. Para eso es necesario construir organización en el territorio, y donde no se alcance, generar alianzas que te permitan ese control. Es posible que esto explique la alianza de MORENA en México con el PES, partido evangélico que garantiza no solo 3 millones de votos, si no la presencia en una parte del norte de México donde MORENA es débil territorialmente
- El no control de las instituciones estatales. Este parece ser el mayor punto débil y donde el fraude se perpetró en Honduras. Al ser la mayor parte de los miembros del Tribunal Supremo Electoral de Honduras designados por el Partido Nacional, se formó una barrera invisible pero tan eficiente como antidemocrática, que permitió consumir el fraude al no tener presencia en los diferentes momentos del recuento electoral, tanto físico como informático. Este también es un punto débil en México, en un Estado controlado por el PRI donde el menor problema no va a ser la compra de votos en sectores populares por medio de expensas o el pago de 500 pesos, si no un posible fraude informático, estilo 1988 recargado. De ahí que la movilización popular vaya a ser determinante en las horas y días siguientes a las elecciones presidenciales
- Una mala política comunicativa hacia dentro y hacia afuera. Si bien en Honduras se consiguió informar y movilizar al país con cierto éxito, fuera de Honduras, de manera similar a lo que ocurrió tras el golpe de 2009 o las elecciones de 2013, no se sabía con certeza lo que estaba pasando, no se transmitían las pruebas existentes del fraude, y mucho menos ninguna información de como apoyar y presionar desde fuera del país. Es por eso que este se convierte también en uno de los principales desafíos para la alianza electoral Juntos Haremos Historia, conformada por MORENA, PT y PES. El plan A es ganar con un control férreo y territorial de todas las casillas, pero el Plan B siempre debe ser la defensa del voto mediante la movilización y la presión internacional. Se debe aprender de las experiencias de 1988 y 2006

¿Qué hacer?

Partiendo de la tesis de que Trump es solo un síntoma de una enfermedad llamada capitalismo, en estado de descomposición, debemos estar vigilantes de cómo se despliegan estos síntomas en la cartografía política nuestroamericana.

Y la primera trinchera son los dos escenarios analizados, Venezuela y México, donde el lugar en que debemos situarnos es en la defensa de la democracia, en la demanda de que se garanticen elecciones democráticas y se respete la voluntad popular, sin injerencias de ningún tipo. Que el pueblo de Venezuela, y el pueblo de México, puedan decidir de manera soberana su futuro, en paz y libertad.

En Venezuela nuestro deber es defender la Revolución Bolivariana y chavista, no porque seamos de izquierda, sino porque nuestro lugar en la trinchera de esta pelea es claro, enfrente del imperialismo y los oligopolios mediáticos.

En México, los demócratas de izquierda debemos apoyar a MORENA y al PT, porque se va a impulsar un Plan B en la figura de Ricardo Anaya de la coalición PAN-PRD que solo significa una continuidad de las políticas neoliberales impulsadas por Fox y Calderón, del mismo partido que Anaya, y continuadas por Enrique Peña Nieto del PRI.

Para ello, y como nos recuerda Rafael Correa,¹¹ debemos convertir en fuerza movilizadora a los millones (94 en toda América Latina) de personas que las políticas de los gobiernos de izquierda, nacional-populares y/o progresistas, sacaron de la pobreza. Nuestra lucha por la justicia social debe partir de un pueblo organizado frente a un capitalismo que nos convierte en consumidores, individualizando, fragmentando para derrotarnos, primero culturalmente, y después económicamente. No dejemos que esto pase en ninguna de las trincheras político-electoral de Nuestra América.

¹¹ (<https://www.nodal.am/2018/02/desafio-estrategico-la-izquierda-latinoamericana-atacada-la-derecha-propios-errores-rafael-correa-delgado>).

Intento de fractura hegemónica en Bolivia 2018

Helena Argirakis*

El nuevo año 2018 inició sus primeros días en Bolivia con un clima de creciente conflictividad sociopolítica: con más de 47 días de paro médico (iniciado en el año 2017) y la sucesiva sumatoria de diversos sectores que pedían la derogatoria de una serie de artículos de un Código Penal insuficientemente socializado, poco conocido y menos debatido por la sociedad civil, argumentando la criminalización del ejercicio profesional de diversa índole. Dicho conflicto fue respondido con la propuesta del gobierno central de derogar los artículos cuestionados, para su posterior revisión y replanteamiento en mesas de trabajo.

Ante la respuesta del oficialismo, la matriz del conflicto volvió a escalar, ya que la oposición replanteó la demanda política argumentando la necesidad de abrogación del Código Penal en su totalidad, lo que agravó los niveles de complejidad del conflicto. El gobierno nuevamente respondió a la remozada demanda política con la propuesta de revisar en su integralidad al nuevo Código Penal durante un año completo, incluyendo a todos los sectores y organizaciones sociales involucradas en la problemática.

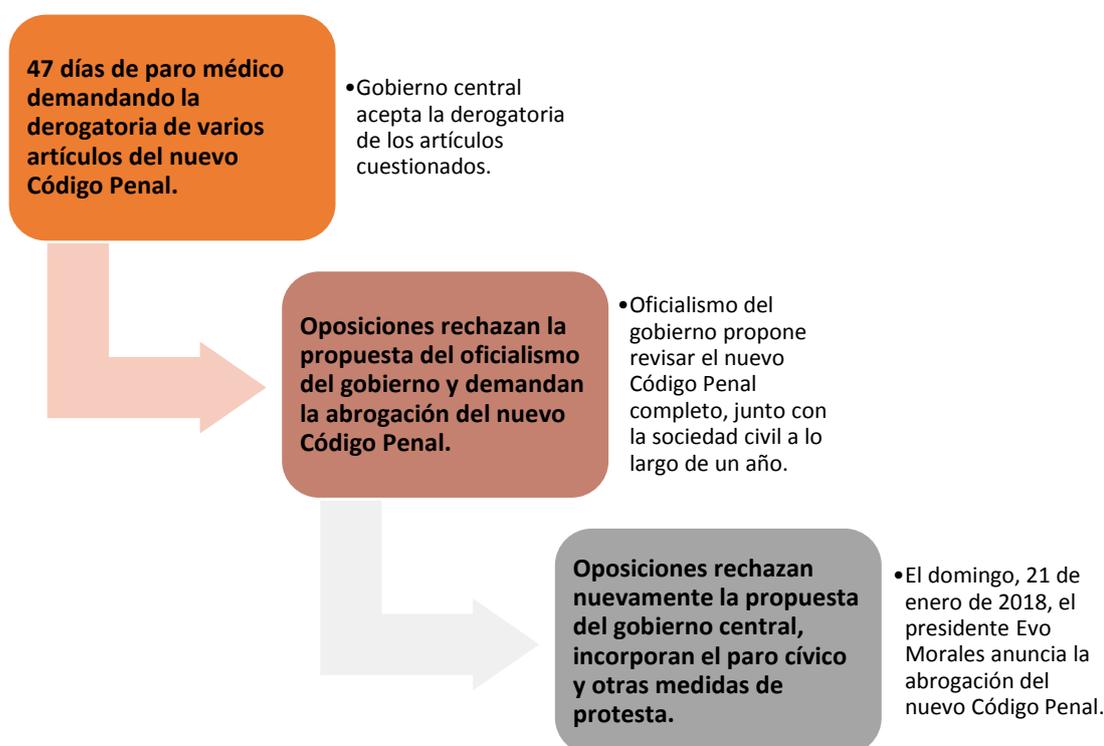
En el ínterin, se realizó un paro cívico en Santa Cruz, después de casi una década sin este repertorio de acción colectiva¹² del Comité Cívico Pro Santa

* Helena Argirakis es politóloga cruceña.

¹² En el contexto de este análisis definimos al Comité Cívico Pro Santa Cruz como un movimiento social conservador, que articuló políticamente (conformando el Bloque Cívico Regional) la demanda por la autonomía departamental (2004) en reacción o respuesta regional territorializada a la emergencia étnica y social del Bloque Indígena Originario Campesino Obrero Popular (organizados en el Pacto de Unidad y luego en el Instrumento Político del MAS-IPSP) y a la denominada Agenda de Octubre (entre los puntos sobresalientes, la instalación de la Asamblea Constituyente, la refundación del Estado Plurinacional y la nacionalización de los recursos naturales). Los movimientos sociales son conocidos por buscar influir en el Estado por medio de los denominados *repertorios de acción colectiva*, que son las formas culturales y territoriales de resistencia y manifestación política para lograr que sus protestas, demandas y reivindicaciones sean consideradas, se tornen en agenda política de parte del gobierno nacional y culminen en transformaciones en la estructura del Estado. En el caso del Comité Cívico Pro Santa Cruz, uno de sus repertorios de acción colectiva más característico es el *paro cívico*, que consiste en el llamamiento del Comité Cívico cruceño a la población en general, a realizar un paro o suspensión total de actividades laborales, tránsito y el desarrollo de la cotidianidad en el marco del territorio urbano o departamental de Santa Cruz, amparados en las resoluciones de la denominada Asamblea de la Cruceñidad (ente corporativo que aglutina a las

Cruz, luego del fallido Golpe Cívico Prefectural y Regional del año 2008. A la postre, la conflictividad se volvió mayor: las organizaciones que se identificaron como operadores políticos de las demandas crecientes rechazaron nuevamente la propuesta del gobierno central y prosiguieron las movilizaciones hasta que, el domingo 21 de enero, el presidente Evo Morales anunció la abrogación del Código Penal, explicando que «este no debía ser el argumento para generar confusiones, y para que las derechas deje de conspirar para generar desestabilización con desinformación y mentiras.»¹³

Gráfico No. 1: Espiral de conflicto de fines del año 2017 e inicios del año 2018



Sin embargo, a pesar del anuncio del presidente Morales de la abrogación del nuevo Código Penal, los operadores políticos de las oposiciones de derechas rápidamente respondieron que demandaban el respeto del voto popular en el referéndum del 21 de febrero de 2016, para impedir la repostulación electoral

representaciones diversas de cierta parte o facciones de la sociedad civil cruceña) y bajo la proclama de ser el *Gobierno Moral de los Cruceños*. La acción colectiva es el principal activo con que cuentan los movimientos sociales para obtener visibilidad social, solidaridad y fuerza, para atraer atención del resto de la sociedad civil, de los medios de comunicación y generar simpatía hacia sus demandas.

¹³ (Tweet @evoespueblo 11:37 a.m., 21 de enero de 2018).

de Evo Morales para el año 2019, además de argumentar la necesidad de poner «fin a la dictadura» que se vive en Bolivia, como una insinuación no solo de bloquear la candidatura del actual Presidente, sino inclusive de interrumpir la actual gestión del gobierno.

Frente a la anterior situación y ante la evidencia de varias tecnologías políticas en el desarrollo o evolución de la conflictividad: ¿qué observaciones, análisis y constataciones preliminares podemos extraer de esta espiral de conflictos durante los primeros días de enero de 2018?

Enero de 2018 como continuación del 21F

En primer lugar, podemos constatar que enero de 2018 es la continuación o segunda fase de la arremetida reaccionaria detrás del referéndum de febrero de 2016, que si bien los resultados electorales del 21F se configuraron como una *excepcionalidad política y electoral*,¹⁴ dadas las características plebiscitarias del referéndum (al no tener el presidente Evo Morales competencia electoral ni candidato opositor) y la ausencia de vórtice político o eje ordenador para las heterogéneas oposiciones nacionales —es decir que *los resultados del 21F eran reversibles y no permanentes*— estos iniciaron desde el escenario postelectoral de febrero de 2016 un proceso sistemático de intento de *perforación hegemónica*, cuyos efectos políticos se han desplegado en los primeros días de enero de 2018.

Haciendo una retrospectiva de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, podemos confirmar los siguientes efectos duraderos de dicho evento político y electoral:

- *21F como inflexión histórica forzada*: los resultados del 21F inician una *inflexión forzada* en el ciclo histórico progresista y popular, de cara a una década de oro entre los años 2005 y 2015 con la recuperación de los recursos naturales, la nacionalización de los hidrocarburos y el relanzamiento soberano del aparato económico productivo del país, representando un ciclo de crecimiento, auge, redistribución y estabilidad económica, política y social. La estrategia política detrás del 21F nos evidencia los esfuerzos de las heterogéneas oposiciones por interrumpir o

¹⁴ Helena Argirakis: «Los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 como excepcionalidad política y electoral», *La Época*, marzo de 2014, La Paz, Bolivia.

generar disrupción en la capacidad de reproducción hegemónica en el campo político nacional del gobierno central, además en la continuidad del proceso de cambio

- *La política de la posverdad*: la campaña del referéndum del 21F de las oposiciones posicionó la mentira, la impostura, la trivialización de la política y la deformación de la realidad, por lo que el escenario político volvió a ser altamente ideológico, pero irónicamente desde un contexto de vaciamiento de contenidos, argumentos y referentes de debate del ciclo anterior, condensado en la cultura política de la *posverdad* (o política posfactual), en donde el debate político se enmarca en la distorsión deliberada de la realidad, en apariencias, emociones y falsificación de los eventos fácticos de la realidad, a fin de crear, manipular e influenciar en la opinión pública, ignorando o relativizando los controles de veracidad
- *La instalación de la posdemocracia*:¹⁵ los efectos de una cultura política de posverdad, provocan como consecuencia la instalación de la *posdemocracia* o un «modelo político donde las elecciones ciertamente existen y pueden cambiar los gobiernos, pero el debate electoral público es un espectáculo (para consumo masivo) estrechamente controlado, gestionado por equipos rivales de profesionales expertos en técnicas de persuasión, directamente relacionado al modelo de la industria publicitaria». En otras palabras, a nombre de la democracia, se vacía y se sacrifica cada vez más a la democracia, convirtiéndola en espectáculo, farándula, trivial y entretenimiento —pan y circo— para las grandes audiencias
- *Reducción y subalternización del sujeto político a condición vergonzante*: por su lado, el objetivo político de fondo de esta nueva etapa o ciclo inaugurado desde el 21F busca(ba) desgastar, socavar y vaciar de legitimidad (credibilidad) social al sujeto político indígena originarios campesino obrero popular —sujeto político, histórico y social del proceso de cambio— reduciendo al «indio» a *condición vergonzante* (Raúl García Linera), desprovisto de condiciones, capacidades, aptitudes, legitimidad y credibilidad para gobernar, intentando resubalternizar al sujeto político y desagregar el bloque social en el poder. (En el año 2016 fueron notorios los

¹⁵ Colin Crouch: 2004.

casos del Fondo Indígena y luego los contenidos desplegados por la campaña de la mentira del caso Zapata

- *Primaveras o nuevas tecnologías de derrocamiento*: consistentes en el intento de balcanización de Bolivia por medio de la estrategia de las *primaveras*,¹⁶ utilizadas por el imperio estadounidense inicialmente en el desmembramiento de la ex Yugoslavia y luego en el cercano, medio y lejano Oriente frente a gobiernos nacionalistas de matriz nacional popular y antiimperialistas, defensores de sus recursos naturales, empresas y sectores estratégicos como los casos de Irak, Túnez, Egipto, Libia, Siria, Yemen, Argelia y muchos otros entre el periodo 2010 al 2014. Denominar *primavera* a estos proceso políticos es —por lo menos— un eufemismo para disimular los afanes conspirativos y reaccionarios de las fuerzas políticas de derechas, quienes valiéndose de actores parapolíticos desde la sociedad civil, cumplen el mismo propósito que el golpe de Estado tradicional o clásico por la vía militar: la apropiación del Estado, el control del gobierno, el despojo y saqueo de los recursos naturales y riquezas de los países de matriz nacional popular y progresista. (Las diferencias básicas entre el golpe duro y el golpe blando están en el *actor político* que protagoniza el golpe y la *intensidad (o no) del uso de la violencia y/o fuerza física*, incidiendo esto en las

¹⁶ Las *primaveras* hacen referencia en la historia a una diversidad de esfuerzos de liberalización económica y democratización política de los países bajo la influencia del régimen soviético (URSS) durante la Guerra Fría, que buscan modificar progresivamente los aspectos denominados totalitarios y burocráticos de los regímenes comunistas y generar transición hacia formas no totalitarias de socialismo u otros regímenes políticos, legalizando sistemas políticos multipartidarios, sindicatos, promoviendo la libertad de prensa, de expresión y la libertad a la huelga. Es decir, las primaveras fueron intentos desde actores parapolíticos para poner fin a los regímenes comunistas y posibilitar el proceso de transición o apertura política al ingreso del capitalismo a dichos países. La relevancia histórica y política de las primeras primaveras o el deshielo del bloque soviético consiste en el hecho de que Estados Unidos (liderando el bloque capitalista luego de los resultados de la II Guerra Mundial) se da cuenta de que es posible derrocar a los regímenes comunistas desde actores parapolíticos, anclados en el activismo de la sociedad civil, desechando la fórmula de la injerencia clásica hacia los Estados por medio de los golpes de Estado protagonizados por la vía militar o la combinación de golpes civiles y militares, que más bien estos generaban alto rechazo y repudio desde la sociedad civil. Para ello el politólogo estadounidense Gene Sharp (Instituto Albert Einstein, 1973) ideó los *golpes de Estado suaves o blandos* o las llamadas *nuevas tecnologías de derrocamiento* de regímenes de matriz nacional, popular y antiimperialista, emulando la experiencia de las primaveras de los países bajo el régimen de la ex URSS durante la Guerra Fría. Estos son aprendizajes del imperialismo estadounidense que merecen nuestra máxima atención, estudio y seguimiento a fin de contrarrestar sus efectos en América Latina.

correlaciones de fuerzas al interior del Estado en cuestión y en el grado de legitimidad del actor golpista.)

Gráfico No. 2: Efectos duraderos del 21F



Otro momento político del proceso de cambio

En el contexto de una inflexión forzada en el ciclo político progresista y popular, la cultura política de la posverdad y de la posdemocracia, la finalidad de reducción y subalternización del sujeto político a condición vergonzante y los intentos de balcanización por medio de las *primaveras* o nuevas tecnologías de derrocamiento, una segunda idea fundamental a instalar en el imaginario del gobierno central y la administración política del proceso de cambio consiste en que Bolivia se encuentra en *otra etapa* u *otro momento político*, en donde los contextos en que se mueve el proceso, las reglas del intercambio político, los actores, las condiciones y las correlaciones de fuerzas han variado sustancialmente —producto de los esfuerzos políticos artificiosos de las oposiciones nacionales e internacionales— y los efectos del crecimiento, auge y redistribución del excedente. Pero sobre todo, la estabilidad económica, política y social ha sido normalizada y relativizada por la sociedad civil, por lo que la continuidad del régimen político y del proceso de cambio no puede seguir valiéndose de la inversión pública, la entrega de obras, estructura, infraestructura y políticas públicas como fundamento de legitimación y reproducción de gobierno. (Desde el 21F se constata la disociación entre inversión pública y rendimiento electoral).

Mas al contrario, habida cuenta de los efectos sistemáticos de la estrategia golpista instalada desde el año 2016, la administración política del proceso de cambio deberá internalizar que actualmente estamos bajo los efectos de una *guerra asimétrica no convencional, de intensidad variante y con oponentes en alianza nacional e internacional*, quienes disputan el control del Estado boliviano.

La disputa por el control del Estado boliviano

Por otro lado, así como se constata que nos encontramos en otro momento político, forzando la desviación del ciclo histórico progresista y popular, queda claro que la finalidad de esta guerra asimétrica no convencional de intensidad variante y con oponentes en alianza nacional e internacional no solo es provocar la alternancia política y electoral del gobierno de turno —como manifiesta la consigna del 21F— sino *la disputa por el control del Estado*. En otras palabras, lo que está en juego en este momento histórico no es el simple recambio electoral en la administración del gobierno, sino el diseño y el contenido estructural del Estado Plurinacional, producto del proceso constituyente iniciado hace casi 20 años atrás por los actores del bloque social en el poder.

La ofensiva desde la sociedad civil

Líneas arriba planteamos que entre las diferencias básicas entre el golpe de Estado clásico o militar (heredero del *Coup D'Etat* del absolutismo monárquico francés) y el golpe de Estado suave o blando que teoriza Gene Sharp, se encuentran *el actor y la intensidad del uso de la violencia/fuerza física*. En el caso del *golpe de Estado clásico o militar*, las fuerzas armadas (históricamente amparadas en América Latina por las Doctrinas de Seguridad Nacional y lucha contra la amenaza comunista desde los lineamientos de la infame Escuela de las Américas) tomaban por la fuerza —por asalto— el control del gobierno civil, desplazando al gobierno constituido, contraviniendo la legalidad constitucional y la legitimidad social e instalando luego una dictadura militar. Es decir, la toma violenta del poder político de parte de la estructura militar (con o sin apoyo de alguna facción de la sociedad civil), vulnerando la legalidad y legitimidad institucional del Estado, con la finalidad de que el brazo armado del Estado se

haga del control del mismo, con la finalidad de instalar una dictadura militar o un *régimen burocrático autoritario*.¹⁷

En el caso de las *primaveras* o los recientes procesos de *golpes de Estado suaves o blandos*, el principal protagonista del proceso disruptivo es la sociedad civil, organizada por medio de células territoriales, células sectoriales, células generacionales, de género y por facciones de clase y otras. Oscilan pendularmente entre tácticas no violentas y violentas, a manera de provocar las reacciones de las fuerzas del orden del Estado, desgastar la autoridad vigente y provocar la salida del gobierno constituido y de esta manera, hacerse del control del Estado.

En el caso de Bolivia, si bien se constata que los objetivos o metas del reciente ciclo de conflictividad siguen siendo los mismos que impulsaron el 21F —impedir que Evo Morales sea candidato para las elecciones nacionales del año 2019 y desgastar la legitimidad/credibilidad del gobierno del presidente Morales para acortar su mandato, bajo los argumentos que el régimen político de Morales es una dictadura— la estrategia se ha afinado por medio de *la ofensiva desde la sociedad civil*. Por lo tanto, en el afán de impedir la repostulación electoral del presidente Morales, no solo se evidencia que se impulsará la conflictividad sectorial para vaciarle al gobierno central de condiciones objetivas para desarrollar su gestión política, sino que se profundizará la ofensiva desde la sociedad civil, al convertir a la sociedad civil tanto en objeto, como sujeto político —luego del fracaso sistemático de las organizaciones parapolíticas detrás del Golpe Cívico Prefectural y Regional del año 2008, como también del remanente sistema político partidario.

Sin embargo, el actual escenario golpista del año 2018 no es igual a la etapa del Golpe Cívico Prefectural y Regional del año 2008; a pesar de que nuevamente estamos ante un ciclo golpista luego de casi diez años del anterior, el presente esfuerzo de golpe suave o blando desborda al escenario anterior, porque en aquel momento no se había involucrado a la sociedad civil como actor central del intento de perforación hegemónica. El siguiente cuadro comparativo grafica algunas de las diferencias —y, por ende, lecciones

¹⁷ Véase a Guillermo O'Donnell: *El Estado Burocrático Autoritario: 1966-1973*, 1988. Véase también a Guillermo O'Donnell y Phillippe Schmitter: *Transiciones desde un gobierno autoritario*, 1988.

aprendidas por las oposiciones de derechas nacionales e internacionales— entre el Golpe Cívico Prefectural y Regional del año 2008 y la nueva tecnología de derrocamiento o golpe suave en curso del año 2018.

Cuadro No. 1: Diferencias entre el Golpe Cívico Prefectural y Regional del 2008 con la nuevas tecnología de derrocamiento en evolución el año 2018.

	Golpe Cívico Prefectural y Regional del año 2008	Golpe suave o blando en proceso del año 2018 ¹⁸
Tipo de golpe	Golpe de fuerza, protagonizado por organizaciones corporativas de la sociedad civil.	Nueva tecnología de derrocamiento, enmarcada en las <i>primaveras</i> .
Injerencia de Estados Unidos	Difuso, indirecto por medio del remanente sistema político partidario y las organizaciones corporativas públicas y privadas de la sociedad civil	Evidente, directo, por medio de los autoproclamados <i>exiliados</i> luego del golpe de 2008: la facción de derechas radicalizada (Carlos Sánchez Berzaín, Branko Marinkovic, Guido Nayar, etc.)
Actores	Organizaciones corporativas públicas y privadas de la sociedad civil: Comité Cívico Pro Santa Cruz, prefecturas, CONALDE. Remanente sistema político partidario.	Sociedad civil organizada de manera sectorial, por facción de clase, por corte generacional, por género, territorialmente y extra territorialmente (redes sociales) y otras.
Estructuras	Propias de las organizaciones corporativas públicas y privadas, escasa participación de la sociedad	Creadas de manera <i>suigeneris</i> , por la propia sociedad civil, sin intermediación externa.

¹⁸ El escenario del golpe suave o blando, en el contexto de las primaveras y utilizando las nuevas tecnologías de derrocamiento, se presenta como hipótesis de trabajo y escenario prospectivo, en base a la observación, seguimiento y análisis de los eventos desde el 21F hasta enero del año en curso.

	civil.	
Estrategia	Polarización antagónica e inter hegemónica entre bloques históricos y políticos de poder (Bloque Indígena Originario Campesino Obrero (bloque popular versus el bloque cívico regional).	No presentar un adversario definido para la polarización política con el gobierno; vaciar al gobierno de condiciones objetivas y subjetivas para terminar su mandato: vaciar sus contenidos programáticos, relativizar las transformaciones, deslegitimar al gobierno, socavar la institucionalidad del Estado, cooptar la clase media emergente y dividir la base social en el poder.
Perspectiva del golpe desde la sociedad civil	El Golpe Cívico Prefectural y Regional como una externalidad desde la perspectiva de la sociedad civil.	La nueva tecnología de derrocamiento percibida como propia, interna, heroica y legítima.
Efecto del golpe	La sociedad civil fue desbordada por la violencia y la toma de instituciones de septiembre de 2008, provocando vaciamiento de legitimidad y credibilidad, así como la fractura entre la base social y la dirigencia o conducción política del intento golpista.	En el contexto de las <i>primaveras</i> se busca que el origen de la nueva tecnología de derrocamiento sea desde la propia sociedad civil, en una ofensiva desde la sociedad civil. Por ende, el efecto del mismo será de blindaje político y legitimación social para provocar más bien el desborde al régimen de gobierno desde la sociedad civil.
Resultado	Derrota política y militar del	Intento de perforación

	Bloque Cívico Regional, hegemonía del proceso de cambio en el campo político nacional e institucionalización del Estado plurinacional.	hegemónica del actual régimen de gobierno y del Estado plurinacional.
--	--	---

Lecciones aprendidas y estrategias desplegadas por las oposiciones nacionales e internacionales en Bolivia

Como se puede apreciar en el anterior cuadro comparativo, las derechas nacionales e internacionales aprendieron varias lecciones luego del Golpe Cívico Prefectural y Regional del año 2008; entre las principales lecciones se encuentra la comprensión de que la principal virtud o fortaleza del proceso de cambio consistió en haber articulado un poderoso bloque social en el poder por medio del Pacto de Unidad o la Confederación de Movimientos Sociales de base territorial y sectorial, quienes conformaron su propio sujeto e instrumento político y gestionaron las transformaciones estructurales de la sociedad, la economía y del Estado de manera autónoma o propia, sin la mediación del sistema político partidario o las organizaciones políticas representativas.

Por su lado, el golpe de fuerza del año 2008 demostró el rotundo fracaso del remanente sistema político partidario y de las organizaciones corporativas de representación sectorial, quienes no pudieron imponer su agenda política y su proyecto país en el contexto de la disputa política, ya que el resultado del golpe del 2008 redundó en la derrota política y militar del Bloque Cívico Regional, la instalación de la hegemonía del proceso de cambio en el campo político nacional y la institucionalización o formalización del Estado Plurinacional.

Por lo anterior, las oposiciones nacionales e internacionales al proceso de cambio se encuentran gestando el contrapeso a la fuerza y contundencia del bloque social en el poder —de matriz nacional popular y de base territorial— por medio de dos estrategias principales:

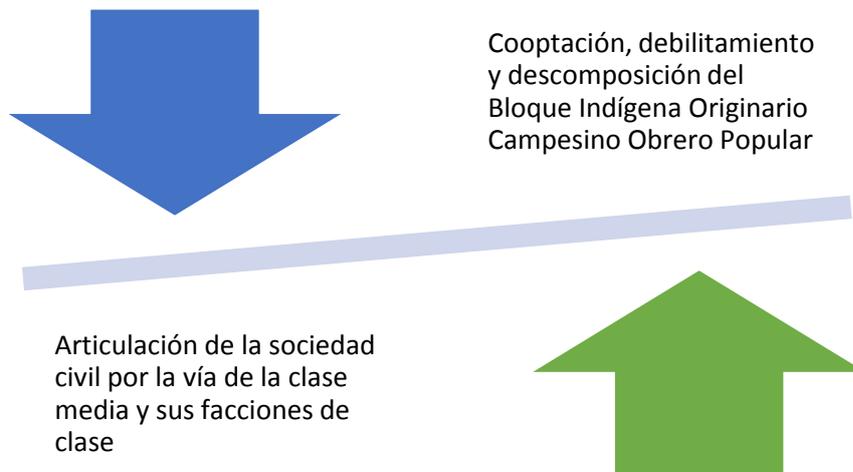
- La cooptación y descomposición del bloque social en el poder en ocasión del ascenso o emergencia social de entre 1.7 a 3 millones de bolivianos a la(s) nueva(s) clase(s) media(s), a través del elemento nucleador de la subjetividad y de la conciencia de clase media (y sus facciones de clase).

(Según datos del PNUD, 17% de la población boliviana pertenece a la nueva clase media emergente.)

- La contraposición del sujeto político indígena originario campesino obrero popular con la articulación de un nuevo sujeto político basado en la(s) nueva(s) clase(s) media(s)

Por ende, se evidencia la intencionalidad de las oposiciones de conformar un nuevo bloque social en el poder compuesto por la clase media y sus facciones de clase, por lo que el proyecto político (y la identidad política) del Bloque Indígena Originario Campesino Obrero Popular entra en franca contradicción con el proyecto político de la(s) clase(s) media(s).

Gráfico No. 3: Cooptación, debilitamiento y descomposición del Bloque Indígena Originario Campesino Obrero Popular inversamente proporcional a la articulación de la *sociedad civil* por la vía de la clase media y sus facciones de clase



El devenir de la sociedad civil de objeto a sujeto político

«Si consideramos al sujeto como individuo activo, ello nos remite a un individuo social, que puede ser colectivo/articulado (sin renunciar a su individualidad), que opera con algún grado de conciencia sobre los acontecimientos sociales (está posicionado, se auto produce desde un lugar social), pero además alude a su componente cualitativo, es decir su conciencia y/o su espiritualidad e

identidad. Por ello, para su gestación y despliegue le es constitutivo este componente en cada espacio cotidiano, allí se juega su futuro y además su integridad ético política: su altura de sujeto humano. Así, el sujeto es resultante de su propia actividad teórica —práctica, es decir de la actividad onto-creadora de cada uno de los diversos actores sociales, que supone múltiples procesos de toma de conciencia de los actores— sujetos, que son en gran medida, procesos de auto conciencia».¹⁹

Por lo tanto, siguiendo a Michel Foucault en *La hermenéutica del sujeto*, el *sujeto* es un actor político que ha tomado conciencia de sí y de su realidad social, está inmerso en un contexto socio-histórico en movimiento constante y con múltiples formas de interacción social asimétrica, en el cual el sujeto se encuentra *sujetado* o *atravesado* por múltiples relaciones de poder —relaciones de significación y producción— las cuales no puede influir ni transformar sin antes volver inteligibles los dispositivos o las tecnologías que las producen. Sin estos procesos, el poder subyuga, somete y mantiene a los sujetos dentro de estructuras sociales asimétricas y relaciones de dominación y sometimiento.

Foucault sostiene²⁰ que el sujeto político ha estado signado por tres tipos de lucha: 1) la lucha contra la dominación de orden político, 2) la lucha contra la explotación de orden económico y 3) la lucha contra la subjetivación de orden moral. Por ende, la lucha del sujeto esta transversalizada por diversas luchas y procesos emancipativos en los microespacios del poder, constituyendo resistencias locales, por medio de un conjunto de estrategias teóricas-metodológicas, concernientes a la comprensión del presente.

En el caso de Bolivia, las luchas, resistencias y rebeliones de los movimientos sociales de fines del siglo XX, desde sus microespacios de poder, han posibilitado la construcción del sujeto político del proceso de cambio —el indio— quien desde la tecnología política del Pacto de Unidad articuló un sujeto colectivo contenido en el sujeto *indígena originario campesino* (sujeto constituyente). Posteriormente, se amplió el sujeto colectivo con la inclusión del *obrero* (proletario) de matriz popular y urbana, para consolidar la composición del bloque social en el poder. Es decir, el *indio* —como *objeto* de la política,

¹⁹ Javier Torres Vindas: *Notas para leer al sujeto en Foucault desde América Latina*, en www.alainet.org.

²⁰ Michel Foucault: *La hermenéutica del sujeto*, 1996.

subalternizado, explotado, dominado y subjetivizado— se produjo a sí mismo como sujeto político y devino en sujeto de poder. Esta politización de su conciencia posibilitó el inicio del proceso de cambio hace más de dos décadas atrás, logrando la fundación del Estado Plurinacional.

Este es el proceso político de transformación de *objeto recipiendario* a *sujeto político* que han observado y estudiado las oposiciones internacionales; sin embargo —aun siguiendo a Foucault— como el poder no es un atributo ni una posesión, no se localiza ni es estrictamente negativo y/o represivo, sino que el poder también es constitutivo, creativo y productivo; así como el poder es una relación estratégica, dinámica, fluida, efecto de luchas, correlaciones de fuerzas variables y articulaciones tácticas, la contraofensiva hegemónica de las derechas nacionales e internacionales consiste en la articulación de *otros sujetos desde otros juegos de poder*, que puedan incidir desde sus microespacios de enfrentamiento en la microfísica del poder, para disputarle hegemonía al Bloque Indígena Originario Campesino Obrero Popular.

De esta manera, la incorporación de diversas tecnologías permiten convertir a la sociedad civil de *objeto expectante* en *sujeto político*; lo anterior ha significado organizar, movilizar, agitar, pretorianizar y lograr que desde la sociedad civil se implementen las nuevas tecnologías de derrocamiento — proclamando desde las redes sociales la «revolución de la clase media»— con la finalidad de vaciarle al oficialismo de gobierno, las condiciones objetivas y subjetivas para gobernar, muy afín a los procesos políticos denominados *primaveras* que han vivido desde fines de la Guerra Fría en los años ochenta y noventa (siglo XX) los países pertenecientes al ex bloque soviético y recientemente a inicios del siglo XXI, los países árabes.

Como ya se adelantó, estas llamadas *primaveras*, aparentemente movimientos políticos espontáneos desde la sociedad civil, son en realidad las nuevas tecnologías de derrocamiento o los golpes blandos, desde donde la injerencia imperial estadounidense articula su estrategia de despojo y saqueo a los gobiernos de matriz nacional popular y progresista, defensores de su soberanía política y económica.

Articulación de la sociedad civil a partir de un actor externo

Por lo tanto, resulta más que evidente en este caso en particular, que la conversión de la sociedad civil en sujeto político es un proceso articulado y agitado por un actor externo —de naturaleza imperial— a diferencia de los procesos emancipativos de matriz nacional popular indígena originario campesino, que han sido articulados por los propios movimientos y organizaciones sociales de base territorial y ancestral, constituyendo estos confederaciones de movimientos sociales que han construido sus propias tecnologías e instrumentos políticos para aspirar a ocupar el Estado y de esa manera transformar las condiciones materiales del país.

De esta manera, podemos evidenciar que en realidad, el actor externo imperial (Estados Unidos) utiliza a la sociedad civil para sus propios fines, instrumentalizando su accionar para pavimentar el retorno de élites dirigentes afines a sus intereses, quienes no llegarían a ostentar el control del Estado por la vía de elecciones democráticas y populares.

Retomando las reflexiones de Foucault, por medio de la *hermenéutica del sujeto*, las clases medias emergentes de Bolivia están siendo cooptadas, instrumentalizadas y funcionalizadas a los intereses de la clase media señorial (Álvaro García Linera), siendo *absorbidas momentáneamente* para la estrategia de la ofensiva política desde la sociedad civil y la construcción artificial de legitimidad de un nuevo bloque social en el poder. Planteamos que la incorporación de la(s) nueva(s) clase(s) media(s) emergente(s) es una *absorción momentánea* a la clase media tradicional de naturaleza señorial, habida cuenta de que el proyecto político que persigue la antigua o clásica clase media señorial es la reposición de sus intereses, privilegios, jerarquías sociales y estructuras basadas en el dispositivo de raza como dispositivo de poder. Es decir, la clase media señorial persigue un proyecto de país en donde el ordenamiento y las jerarquías sociales vuelvan a ser determinadas por el color de piel, el apellido de origen europeo y la casta oligárquica, en donde las conquistas históricas y la conciencia social nacional popular sean cosas del pasado.

Dicho «nuevo» bloque social —en apariencia pluralista, intercultural y diverso regionalmente— es perfectamente funcional a los intereses del

proyecto político de las élites de las derechas radicalizadas que se encuentran fuera del país, ya que sobre las espaldas de estas nuevas clases medias emergentes (entre 1.7 a 3 millones de bolivianos y bolivianas), estos buscan construir la *apariencia* de legitimidad para el retorno de las derechas más reaccionarias y afines al imperialismo estadounidense.

Golpes de Estado, dictadura y la batalla por la preservación del bien público

En este pequeño texto hemos diferenciado tres tipos de golpes de Estado o maneras de hacerse del control del gobierno y luego del Estado, que se han presentado en la historia reciente de América Latina; en el caso del golpe denominado clásico o tradicional, el *golpe de Estado militar*, este utiliza preponderantemente el recurso de la violencia y la fuerza, de manera ilegal e ilegítima, contraviniendo el orden constitucional e institucional del Estado. Por su lado, un segundo tipo de golpe, el denominado *golpe de fuerza* —como el caso del Golpe Cívico Prefectural y Regional del año 2008 en Bolivia— es protagonizado principalmente por actores corporativos de naturaleza públicos (en el nivel subregional) y privados, quienes por medio del uso de estrategias sectoriales y territoriales en mayor o menor medida violentas y contando con la inacción o no involucramiento de las fuerzas armadas, buscaban hacerse con el control del Estado. Un tercer tipo de golpe de Estado corresponde a las *primaveras* y a los *golpes suaves o blandos*, caracterizados por el levantamiento «espontáneo» y la ofensiva desde la sociedad civil, desarrollado en páginas anteriores, para posibilitar el retorno de las facciones de derechas conservadoras y reaccionarias, quienes por la vía democrática y electoral, no tendrían la posibilidad de retomar el gobierno y hacerse del control del Estado.

Lo anterior nos muestra la *mutación del golpe de Estado* y a la vez la *recurrencia e insistencia histórica en el golpismo de parte del imperialismo estadounidense y de las extremas derechas nacionales* para hacerse del control del Estado por esta vía nefasta en América Latina. Por supuesto que si los actores en cuestión (nacionales e internacionales) utilizan el golpe como mecanismo de acceso al poder, el régimen político instaurado luego del golpe de Estado será una dictadura. Pareciera verdad de Perogrullo, trivial y evidente que *no se instaure democracia por la vía del golpe*; por más mutación del

golpismo y transformación de actores, recursos e intensidad en el uso de la violencia, *igualmente será una dictadura el régimen político resultante del golpe.*

Sin embargo, dentro de las nuevas tecnologías de derrocamiento, estos también han vaciado los dispositivos discursivos sobre los contenidos de una *dictadura o régimen burocrático autoritario* —siguiendo a Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter— argumentando más bien, que los gobiernos de matriz nacional popular, producto de elecciones democráticas investidas de legitimidad y de mayoría absoluta, son dictaduras al reproducir condiciones electorales y de legitimidad social para mantenerse en funciones de gobierno durante largos periodos de tiempo. En otras palabras, las oposiciones nacionales e internacionales cargan las tintas sobre la variable operativa e instrumental de la alternancia política partidaria del gobierno de turno, desechando la importancia cualitativa fundamental de *la forma de acceso al gobierno y reproducción de gobierno por la mayoría absoluta electoral*, reflejando y respetando la soberanía popular.

Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter caracterizan el *régimen burocrático autoritario* de la siguiente manera:

- Regido por una élite política, militar (junta militar o cúpula de organizaciones burocráticas autoritarias)
- Bajo nivel de ideologización, alto nivel de autoridad (degeneración de conceptos de autoridad por imponer obediencia sin consenso)
- Bajo nivel de participación popular y alto nivel de movilización
- Alto nivel de burocratización y corporativismo verticalista
- El autoritarismo usa los elementos clásicos de poder: Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad (parapolítico, paramilitar) y Poder Judicial discrecional
- Cierta grado de autonomía de ciertos subsistemas: educación, salud, etc.
- Antimarxistas, antidemocráticos

Juan Linz sostiene: «Un régimen autoritario tiene un pluralismo político limitado y no responsable, sin una ideología elaborada y propulsiva, sin una movilización política vasta e intensa y el “jefe” (cúpula, élite) ejerce el poder dentro de los límites que formalmente no están bien establecidas (institucionalmente), pero que son fáciles de identificar».

Al respecto de la definición de Linz sobre los regímenes autoritarios, en el caso de Bolivia, el Estado Plurinacional reproduce pluralismo político en su sistema político electoral, ya que existe *competencia política y electoral* por la presencia de múltiples partidos, agrupaciones y organizaciones políticas que participan en la contienda electoral para devenir en gobierno, a pesar de que no existe *competitividad política y electoral* al resultar una organización política (MAS-IPSP) con la mayoría del reparto electoral, conformándose un sistema de partido predominante.

Ahora bien, si reflexionamos sobre la necesidad de las oposiciones de derechas nacionales e internacionales en vaciar el dispositivo discursivo y el significativo tradicional de la dictadura clásica, asociado al régimen burocrático autoritario, llegamos a la conclusión de que estos asocian con dictadura no solo a regímenes políticos que se perpetúan en el tiempo —por más legítimos político, social y electoralmente que sean— sino también a regímenes en donde el Estado es el principal agente dinamizador de la economía, la sociedad y la política. Es decir, llaman dictadura a gobiernos que promueven el rol de la regulación, el control y la fiscalización de parte del Estado, por medio del aparato público y de la ley, cumpliendo con la función del monopolio de la universalidad de parte del Estado, equilibrando la relación y límites entre el ámbito de lo público y el ámbito privado. Por ende, llaman dictadura a aquellos regímenes políticos que defienden y promueven el bien público, por lo que la batalla política del proceso de cambio deberá continuar con la preservación del bien público como bien mayor.

Es decir, a estas derechas reaccionarias no les basta la cohabitación entre el ámbito público y el ámbito privado, en el marco de una economía plural, mixta, social y comunitaria... al contrario, persiguen un imaginario de «libertad» o modelo de convivencia económica, política y social completamente *desregulada, sin límites de parte del Estado*, no solo posibilitando el retorno del modelo neoliberal, sino la incrustación del *ciclo capitalista de acumulación por desposesión*. El ciclo capitalista de la acumulación por desposesión plantea la acumulación privada (nacional e internacional) por desposesión, saqueo, despojo del bien público, es decir, la ganancia privada a costa de la pérdida del bien público. La acumulación por desposesión es la última frontera de extracción de excedente del capitalismo mundial.

Sin embargo, a pesar de llamar dictadura a los regímenes políticos con Estados fuertes y reguladores de la relación público-privado, las oposiciones de derechas nacionales e internacionales no tienen ningún pudor en apoyar e instalar dictaduras civiles con grupos oligárquicos y señoriales en alianza con facciones neofascistas internacionales, quienes pregonan la necesidad de reposicionar el dispositivo de raza como dispositivo de poder.

De perforación hegemónica en 2016 a fractura hegemónica en 2018

En síntesis, las oposiciones de derechas plantean que la nueva clase media emergente ha provocado una ruptura en las condiciones de discursividad del Bloque Indígena Originario Campesino Obrero y Popular, por lo que el oficialismo de gobierno/MAS habría iniciado un proceso de debilitamiento interno. Este debilitamiento interno estaría agravado por las disputas internas entre las facciones de élites dirigentes y la falta de capacidad de respuesta del gobierno a las demandas políticas, como también a los deterioros en la administración del Estado, por ejemplo, los sindicados casos de corrupción.

Lo anterior habría provocado lo que ellos denominan la «crisis de confianza» o crisis en los ejes de confianza del proceso de cambio. Este sería el contexto en el cual se inserta la iniciativa política de la repostulación del presidente Evo Morales y la reforma del sistema judicial, que provoca no solo el desgaste a nivel de figura presidencial y de gobierno, sino de régimen político. Por lo tanto, en este entendido, la reacción política vendría desde la propia sociedad civil, desde la lógica del «check and balance» (frenos y contrapesos) para restablecer los equilibrios en las correlaciones de fuerzas.

Condensan la situación presente afirmando que:

- Después del 21F existe una reconfiguración en los equilibrios internos en el país y que las correlaciones de fuerzas están en condiciones más simétricas: «ya no les tenemos miedo» (redes sociales)
- Hay una pérdida generalizada de confianza en los actores, en el proceso político y en el régimen político: «que se vayan todos» (redes sociales)
- El sistema político ya no es hegemónico: «la revolución de la clase media» (redes sociales)
- Los factores, apoyos y contexto internacional ya no acompañan al MAS: con la llegada de Donald Trump a la Oficina Oval en Estados Unidos y la

deposición de los gobiernos progresistas en América Latina, ya no les quedan apoyos al MAS (redes sociales)

- El proceso de cambio se encuentra en una situación de descomposición definitiva: «el ciclo histórico de los socialismos del siglo XXI ha finalizado» (redes sociales)

Frente a lo anterior, podemos evidenciar un exceso de confianza en sus propias estrategias y en las nuevas tecnologías de derrocamiento, subestimando la cohesión y fortaleza del bloque social en el poder y dando por hecho la superación del ciclo progresista y popular; sin embargo, en términos prácticos, por medio de la contraposición de sujeto político indígena originario campesino obrero popular con este nuevo sujeto político de clase media (clase media señorial + clase media emergente), estos persiguen los siguientes lineamientos, ya sea de manera independiente o separado y/o de manera interdependiente o combinado:

1. Impedir la repostulación del presidente Morales, bajo el argumento de respetar el voto del 21F, logrando que la excepcionalidad política y electoral de dicha coyuntura se convierta en una crisis política y de Estado de naturaleza estructural.
2. Vaciarle al régimen político de Evo Morales las condiciones objetivas y subjetivas para gobernar; es decir generar conflictividad recurrente para que el gobierno esté en modo de resolución de conflictos de manera constante, así como incidir en los imaginarios, sistema de sentidos y creencias, argumentando que vivimos en una dictadura, con la finalidad de restar legitimidad y credibilidad —por ende estabilidad— al oficialismo de gobierno.
3. Reposicionar el *statu quo* y las correlaciones de fuerzas preconstituyentes, donde los actores, los factores, recursos de poder y las condiciones de la disputa hegemónica eran más simétricas. Es decir, construir artificialmente (por injerencia extranjera) las condiciones para que las derechas reaccionarias puedan volver a tener la posibilidad para acceder al control del Estado, luego de una década de indiscutida hegemonía y control del campo político nacional de parte del Bloque Indígena Originario Campesino Obrero Popular. (Poner fin artificialmente al ciclo político e histórico del proceso de cambio).

4. Reinstalar la polarización República – Estado Plurinacional como proyecto político contrahegemónico de parte de las derechas reaccionarias.

En otras palabras, las derechas reaccionarias buscan lograr que el intento de perforación hegemónica iniciada con el 21F del año 2016, decante en una fractura hegemónica mayor que permita la interrupción del actual gobierno, poniendo en riesgo inclusive, la pervivencia del propio Estado Plurinacional. O sea, instalar la *guerra asimétrica no convencional de intensidad variante y con oponentes en alianza nacional e internacional*.

Venezuela enfrenta la agresión de los Estados Unidos con la unidad del pueblo y más democracia

Roy Daza*

El 22 de abril de este año habrá elección presidencial en Venezuela y ese acto político y constitucional marcará un nuevo momento en la larga lucha del pueblo por la reafirmación de su soberanía nacional, el afianzamiento de la democracia participativa, la profundización de las políticas sociales incluyentes y la recuperación de la economía.

Es importante señalar —de una vez— que la convocatoria a la elección de quien dirigirá los destinos del país como Jefe de Estado, fue tomada por la Asamblea Nacional Constituyente, se rige por la legislación vigente y es conducida por el Consejo Nacional Electoral. La única novedad es el adelanto de la fecha, que es producto de una larga discusión con las fuerzas opositoras, agrupadas en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), las cuales venían planteando, insistentemente, que no se podía esperar hasta octubre de este año. Además, cabe subrayar que ese fue uno de los puntos consensuados en los diálogos de Santo Domingo, entre el Gobierno Bolivariano y la derecha.

Huelga decir, que la decisión de los representantes de la MUD de no firmar el documento que contiene los acuerdos alcanzados en Santo Domingo, se debe a que en los últimos meses se ha producido *un cambio significativo en la correlación de fuerzas políticas internas*, y ello se expresó en los comicios de gobernadores en octubre, en los que participa la MUD y tiene un buen resultado, pues gana en cinco estados, y sobre todo, triunfa en el estado Zulia, la más poblada e importante región del país; empero, quien resultó electo gobernador tomó la insólita decisión de no juramentarse ante la Constituyente, por lo que fue destituido en diciembre. Se repitió el acto electoral en Zulia, y esta vez el PSUV logra una victoria en toda la línea. Uno de los partidos de la alianza opositora, Acción Democrática, ganó en cuatro estados, dos de ellos de peso electoral, Táchira y Anzoátegui, y en Mérida y Nueva Esparta. En los

* Roy Daza es militante revolucionario, periodista, exparlamentario y escritor venezolano, que forma parte de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. [dazaroy@gmail.com].

comicios del 10 de diciembre de 2017 para la renovación de las alcaldías, la decisión de la mayoría de la MUD fue abstenerse, lo que se tradujo en que el «chavismo» ganó en 308 de las 335 alcaldías.

Hay que destacar que cuando los acuerdos de Santo Domingo estaban a punto de firmarse, el canciller estadounidense, Rex Tillerson, emprendió una gira por varios países de América Latina, que tuvo como objetivo, deliberadamente expuesto, desatar una campaña agresiva contra la nación venezolana. La política del gobierno del presidente Donald Trump y la decisión de la derecha venezolana de no firmar los acuerdos son hechos que están, evidentemente, vinculados, y ello tendrá repercusión en los acontecimientos políticos en curso.

Uno de los mediadores en los diálogos, el expresidente del gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, quien no solo le pidió a los partidos de la oposición que firmaran el acuerdo al que se había llegado, sino que dejó una observación a ser tomada en cuenta: no existe —afirmó Zapatero— otra proposición desde dentro ni fuera de Venezuela distinta a los puntos consensuados en República Dominicana.

El presidente Nicolás Maduro Moros, fiel a los compromisos contraídos, señaló que «llueva, truene o relampaguee», el 22 de abril habrá elección presidencial, e instó a todas las fuerzas políticas a presentar sus candidatos y a exponer sus programas y proyectos, además de lo cual manifestó que está dispuesto a ir a un gran debate con sus contendores.

La reacción de la derecha del continente no se hizo esperar, y ahora el llamado Grupo de Lima exige cambiar el calendario electoral, algo por lo demás sorprendente, porque hasta hace poco solicitaban el adelanto de la elección. Es esta una posición contradictoria, a todas luces, y esas contradicciones son observadas y analizadas por la ciudadanía, por aquellos que respaldan al gobierno, y también por quienes no comparten parcial o totalmente al proyecto bolivariano. En un país tan politizado como Venezuela, las actuaciones políticas son sometidas al escrutinio de la opinión pública de manera inmediata. La conciencia política es muy alta, y por encima de todo, los recientes acontecimientos han puesto de relieve que hay dos grandes consensos en la población: la paz de la república y que las controversias han de resolverse por la vía democrática y electoral.

¿Será que frente a la posibilidad de ser derrotados en la contienda electoral, una parte de la oposición optará por la abstención y por seguir promoviendo la intervención de una potencia extranjera en Venezuela?

En una mirada al conjunto de las acciones de la oposición, desde la llegada al poder del comandante Hugo Chávez, líder histórico de la Revolución Bolivariana, hasta hoy, puede observarse la conducción errática y la ausencia de un proyecto viable que presentarle al país.

Pareciera que los extremistas de la oposición olvidan con mucha frecuencia que el golpe de Estado de 2002 fue derrotado por una inédita alianza de las clases populares y las capas medias, y que ello tuvo expresión política en un movimiento social que tenía más fuerza de la que parecía, que existía una fortaleza institucional que ni las más enmarañadas conspiraciones pudo torcer, y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cumplió con su deber constitucional porque así lo dicta la Carta Magna y porque así lo dicta su conciencia.

La precaria memoria de la dirigencia opositora la hace olvidar que la oligarquía enquistada en PDVSA, en el mismo año 2002 y primeros meses del 2003, paralizó a la industria petrolera, y aún con todo el poder que tenía no fue capaz de tumbar al gobierno, además, de la asombrosa capacidad de un estratega como Hugo Chávez, que supo sortear el bloqueo de los puertos sin disparar un tiro, y derrotó el «paro petrolero» con las armas de la ley.

En el 2004 la oposición sufre un descalabro de grandes proporciones, al no poder revocar el mandato del presidente Chávez en el referendo. Varios años les costó recuperarse y retomar la iniciativa política. Lo que pasa es que a la derecha venezolana y al polo imperialista estadounidense, les cuesta entender que no existe otra manera de enfrentar al chavismo que no sea reconociendo la justeza y la verdad de la causa que encarna.

En las décadas recientes no se conoce que una fuerza como la nucleada alrededor de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, derrochara un triunfo político tan importante como el que obtuvieron en los comicios legislativos nacionales de diciembre de 2015, cuando alcanzaron una mayoría determinante en la Asamblea Nacional, pero ese triunfo no les sirvió de nada, utilizando una expresión muy venezolana: «se les volvió sal y agua»; y la resultante práctica fue la paralización del parlamento. Lo primero que

anunciaron fue que en seis meses el presidente Nicolás Maduro sería derrocado y, como eso no fue así, no hay más que decir que las distintas iniciativas que pusieron en marcha fracasaron, y que el presidente Maduro sigue en funciones en el Palacio de Miraflores.

Uno de sus grupos propuso convocar a una Constituyente pero tal propuesta no contó con el apoyo de los otros partidos. Algunos se fueron por la vía del referendo y fracasaron desde el mismo momento en que lo convocaron a destiempo y acudieron a «triquiñuelas», que pronto fueron advertidas por el Poder Judicial. Otro fracaso más.

A estas insólitas actuaciones habría que añadir que se colocaron al margen de la legalidad al aceptar en su seno a tres diputados del estado Amazonas a los que se les acusó de hacer trampas en el proceso electoral y, en lugar de reconocer el error, insistieron en mantenerlos en la cámara legislativa, con lo cual se colocaron en una situación de desacato constitucional. ¿Por qué? Porque su plan era utilizar la Asamblea Nacional para un golpe de Estado y no para cumplir con las funciones que le otorga la Constitución al parlamento. Y no hubo ningún golpe.

Intentaron recortar el período constitucional para sacar al presidente Maduro Moros del poder, pero a tal propuesta el Tribunal Supremo de Justicia respondió que, siguiendo los cauces constitucionales, a través de una reforma o de una enmienda, ello era posible pero que, en todo caso, no podría aplicarse al actual mandato del Presidente porque no existe la retroactividad de la ley. Se olvidaron del asunto.

Solo para hacer algunas conjeturas: ¿qué hubiese pasado si la oposición, desde la Asamblea Nacional, establece un puente de comunicación y cooperación con el Ejecutivo para encarar de manera conjunta la compleja situación económica del país? ¿Cuál es la razón por la que la oposición no acompañó el plan de recuperación productiva que le propuso el presidente Maduro? La respuesta a estas interrogantes es una sola: la derecha venezolana no tiene un proyecto nacional que presentar, no cuenta con un programa de gobierno viable, ni mucho menos con un liderazgo —individual o colectivo— que exprese una alternativa, frente a un movimiento revolucionario, que ha sido capaz de soportar las embestidas del imperialismo, de mantener la

unidad política y programática, y de coincidir en el liderazgo unificador del presidente Nicolás Maduro Moros.

Y si esto fuese poco, que obviamente no lo es, la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un pilar esencial de la democracia venezolana. Ninguna maniobra, ni las más disímiles presiones, ni los ataques reiterados de los extremistas de la oposición, han logrado doblegar su férrea conciencia «profundamente bolivariana y chavista».

La oposición no ha podido leer correctamente que una de las fortalezas del «chavismo» radica en ser una corriente histórica que conjuga la diversidad con la unidad, y que los debates que libra son en torno a cómo alcanzar los objetivos del Plan de la Patria y, en ningún caso, para deslindarse de tales propósitos, porque el pueblo chavista sabe que la solución de fondo a los problemas nacionales y del mundo, no está en las tesis neoliberales, sino que es imperativo luchar por la construcción de una sociedad basada en la solidaridad, la cooperación y la soberanía popular.

Para una comprensión objetiva de la situación actual y de las ambigüedades e inconsistencias de la política opositora y de la unidad de criterios y de propósitos de parte de las fuerzas revolucionarias, es menester analizar los cinco ejes de la política desarrollada por la derecha venezolana y por sus fuerzas aliadas en el exterior, en 2017, que pudieran calificarse como el plan combinado, coordinado y de mayor envergadura que ha enfrentado el movimiento bolivariano.

La violencia

Este plan consistió en poner en marcha acciones que llevaron a cabo pequeños grupos muy bien entrenados, para promover la violencia en algunos municipios del país, con un saldo de más de cien personas fallecidas, miles de heridos, centenares de personas afectadas de manera indirecta por la violencia y el odio, hecho sin precedentes en la historia reciente de Venezuela. El plan fue acompañado por una coordinada y dirigida campaña mediática, nacional e internacional, que no escatimó en el uso de todos los recursos que aportan los distintos instrumentos de los medios de comunicación, tanto los convencionales, como las redes. Impusieron desde el primer momento que se trataba de «protestas sociales», pero lentamente, esta directriz se fue agotando

en sí misma, y es una de las causas de la situación política que hoy tiene la derecha, producto de la indignación y repudio que generó en la sociedad venezolana lo que se conoce como la «guarimba», es decir, violencia generalizada en las calles y agresión a los ciudadanos.

Una buena parte de las comunidades —en especial de los sectores medios y altos— se vieron afectados por los grupos violentos, que se emparentaron con elementos de la delincuencia para provocar desmanes, mientras que los agentes del orden público, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, tuvieron que soportar semanas y semanas las acciones vandálicas. Los recursos cinematográficos también estuvieron presentes. Llegó el momento en el que, cuando los personeros de la oposición se presentaban en los actos, eran muchas más las cámaras de medios de comunicación, nacionales y extranjeros, que ciudadanos participando, pero el colmo fue cuando comenzaron a cerrar las urbanizaciones y calles principales de algunas zonas de las ciudades, a fin de interrumpir el tránsito y generar caos, pero ello terminó siendo un punto de inflexión, dado que los vecinos de las comunidades «bloqueadas» por los vandálicos comenzaron a reaccionar y a hacer valer su derecho al libre tránsito.

¿Qué pasó? Una parte de la población que no acompaña, total o parcialmente, el proyecto político bolivariano quedó conmovida por el horror que causó la violencia de estos grupos, mucho más cuando quemaron vivos a varios ciudadanos, por el hecho de tener la piel oscura o «parecer chavistas». La sociedad venezolana, entonces, reaccionó contra un sector político que, además de utilizar la simbología fascista, sembraron el terror.

Es una verdad meridiana que esos actos vandálicos dividieron al campo opositor y que ello generó las condiciones para que emergiera una salida democrática a la crisis, precisamente, la que presentó el 1 de mayo de 2017 el presidente Nicolás Maduro: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que fue electa el 30 de julio de ese año. En ese momento crítico, los partidos de la oposición vuelven a equivocarse. No se dan cuenta que se abre un proceso de pacificación de la vida política, que su estrategia de violencia ha sido derrotada, que el estado de la opinión pública nacional les era adverso. Lo que habían conquistado en 2015 en los comicios legislativos, lo perdieron en los meses de violencia y horror. La respuesta política de la

oposición frente a la Constituyente es desconocerla, de hecho, no solo llamaron a la abstención, sino que promovieron el boicot, que por cierto, no les sirvió para nada, toda vez que toda la ciudadanía estaba decidida a lograr la paz, y la logró. Una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente la violencia callejera cesó.

Es necesario subrayar que aún en los momentos más críticos, el «chavismo» no abandonó las calles, se cuentan por miles las manifestaciones, asambleas, mítines, marchas, en todo el territorio nacional, y se hizo cotidiana la escena del pueblo rodeando el Palacio de Miraflores, listo para defender a su gobierno.

El intento de cerco diplomático

Las acciones de los grupos fascistas estuvieron acompañadas y aupadas desde el exterior, cuando un grupo de expresidentes de América Latina se pronunció en contra del gobierno del presidente Maduro y respaldó la violencia, y en la Organización de Estados Americanos comienza una de las batallas políticas más extraordinarias que se hayan librado en el seno de esa institución: las maniobras del secretario general de la OEA, Luis Almagro, enemigo jurado de Venezuela, quien dirigió todas las iniciativas para que le fuese aplicada la Carta Democrática a Venezuela, y que se prepararan las condiciones para una intervención internacional, política y militar. Pero no tuvieron los votos en la OEA. Fracasaron en varias ocasiones en el propósito de aislar a Venezuela. La situación llegó al extremo de violentar los estatutos de la OEA, de convocar a reuniones sin el debido proceso, de provocar una especie de asalto a la institucionalidad de la OEA, con tal de lograr las sanciones contra el gobierno del presidente Maduro, que dio la orden de comunicar el retiro de Venezuela de esa organización.

La derecha se equivocó. No pudo medir la repercusión de lo que hacían los Estados Unidos en la OEA contra Venezuela y en otros espacios de la diplomacia. La solidaridad con la patria de Bolívar no se hizo esperar: las declaraciones de respaldo a la institucionalidad venezolana de la República Popular China y de la Federación Rusa, así como también de países como Irán y Turquía, de las naciones que conforman el Alba, y de muchas otras en África y Asia, que se manifestaron abiertamente en contra de cualquier intervención

en la patria de Bolívar, así como el valor político y moral de primer orden que tuvo la posición firme de las naciones latinoamericanas y caribeñas que impidieron que en la OEA se aprobara una moción de intervención al país y, al mismo tiempo, se pronunciaran en contra de la violencia y por una salida pacífica a la crisis política en curso. Venezuela no está sola.

No obstante, hay un hecho que debe ser apuntado: en la Casa Blanca está un Presidente que expresa las posiciones más conservadoras de la política norteamericana, y no hay que olvidar ni por un instante que amenazó a Venezuela con una intervención militar.

El bloqueo financiero

Desde hace más de dos años el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actúa en función de impedir que Venezuela pueda realizar transacciones comerciales y financieras en el exterior. De manera callada, presionaron a entidades bancarias, no solo para que no otorguen préstamos al país, sino también para que no sirvan de agentes de intermediación en las operaciones de importación y exportación. Ahora el bloqueo lo impone el presidente Donald Trump a través de una Orden Ejecutiva, y hay que añadir que ha manifestado que está dispuesto a profundizar las sanciones económicas.

Tales medidas apenas son una parte del plan integral que contra la economía de Venezuela ha puesto en marcha la administración Trump. Es importante mencionar que las operaciones dirigidas a renegociar la deuda externa de corto plazo y los trabajos que realiza el gobierno bolivariano para conseguir nuevos recursos, que servirían para enfrentar la compleja situación económica, han sido bloqueadas o interrumpidas por las autoridades norteamericanas, plan al que se sumó la Unión Europea.

Hay otra parte del plan para quebrar la economía que se estaba ejecutando de manera secreta, desde puestos claves de la estatal petrolera, PDVSA, donde se tomaron decisiones dirigidas a reducir la capacidad de extracción de petróleo y de su comercialización, y en definitiva a afectar la principal fuente de ingresos de la economía venezolana.

El frustrado intento de golpe de Estado

Al instalarse la Asamblea Nacional Constituyente, su primera medida fue la destitución de quien fue la Fiscal General de la Nación, artífice de un plan para derrocar al Gobierno Bolivariano. No obstante, este plan no tenía ninguna posibilidad de éxito, toda vez, que las instituciones fundamentales de la democracia venezolana no flaquearon, ni por un instante. El Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y el Ejecutivo Nacional, impidieron, con la Constitución por delante, que el golpe se llevara cabo. La directiva de la Asamblea Nacional y la Fiscalía quedaron al descubierto. El pueblo resolvió el asunto, eligiendo la Constituyente y con ella, manteniendo la fortaleza institucional del país. Una vez más, la derecha resultó derrotada.

La campaña política e ideológica contra la nación

Los científicos de la Comunicación, de la Psicología, la Sociología, y de la Política y el Derecho, tienen un reto por delante: estudiar un hecho que no tiene precedentes, un fenómeno nuevo; se trata de una campaña mediática combinada, articulada en tiempo real, con ejes argumentales definidos, con el uso de espacios comunicacionales que nunca se habían utilizado en una batalla de esta naturaleza, con el empleo a fondo de recursos cinematográficos, con referentes públicos notorios, como artistas, deportistas, cantantes, intelectuales; esta vez, no solo del país, sino figuras del espectáculo a escala mundial.

Cada minuto Venezuela ha de enfrentar una mentira tras otra. Ya no les importa si tal mentira es descubierta y la verdad sale a flote. El efecto de confusión que genera es lo que buscan sus autores. Muchas veces estas llamadas «informaciones» son medias verdades, pero en otras cosas son mentiras descaradas. Los ataques se ponen en marcha en forma simultánea. Es evidente que, cuando uno de los consorcios mediáticos saca una «falsa noticia» sobre Venezuela, está predeterminado y debidamente planificado que todos los otros medios se sumen inmediatamente a la campaña, que pueden durar semanas, días, horas, y en algunos casos, minutos, que a veces son

suficientes para colocar en el espacio comunicacional globalizado, una frase, una noticia, una declaración, que haga daño, que destruya.

Un bombardeo mediático de tal naturaleza y alcance no era conocido. No se trata aquí de hacer una valoración científica sobre el mismo, pero es importante resaltar, eso sí, que buena parte del campo social opositor —a través de las redes— se incorpora con mucha frecuencia a tales acciones. Ello va ligado a las campañas de odio. Cuando un vocero del movimiento revolucionario expone algún tema en los medios de comunicación, no ha terminado de hablar cuando los robots que lanzan millares de mensajes en segundos se activan, es decir, no solo ponen en marcha sus campañas «canallas» como las llama Ignacio Ramonet, sino que a través de mecanismos de saturación y de fragmentación de la noticia, impiden que el mensaje de los bolivarianos llegue a la población. Un verdadero clima de odio se ha desatado en el país a partir de estas campañas mediáticas. Todo un plan dirigido a que se produzca una guerra, o lo que se conoce en el argot de los laboratorios del odio, como «pelea de perros».

Es este el campo de batalla más complejo que enfrenta el movimiento popular. Toda la plataforma tecnológica planetaria de los medios de comunicación está al servicio de los objetivos trazados por el imperialismo: doblegar la voluntad de los venezolanos, infundir temor en la gente, generar una sensación de pérdida de perspectivas, de desánimo. Que en algunos casos estas campañas se apoyan en problemas reales, es cierto, pero ello no es óbice para que se manipule, se fragmente, se descontextualice y se ataque de la manera más despiadada a un país como Venezuela. Lo que estas campañas se proponen es la destrucción del Estado-nación, de las bases mismas de la sociedad, de sus valores intrínsecos, de sus instituciones, no solo se proponen derrocar al gobierno del presidente Maduro, sino también, desarticular las bases materiales y morales del Estado-nación.

Los problemas de la economía

Los cinco ejes de la estrategia del imperialismo contra Venezuela, antes descritos, hay que colocarlos en un contexto histórico que permita hacer una valoración profunda de la situación venezolana, más allá de sus especificidades coyunturales, y ese tema no es otra cosa que los efectos de un

fenómeno complejo y poco conocido, dadas las peculiaridades de la economía venezolana, en primer lugar, el impacto de la caída de los precios del petróleo, segundo, los desequilibrios macroeconómicos, y tercero: el colapso del capitalismo rentístico.

¿Cómo explicar la situación económica del país?

En este brevísimo ensayo solo es posible hacer una exposición en extremo sucinta, tomando como base algunas anotaciones de la ponencia que presentara en el II Seminario: «Visiones compartidas desde la izquierda», organizado por el Foro de São Paulo y el Partido de la Izquierda Europea, en noviembre de 2017.

Si algún economista obvia el impacto que la caída de los precios del petróleo tiene en la economía nacional, revelaría una ignorancia supina. Tomando como referencia 2014, las cifras que suministra el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, es de \$88.42 por barril (precio del barril venezolano); en 2015, la cifra era \$44.65 dólares por barril, y en 2016, el precio llegó a su punto más bajo \$21, para recuperarse un tanto y llegar a un promedio de \$32 por barril. Este comportamiento de los precios del crudo está vinculado estrechamente al de las fluctuaciones de la economía mundial —como resulta obvio, toda vez que es el petróleo la principal fuente de energía que nutre al aparato industrial, de comunicaciones y comercial del planeta—. Es así como se puede identificar que en el 2000 el crecimiento de la economía del mundo fue de 4,38%; en 2001, se registra una baja a 1,97%; luego viene una recuperación entre 2004 y 2008, cuando el crecimiento está de nuevo en 4,31%; pero el *crack* de 2007 de la economía mundial, la más grave crisis de acumulación del sistema capitalista que se haya registrado desde 1929, genera un desplome sorprendente: el crecimiento es negativo: -1,68% (2008- 2009), como derivación de las medidas adoptadas por el presidente Barack Obama y por la Unión Europea, pero, de manera muy marcada, por el crecimiento de China, se produce una recuperación en 2011 a 35%, y luego viene una tendencia a la baja en los años sucesivos, al colocarse a 3 puntos y mucho más abajo.²¹

²¹ Fuente: IMF & OPEP.

La tendencia de los precios del crudo venezolano, dato que importa sobremanera para entender lo que está pasando, se puede observar en una comparación: en 2008 el precio llegó a su pico más alto, \$129.54 por barril, se produce una caída y luego una progresiva recuperación, pero para 2016, el precio promedio es de \$37.32. Ello implica una conmoción sin precedentes en la situación de la economía venezolana, cuya fuente de ingresos principalísima es el ingreso petrolero. Al caer los precios del crudo bajan las importaciones de buena parte de los productos de consumo masivo y de aquellos que sirven al sector intermedio de la industria.

¿Por qué se afirma que existe una contradicción esencial entre los estados nacionales propietarios de los recursos naturales y los factores hegemónicos de la economía capitalista globalizada?

Al comparar la situación del mercado petrolero mundial en el 2000, con la de la actualidad, queda evidenciada una transformación orgánica. Entonces, es preciso aportar algunos datos: el promedio del consumo mundial de petróleo y gas en 2016 fue de 96 millones de barriles diarios; los requerimientos de crudo, por parte de la economía estadounidense —la más grande del planeta— son de aproximadamente 19 millones de barriles diarios, y su producción alcanza los 12 millones de B/D, y para resolver este déficit estructural, tomó la decisión de explotar de sus yacimientos en la franja de las lutitas, por el método *fracking*, llegando a producir unos 4 millones de barriles diarios; a lo que habría que adicionar, que los Estados Unidos controlan el petróleo que se produce en Irak, de unos 3 millones 500 mil barriles al día, y el de Libia de 2 millones 500 mil de B/D. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, lo había planteado de manera clara: «necesitamos tener autonomía energética». Hoy, es posible afirmar que el propósito político trazado por el Estado norteamericano se ha cumplido en lo fundamental; asimismo, que la política energética de los Estados Unidos es la de apropiarse de los recursos minerales del mundo, a fin de sostener la creciente demanda de su economía, que consume el 25% de la energía del planeta.

Importa, para este estudio, reseñar unas cifras sobre las reservas probadas de petróleo y gas. Veamos este cuadro comparativo:

- Las reservas probadas de petróleo en los Estados Unidos alcanzan la cifra de 43 mil millones de barriles

- Las reservas probadas de petróleo en Venezuela son de 300 mil millones de barriles
- El 25% de las reservas probadas de petróleo del mundo están en Venezuela, que ejerce plena soberanía sobre su principal producto de exportación

Si damos continuidad al estudio, ha de identificarse que la demanda de petróleo y gas es creciente, aún con la decisión de la República Popular China de «enfriar» su economía. Otro inciso para el análisis: en 2017 el precio promedio del petróleo será de \$50 por barril (aproximadamente) y su costo de producción no llega —en general— a \$20 por barril. Es conocido que la economía mundial en 2016 registró un crecimiento de 3,2%, en 2017 de 3,6% y se prevé que en 2018 sea de 3,7%. Nada indica que la demanda de crudo retrocederá en los próximos años. El problema radica en los precios, que son —y cómo podría no serlo— un asunto político, huelga decir, de primer orden.

La incidencia que en los precios tiene la confrontación política en Oriente Medio y Venezuela es un foco de interés, que no puede perderse de vista. Empero, las negociaciones petroleras no se hacen solo de los barriles físicos, también se comercializa petróleo a futuro, o lo que se le ha dado en llamar: «barriles de papel», es decir, hay un componente especulativo que afecta, al alza o a la baja, los precios del barril. Hay que subrayar —además— que el escenario de precios relativamente altos que se mantuvo hasta mediados de 2014, posibilitó algunos cambios estructurales en el mercado, derivados de la decisión de Arabia Saudita de colocar en el mercado unos 13 millones de barriles al día, del alza en la producción de la Federación Rusa, y a un hecho ostensible, el incremento de la exploración y producción de crudo en naciones que si bien no son exportadores netos, mientras los precios fuesen altos estaban en condiciones de cubrir una parte de su demanda interna.

De esta esquemática exposición se puede arribar a una conclusión: la defensa del pleno ejercicio de los derechos soberanos de las naciones sobre sus recursos naturales, principio consagrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 1803, del 14 de diciembre de 1962, es hoy, una de las demandas de los pueblos, y al mismo tiempo, fundamento de la política de integración, y que en el caso de Suramérica es su base material. Si eso es así, entonces, vale la pregunta: ¿qué falta? Respondemos con Simón

Bolívar «Solo la unidad nos falta», y esa unidad ha de fraguarse en la lucha contra las políticas neoliberales, que son abiertamente contrarias a la integración.

El estudio de la economía venezolana tiene como punto de partida el análisis de la economía mundial, en la que está inserta de manera definitiva desde hace cien años, todos estos datos, tomados de las página Web de la OPEP y de la CEPAL, son indicativos de un problema cardinal: *el cambio estructural que se registra en el mercado petrolero mundial influye de manera decisiva en el desenvolvimiento de la economía venezolana, toda vez, que la captación de la renta de la tierra internacional, es su principal fuente de ingresos.*

El segundo factor a tomar en cuenta solo puede ser enunciado en este artículo, y tiene que ver con lo que destacados científicos han denominado el colapso del capitalismo rentístico, que se caracteriza por: una forma de desarrollo capitalista que tiene como fuente la renta de la tierra internacional, que capta en el mercado petrolero; es un capitalismo nacional; y esa renta corresponde en una primera instancia al Estado.

Es por ello que el nervio central de la economía venezolana se concentra en las decisiones políticas que se tomen o se dejen de tomar en el Estado, de los arreglos políticos que se alcancen, por tanto, es posible afirmar que toda la estrategia de las políticas neoliberales y de las fuerzas imperialistas en lo que a Venezuela se refiere, se ha trazado como objetivo: el control del ingreso petrolero y revertir las decisiones constitucionales y las contenidas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada por el comandante Chávez en noviembre de 2001, en la cual no solo se recupera la soberanía de la nación sobre el petróleo, sino también se traza una línea maestra en cuanto a lo que será el desarrollo económico del país. La renta de la tierra internacional no alcanza para suplir las crecientes necesidades del Estado y de la economía en su conjunto. No es más la locomotora del tren de una economía que ha cambiado de manera significativa en las últimas décadas.

Hay un asunto que debe quedar claro, por encima de todo, y es que la contradicción de Venezuela con el imperialismo está dada porque la propiedad de los yacimientos y el manejo de los ingresos que por concepto de regalía e impuestos capta el Estado, son de la NACIÓN VENEZOLANA, y eso es precisamente lo que intenta modificar la estrategia trazada por Estados Unidos.

Otro asunto está referido al manejo que se haga a lo interno de la economía, sobre todo, en lo que se refiere a las vertientes de la economía política del petróleo, una rentista y otra productiva, y además, de poner en marcha lo que expresa la LOH de 2001, en cuanto al mercado interno de los combustibles, pero tal discusión sobrepasa —largamente— los alcances de este brevísimo artículo.

El tercer problema tiene que ver con los equilibrios macroeconómicos. Ello tiene especial interés en cuanto a la política cambiaria, pero lo decisivo es que en un corto plazo se logre recuperar la producción de barriles de petróleo. Si esa política da resultados, estaríamos ante la posibilidad de una franca recuperación económica, sin desprestigiar otras iniciativas que puedan y deban desplegarse, como es el de la producción de alimentos.

Una política económica de tal naturaleza requiere de consensos políticos, que paradójicamente pueden ser alcanzados en la campaña electoral, o una vez que se anuncie la victoria del presidente Maduro en la noche del domingo 22 de abril.

Las revoluciones en la América Latina del siglo XXI: limitaciones, potencialidades y desafíos

Hugo Moldiz *

Han transcurrido 59 años desde el triunfo de la Revolución Cubana, que dio inicio a la tercera ola emancipadora²² en América Latina, y 20 años desde el triunfo político-electoral del comandante Hugo Chávez en Venezuela, quien, sobre la impronta del primero, dio inicio a la constitución de gobiernos revolucionarios y progresistas en toda la región, colocando en evidencia la crisis del neoliberalismo. El rasgo característico de todos estos años —en que se han sucedido períodos y coyunturas de avance popular pero también de regresiones reaccionarias propias de la dinámica revolución/contrarrevolución—, es el de una América Latina convertida en escenario de una ardua e intensa disputa antagónica entre dominación y emancipación.

La Revolución Cubana, es un *acontecimiento cardinal*²³ que surge y se desarrolla en medio del mundo bipolar emergente a la finalización de la II Guerra Mundial, con el imperialismo norteamericano como única potencia realmente mundial. El politólogo cubano Roberto Regalado sostiene que la constitución del primer Estado socialista en América Latina dio lugar a dos etapas,²⁴ en las que se registran hechos y acontecimientos políticos contradictorios, de los cuales los más importantes son el auge de los movimientos y las guerras de liberación nacional, el triunfo de la Revolución

* Hugo Moldiz es un intelectual boliviano. Ha escrito varios libros sobre el proceso boliviano y América Latina.

²² La primera ola emancipadora se libró por los pueblos indígenas u originarios en su intento de expulsar al invasor europeo del Abya Yalam, nombre originario de este continente ahora llamado América. Esta gran ola se dio principalmente en el siglo XVIII. La segunda ola se desarrolló entre 1790 y 1826, es decir entre la llamada «Revolución Negra» del actual Haití hasta 1826, cuando fracasa el proyecto de Simón Bolívar de construir la unidad latinoamericana en el Congreso Anfictiónico, celebrado en Panamá y boicoteado por los Estados Unidos. Ver más en Hugo Moldiz: *América Latina y la tercera ola emancipadora*, Ocean Sur, México, 2013.

²³ Ernesto Guevara: *Cuba, ¿excepción histórica o vanguardia en la lucha contra el colonialismo*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1977, Obras Completas, t. 9, p. 21.

²⁴ Roberto Regalado: *La izquierda latinoamericana en el gobierno, ¿alternativa o reciclaje?*, Ocean Sur, México, 2012, p. 133.

Popular Sandinista, la «inserción» de gobiernos militares reaccionarios de parte de los Estados Unidos al influjo de la Doctrina de la Seguridad Nacional, invasiones militares estadounidenses a República Dominicana, Granada y Panamá, la apertura de bases militares con el pretexto de la lucha contra las drogas, y la emergencia de corrientes militares nacionalistas en varias fuerzas armadas de la región que abrieron experiencias de gobiernos de corte antiimperialista.

A diferencia del mundo bipolar en que se movió la Revolución Cubana, las llamadas Revoluciones del Siglo XXI, la venezolana, boliviana y ecuatoriana, así como los procesos progresistas en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y El Salvador, se desarrollan en un mundo unipolar, que paradójicamente entra en crisis en un corto tiempo, no previsto ni por los más pesimistas intelectuales del capitalismo, para dar lugar a un período de transición hegemónica que no ha concluido aún. Entre 1991 y 1999, salvo la solitaria y heroica resistencia de la Revolución Cubana, asediada con el recrudecimiento del criminal bloqueo estadounidense tras el derrumbe de la URSS, en América Latina existía un mar o universo de gobiernos neoliberales. El rechazo popular a los ajustes estructurales era generalizado, aunque variaba en intensidad en cada uno de los países latinoamericanos. Las medidas neoliberales, publicitadas por partidos de derecha y socialdemócratas, así como por medios de comunicación nacionales e internacionales que instalaron la invencibilidad del «pensamiento único», no dieron el resultado que se esperaba. La economía de la filtración,²⁵ cuyo supuesto teórico era que los beneficios del crecimiento llegarían a los pobres, fracasó, tal como lo reconoce el exvicepresidente del Banco Mundial, Joseph. E. Stiglitz. Las economías no crecieron y, si algunas lo hicieron, no distribuyeron los recursos en los sectores más depauperados, dando lugar a un proceso de concentración de la riqueza en pocas manos. Sin embargo, si bien es cierto que el rechazo al neoliberalismo, como variante táctica del modo de producción capitalista en su fase globalizada, se dio en toda la América Latina, los grados de resistencia fueron distintos y los desenlaces también. En unos, la lucha reivindicativo-corporativa fue el límite al que se pudo llegar, dado el nivel de organización y conciencia de las clases subalternas, y en otros, donde la

²⁵ Joseph Stiglitz: *El malestar de la globalización*, Editorial Taurus, Argentina, 2002, p. 119.

crisis llegó al punto de «no retorno», se pasó a cuestionar y superar el orden de cosas existente. Este es el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde profundas crisis de Estado desencadenaron procesos revolucionarios que dieron origen a la instalación de gobiernos de izquierda. Entre unos y otros (resistencias reivindicativas y cuestionamientos al tema del poder), se ubicaron otras insurgencias nacional-populares que instalaron a gobiernos progresistas en la región, como ocurrió en los casos de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Honduras y El Salvador. El caso de Nicaragua —que es la segunda y última revolución armada triunfante en el siglo XX—, debe ser analizado aparte pues se trata, en realidad, del «retorno» sandinista al gobierno a partir de 2007, en un Estado cuyo aparato no fue desmontado por los gobiernos de derecha que se instalaron desde 1990.

Particular importancia adquirió en todo este largo proceso la resistencia de los pueblos indígenas del Norte y Sur del continente. En México, se produjo el levantamiento zapatista, y en Bolivia y Ecuador, rebeliones sucesivas. En el primero predominó la concepción de luchar más allá del poder, una tesis que, a la larga, independientemente de la voluntad de sus protagonistas, sería funcional a la preservación y reproducción del statu quo. En los segundos, se removieron los cimientos del orden capitalista-colonial y se instalaron en el imaginario colectivo proyectos emancipadores distintos a los formulados por la izquierda clásica, como es el Vivir Bien en Bolivia y el Buen Vivir en Ecuador. También es importante aclarar que, mientras en Ecuador el movimiento indígena salió seriamente golpeado y desacreditado por su participación en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez —quien rápidamente traicionó el contenido de la resistencia popular a los gobiernos neoliberales de ese país y entró a formar parte de la lista de presidentes incondicionales a Washington—, en Bolivia los movimientos sociales —dirigidos por los pueblos indígenas y originarios a la cabeza de Evo Morales— tomaron el gobierno y se elevaron luego, en 2009, a la categoría de bloque dominante en el poder.

Pues bien, desde el inicio de la Revolución Bolivariana de Venezuela (1998) hasta este 2018, muchas cosas han sucedido en América Latina. Para empezar tres presidentes han pasado por la Casa Blanca: Bill Clinton (1993-2001), George W. Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009-2017), hasta llegar a la actual administración de Donald Trump, desde enero de 2017.

Salvo Clinton y Bush, quienes gozaron de una corta unipolaridad indiscutible de los Estados Unidos tras el derrumbe del Muro de Berlín y la desaparición de la URSS, el rasgo central desde la recta final del gobierno de Bush hasta la actualidad es la declinación de la hegemonía mundial estadounidense. De ahí que la resistencia de los Estados Unidos a jugar un papel menor en un mundo multipolar o en una bipolaridad de nuevo tipo, se ha traducido en el impulso combinado del Poder Inteligente (*Smart Power*) y del Poder Blando (*Soft Power*) de la administración Obama, y ahora una estrategia de mayor endurecimiento de la política exterior estadounidense en la era Trump.

Si bien todavía no hay acuerdo pleno en la academia y en los intelectuales orgánicos de la izquierda sobre si ya estamos en un mundo multipolar o en la construcción de una bipolaridad de nuevo tipo, no cabe duda que la temprana crisis del mundo unipolar se debe a causas propias del desarrollo del imperialismo estadounidense, a la crisis multidimensional del capitalismo, al desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial a Asia, al crecimiento de la economía china y al papel geopolítico que Rusia empezó a desempeñar en Euroasia y el Medio Oriente, pero también a la reconfiguración geopolítica de América Latina con el surgimiento de gobiernos respondones a Washington. Por lo demás, es mucho más creíble la tesis de que estamos todavía en un período de transición hegemónica mundial, lo cual explicaría las duras medidas adoptadas por Trump para evitar el desenlace multi o bipolar, en una apuesta por mantener a los Estados Unidos como la única potencia planetaria. El ex canciller Henry Kissinger sostiene en su libro *La Diplomacia* que los Estados Unidos nunca han creído en el concepto de *equilibrio de poder*, que correspondió más al sistema europeo hasta finalizar la I Guerra Mundial, pues «los imperios no tienen ningún interés en operar dentro de un sistema internacional: aspiran a ser ellos el sistema internacional». Por eso, cabe hacer dos puntualizaciones sobre la administración Trump: primero, no es la excepción, sino la expresión más perversa del imperialismo estadounidense; y, segundo, su estrategia y medidas adoptadas son una especie de «retorno», sobre nuevas condiciones, a una de las fases constitutivas de su rol de imperialismo, en las que se combinaron las lógicas de poder territorial y

capitalista,²⁶ la atracción de fuerza de trabajo, capital y empresarios europeos, pero con alta restricción a la importación de productos. Es decir, los Estados Unidos nunca creyeron de verdad, como lo hicieron los británicos, en el libre comercio, y más bien siempre combinaron medidas de libre comercio con medidas proteccionistas.

En América Latina, que siempre ha sido una prioridad para los Estados Unidos, como sostiene el politólogo argentino Atilio Borón, se abrió la condición de posibilidad de avanzar hacia la conquista de una mayor autonomía respecto de esa potencia imperialista y configurar un mundo multipolar en el que la región desempeñe un papel importante. Una América Latina jugando ese papel a través de la constitución de UNASUR y la CELAC, en el contexto de la disputa entre dominación y emancipación, obviamente no es del agrado del establishment estadounidense. Así se explica la contraofensiva imperial en la región: una guerra no convencional contra Venezuela solo comparable con lo experimentado por la Revolución Cubana en cerca de seis décadas, golpes de Estado «de nuevo tipo» contra Manuel Zelaya en Honduras (2009), Fernando Lugo en Paraguay (2012) y Dilma Rousseff en Brasil (2017); e intentos fallidos de destitución de Hugo Chávez de Venezuela (2002), Evo Morales de Bolivia (2008-2009) y Rafael Correa de Ecuador (2010). La importancia estratégica que los Estados Unidos le han dado siempre a la América Latina, se encuentra detalladamente explicada por Borón, quien considera que *América Latina es para los Estados Unidos, la región del mundo más importante*.²⁷ Esta política estadounidense, que data del siglo XIX, se afina y al mismo tiempo se endurece en el siglo XXI, pues la recuperación de la dominación y hegemonía de su «patio trasero» es de relevancia estratégica para el imperialismo norteamericano, en su esfuerzo por detener su declinación y más aún para evitar perder su condición de único hegemón realmente planetario.

²⁶ Tanto el geógrafo inglés David Harvey, en su libro *El nuevo imperialismo*, como Giovanni Arrighi G., en *El largo siglo XX*, sostienen que los Estados Unidos se fueron conformando como imperialismo con la combinación de las lógicas de poder territorialista —que hace más énfasis en el control del territorio, con el subproducto de controlar los recursos naturales— y de poder capitalista —que hace más énfasis en el control de los recursos naturales— y como subproducto el control del territorio. Ver más en David Harvey: *El nuevo imperialismo*, Editorial Akal, Madrid, 2003; y Giovanni Arrighi: *El largo siglo XX*, Editorial AKAL, Madrid, 1999.

²⁷ Atilio Borón: *América Latina en la geopolítica del imperialismo*, Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2013, p. 68.

Sería una ingenuidad pensar que el imperialismo resignará posiciones en el mundo y, más aún, en su «retaguardia estratégica». Restablecer el control de América Latina es fundamental, no solo para liquidar a procesos emancipadores que cuestionan su concepto de «Seguridad Nacional» y echan por la borda la creencia estadounidense de que la «Isla continente»²⁸ es de su «propiedad», sino para enfrentar en mejores condiciones la emergencia china y rusa en Asia y el Medio Oriente, cuyo juego geopolítico para el establishment y la administración estadounidense se expande hasta la propia región latinoamericana.

Pero una cosa es todo lo que hacen los Estados Unidos, a través de su burguesía imperial y de su poderoso complejo militar-industrial, con la estrecha colaboración del bloque burgués-oligárquico en cada uno de los países de América Latina, para afianzar su control, donde no lo ha perdido, para retomarlo en aquellos países en los cuales se han llevado adelante procesos progresistas a los que ha derrotado, o para activar planes de desestabilización de las revoluciones en curso, y otra cosa son los efectos, negativos y positivos, que tienen las diversas medidas, decisiones y políticas que llevan adelante los gobiernos de izquierda y progresistas en el desarrollo de sus propios procesos.

Y aquí, entonces, incluyo algunas consideraciones necesarias, antes de continuar con el desarrollo del balance político que nos hemos propuesto hacer.

Primero, el objeto de nuestro análisis está relacionado directamente con los procesos revolucionarios de Venezuela, Bolivia y Ecuador, obviamente, en un contexto global latinoamericano caracterizado por una intensa contraofensiva estadounidense y de las derechas locales. Es más, sin dejar de lado todo lo que está haciendo la derecha internacional para derrocar a los gobiernos de izquierda, y revertir los procesos de resistencia y rebelión desplegados «desde abajo» contra el modelo neoliberal desde hace más de dos décadas, lo que se pretende es lograr un balance de las debilidades y potencialidades, así como de los peligros y desafíos que tienen estos procesos «desde dentro» de cada una de estas valiosas experiencias. No se toman en cuenta a la Revolución Cubana y ni a la Revolución Nicaragüense para hacer el balance, pues se trata

²⁸ Zbigniew Brzezinski: *El gran tablero mundial*, Editorial Paidós, Barcelona-Buenos Aires, 2001, p. 15.

de revoluciones del siglo XX. La primera se ha desarrollado, sin interrupción alguna, con el liderazgo indiscutible, primero de Fidel Castro y después de Raúl Castro, pero que desde abril de 2018 tiene que encarar otros desafíos, bastante sensibles, con el repliegue de la generación heroica y la elección de un nuevo presidente. La segunda, porque si bien el sandinismo fue desalojado del gobierno por métodos electorales en 1990, su retorno en 2007 lo hace, como hemos señalado, sobre un aparato estatal que no fue desmontado por los gobiernos neoliberales en 17 años.

Segundo, nada más que por razones metodológicas se identifican seis grandes momentos en el desarrollo de las revoluciones de Bolivia, Venezuela y Ecuador. Está claro que cada uno de esos procesos tiene una periodización que responde a su especificidad. Esto, como es obvio, es una visión global de cada uno de los procesos, cuyas particularidades hay que estudiarlas en detalles por las lecciones que hay que tomar de ellas, pero que no son, como es bueno insistir, objeto de este escrito.

Tercero, el texto no gira, de manera deliberada, alrededor de los grandes logros de las revoluciones venezolana, boliviana y ecuatoriana. No se hace así para evitar concentrar el esfuerzo en una mirada que, quizá involuntariamente, ha inducido a una apreciación exitista de los tres procesos de cambio, aunque el «balde de agua fría» que el presidente Lenín Moreno le echó a la Revolución Ciudadana en Ecuador hizo pisar tierra a muchos. Debo aclarar que tampoco se hace en medio de un pesimismo generado por el cambio que se produce en la relación de fuerzas a partir de 2010, que para el autor del ensayo es el inicio de un proceso de ralentización de los procesos progresistas y revolucionarios en América Latina. Es bueno apuntar, sin embargo, que Fidel Castro advirtió ya en 2009 que «[...] antes que Obama concluya su mandato (se refiere al primero (2008-2012), habrá seis a ocho gobiernos de derecha en América Latina que serán aliados del imperio».²⁹ Empecemos entonces.

Cuando uno recorre con cierta celeridad, por razones de espacio, las condiciones materiales y subjetivas que precedieron a los procesos políticos de los tres países sudamericanos observa que —independientemente de la especificidad con la que se expresan en cada uno de ellos las categorías de

²⁹ Fidel Castro: «Una historia de ciencia ficción», *Reflexiones*, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 2013, t.4, p. 5.

«crisis orgánica»³⁰ y «bloque histórico»,³¹ pero también de «crisis general»,³² por citar solo un ejemplo—, el corpus teórico gramsciano, y marxista y leninista, es de gran utilidad para entender los «momentos estructurales» que explican el desencadenamiento y desarrollo de las revoluciones latinoamericanas en el siglo XXI, en medio de un desarrollo histórico del capitalismo caracterizado por la configuración de un mundo unipolar en crisis, y su posterior desarrollo en un mundo que avanza hacia una conflictiva configuración multipolar, o quizá de bipolaridad de nuevo tipo, que si bien expresa una declinación de la hegemonía estadounidense, al mismo tiempo, no asegura, como efecto automático, una mejor condición de posibilidad para el rumbo emancipatorio de América Latina. Es más, el inevitable desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial del Occidente al Pacífico está provocando una contraofensiva del imperialismo contra los procesos de izquierda y progresistas de América Latina, con el doble objetivo: restablecer su control de una región geopolítica y geoeconómicamente estratégica para los Estados Unidos; y fortalecer su estrategia de contención de la irradiación china. De ahí que no sea una casualidad que las revoluciones venezolana, boliviana y ecuatoriana, así como los procesos Brasil y Argentina, no dejen de experimentar en distinto grado esa ola imperial-oligárquica sin precedentes. En los dos primeros países se lo hace sin haber perdido el poder y el gobierno, y en los dos últimos ya desde la condición de «desalojados» de la titularidad del gobierno. Sin embargo, hay que marcar la diferencia también entre lo sucedido en Argentina y Brasil. En el primero, el progresismo fue derrotado en las urnas y en el segundo la izquierda fue desplazada por medio de un golpe de Estado en dos tiempos: destituir a Dilma Rousseff para impedir la postulación de Luíz Inácio Lula da Silva. Lo sucedido en Ecuador es bastante llamativo, pues se trata de un caso típico de

³⁰ La «crisis orgánica» es ante todo crisis del Estado en su conjunto: crisis del Estado pleno (dictadura+hegemonía). La crisis orgánica implica el enunciado de posibles divorcios entre la sociedad política y la sociedad civil, entre el Estado aparente y su propia base. (Q 7, 28)

³¹ «La estructura y las superestructuras forman un “bloque histórico”, o sea que el conjunto complejo, contradictorio y discordante de las superestructuras es el reflejo del conjunto de las relaciones sociales de producción». Antonio Gramsci: *El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce*, Nueva Visión, 2006, p. 46.

³² El concepto de crisis general es empleado por Lenin para hacer referencia al momento en que ni las clases dominantes ni las clases explotadas pueden seguir como están.

una forma de revolución pasiva³³ y transformismo. Las posibilidades de revolución quedan liquidadas por las clases dominantes al encontrar, en un gobierno aparentemente de izquierda, el espacio para instalar su agenda conservadora o restauradora. Y lo grave es que se repite dos veces: con Lucio Gutiérrez (2003-2005) y ahora con Lenín Moreno. El primero llegó con un discurso antiimperialista y latinoamericanista de la mano del movimiento indígena, pero ya en la presidencia profundizó el modelo neoliberal, el orden colonial y se entregó de brazos a los Estados Unidos, cediendo, por ejemplo, la Isla de Manta para la instalación de una base militar estadounidense. El segundo se colgó de la popularidad de Rafael Correa, le cantó al Che en la campaña electoral, y ya en condición de presidente está viabilizando el desmontaje gradual de las conquistas de la Revolución Ciudadana que tanto ha deseado la pujante burguesía ecuatoriana.

No toda crisis de Estado o situación revolucionaria³⁴ da lugar mecánicamente a una revolución. Sin embargo, hay momentos en la historia en los cuales, sobre determinadas condiciones objetivas y subjetivas, una «crisis orgánica» da lugar a la sustitución de un bloque histórico por otro. Así lo confirman los procesos revolucionarios hoy en marcha en América Latina, convertida desde fines del siglo XX en un laboratorio del pensamiento y de prácticas alternativas al desarrollo histórico del capitalismo. La «crisis orgánica» o «crisis del Estado en su conjunto» empezó a madurar en Venezuela a mediados de la década de 1980, mientras de manera simultánea en Bolivia y Ecuador se registraba a fines del siglo XX. En el primero de estos

³³ Antonio Gramsci: *Notas sobre Maquiavelo*, Nueva Visión, Buenos Aires, 2003, p. 83.

³⁴ Para Lenin, una situación revolucionaria tiene tres síntomas principales: «1) la imposibilidad para las clases dominantes de mantener inmutable su dominación; tal o cual crisis de las “alturas”, una crisis en la política de la clase dominante que abre una grieta por la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas. Para que estalle una revolución no suele bastar con que “los de abajo no quieran”, sino que hace falta, además, que “los de arriba no puedan” seguir viviendo como hasta entonces. 2) una agravación fuera de lo común de la miseria y de los sufrimientos de las clases oprimidas. 3) una intensificación considerable, por estas causas, de la actividad de las masas, que en tiempos de “paz” se dejan expoliar tranquilamente, pero en épocas turbulentas son empujadas, tanto por toda situación de crisis, como por los mismos “de arriba”, a una acción histórica independiente. A lo que el teórico y conductor de la primera triunfante revolución socialista en el mundo añade que “se agrega un cambio subjetivo, a saber: la capacidad de la clase revolucionaria de llevar a cabo acciones revolucionarias de masas lo suficientemente fuertes para romper (o quebrantar) el viejo Gobierno, que nunca, si siquiera en las épocas de crisis, “caerá si no se le hace caer». Vladimir I. Lenin: «La bancarrota de la II Internacional», *Obras Completas*, Editorial Progreso, Moscú, 1984, t. 26, p. 228-229.

países, los máximos picos de la crisis estatal se dieron en marzo de 1989 y febrero de 1992, con el «caracazo»³⁵ y el «golpe militar-patriótico»,³⁶ respectivamente. En Bolivia, las expresiones más altas de la crisis de Estado se registraron en el «febrero negro»³⁷ y octubre de 2003,³⁸ y en Ecuador, en 2000³⁹ y 2005.⁴⁰ En todos estos acontecimientos políticos no se produce una «guerra de movimientos» o ataque frontal que concluyera con la «toma del poder político», sino más bien llega a representar una auténtica «guerra de posiciones» y «guerra de cerco», que acelera el derrumbe del bloque en el poder en cada uno de esos países.

El rasgo común en los tres países es que se produce una ruptura del vínculo entre la estructura y la superestructura. Los grupos sociales encargados de organizar y/o operar en el nivel de la superestructura, más allá de la economía, no pudieron resolver las diversas manifestaciones económicas, políticas, culturales y sociales de la crisis en el bloque histórico, así como no pudieron

³⁵ Al inicio del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez estalló una rebelión popular en rechazo a medidas de corte neoliberal como el alza del precio de los carburantes y la elevación de precios de los productos de consumo familiar. La protesta empezó el 27 de febrero y terminó el 8 de marzo de 1989 con una sangrienta represión que dejó miles de muertos y heridos.

³⁶ Una «Operación Zamora» liderada por el entonces coronel Hugo Chávez se llevó a cabo en los estados de Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y el Distrito Federal, con la intención de derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez. La misión no cumplió su objetivo, pero esa derrota militar se transformó luego en la victoria electoral del líder bolivariano en 1998.

³⁷ El 12 y 13 de febrero un motín policial se registró en La Paz, con la característica de un quiebre en el aparato del estado, pues policías y militares se enfrentaron a bala en la Plaza Murillo, en el km 0, donde está situado el Palacio de Gobierno. Varias fueron las causas, entre ellas la intención del gobierno de Sánchez de Lozada de crear nuevos impuestos.

³⁸ Aunque la protesta campesina y urbana se inició en septiembre, es en octubre de 2003 que la «guerra del gas» —oposición a la exportación de gas hacia los Estados Unidos y México por puertos chilenos— llega a su máxima intensidad. Una huelga general indefinida, combinada con corte de rutas y movilizaciones en todo el país, aunque principalmente en La Paz, obliga a Gonzalo Sánchez de Lozada a renunciar a la presidencia y fugarse del país.

³⁹ Una rebelión popular, liderada por pueblos indígenas y un sector de las fuerzas armadas, a la cabeza del coronel Lucio Gutiérrez, provoca la renuncia del presidente Jamil Mahuad. Se conforma un triunvirato que apenas dura un día, pues el 23 de enero asume la conducción de ese país Gustavo Novoa, quien fuera vicepresidente de Mahuad.

⁴⁰ La inestabilidad política en Ecuador produce otro hecho de alta intensidad el 20 de abril de 2005, cuando «la Rebelión de los Forajidos» —desarrollada principalmente por clases medias y capas urbanas— provoca la renuncia y posterior fuga de Lucio Gutiérrez, quien había ganado las elecciones de 2002, en alianza con Pachakutik, un movimiento orgánicamente ligado a los indígenas de ese país. Alfredo Palacio asume en su condición de vicepresidente la titularidad del gobierno ecuatoriano.

evitar su posterior derrumbe.⁴¹ La irrupción de «los de abajo», de las clases y grupos subalternos en una perspectiva distinta a la simple movilización económico-corporativa o tradeunionista, aunque al principio partiendo de una mera lucha reivindicativa, le fue dando a la crisis un carácter distinto. Estas dos puntualizaciones son importantes. En primer lugar, porque hay momentos en la historia —que son los pocos— en que la lucha reivindicativa puede devenir en lucha estratégica, es decir, dar lugar a desplazamientos político-militares para la destrucción del viejo poder y la construcción de un poder de nuevo tipo. Este es el momento en que la lucha política «es una forma superior de lucha social».⁴² Segundo, no toda crisis en el bloque histórico es necesariamente una crisis orgánica que pone inevitablemente la cuestión del poder al orden del día. Como señalaría Lenin, no toda situación revolucionaria deviene revolución. Es más, un intelectual boliviano bastante gramsciano y de prestigio internacional, como René Zavaleta, sostuvo en su momento que la crisis de Estado da lugar a un momento fundacional (poder de nuevo tipo, nuevo bloque histórico) o a momentos reconstitutivos (restablecimiento del bloque histórico).

Es por eso que, sin caer en un esquematismo que no explica nada pero, al mismo tiempo, con la necesidad de agrupar, por razones metodológicas, las experiencias de cambio en América Latina, podríamos señalar que los procesos políticos de Venezuela, Bolivia y Ecuador han pasado, en términos generales, por cuatro grandes momentos.

El primer momento, está dado por el desarrollo de una crisis combinada en la «sociedad política» y en la «sociedad civil»,⁴³ sin que todavía aparezca de

⁴¹ Gramsci señala que: «los intelectuales son los “empleados” del grupo dominante para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía social y del gobierno político a saber: a) del “consenso” espontáneo que las grandes masas de la población dan a la dirección impuesta a la vida social por el grupo fundamental dominante [...], 2) del aparato de coerción estatal que asegura “legalmente” la disciplina de aquellos grupos que no “consienten” ni activa ni pasivamente, pero que está preparado para toda la sociedad en previsión de los momentos de crisis en el comando y en la dirección, casos en que no se da el consenso espontáneo». Antonio Gramsci: *Los intelectuales y la organización de la cultura*, Nueva Visión, Buenos Aires, 2006, p.16.

⁴² Roberto Regalado: ob. cit., p. 13.

⁴³ «Por ahora se pueden fijar dos grandes planos superestructurales, el que se puede llamar de la “sociedad civil”, que está formado por el conjunto de los organismos vulgarmente llamados “privados”, y el de la “sociedad política o Estado” y que corresponden a la función de “hegemonía” que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad y a la de “dominio directo” o de comando que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico». Antonio Gramsci: *Los intelectuales y la organización de la cultura*, op. cit., p. 16.

manera nítida el germen de un proyecto alternativo al orden vigente desde las clases y grupos subalternos. No es que no hubiera nada, pero la salida de la pasividad de las masas y su ruptura con el «sistema de creencias» instalado hegemónicamente por el neoliberalismo, es todavía muy primario. Las masas están en las calles, pero no unificadas, sino dispersas. Las clases y grupos sociales subalternos no logran salir de la domesticación y la fragmentación social a la que el neoliberalismo las ha condenado. La movilización de los sindicatos apenas empieza a golpear, cada uno a su manera, pero empiezan a salir de la situación pasiva en la que estuvieron más de una década. Las capas urbanas, que al principio creyeron en el neoliberalismo, y que incluso su intelectualidad desarrollaba teoría y discurso para legitimar los ajustes estructurales, empiezan a mirar con temor e incertidumbre la imposibilidad del neoliberalismo de satisfacer sus necesidades.

La hegemonía en la sociedad civil empieza a resquebrajarse por el fracaso del modelo neoliberal y las sobre expectativas generadas por la «teoría del rebalse», y el discurso de la autorregulación del libre mercado va distanciando a amplias masas de la población de los gobernantes, quienes no tienen otra alternativa que hacer énfasis en los mecanismos de dominación (policía en las ciudades y ejército en las zonas rurales).

El bloque en el poder en los tres países va perdiendo fuerza en los «centros institucionalizados del poder». Hay una «crisis de autoridad»⁴⁴ o hegemonía regresiva en el gobierno y en sus parlamentos, producto de una crisis de representatividad y de legitimidad en la sociedad civil. Esto quiere decir que las clases dominantes de los tres países encuentran grandes dificultades para mantener en orden la vida social, ya sea a través de los aparatos de dominación (policía y fuerzas armadas) y, peor aún, mediante los aparatos de hegemonía. Las democracias están vaciadas del mínimo contenido legitimador, por lo que los pactos entre los partidos del sistema están a la orden del día.

⁴⁴ Gramsci entiende por «crisis de autoridad» cuando «la clase dominante ha perdido el consentimiento, o sea, ya no es “dirigente”, sino solo “dominante”, detentadora de la mera fuerza coactiva, ello significa que las grandes masas se han desprendido de las ideologías tradicionales, no creen ya en aquello en lo cual creían, etc.». Manuel Sacristán: *Antología Gramsci*, Editorial Siglo XXI, México, 1970, p. 313.

Las luchas económico-corporativas, si bien todavía no están unificadas, pues la salida de los grupos sociales es dispersa, provocan fisuras que en el pasado no pudieron causar, pero todavía no lo suficientemente intensas como para modificar las relaciones de fuerza en la sociedad civil.

Pero que no haya protestas unificadas, más aún con una direccionalidad política, no quiere decir que las protestas no estuvieran a la orden del día. El ya mencionado «caracazo» es uno de los acontecimientos políticos más importantes que ocurrió en Venezuela en 1989, una protesta popular contra las medidas económicas del presidente Carlos Andrés Pérez, todas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la liberalización de la economía. Las protestas se registraron en la mayor parte del país, pero es en Caracas donde adquirieron mayor fuerza, aunque todavía no la suficiente como para provocar el levantamiento de las medidas que solo anticipaban una profundización del desempleo, el deterioro de la capacidad adquisitiva del salario y el empeoramiento del hambre. Como es bien conocido, la respuesta fue una dura represión, con un saldo de cerca de tres centenares de heridos.

Ni siquiera en el caso boliviano, con una tradición unitaria de los trabajadores alrededor de la Central Obrera Boliviana (COB), se puede pensar y desarrollar movilizaciones unitarias de esos sectores, mucho menos del proletariado minero, duramente golpeado tras su derrota en 1986.⁴⁵ Sin embargo, a pesar de que la implementación del neoliberalismo debilitó al proletariado minero a través del cierre de minas y el despido de miles de trabajadores, así como debilitó a la COB, las clases subalternas no dejaban de movilizarse e incomodar políticamente a los partidos de la derecha, que hasta la victoria de Evo Morales en 2005, bajo el mito de la alternancia y en la lógica de una «democracia de pactos», se rotaban la toma de mando del gobierno. El objetivo de domesticar a los dirigentes sindicales y anular la presión social fue logrado parcialmente, pero eso no impidió la protesta social, principalmente campesina, y a la que los gobiernos solo respondían con represión.

⁴⁵ El proletariado boliviano protagonizó una histórica y dramática marcha en agosto de 1986, en un intento de revertir el cierre de minas y despido de miles de trabajadores dispuestos por el gobierno neoliberal de Víctor Paz Estenssoro, paradójicamente el mismo presidente que en 1952 tomó al calor de la revolución nacional las siguientes medidas: nacionalización de la minería, reforma agraria y voto universal.

Un segundo momento, es la irrupción de las clases y grupos subalternos que objetivan, de manera nítida, la ampliación de una crisis de hegemonía del bloque en el poder, cuyas medidas para intentar revertir la crisis hacen mayor énfasis en la represión policial y militar. «Los de abajo» van unificando sus pliegos y sus luchas, sus sueños y sus esperanzas. También van articulando sus métodos de lucha. En Venezuela la protesta social es principalmente urbano-periférica; en Ecuador rural-urbano al principio, pero luego predominantemente de las clases medias y capas urbanas; y, en Bolivia, el núcleo central es campesino-indígena, particularmente de los productores de la hoja de coca en resistencia a la represión e injerencia estadounidense.

En este momento, la «sociedad política» tiene un predominio sobre la «sociedad civil», es decir, la dominación hecha represión sobre la hegemonía. Se profundiza la crisis del bloque histórico, pues el grupo social encargado de organizar el consenso se va fracturando. No son pocos los intelectuales que se van separando del gobierno o separando de cierta pasividad política, para tomar partido por las masas subalternas movilizadas. Quizá el caso más emblemático es Rafael Correa, quien renuncia al gabinete del presidente Alfredo Palacio del Ecuador, y va construyendo un perfil que luego le permitiría ganar las elecciones presidenciales en 2006. Pero también es el caso de Álvaro García Linera quien —después de una corta y fallida experiencia guerrillera en el occidente boliviano, que lo llevó a la cárcel y luego a ser el protagonista principal de un prestigioso programa de debate político—, retorna activamente a la política y acompaña en su condición de segundo al presidente indígena Evo Morales desde enero de 2006, tras una histórica victoria político-electoral.

Un tercer momento, es cuando la irrupción de «los de abajo» tiene efecto estatal. La sociedad civil, pero entendida como un espacio en disputa, va teniendo primacía, desde el punto de vista de los intereses de las masas sublevadas, sobre la sociedad política. Ya no es la lucha reivindicativa lo principal —pues tampoco se descarta la conquista de beneficios concretos—, sino en la mira está el Estado, quizá a veces como algo fetichizado o como «comunidad idealizada» como decía Marx, pero ya está en la mira. En Venezuela, el 4 de febrero de 1992, un levantamiento militar comandado por el coronel Hugo Chávez, incorporando en la escena política a nuevos actores

dispuestos a cambiar el actual estado de cosas: militares nacionalistas y amplios sectores organizados del pueblo. La rebelión fracasó militarmente, pero políticamente representó el parteaguas en la historia de Venezuela de la segunda mitad del siglo XX y que se reiniciaría luego, en 1998, con el triunfo político-electoral que daría inicio a la revolución bolivariana.

La lucha social se va fundiendo con la lucha política. De nada sirve el descalabro de los partidos de izquierda en los tres países, los grupos subalternos construyen sus propias formas e instrumentos para ingresar a escena, para salir de la pasividad, para ir construyendo su capacidad de dirección. Es decir, en los tres países, el partido —«el príncipe moderno»—, como parte fundamental de los aparatos de construcción de hegemonía y contrahegemonía, no cumple con su papel. En Venezuela se da lugar al Movimiento V República,⁴⁶ en Bolivia a la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP)⁴⁷ que luego, ante el boicot de la Corte Nacional Electoral, adquirirá el nombre Movimiento Al Socialismo (MAS), y en Ecuador al Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik⁴⁸ en 1995. Se trata de la emergencia social y su ingreso decidido a la disputa por el poder político a través de nuevas identidades políticas que incorporan nuevos paradigmas y renovadas forma de articulación política que les permite conquistar sucesivas victorias en todos los planos, incluyendo el electoral.

Cuando se dice que el «príncipe moderno» no cumple su misión de organizar la voluntad colectiva, ya sea para resistir y/o quebrar la hegemonía de las clases dominantes en la sociedad civil, es una crítica a la concepción leninista del partido. Esto es particularmente válido para Bolivia y Ecuador, donde la existencia de ordenes civilizatorios «no modernos» empujan a pensar

⁴⁶ Fundado por Hugo Chávez en 1997, junto a civiles y militares que lo siguieron en la rebelión de 1992, fue el partido con más respaldo entre 1998 y 2007.

⁴⁷ La ASP es el nombre con el que fue bautizado en 1995 el Instrumento Político que el movimiento campesino-indígena fue construyendo desde 1988. Con la sigla Izquierda Unida participó en las elecciones municipales y nacionales de 1995 y 1997, respectivamente, con buenos resultados. Esa sería la primera vez que Evo Morales fue electo como el diputado uninominal por el Chapare y el más votado del país.

⁴⁸ Pachakutik al principio se constituyó en la expresión política de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, participó en las elecciones nacionales y legislativas de 1996 y 1998, respectivamente, en las que obtuvo una buena votación, para ser su primera vez, y eligió ocho diputados. En 2002 llevó a la presidencia a Lucio Gutiérrez a través de la coalición Sociedad Patriótica, pero fue traicionado por el coronel.

en otro tipo de organización política. Quizá la «forma partido» es más parecida a la concepción de Marx, no tanto pensando en la estructura sino en la «toma de posición». Es decir, el asumir una clara posición antineoliberal y antiimperialista, así como el propugnar y luchar por un proyecto para superar el capitalismo, es una forma histórico-concreta en la que las clases populares cuestionan las relaciones de subordinación, alientan el antagonismo y se apropian de las banderas de la revolución social.

Volvamos a la emergencia de las masas. La sociedad civil es un espacio de disputa por la hegemonía. Los aparatos de hegemonía del bloque en el poder —que es una mezcla de tradicionales y de nuevo tipo, como es el caso de los medios de comunicación— no soportan el avance de los movimientos y organizaciones sociales.

Pero hay una diferencia de Venezuela con Bolivia y Ecuador. En la patria de Bolívar, con una sociedad predominantemente individuada, con partidos de izquierda muy débiles y un movimiento sindical corrupto y funcional al Estado, le corresponde a un grupo de militares patriotas, encabezados por el entonces teniente coronel Hugo Chávez, tomar la iniciativa y sentar los ejes de su articulación, en distintos tiempos y con diferentes métodos, en el rechazo al modelo neoliberal y por la realización de la Asamblea Constituyente. En cambio, aunque a la postre iban a tener distintos derroteros, la irrupción de las masas en Bolivia y Ecuador se da alrededor de los movimientos sociales, particularmente de los pueblos y naciones indígenas.

Roberto Regalado encuentra cuatro razones que explican el protagonismo de los movimientos sociales:⁴⁹ a) esos movimientos adquirieron vida propia y razón de ser en el período de lucha contra la dictadura y durante la implantación del nuevo sistema de dominación; b) la crisis socioeconómica estimuló su protagonismo social y político; c) el aumento de la competencia entre obreros, fomentada por el neoliberalismo debilitó el sindicalismo clásico y a otras formas tradicionales de organización y lucha social; y, d) el sistema político se «impermeabilizó» para impedirle a los partidos políticos, incluidos los de izquierda, cumplir la función de intermediación entre la sociedad y el Estado.

⁴⁹ Roberto Regalado: ob. cit., p. 171.

En el caso de Bolivia —las «trillizas» (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CUSUTCB), la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), y la Federación Sindical de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa)—, y en Ecuador —la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)—, los pueblos indígenas se convierten en los ejes articuladores de la lucha social y de la progresiva incorporación de otros grupos subalternos a la escena política.

Es decir, en este tercer momento, en que la relación de fuerzas está a favor de los grupos subalternos, se valida la afirmación gramsciana de que: «un grupo social puede y hasta tiene que ser dirigente ya antes de conquistar el poder gubernativo».⁵⁰ La iniciativa está en las calles y en las comunidades. La política se produce fuera de los centros institucionalizados del poder. La democracia participativa y directa adquiere predominio respecto de la democracia representativa, que se ha convertido en un mero instrumento procedimental para la selección de autoridades, pero tampoco la niega como una puerta de salida institucional a la crisis.

Pero, como registran los hechos, los efectos de esa irrupción han sido distintos en ambos países. En Bolivia, el bloque indígena-campesino y popular se ha elevado a su condición de «dirigente». En el caso del Ecuador, los indígenas perdieron esa valiosa oportunidad luego de ser traicionados por el coronel Lucio Gutiérrez, a quien llevaron a la presidencia. Podemos decir que el movimiento indígena se constituye en un fugaz sujeto histórico que luego termina desestructurado y víctima de sus propias contradicciones. Ha tenido que desarrollarse un movimiento ciudadano a la cabeza de Rafael Correa para «montarse» sobre la «cumbre» de la crisis orgánica y darle un reimpulso al proceso revolucionario ecuatoriano.

Es lógico que este momento, en que los grupos sociales subalternos ya actúan como dirección sin ser todavía dominantes, se caracterice por la construcción de un nuevo sistema hegemónico que va desplazando al anterior. La característica más importante de que eso está sucediendo es que ya se ha producido una «escisión» en el sistema hegemónico. Hay una ruptura de los grupos subalternos con la ideología dominante y su proceso de unificación en

⁵⁰ Gramsci sostenía, además, que esta es una de las condiciones para la conquista del poder.

la lucha le otorga «personalidad histórica», es decir, conciencia histórica de lo que debe hacer y cómo debe hacer para destruir el poder del enemigo e iniciar el proceso de construcción de su propio poder.

Un cuarto momento, es la «toma del poder» de «los de abajo» y el inicio de la configuración de nuevos bloques históricos en cada uno de los tres países, es decir, en la construcción de vínculos de nuevo tipo entre la estructura y las superestructuras. Es precisamente la constitución de un nuevo tipo de relaciones que lleva a caracterizar a los procesos de Venezuela, Bolivia y Ecuador como revoluciones. Los bloques sociales alternativos a los partidos de la derecha pasan de su condición de «dirigentes» a «dominantes», pero sin dejar de ser al mismo tiempo «dirigentes». La «toma» del poder político por la vía de las elecciones no les quita su condición de «dirigentes». Es el momento más representativo de la hegemonía labrada y alcanzada desde «abajo». Y entonces adquiere sentido la reflexión de Gramsci cuando sostiene que cuando ese grupo social «ejerce el poder y aunque lo tenga firmemente en las manos, se hace dominante, pero tiene que seguir siendo dirigente».

La configuración de un nuevo bloque histórico se ha desprendido en los tres países del cambio de sus constituciones por la vía de las Asambleas Constituyentes, que no es otra cosa que una de las expresiones, como se ha señalado, de los procesos constituyentes. El resultado de una Asamblea Constituyente es una nueva Constitución Política del Estado. El resultado del proceso constituyente es la configuración de un nuevo poder. Ambos son importantes, pues dan lugar a un nuevo bloque histórico, por tanto, a un nuevo tipo de vínculo entre la estructura y la superestructura, y entre la sociedad civil y la sociedad política. Es más, no es exagerado afirmar que las revoluciones en América Latina en el siglo XXI se están dando bajo la forma de proceso constituyente. Aunque años después, la iniciativa política tomada por el presidente Nicolás Maduro, el 1 de mayo de 2017, de convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, dio lugar a una segunda oleada constituyente que determinó la derrota política de la oposición en Venezuela y el triunfo del «chavismo» en las elecciones regionales y municipales de ese mismo año.

En el campo de la estructura social, si bien no se han alterado las relaciones de producción capitalistas, la recuperación estatal de los recursos naturales, la

apropiación colectiva (a través del Estado) de los excedentes y su redistribución en beneficio de las inmensas mayorías, ya implica, en un capitalismo verdaderamente planetario, un cambio sustancial en el largo recorrido hacia una sociedad no capitalista.

En el campo de las superestructuras quizá valga apuntar dos aspectos centrales. Primero, hay un proceso de construcción de una nueva estatalidad que condense la nueva relación de fuerzas y el nuevo bloque histórico. Sin embargo, este proceso es paralelo al proceso de desmontar la vieja institucionalidad estatal en condiciones distintas a las revoluciones producto de las armas. Por eso el Estado es un campo de lucha. Segundo, el bloque en el poder, «dominante» y «dirigente», está bañando con sus cosmovisiones y formas de concebir el mundo, al conjunto del nuevo orden social. Ambas cosas son una forma de ampliación permanente de la hegemonía. Hay que subrayar que la hegemonía no es algo muerto y estático, es algo vivo y en permanente movimiento. La instalación de un nuevo sistema de creencias ha sido tal en los tres países que no solo se discute cómo se resiste a la nueva contraofensiva imperialista, sino cómo se construye socialismo del siglo XXI en Venezuela, Buen Vivir o Socialismo del Siglo XXI en Ecuador y Socialismo Comunitario o Vivir Bien en Bolivia. La traición de Lenín Moreno en Ecuador —la segunda en ese país en menos de 20 años— lejos de negar, más bien ratifica, la conquista de la hegemonía de la Revolución Ciudadana, pues es sobre la base de su prestigio que la oposición de derecha se ha montado en el gobierno ecuatoriano para desmontar las conquistas de la revolución.

Y aquí es necesario hacer un rápido recuento de la forma como se hizo en Venezuela, Ecuador y Bolivia.

En Venezuela la irrupción popular liderada por Hugo Chávez desemboca en triunfo electoral en 1998, y en la aprobación de una nueva Constitución Política por la vía de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, la agresión directa de los Estados Unidos contra la Revolución Bolivariana desde un principio da lugar a un equilibrio inestable de fuerzas que impide la expansión hegemónica del proyecto emancipador. Quizá la multiplicación de las «misiones» es una constatación de las grandes dificultades de construir un nuevo tipo de institucionalidad estatal en los tiempos planteados por los conductores de esa revolución. Sin embargo, sería injusto no explicar que la situación de equilibrio

inestable se debe a dos razones fundamentales: primero, a la existencia de una burguesía muy fuerte, con lazos muy profundos con los Estados Unidos, y que siempre se benefició de la renta petrolera; y, segundo, a la enorme agresión desplegada de distintas maneras por el imperialismo. Contra la Revolución Venezolana se combinan tres experiencias que los Estados Unidos han desarrollado contra gobiernos revolucionarios: la desplegada contra el gobierno socialista de Salvador Allende en la década de 1970, al provocar un clima de desabastecimiento de alimentos y otros productos; la desarrollada contra la Revolución Sandinista en la década de 1980, a través de una agresión sistemática mediante grupos «contras» alimentados desde Honduras; y las sanciones y acciones de terrorismo contra la Revolución Cubana, que datan del momento mismo de su triunfo, en 1959. A todo eso hay que sumar la «guerra mediática» como componente fundamental de lo que se ha venido a llamar el «golpe suave».

En Ecuador, la irrupción inicialmente indígena, que provocó la renuncia de dos gobiernos antes que cumplieran sus respectivos mandatos, no alcanzó a constituir un nuevo bloque histórico, y fue recién en 2006, con otro sujeto articulador de la resistencia antineoliberal —las clases medias y capas urbanas—, que se sientan las bases, tras el triunfo de Rafael Correa, para una «época de cambios». La situación anteriormente descrita es tan evidente que, de las dos Asambleas Constituyentes en el Ecuador —una, en 1998, en el gobierno de Jamil Mahuad, y la segunda, en 2008, bajo la presidencia de Rafael Correa—, la segunda es la que marca un cambio de dirección en ese país.

En Bolivia, la configuración de un nuevo bloque histórico se ha producido en torno a la dirección de los movimientos sociales, particularmente indígena-campesinos. Le ha correspondido a ese sujeto, liderado por el dirigente cocalero Evo Morales, levantar las banderas de una revolución antiimperialista, anticapitalista y anticolonial. Al igual que en Venezuela, la vía para «elevar» el proceso revolucionario hacia otros niveles es la electoral. En diciembre de 2005, Morales triunfa con el respaldo del 54% de la votación. El nuevo bloque en el poder actúa como «dominante», aunque con grandes dificultades por un aparato estatal (burocracia, ejército y policía) con enorme influencia de la desplazada clase dominante y los Estados Unidos, pero lo hace

sobre todo como bloque «dirigente». La combinación de su condición de bloque dominante y dirigente a la vez, de la «guerra de posiciones» y la «guerra de movimientos», le permiten derrotar varios intentos de desestabilización, particularmente, el golpe de Estado «cívico-prefectural» de septiembre-octubre de 2008, cuando la ultraderecha pretendía partir el país en dos. La Revolución Democrática y Cultural ha ido pasando por varios momentos que van desde la defensa de lo conquistado en el Estado viejo, hasta la irradiación territorial y en profundidad del Estado Plurinacional. Claro, después de resolver a su favor, en una «guerra de posiciones», el equilibrio inestable de fuerzas que se mantuvo hasta 2008. Durante todos estos momentos, el bloque en el poder ha logrado combinar su papel de «dominante» y de «dirección» al mismo tiempo. Fuerza y firmeza hacia los enemigos que no se cansan de conspirar con apoyo directo de los Estados Unidos, y expansión hegemónica hacia otros grupos sociales, particularmente, de clases medias.

Un quinto momento es el establecimiento de una relación de «correspondencia no armoniosa» entre la sociedad política y la sociedad civil. Es decir, se registra un desarrollo no antagónico entre el Estado y la sociedad que, si bien no abre un riesgo automático a los procesos revolucionarios de América Latina, al mismo tiempo representa un llamado de atención —en la mayor parte de los casos no percibido por las autoridades del Estado, ni por los dirigentes de los partidos y/o movimientos sociales o ciudadanos—, para el futuro de los proyectos emancipadores. Por «relación de correspondencia no armoniosa» vamos a entender los desencuentros entre el gobierno y la sociedad, cuyas causas pueden ser atribuidas a ambos, y que, a pesar de compartir un mismo objetivo, agarra distintos ritmos o se mueven en campos diferentes. Uno de los efectos de este desencuentro es la desaceleración o ralentización de los procesos revolucionarios. Hay coincidencia en que este momento se ubica aproximadamente alrededor de 2010. De ahí las reflexiones y aportes de intelectuales orgánicos de la izquierda como Roberto Regalado, que en una visión crítica de lo que hizo la izquierda en el gobierno se pregunta si ¿alternativa o reciclaje?,⁵¹ y de la intelectual argentina-cubana Isabel Rauber,

⁵¹ Roberto Regalado: ob. cit., p. 3.

que lanza la interrogante de: «¿conservar logros o profundizarlos y ampliarlos».⁵²

El rasgo más importante de ese momento de «correspondencia no armoniosa» es el siguiente: el Estado, a través de sus principales líderes, se va convirtiendo en el actor fundamental del proceso, mientras el sujeto histórico de la revolución —plural y diverso como diría Isabel Rauber— ingresa a un camino que le va quitando su condición de tal de manera progresiva, aunque no planificada. Los sectores populares van pasando de protagonistas a cierta pasividad y el Estado empieza a actuar como sujeto de la revolución. El sujeto histórico, que siempre es el resultado histórico-concreto de una situación históricamente determinada, y no «una cosa» predestinada o pre-existente como lo entiende cierto marxismo, no solo que no actúa al ritmo y en la profundidad que requiere los desafíos del proceso de cambio, sino que va retornando a sus intereses particulares de corto plazo. La lucha estratégica es desplazada por la lucha reivindicativa. Esto significa que el sujeto de la revolución, que durante años de resistencia e irrupción a la escena política fue construyendo un nuevo «sentido común» en torno a un interés y necesidad generales, abandona esa visión universal y empieza a fragmentarse y retornar a sus intereses particulares. Por tanto, deja de ser sujeto histórico. Las masas, otrora protagonistas de la historia, asumen una actitud pasiva y solo esperan la llegada de los «beneficios» de parte del Estado.

Por su parte, el Estado, siempre proclive al burocratismo y amenazado por él, hace gala de su tendencia a la monopolización de las decisiones y se aproxima, aún sin el deseo de sus máximos conductores, a la línea divisoria entre la sociedad política y la sociedad civil propia de los gobiernos burgueses. El Estado asume el papel de actor político en todos los ámbitos de la realidad. La burocracia —aquel grupo de intelectuales encargados de la gestión pública, que en una parte más o menos considerable provenía de la burocracia del viejo Estado y, por lo tanto, fue educada en la concepción de las viejas clases dominantes—, vuelve a sus prácticas elitistas y excluyentes de las mayorías. Este desencuentro o «relación de correspondencia no armoniosa» alienta el resurgimiento de una subjetividad «aristocrática» en sectores que administran

⁵² Isabel Rauber: ob. cit.

el Estado, olvidando que «no son las instituciones, ni los funcionarios, ni las leyes, ni los partidos políticos, los sujetos del cambio, sino los pueblos».⁵³

Sin embargo, el propósito de esta reflexión no es «demonizar» el activo papel del Estado y de los gobiernos. De hecho, si no hubieran estado presentes con toda esa su fuerza y convicción Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, así como Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quizá poco o nada hubiera pasado en materia de integración latinoamericana y en acuerdos y articulación política, que permitieron enfrentar con éxito los desafíos y amenazas a todos y cada uno de los gobiernos de izquierda y progresistas de la región. Y estos grandes líderes, a partir del 2010 aproximadamente, se apoyaron más en la fuerza del Estado que en la capacidad e iniciativa popular para alcanzar grandes conquistas.

La causa más importante de ese desencuentro no antagonizado entre el Estado y la sociedad es la «fetichización» del poder. Los protagonistas y forjadores de este momento de nuestra historia sienten que se ha logrado todo, que se trata de gozar de los beneficios de la conquista del poder y delegan, en los hechos, la «administración» del poder a un grupo de especialistas y profesionales del manejo de la «cosa pública». Entretanto, las autoridades del Estado, de lo que no se escapan sus máximos conductores, aunque en menor medida, asumen como suyo el gran reto de «satisfacer» las necesidades crecientes de la población. Es decir, desde ambos lados —desde el Estado y la sociedad— se va registrando no solo una fetichización del poder en su sentido y concepción tradicionales, sino que se va abriendo una potencial fisura que es mortal para el proyecto emancipador.

Los efectos de este momento de «relaciones de correspondencia no armoniosa» se empiezan a notar incluso antes de la muerte del presidente Chávez en marzo de 2013. Ya al máximo conductor de la Revolución Bolivariana y principal referente de las revoluciones del siglo XXI, se le empieza a poner difícil la situación, al punto que después de ganar las elecciones en octubre de 2012, en una de las mayores autocríticas del proceso y del gobierno, convocó a un «golpe de timón».⁵⁴ Venezuela no fue la única afectada

⁵³ *Ibíd.*: p. 25.

⁵⁴ El 20 de octubre de 2012, consciente de que el triunfo electoral de ese año confirmaba que se estaban presentando problemas para el desarrollo de la revolución, el comandante

sino, aunque en distinto grado, la totalidad de los gobiernos de izquierda y progresistas de la región. El tema no es el acceso a recursos, como una lectura perversa de origen imperial afirma a través de sus medios de comunicación transnacionales y locales, en un fallido intento de mercantilizar la gravitación política real que tuvo el líder venezolano en la articulación política latinoamericana, incluso con gobiernos de corte neoliberal, como ocurrió con el nacimiento de la CELAC.

En términos generales, ¿cuáles son las manifestaciones de este desencuentro y desaceleración respectivas, sin que ello signifique, reiteramos, la proximidad «por efecto automático» de una crisis de carácter estatal?

Una primera manifestación es la no relación entre los resultados de la gestión y el comportamiento electoral y político de la población. Ninguno de los gobiernos que precedieron a los actuales en los tres países andinos distribuyeron tanto la riqueza ni ampliaron la democracia. Empero, en los últimos años, no hay una correspondencia entre los niveles de aprobación de los gobiernos y la intención de voto. Esto se explica por dos razones bastante genéricas: por un lado, al priorizar tanto la gestión y convertir al Estado en el único actor del proceso, se ha descuidado en parte el trabajo político-ideológico para seguir desmontando los fundamentos de la cultura capitalista, predominante todavía por su carácter planetario; por otro lado, amplios sectores de la población observan como normal lo que al principio les parecía una novedad: la capacidad de trabajo de sus gobiernos, particularmente de los presidentes.

Una segunda manifestación es que los gobiernos no han encontrado los suficientes mecanismos para impedir que la idealizada concepción de la alternancia democrática, que es uno de los componentes de la estrategia de las oposiciones para debilitar a los gobiernos de izquierda, sea no solo refutada por no corresponder a la verdad, sino superada desde una perspectiva de ampliación de la democracia. Estos procesos han surgido de otro tipo de democracias distintas a la democracia representativa. En rigor, la construcción de hegemonía y la capacidad de ser dirección sin ser todavía gobierno, y mucho menos bloque dominante, han surgido de las democracias participativa,

Chávez aprovecha el Primer Consejo de Ministros para llamar a impulsar un nuevo ciclo de la revolución.

directa y comunitaria. Y luego estas «otras» democracias, se han expresado a través de la democracia representativa.

Una tercera manifestación, es que la hegemonía política no se ha traducido en una hegemonía cultural que cambie radicalmente la concepción del mundo en los sujetos históricos y por tanto en el resto de la sociedad. Esto quiere decir que los grandes actores de estas revoluciones del siglo XXI, tenían plena conciencia de lo que no querían, pero no necesariamente saben lo que quieren, ni mucho menos tienen una adhesión consciente a un proyecto alternativo al capitalismo. Esta doble realidad: descuido del trabajo ideológico en todos los niveles y el carácter planetario del capitalismo, no solo como modo de producción, sino como modelo de cultura, impacta negativamente en la población, sobre todo en los jóvenes, quienes no tienen la dimensión precisa de lo mucho que han hecho los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Para terminar con el análisis de este quinto momento, es bueno aclarar que definimos como una «relación de correspondencia no armoniosa» por el hecho que no se trata de una configuración antagonizada entre el Estado y las fuerzas sociales de la revolución, sino a un cuadro de desencuentro en términos de ritmo y profundidad en torno a un proyecto político emancipador por el que se está luchando. Es decir, no hay un desplazamiento o ruptura entre sociedad política y sociedad civil, propia de las formaciones sociales capitalistas, pero sí hay una desarticulación entre ambas esferas que puede devenir en otra cosa, en una ruptura.

Un sexto momento, es el dilema en el que se encuentran las revoluciones de Bolivia, Venezuela y Ecuador entre la profundización del cambio revolucionario o el restablecimiento de la subalternidad, es decir, la nueva contradicción fundamental de la coyuntura actual es entre: por una parte, el restablecimiento o reconfiguración de una relación de correspondencia armoniosa entre la sociedad política y la sociedad civil, desde una perspectiva poscapitalista que trascienda al posneoliberalismo ya superado en sus ejes centrales; y, por la otra, la derrota de los gobiernos de izquierda, la (re) instalación de un «sentido común» neoliberal en nuevas condiciones y, por tanto, el restablecimiento del antagonismo real, pero encubierto bajo el manto liberal.

Al hacer el balance de las experiencias de izquierda y progresistas en América Latina, Isabel Rauber afirma que *el vértice de bifurcación política está*

*entre conservar los logros o profundizarlos o ampliarlos,*⁵⁵ y que la respuesta política ante la amenaza de la reconstitución de las fuerzas de derecha *requiere profundizar los cambios iniciados, ampliar los campos de acción y decisión del poder popular construido desde abajo.*⁵⁶ Es evidente que esta variante de la contradicción fundamental al interior de los gobiernos revolucionarios se explica porque la impronta que dio origen y desarrollo de poderosos movimientos de resistencia al neoliberalismo requiere, para no perder la potencia,⁵⁷ enlazarse con otro estadio de la perspectiva emancipadora: el poscapitalismo.

Los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador han impulsado modelos, con matices de diferencia, que básicamente le han devuelto al Estado el protagonismo integral en todos los campos de la vida social, han nacionalizado importantes empresas estratégicas, generan excedentes y los distribuyen en beneficio de toda la población. Sin embargo, estas tareas posneoliberales, desarrolladas en medio de la batalla contra el imperialismo, las burguesías y las fuerzas de derecha, no han transitado de revoluciones políticas a revoluciones sociales, lo cual implica un cambio de las relaciones de producción capitalistas, un desmontaje completo de la institucionalidad que sostiene al capitalismo y la creación de alto nivel de conciencia social que trascienda la lógica irracional de la racionalidad consumista o que supere la formación de una nación de consumidores, que parece ser el efecto inevitable y quizá no deseado de los modelos económicos aplicados en los países bajo conducción de la izquierda. Salvo Venezuela con sus intentos, es evidente que, desde 2010, las medidas y el discurso de los gobiernos de Bolivia y Ecuador han girado más en torno al posneoliberalismo que del poscapitalismo.

Es bueno apuntar que este dilema de las tres revoluciones, extensiva a los gobiernos progresistas de la región que aún quedan (Uruguay y El Salvador), se desarrolla en medio de una contraofensiva imperial-oligárquica sin precedentes en los últimos 30 años. El gobierno de Obama, cuyo segundo

⁵⁵ Isabel Rauber: *Refundar la política: desafíos para una nueva izquierda latinoamericana*, Ediciones Continente, Buenos Aires, 2017, p. 16.

⁵⁶ *Ibíd.*: p. 17.

⁵⁷ La potencia es la capacidad creadora y organizativa que nace y se desarrolla desde el pueblo, «desde abajo». El filósofo Enrique Dussel es el que más ha desarrollado este concepto.

período de mandato culminaba en enero de 2017, desplegó, por voluntad del poder de las corporaciones, una guerra no convencional que, sobre la base de los problemas enfrentados por los procesos de cambio, ha logrado un cierto resultado. Con esa nueva estrategia los Estados Unidos pretendían alcanzar con Cuba lo que no pudieron lograr durante cinco décadas a través de múltiples formas de agresión. El restablecimiento de las relaciones bilaterales, sin embargo, no contemplaba, al menos en el corto plazo, el levantamiento del criminal bloqueo y el desmantelamiento de la base militar de Guantánamo y su posterior devolución a la soberanía cubana. Contra Venezuela se ha mantenido una guerra global que se ha acentuado después de las elecciones legislativas de diciembre de 2015. Hacia Bolivia tampoco dejó de desarrollar mecanismos de subversión ideológica con el objetivo de minar la autoridad política y moral de Evo Morales. La historia alrededor de una expareja y de la existencia de un supuesto hijo de Morales, «develada» ni tres semanas antes del referéndum del 21 de febrero de 2016, que terminó con una victoria, por estrecho margen de NO a la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para habilitar al presidente indígena para las elecciones de 2019, es el ejemplo más ilustrativo de cómo está operando la estrategia subversiva contra el proceso de cambio. En el caso del Ecuador, ya se ha señalado, la restauración neoliberal ha ido de la mano del presidente Lenín Moreno, quien está desarrollando una de las formas típicas de la revolución pasiva (revolución/restauración). Esta ofensiva imperial y oligárquica contra los procesos revolucionarios de Venezuela, Bolivia y Ecuador se ha duplicado, por decir algo, con la actual administración de Donald Trump, quien retoma con firmeza la doctrina Monroe de que «América es de los americanos», formulada en 1823 en plena gesta independentista de la segunda ola emancipadora de América Latina y que los Estados Unidos nunca han dejado de considerarla vigente.

Los procesos revolucionarios se están acercando a un nuevo punto de bifurcación. El primer punto de bifurcación en Bolivia se dio en el período 2008-2009 (fracaso del golpe cívico-prefectural contra Evo Morales), en Venezuela en 2002 (secuestro de Hugo Chávez y el paro petrolero) y en Ecuador en 2010 (con el intento de golpe policial contra Correa). El imperio pretende —después de la derrota del kirchnerismo en Argentina, de la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, de la derrota del chavismo en las

elecciones legislativas en Venezuela y de la victoria de la derecha en el referéndum para modificar la Constitución Política del Estado en Bolivia—, poner fin al llamado ciclo progresista o populista en América Latina. Y lo quiere hacer apoyado en el uso de la fuerza, ya sea por la vía de la intervención militar directa de sus tropas o una fuerza multinacional, o por la vía de propiciar golpes de Estado al estilo clásico de las décadas de 1960 y 1970. De ahí que no sean un exabrupto las palabras del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, al iniciar su gira por México, Perú, Argentina y Colombia: «En la historia de Venezuela y otros países sudamericanos, muchas veces el ejército es el agente del cambio cuando las cosas están tan mal y el liderazgo ya no puede servir a la gente», dijo Tillerson el 1 de febrero antes de partir a México, donde iniciaba su gira para visitar a los países más leales a la Casa Blanca.

Esta nueva situación de las relaciones de fuerza en América Latina está empujando a que algunas corrientes de opinión dentro de los procesos revolucionarios, planteen que hay un desgaste de la *línea dura*, y que para evitar la ira del imperialismo es mejor desarrollar una línea más moderada. Uno de los fundamentos de este razonamiento es que las capas urbanas y de clase media son cada vez más gravitantes en los resultados electorales, por lo que es mejor tener a personalidades (llámense deportistas, artistas, músicos y otros) como candidatos y candidatas a los parlamentos o asambleas, que darle esas responsabilidades a los sujetos sociales.

En el nuevo punto de bifurcación en que están los proyectos revolucionarios de América Latina, se impone el impulso a un segundo momento del gran proceso constituyente abierto «desde abajo» por los pueblos, antes de ser gobierno en Venezuela, Bolivia y Ecuador. En Venezuela, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, el 1 de mayo de 2017, y su posterior instalación, han ingresado a ese segundo momento del poder constituyente, con efectos altamente positivos para la revolución: derrotó los planes golpistas y violentos de la oposición; descolocó a la agresión internacional planificada y concebida por los Estados Unidos y ejecutada a través del secretario General de la OEA, Luis Almagro; y le dio mayor iniciativa al gobierno. En Bolivia, no se visualiza la forma de ese segundo momento constituyente, pero es de esperar que Evo Morales desarrolle una iniciativa estratégica que le brinde a la

Revolución Boliviana una nueva relación de fuerzas favorable. Ya en 2011, Morales convocó a un Primer Encuentro Plurinacional que sirvió de espacio para rearticular fuerzas en la coyuntura pos TIPNIS.⁵⁸ Y en Ecuador, aunque es más difícil, la Revolución Ciudadana solo podrá retornar del retroceso al que la está conduciendo Moreno, con otra iniciativa estratégica.

Pues bien, siempre aclarando las especificidades de cada país y que las prioridades, en términos generales los grandes desafíos para la izquierda en el gobierno son los siguientes:

Primero, el restablecimiento del equilibrio o la «relación de correspondencia armoniosa» entre la sociedad política y la sociedad civil, es decir, entre dominación y hegemonía. Las relaciones de dominación, que existen en cualquier tipo de Estado, se construyen desde el Estado mismo a través de su aparato estatal y sus mecanismos institucionalizados. La hegemonía se construye y se amplía desde la sociedad. En ambos planos —Estado y sociedad— se producen relaciones de fuerza que definen el curso histórico de los procesos en marcha. Cuando un gobierno es fuerte «arriba», «abajo» es indestructible, pero cuando un gobierno es fuerte «arriba» y débil «abajo» la derrota es inminente. Esa es una realidad teórica y práctica irrefutable.

Es verdad que hay coyunturas en las que el predominio de la dominación es mayor a la hegemonía, pero es particularmente preocupante cuando se le otorga al Estado el papel de sujeto y, por tanto, de único organizador de la hegemonía en la sociedad. Es preocupante porque por lo general, como dice Álvaro García Linera, el Estado tiende a la concentración y monopolio de decisiones, mientras la sociedad tiende a una mayor democratización de las decisiones cuando hay un sujeto histórico que la dirige.

Segundo, es preciso reconstituir el sujeto histórico que hizo posible resistir y derrotar al neoliberalismo y abrir estas experiencias revolucionarias. Por diversas razones que van desde la «ilusión» de «tomar el cielo por asalto»

⁵⁸ En agosto de 2011, un grupo de indígenas del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore) llevó adelante una marcha en oposición a la construcción de una carretera que iba a unir dos departamentos de Bolivia. La legítima preocupación de una parte de los indígenas, pues la mayoría de las comunidades expresó su acuerdo con el proyecto gubernamental, fue aprovechada por la embajada de los Estados Unidos, las clases medias contrarias al proceso de cambio y los partidos de la oposición, para afectar la imagen de Evo Morales. En diciembre de ese año y enero de 2012, Evo Morales organizó el Primer Encuentro Plurinacional para «profundizar el cambio», y efectivamente abrió una nueva coyuntura favorable para el gobierno.

hasta el retorno a sus intereses corporativos de corto plazo, pasando por la «fetichización» o «enajenación» del poder, los movimientos sociales y las organizaciones ciudadanas, en Bolivia y Ecuador, respectivamente, han abandonado sus intereses estratégicos de largo plazo y, por tanto, su visión universal. Cuando eso sucede, el «sentido común» en torno al cual se articulan las luchas, resistencias y avances del bloque de las clases subalternas elevadas a la condición de bloque en el poder, se debilita y corre el riesgo de fragmentarse de manera irreversible. Es decir, se producen varios «sentidos comunes» particulares, de corto alcance y muchas veces en contradicción con los otros hasta el punto que pueden llegar a ser antagónicos.

Como está demostrado en Venezuela, el sujeto histórico se constituye en la lucha, no está predestinado ni mucho menos se configura en la pasividad. El nivel de conciencia para enfrentar las tareas que requiere el momento histórico, en la laboriosa e irrenunciable misión de construir una nueva sociedad, se adquiere o no en dependencia del papel protagónico o no que se tenga en la lucha cotidiana. El sujeto histórico no solo existe cuando resiste, sino cuando resiste en articulación con otros sectores sociales desde una perspectiva nacional, y cuando encarna la agenda o programa del cambio. Resistir-construir-resistir es un triángulo permanente en la lucha contra el capital y en el desafío de edificar una sociedad más allá del capital.

Tercero, lograr un «desdoblamiento articulado del sujeto histórico». Esto significa que se piense en su doble condición. Por un lado, como «bloque en el poder político del Estado» y que, por tanto, tiene la enorme responsabilidad de ser portador de una concepción universal del Estado y de representar el interés general de todos y todas, de superar sus visiones corporativas o sectoriales al momento de diseñar y aprobar las políticas públicas y de generar las condiciones institucionales necesarias para una efectiva participación en la construcción del poder, el sujeto histórico debe ser el más interesado en alcanzar niveles de eficiencia y productividad en la gestión de las empresas públicas, pues de ello depende asegurar la generación de excedentes para su redistribución por diversos mecanismos. Por otro lado, como *protagonista o actor político y social estratégico en la construcción de la hegemonía* en torno al horizonte de visibilización del proyecto histórico. Este bloque, entonces, deber ser portador de una visión universal del mundo y de un «sentido común»

que articule a los «otros sentidos comunes» de los pueblos que apuestan, desde distintos niveles de desarrollo de la conciencia social, a la superación de las relaciones antagonizadas y de subordinación creadas por el capital.

Como reflexiona Gramsci en sus escritos, la construcción de hegemonía es incorporar de los otros aquellas ideas —no a sus actores o portavoces, ni aún fragmentados y dispersos— que no alteren o cambien el rumbo del proyecto que se está ejecutando.

El solo comportarse como bloque en el poder político lo enajena y lo separa de la sociedad en la que también se libra la disputa contra el sistema de creencias del capitalismo, lo cual le deja abierto un espacio a las fuerzas conservadoras para reagruparse y construir condiciones de un proyecto contrahegemónico al que se tiene. Asimismo, el solo comportarse como actor político y social estratégico, sin ninguna participación en las estructuras estatales o niveles de decisión, abre un camino para el desarrollo de las corrientes oportunistas generalmente hábiles para penetrar en las altas esferas, pero también empuja al actor político a migrar o refugiarse progresivamente en sus intereses corporativos de corto plazo. En ese sentido, un correcto y adecuado «desdoblamiento articulado del sujeto histórico» implica estar con la iniciativa estratégica ininterrumpida y de cambiar la lógica conservadora del poder, pues eso conduce «desde arriba» y «desde abajo» a la construcción de un poder radicalmente distinto del que hace gala el capital.

Cuarto, está el desafío de lograr un equilibrio entre la gestión y el trabajo político desde el Estado y mejor aún desde fuera del Estado. No cabe la menor duda que Evo Morales, Rafael Correa y Hugo Chávez y después Nicolás Maduro, han cambiado radicalmente estos tres países. Sin embargo, los resultados de la gestión, altamente valorados por la población, no se traducen ahora por efecto automático en un incremento de apoyo político al gobierno, en intención de voto y mucho menos en una toma de conciencia de que solo un proceso con horizonte socialista ha sido capaz de lograr cosas que no se hicieron o quedaron pendientes desde la fundación de las tres repúblicas.

Es verdad que la situación de Venezuela es particularmente distinta por la «guerra económica» que se libra contra el país sudamericano. Ningún modelo funciona, como debe ser, en medio de una «guerra asimétrica» como la que enfrenta la Revolución Bolivariana. Pero todo tiene un tiempo, pues a lo que

juega el enemigo es a provocar una implosión motivada por la desesperación económica.

Quinto, la construcción de condiciones materiales y subjetivas de nuevo tipo. La revolución no es solo la manifestación de un buen deseo o de los éxitos que se tengan en la economía. Ambas desviaciones, el sobredeterminismo ideológico y el sobredeterminismo económico abren «huecos negros» que facilitan el trabajo de los enemigos de la revolución. Salvo la Revolución Boliviana, donde se ha avanzado mucho, aunque dentro de los límites del posneoliberalismo, la gestión económica es uno de los mayores problemas a resolver para la Revolución Venezolana, y aunque no es objeto de estudio de este análisis, podemos decir que también lo es para la Revolución Cubana. *La base material de cualquier proceso revolucionario es la economía*,⁵⁹ de eso no hay duda. Los Estados con gobiernos revolucionarios deben producir mejor y distribuir la riqueza con lógicas distintas a las de un gobierno de derecha y un Estado capitalista.

Sexto, es profundizar la construcción de la institucionalidad estatal. En el primer momento constituyente de las tres revoluciones, se ha registrado un cambio parcial de la organización del Estado. Desde concebir a los «poderes» como «órganos» —pues el poder es único y reside en el pueblo— hasta cambiar los nombres del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. La revolución ha empezado a «bañar» todos los ámbitos de la realidad con su «sentido común». Pero la tarea ha quedado inconclusa pues la dinámica, la técnica, muchas normativas y la lógica de la vieja estatalidad todavía se mantienen inalterables en varios niveles. Además de haber incorporado en Bolivia y Ecuador lo «plurinacional» en las diferentes instancias del Estado, lo que no es poco desde lo simbólico y político, todavía queda mucho por cambiar y reformar el Estado. En el caso de Venezuela, como se ha dicho antes, la línea de seguir creando misiones es un reflejo de las tareas inconclusas del desmontaje del viejo aparato estatal.

Uno de los rasgos centrales de la tarea pendiente en términos de construcción de la estatalidad es que el nuevo bloque histórico —entendido

⁵⁹ Álvaro García Linera: «¿Fin de ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias?», *Las venas abiertas de América Latina*, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, 2017, p. 34.

como aquellos intelectuales y técnicos que organizan la administración pública y representan el vínculo entre la estructura y la superestructura—, encuentra resistencia y a veces sabotajes en el viejo bloque histórico. Este fenómeno es comprensible pues le ha tocado incluso a las revoluciones cuya vía para la «toma del poder» fue por la violencia revolucionaria apelar a los burócratas del viejo Estado. Desde la Revolución Bolchevique hasta la Revolución Cubana, al principio se ha tenido que recurrir a intelectuales y técnicos de gobiernos del pasado para administrar el Estado. Y los tiempos políticos en revoluciones surgidas desde la lucha electoral son mucho más largos y llenos de complicaciones, aunque el mismo tiempo complejos por la exigencia rutinaria de corto plazo de revalidar su legitimidad en las urnas cada cinco años. Entonces, llevar adelante una nueva estructura de los «órganos» del Estado y terminar de desplazar a la burocracia de la vieja estatalidad para sustituirla por un nuevo bloque histórico, es una tarea central desde la perspectiva revolucionaria.

Séptimo, un factor a resolver favorablemente por las revoluciones boliviana y venezolana, es encontrar la fórmula para trascender la camisa de fuerza que representa la democracia representativa y que subsume las ricas y dinámicas democracias directa y participativa-comunitaria que han sido incorporadas a las constituciones de los tres países. El reconocimiento de las democracias directa, participativa y comunitaria como espacios de constitución, organización, toma de conciencia y movilización del sujeto histórico de las revoluciones posliberales y poscapitalistas, no implica que la democracia representativa haya dejado de ser el espacio principal de disputa entre la dominación y la emancipación. Esto no es malo en sí mismo, pero tampoco se debe perder de vista que en esa disputa las fuerzas sociales antagónicas e interesadas en establecer su visión de organización de la vida social no ingresan al campo de batalla en las mismas condiciones. Las fuerzas revolucionarias deben hacer mayor esfuerzo por conocer y manejar mejor las reglas de una democracia forjada a imagen y semejanza de la burguesía, pero también para no ser atrapadas por su tendencia enajenante. En realidad, se debe aprehender la democracia representativa para luego transformarla radicalmente como espacio de concreción de las otras democracias.

Dos son los rasgos centrales de la democracia representativa bajo conducción liberal-conservadora: por un lado, la de producir una línea de separación entre gobernantes y gobernados a partir de los intereses de clase, lo que en Bolivia implicaba hasta antes del gobierno de Evo una «racialización» del poder y de la lucha de clases. Por otro lado, el mecanismo de la alternancia —prejuicio liberal que incidió algo en el resultado del 21 de febrero en Bolivia— y no de la alternativa. Con los rasgos de esa democracia representativa es que el imperialismo y las derechas juegan, a través de organismos supranacionales como la OEA, para deslegitimar a los gobiernos revolucionarios de la región.

Entonces, desde una perspectiva revolucionaria, el desafío es cómo las democracias participativa, directa y comunitaria se proyectan a través de la democracia representativa. Esto quiere decir que el sujeto histórico debe producir siempre su condición de mayoría social, de mayoría política y de mayoría electoral aún antes del ritual del sufragio.

Octavo, el impulso de una profunda revolución intelectual y moral. Es verdad que el discurso imperial y de las derechas opositoras ha encontrado en el tema de la corrupción uno de los ejes de sus prácticas desestabilizadoras. Es verdad que, incluso, se han montado sobre denuncias de corrupción que los propios gobiernos de izquierda pusieron en escena, pero no lograron capitalizar políticamente estas iniciativas. No menos cierto es que también hay temas que son fabricados en laboratorio por las fuerzas opositoras para montar «casos» en los que no hay ni pies ni cabeza, con el único objetivo de afectar la imagen de los procesos de cambio y de sus líderes. Pero sería poco autocrítico no reconocer que viejas prácticas han sido asumidas por algunos de los actores de estas revoluciones.

Noveno, desplegar una gran batalla cultural que desplace a la lógica de consumo instalada por el capitalismo en el planeta, que le sirve como instrumento efectivo de reproducción ampliada del capital y que explica, de manera contundente, el alcance y la fortaleza de la hegemonía estadounidense en ese campo. No se puede construir una sociedad alternativa al capitalismo, llámese socialismo o Vivir Bien, con las herramientas, las lógicas y las prácticas del modo capitalista de organización de la vida social. Es el propio estratega, estadounidense por naturalización, Zbigniew Brzezinski, quien dice que la supremacía de los Estados Unidos se sostiene en cuatro ámbitos decisivos del

poder global: militar, económico, tecnológico y cultural.⁶⁰ Hoy se puede discutir, ante el avance chino, que el económico haya dejado de ser un pilar, pero es evidente que se mantienen inalterables la supremacía militar y la supremacía cultural basada en el atractivo del consumo masivo.

A manera de síntesis, salvo en Ecuador, donde todavía no es posible determinar la magnitud del retroceso al que lleve la revolución/restauración (revolución pasiva) conducida por Lenín Moreno después del referéndum del 4 de febrero pasado, las revoluciones de Venezuela y Bolivia enfrentan, dentro de la dinámica revolución/contrarrevolución, el gran desafío de fortalecerse «desde arriba» (gobiernos y Estado) y «desde abajo» (sociedad civil). Es decir, América Latina vive desde 1998 el momento más extraordinario de su historia, pero al mismo tiempo el momento más delicado si las revoluciones no rectifican sus errores y no se profundizan. En América Latina, la disputa entre dominación y emancipación se traduce, desde el 2010, en un frágil e inestable equilibrio de fuerzas. La inclinación en una u otra dirección va a depender de lo que las fuerzas en disputa construyan local, nacional e internacionalmente.

⁶⁰ Zbigniew Brzezinski: *El gran tablero mundial*, Editorial Paidós, Barcelona, 2001, p. 33.

Los gobiernos del Partido de los Trabajadores: legado y futuro

Gleisi Hoffmann*

Ante todo, es preciso tener en cuenta en este análisis que, en Brasil, el aparato del Estado nacional siempre fue fuertemente controlado por los intereses privados de los estratos económicos dominantes. Su carácter patrimonialista, presente desde su formación, fue reproducido por nuestro capitalismo tardío, incluso a lo largo de la historia brasileña reciente. Se trata, en esencia, de un Estado «privatizado», muy permeable a las presiones del capital, pero aún resistente a la incorporación de las reivindicaciones de los sectores populares en sus políticas y en su proceso de toma de decisiones. Con alarmante frecuencia, los movimientos sociales organizados fueron, incluso en el período de redemocratización brasileña, criminalizados, obedeciendo a la lógica represiva de la República Vieja (de principios del siglo XX) de tratar la cuestión social como «asunto policíaco», situación que ahora se repite con el reciente golpe de Estado.

Esas limitaciones y características del sistema político brasileño también se extienden, en alguna medida, a los partidos políticos. De hecho, las agrupaciones políticas brasileñas fueron formadas, en su mayoría, «de arriba hacia abajo» y tienen un bajo grado de inserción orgánica en la sociedad, al igual que un reducido nivel de definición política e ideológica. Se trata, en realidad, de grupos políticos formados para atender, de forma muchas veces inmediatista y segmentada, a intereses específicos de personas o grupos de personas. Hay, por lo tanto, un elevado grado de búsqueda de ventajas personales a través de la política —el llamado «fisiologismo»— en el sistema partidario brasileño. En Brasil, los partidos son, en general, estructuras frágiles, con bajo nivel de enraizamiento social, que buscan su inserción en el aparato del Estado para sobrevivir y lograr la representación de sus intereses inmediatos.

* Gleisi Hoffmann es presidenta nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil.

Tal falta de sedimentación de una estructura partidaria orgánica, bien arraigada en movimientos y clases sociales y con clara identidad política, como la que existe, por ejemplo, en algunos países de Europa, se combina con un Estado que todavía presenta un carácter esencialmente patrimonialista, limitante de la democracia brasileña y de su capacidad de llevar adelante proyectos políticos de largo plazo que den respuesta a los desafíos estratégicos de Brasil.

Sin embargo, el PT constituye una notable excepción de esa regla.

Al contrario de muchos partidos brasileños, que fueron creados por grupos políticos dominantes cuyos intereses ya estaban incrustados en el aparato del Estado, el Partido de los Trabajadores tiene su origen en la lucha específica de la clase obrera por mejores condiciones de vida y en la lucha más amplia de resistencia a la dictadura y por la redemocratización de Brasil, que reunió a diferentes organizaciones políticas y militantes de movimientos sociales, sectores populares de la iglesia y exponentes de la intelectualidad.

En los años setenta del siglo pasado, Brasil vivía una dictadura militar que ejercía un control férreo sobre toda la vida del país. Las fuerzas progresistas que habían apoyado el último gobierno civil de João Goulart (1961-1964) y sus reformas básicas, como la Reforma Agraria, por ejemplo, estaban desarticuladas, en virtud de la dura persecución política ejercida contra ellas. Las organizaciones de izquierda que se habían adherido a la lucha armada, en la cual participó, siendo muy joven, la presidenta Dilma Rousseff, habían sido diezmadas mediante la utilización de métodos que incluían la tortura sistemática, el asesinato y la «desaparición», los cuales también se aplicaban a los militantes de las organizaciones que habían optado por la lucha de masas como estrategia de resistencia pacífica al régimen.

La implacable censura previa se extendía a todos los órganos de prensa y a todas las manifestaciones culturales. Los derechos políticos y civiles estaban suspendidos. Más de dos mil sindicatos de trabajadores habían sufrido intervenciones y sus líderes habían sido sustituidos por burócratas cooptados por el régimen militar, llamados popularmente «pelegos». Además, las legítimas reivindicaciones económicas y políticas de la población eran duramente reprimidas y no disponían de canales adecuados para expresarse.

En el campo político-institucional, había solamente dos partidos. El partido de Alianza Renovadora Nacional (ARENA), soporte político de la dictadura, y un partido de oposición legal consentida, el Movimento Democrático Brasileiro (MDB), más tarde denominado Partido del Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), que, en aquellas duras circunstancias, se constituyó en un gran frente político. Ese frente, aunque marcado por profundas contradicciones y ambigüedades, dio su contribución a la redemocratización del país. Los límites de esa oposición consentida eran, sin embargo, bastante evidentes.

Ya en la segunda mitad de la década de 1970, empero, en el contexto del impacto de la crisis económica internacional desatada por el «choque del petróleo», que comenzó a minar la base social y política de la dictadura, el movimiento estudiantil brasileño inicia sus primeras protestas contra la intervención de la dictadura en las universidades y por la democratización del país.

Casi simultáneamente, el movimiento obrero concentrado en el llamado ABC paulista, formado por municipios del gran São Paulo que albergan la industria más competitiva y moderna del país, empieza a perforar el bloqueo represivo de la dictadura militar y a articular las primeras grandes huelgas operadas ocurridas en aquel período. Esas huelgas, aunque estaban enfocadas en típicas reivindicaciones económicas, como aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo, también tenían un evidente sello político, pues cuestionaban al régimen militar y su carácter represivo y apuntaban a la necesidad de redemocratización del país. En concreto, los trabajadores desafiaban la Ley Antihuelga de la dictadura y levantaban la bandera de la libertad de organización.

En ese contexto emerge el gran liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ese líder sindical personificaba un nuevo sindicalismo, no solo más combativo y politizado, sino también más independiente en relación con el Estado. Se trataba, en realidad, de un movimiento sindical que cuestionaba la arcaica estructura sindical brasileira, heredada de los años cuarenta del siglo XX y parcialmente inspirada en la experiencia del Estado fascista italiano, que usaba a los sindicatos remolcados por el poder como instrumentos de cooptación política.

Ese nuevo sindicalismo, que más tarde desembocaría en la estructuración de la Central Única de los Trabajadores (CUT), tuvo éxito en sus campañas y en la articulación de los intereses de los trabajadores brasileños, principalmente los que estaban vinculados a los sectores más modernos y competitivos de la economía, pero también a los trabajadores del campo, los servidores públicos, los docentes, los trabajadores del transporte y la construcción civil, entre otros. En poco tiempo, Lula y sus compañeros comenzaron a atraer la atención de varias organizaciones políticas de izquierda comprometidas con la lucha contra la dictadura.

Se produjo así una confluencia de intereses entre ese nuevo sindicalismo y algunas organizaciones políticas de izquierda que actuaban en la semiclandestinidad para resistir a la dictadura y, de manera destacada, representantes de movimientos sociales, miembros de pastorales de la Iglesia Católica y de las Comunidades Eclesiales de Base inspiradas en la Teología de la Liberación, intelectuales y líderes estudiantiles.

La convergencia de ese conjunto de fuerzas sindicales, sociales y políticas, que luchaban contra el régimen opresor de entonces y por la democracia, resultó finalmente en la fundación, en 1980, del Partido de los Trabajadores. Sin lugar a dudas, ese fue un acto de extrema osadía: fundar un nuevo partido de izquierda, todavía en plena dictadura militar, para defender los intereses de los trabajadores y luchar por la democratización del país.

Muchos analistas consideraron, en el momento, que esa iniciativa inédita y sorprendente representaba una división de las fuerzas de oposición y estaba destinada al fracaso. Sin embargo, con esa iniciativa histórica los fundadores del PT trataban, mediante a la creación de esa nueva fuerza política, de darle a Brasil un partido político diferente, libre de los vicios patrimonialistas del régimen político y partidario brasileño y estrechamente vinculado a los nuevos sindicatos y a los movimientos sociales del país. En suma, se trataba de crear un partido «de abajo hacia arriba», que se nutriese de la praxis concreta de las luchas sindicales y sociales.

Esa marca fundamental y originaria del PT produjo algunas características básicas que se mantuvieron con el tiempo.

La primera atañe a la pluralidad. En efecto, el PT acogió a distintas organizaciones y tendencias político-ideológicas, que con el tiempo terminaron

considerándolo su partido estratégico, al igual que los diversos intereses de sindicatos y movimientos sociales. Inicialmente, ese conjunto de fuerzas tenía como denominador común la lucha contra la dictadura y una plataforma democrática (las elecciones libres y directas, la convocatoria a una asamblea constituyente, el fin de la represión política y de la censura, la libertad de organización de los trabajadores y la reconstrucción del Estado de derecho democrático).

Paralelamente, las luchas sindicales y populares y los nuevos movimientos sociales siempre fueron una dimensión fundamental del nuevo proyecto partidario, especialmente en un país que arrastraba uno de los peores patrones de distribución de renta de toda la economía internacional. En un período histórico posterior, el denominador común pasó a ser la resistencia a la implantación del neoliberalismo tardío en Brasil.

Esa pluralidad convirtió al PT en un partido de muchos debates, que sedimentaba sus posiciones fundamentales a partir de las discusiones que se daban en sus bases.

La segunda característica concierne al compromiso con la democracia y su profundización. De hecho, la amalgama que unió y estructuró al PT fue justamente la lucha contra la dictadura y por la democratización del país. Por ello, el PT se definió, desde el inicio, como un partido socialista y democrático, que buscaba no solo una democracia institucional, sino una democracia sustantiva que asegurase, a todos los ciudadanos, el pleno disfrute de los derechos políticos, sociales y económicos.

La centralidad de la democracia en los principios del PT lo diferenció de algunos otros partidos de izquierda brasileños, que tenían, en esa época, una visión instrumentalizada de las instituciones democráticas y de las entidades sindicales. Ese compromiso con la democracia se aplicaba también a la vida interna del partido. Vale destacar que el PT siempre eligió sus cuadros de dirección en elecciones en las que participaba su numerosa y aguerrida militancia política. Hace ya algunos años que esas elecciones son realizadas mediante el voto secreto y universal de todos los afiliados y militantes, siempre con respeto al derecho de tendencia y proporcionalidad de las listas de candidatura en la composición de las direcciones partidarias.

La tercera y tal vez la principal característica se relaciona justamente con la profunda vinculación del PT a la praxis de la lucha sindical y de diversos movimientos sociales brasileños. Aunque el PT era un partido de amplias y largas discusiones, dada su pluralidad, era esa praxis la que, en última instancia, dictaba los rumbos del partido. Por eso, el PT nunca tuvo un modelo teórico acabado y definitivo, como otros partidos de izquierda. Las directrices del partido eran elaboradas en un proceso complejo, en el cual la lucha sindical y política de los trabajadores era determinante.

Por eso mismo, el Partido de los Trabajadores siempre fue un partido creativo, capaz de generar respuestas innovadoras ante los desafíos tácticos resultantes de distintos escenarios políticos.

Esa vinculación profunda y orgánica con sindicatos y movimientos sociales convertía al PT en un *rara avis*, en el escenario político y partidario brasileño. Representaba un modo diferente de hacer política, muy distante de la práctica a veces «fisiológica» de los grandes partidos brasileños. A lo largo de su trayectoria, el PT combinó la acción institucional con las luchas sociales en las fábricas y en las calles.

Sin embargo, esa diferenciación del PT, que estaba más vinculada al modo distinto de hacer política que a posicionamientos ideológicos, hizo al partido resistente al establecimiento de alianzas con otros agrupamientos partidarios importantes. Tal resistencia, aunque fuese justificada, limitaba bastante, de antemano, la capacidad del partido de triunfar en las elecciones o de, llegando eventualmente al poder, tener la capacidad de gobernar.

De hecho, la frágil y atomizada estructura partidaria brasileña obliga a los gobernantes del país a practicar lo que se dio en llamar el «presidencialismo de coalición», una composición de fuerzas multipartidaria que asegura, en el Congreso, la mayoría necesaria para dar sustentación política y legislativa al Poder Ejecutivo. Con frecuencia, esas alianzas de ocasión eran concretizadas sobre la base de la satisfacción de intereses inmediatistas en la ocupación del aparato del Estado.

De todos modos, esa resistencia contribuyó a las tres sucesivas derrotas que el PT sufrió en disputas por la Presidencia de la República, a pesar de ser, ya en aquella época, el principal partido de oposición.

No obstante, el colapso del modelo neoliberal en Brasil, que había sido implantado por el presidente Collor de Mello y, especialmente, por el presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), crearon una oportunidad para que el PT finalmente consiguiese aspirar con éxito a la elección al Poder Ejecutivo.

El segundo gobierno de Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), comienza en 1999 con el colapso del ancla cambiaria y la crisis del Plan Real (el plan de combate a la hiperinflación lanzado en 1994). La moneda se devaluó súbitamente, la inflación se aceleró y la economía se enfrió. Brasil, muy fragilizado y con niveles elevados de endeudamiento, se vio obligado a acudir al FMI, que aplicó al país su conocido y ortodoxo recetario recesivo. Las tasas de interés, que ya eran muy elevadas, se aumentaron aún más, lo que agravó la crisis fiscal y los niveles de endeudamiento. Todo el segundo período de gobierno del PSDB fue, así, de crisis, con recesión o bajo crecimiento, aumento del desempleo y de la informalidad y agravamiento general del cuadro social.

Ese escenario negativo fue también agudizado por el llamado «apagón» de 2001. En aquel año, la privatización sin regulación previa y planeamiento, la crónica falta de inversiones en el sector eléctrico, agravada por un período de pocas lluvias, obligaron a todos los consumidores brasileños a cortar su consumo de energía eléctrica en 20%, de un momento a otro, por el serio riesgo de que el país entero se quedase sin energía.

Con eso, la popularidad del gobierno de FHC entró en una fuerte e incontenible espiral descendente. En el terreno político, el fracaso evidente de las políticas neoliberales, que habían prometido la modernización y la mejoría de las condiciones de vida de la población, empezó a crear fracturas en el bloque de apoyo al poder, lo que permitía, en principio, la disputa del centro político por parte de una candidatura de oposición.

De esta manera, en 2002, el colapso del paradigma neoliberal en Brasil, evidenciado por los bajísimos índices de aprobación del gobierno del Partido de la Social Democracia Brasileña y por el claro deterioro de los índices económicos y sociales, inclusive los relativos a la inflación, creaba una oportunidad histórica única para que el PT, el principal partido de oposición, lograra al fin vencer en las elecciones presidenciales y ofrecer al país una alternativa política viable y transformadora.

Para finalmente llegar a la Presidencia de la República, el PT decidió practicar una política de alianzas diferente de las que había empleado hasta entonces, normalmente circunscritas a otros partidos de izquierda. Además del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), la candidatura de Lula pasó a disputar el centro político-ideológico, aliándose con el Partido Liberal, hoy Partido de la República (PR), del gran senador y empresario nacionalista José Alencar, que sería el vicepresidente de la República. Esa alianza con un sector representativo del empresariado brasileño permitió una mayor penetración del PT en segmentos más conservadores de la opinión pública nacional, lo que fue importante para la gran victoria del partido en las elecciones presidenciales de 2002.

Fue también relevante para esa victoria y para esa atracción de un electorado más amplio la actitud del PT de comprometerse públicamente con la «estabilidad monetaria y económica». Ese compromiso público, manifiesto en la «Carta al Pueblo Brasileño», lanzada en julio de 2002, ayudó a neutralizar la gastada «campaña de miedo» que las candidaturas conservadoras siempre hacían contra el PT y sus aliados, argumentando que, de salir victorioso, Lula ahuyentaría a los inversionistas y a los empresarios y hundiría al país en el caos y la recesión. Es irónico observar, en perspectiva, que, en el gobierno de Lula, el país volvió a crecer y los empresarios de todos los sectores económicos obtuvieron grandes ganancias, en un proceso de construcción de un amplio mercado de consumo de masas, en contraste con lo que había sucedido con los gobiernos conservadores que lo precedieron.

«La esperanza venció al miedo» fue el gran lema victorioso de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que llevó, por primera vez, a un obrero a la Presidencia de Brasil.

Posteriormente, Lula y el PT, frente a las vicisitudes del mencionado «presidencialismo de coalición», asumieron la responsabilidad de ampliar su base de sustentación política con otros partidos, para lograr gobernar en un difícil escenario inicial de crisis económica y de extrema fragilidad de la balanza comercial. En su inicio, el gobierno de Lula enfrentó una correlación de fuerzas en el parlamento sumamente desfavorable, sobre todo en el Senado Federal.

Cabe destacar, sin embargo, que desde su inicio el gobierno de Lula estuvo muy comprometido con la implantación de sus revolucionarios proyectos

sociales, y enfrentó una dura oposición parlamentaria conservadora en el Congreso, que intentaba obstinadamente impedir cualquier cambio significativo de las políticas de cuño neoliberal que habían sido acriticamente sedimentadas en los gobiernos anteriores.

Así, el gobierno de Lula, que era minoritario, terminó apoyándose en un amplio espectro partidario, que incluía a los viejos aliados de la izquierda, como el Partido Comunista do Brasil (PCdoB), el Partido Socialista Brasileño (PSB) y el Partido Democrático Laborista (PDT), y los nuevos aliados de centro, especialmente el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), entre otros (aunque con disidencias en su bancada), además del ya mencionado Partido de la República.

El programa de gobierno y su realización

En la campaña presidencial de 2002 se presentó un programa que sirvió de base para el gobierno de Lula. Tal programa se había ido madurando a lo largo de la historia del PT, de las experiencias exitosas de gobiernos locales y del intenso debate de las campañas presidenciales que ya habíamos disputado. El Instituto Ciudadanía del PT cumplió un papel importante en ese proceso de construcción colectiva, al incorporar a intelectuales y militantes de diversas áreas, con más libertad de elaboración que el partido, y directamente coordinado por Lula. Fue en ese contexto que economistas del PT elaboraron un estudio que, desde mi punto de vista, era la síntesis de lo que vendría a ser el programa del gobierno de Lula. El documento se llamó: «Otro Brasil es Posible».

El aspecto central del patrón de desarrollo propuesto en el documento consistía en la elevación de lo social a la condición de eje estructurador del crecimiento económico, por medio de la constitución de un amplio mercado de consumo de masas, con políticas de ingreso e inclusión social. Ese fortalecimiento del consumo popular y del mercado interno generaría una nueva dinámica para el crecimiento acelerado, además de la escala y la productividad necesarias para la disputa del comercio globalizado, mediante el impulso de las exportaciones y la consolidación de la trayectoria de crecimiento sostenido.

El programa de gobierno buscaba articular tres ejes: el social, el democrático

y el nacional. Orientado a promover la inserción internacional soberana de Brasil, propugnaba una ruptura con las políticas neoliberales, que ya mostraban un desgaste profundo en toda América Latina. Esa ruptura incluía cambios estructurales en el país. Una parte de esos cambios pretendía deshacer las trampas dejadas por la agenda neoliberal. Otra parte de los cambios estructurales apuntaba a constituir un nuevo patrón de desarrollo, convirtiendo, como ya dijimos, a lo social en eje estructurador del crecimiento económico. Además, el programa proponía la articulación de tres niveles de políticas públicas: la sustentabilidad ambiental; la regionalización de las políticas de gobierno, con vistas a superar las desigualdades regionales y reconstruir sobre nuevas bases el pacto federativo; y, sobre todo, la inclusión social, con la garantía de los derechos humanos y la promoción de la solidaridad en la ciudadanía.

Así, el programa de gobierno asumía, en síntesis, el compromiso fundamental de impulsar la constitución de un amplio mercado de consumo de masas, que promoviese la inclusión de millones de brasileños, al universalizar las políticas sociales básicas y resolver el drama histórico de la concentración del ingreso y la riqueza.

Sin embargo, la grave fragilidad macroeconómica del país, agravada por la estrategia del miedo impulsada por la candidatura de la continuidad del gobierno del PSDB y las incertidumbres generadas por la eventual victoria de un candidato de perfil popular como Lula, impulsaron un poderoso ataque especulativo financiero contra el real, creciente a lo largo de toda la campaña electoral de 2002. La fuga de capitales aumentaba diariamente, el cambio se devaluaba de forma acelerada, prácticamente no teníamos más reservas cambiarias y la presión inflacionaria amenazaba lo que quedaba de la precaria estabilidad económica. Fue en esa situación y al calor de la campaña que el PT lanzó la «Carta al Pueblo Brasileño».

En la «Carta al Pueblo Brasileño», el compromiso con la estabilidad económica era presentado como innegociable y el régimen de metas inflacionarias, el cambio fluctuante, el superávit primario y el respeto a los contratos fueron claramente incorporados al programa de gobierno. Pero Lula dejaba claro que el «equilibrio fiscal no es un fin, sino un medio». Para el PT, solo el crecimiento podría llevar al país a contar con un equilibrio fiscal

consistente y duradero. Después de afirmar que la estabilidad y el control de las cuentas públicas y de la inflación eran un patrimonio de todos los brasileños y no un asunto exclusivo de las fuerzas políticas que gobernaban el país en aquel momento, pues habían sido obtenidos con una gran carga de sacrificios de los más necesitados, la Carta sentenciaba:

Hay otro camino posible. Es el camino del crecimiento económico con estabilidad y responsabilidad social. Los cambios que sean necesarios se harán democráticamente, dentro de los marcos institucionales.

Vamos a ordenar las cuentas públicas y mantenerlas bajo control. Pero, sobre todo, vamos a hacer un Compromiso por la Producción, por el Empleo y por la Justicia Social.

En el período histórico de predominio del paradigma neoliberal, la importante victoria contra la hiperinflación obtenida mediante el Plan Real no fue suficiente para revertir la creciente fragilidad del país. En efecto, diversos factores — como la lógica de apertura comercial ingenua, el ancla cambiaria prolongada y la vulnerabilidad de las cuentas externas, las privatizaciones y la obsesión con el Estado Mínimo, los impuestos incompatibles con una economía saludable y la fragilidad de las cuentas públicas, el semiestancamiento económico y el desempleo masivo, la opción por una política externa sumisa y la pasividad ante los elevados niveles de concentración de la renta y exclusión social— imponían un escenario que comprometía definitivamente «el dinamismo del mercado interno y el proceso de construcción de un sistema económico nacional» prolongando y profundizando aquello que Celso Furtado llamó la «Construcción Interrumpida».

Sin embargo, la campaña presidencial de Lula, en 2002, aglutinó a las principales fuerzas políticas que opusieron resistencia al neoliberalismo y a la interrupción de la construcción de Brasil. Fue en ese nuevo escenario de aglutinación de las fuerzas de oposición al período neoliberal que consolidamos el compromiso con la reanudación de un nuevo proyecto de desarrollo nacional, el intento de retomar la construcción interrumpida a la que se refería Furtado.

¿Hubo algún éxito en ese sentido? Tenemos la seguridad de que sí.

En efecto, a partir del gobierno de Lula, y hasta la primera parte del gobierno de Dilma Rousseff, Brasil pasó a combinar, de forma inédita:

- Crecimiento económico sustentado, con una tasa media de expansión del PIB que fue (durante el gobierno de Lula) casi el doble de la media histórica de las últimas dos décadas, aparte de la rápida reanudación tras la interrupción momentánea del crecimiento causada por la crisis económica y financiera global;
- Estabilidad económica, con una inflación media dentro de los límites establecidos por el sistema de metas e inferior a la del período de gobierno de FHC, contención del déficit público y reducción de la vulnerabilidad extrema de la economía;
- Distribución del ingreso, con los mejores indicadores de los sesenta años de historia del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), principal instituto brasileño de estadísticas, en los que se destaca la salida de 40 millones de personas de la pobreza, si contamos los dos primeros años del gobierno de Dilma Rousseff;
- Consolidación de la democracia, con respeto íntegro al Estado democrático de derecho, plena libertad de prensa, separación y armonía entre los poderes, creciente transparencia y control social de las instituciones republicanas, y participación social en la elaboración e implantación de las políticas públicas;
- Liderazgo en la agenda ambiental, conquistado por la vanguardia del país en la generación de energías renovables, por la matriz energética relativamente limpia, por la enorme biodiversidad, por la abundancia de recursos naturales estratégicos, como el agua dulce y, sobre todo, por los osados compromisos relativos a la reducción de la deforestación y de las emisiones de los gases de efecto invernadero establecidos recientemente en Copenhague;
- Creciente protagonismo internacional, revelado por la presencia notoria y activa de Brasil en todos los foros mundiales importantes, por la capacidad de articulación de los intereses de los países en desarrollo y por la afirmación activa de los intereses nacionales.

Por todo ello, en el plano externo, muchos respetados intelectuales, incluso de revistas conservadoras de economía, venían hablando, hacía algunos años, del «despegue de Brasil» y de la perspectiva del país de convertirse, pronto, en la quinta economía mundial. A decir verdad, el nuevo e inédito lugar histórico que

Brasil pasó a ocupar a partir del gobierno de Lula era claramente perceptible en el escenario internacional, aunque todavía fuese cuestionado, en el plano interno, por los sectores más conservadores de la sociedad brasileña.

Motivos para tal percepción no faltaban. El gran énfasis del gobierno de Lula, mantenido por el gobierno de Dilma Rousseff, en la atención, en forma masiva, a las poblaciones de bajos ingresos sacó de la pobreza a cerca de 30% de las familias que vivían en esa condición. La pobreza extrema fue prácticamente eliminada y Brasil salió del Mapa del Hambre de la ONU/FAO.

El crecimiento económico acelerado generó alrededor de 20 millones de nuevos empleos con registro formal, casi el cuádruple de los empleos formales generados en el período 1990-2002. La masa salarial creció, en términos reales, 30,7%. El Bolsa Familia y los demás programas de transferencia de ingreso protegían, al final de los gobiernos del PT, a 72 millones de personas, más de 1\3 de la población de Brasil. Y las políticas sociales en su conjunto, que tenían consistencia y centralidad, transfirieron a los más pobres R\$ 33 mil millones por año, un salto extraordinario que contribuyó decisivamente para una fuerte expansión del mercado interno de consumo de masas. También hubo importantes avances en el esfuerzo de universalización de las políticas sociales básicas, fundamentales para el desarrollo social brasileño. Esa exitosa experiencia brasileña en la reducción de las desigualdades, comprobada por varias investigaciones, sirve hoy de referencia a las Naciones Unidas en la lucha contra la pobreza extrema en otras partes del mundo.

El esfuerzo de recuperación de los mecanismos económicos estatales, particularmente los relativos al apoyo al sector productivo nacional, también tuvo un papel importante en el reciente desarrollo brasileño. Petrobras, ícono de la responsabilidad del Estado en la esfera económica, se afirmó como una de las mayores empresas del sector petrolífero a escala mundial y descubrió los mayores campos de petróleo de la historia del país en la capa pre-sal, proyectando a Brasil como potencia petrolera tardía.

La nueva política exterior adoptada a partir del gobierno de Lula contribuyó a aumentar nuestra participación en el comercio mundial y obtener voluminosos superávits comerciales, los cuales fueron fundamentales para la superación de la vulnerabilidad externa de nuestra economía. El país evolucionó de la condición de gran deudor a la de acreedor internacional, con un acumulado de

casi US\$ 380 mil millones en reservas cambiarias, que desempeñaron un papel decisivo en la crisis financiera internacional desatada en 2008. Nos convertimos también, en claro contraste con el período neoliberal, en acreedores del propio FMI. Además, la nueva política externa fortaleció y amplió el MERCOSUR, sentó las bases de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), cambiando el nivel de integración de América del Sur, articuló los intereses de los países en desarrollo en los foros internacionales y aumentó extraordinariamente nuestro protagonismo internacional.

En el área ambiental, se hicieron avances paradigmáticos. En la ya famosa Conferencia de Copenhague, en 2009, todos reconocieron el protagonismo de Brasil al asumir voluntariamente metas ambiciosas de reducción de las emisiones de carbono, en busca de soluciones para el grave problema del calentamiento global. En efecto, nuestro país salió de una posición defensiva en ese tema y pasó a colocarse en la vanguardia de la lucha ambiental entre los países emergentes. Para eso contribuyó mucho la reducción drástica de la deforestación de la Amazonía y el liderazgo internacional del país en la generación de energía limpia. En la Conferencia Rio+20, Brasil volvió a demostrar su firme compromiso con los grandes temas ambientales y su liderazgo en la promoción de una agenda internacional que efectivamente concilie el equilibrio ambiental y el desarrollo económico y social sostenible.

En el segundo gobierno de Lula, después de la consolidación de la estabilidad económica y de los fundamentos macroeconómicos, que sentaron las bases para un crecimiento sostenido, se lanzó el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). Este programa, coordinado con mucha competencia por la ministra de la Casa Civil, Dilma Rousseff, representó la reanudación del planeamiento estratégico del Estado, la coordinación y seguimiento de las inversiones públicas, el mejoramiento de la asociación con el sector privado y la implementación de proyectos estructurales con gran impacto regional. Las obras del Programa de Aceleración del Crecimiento, orientadas a la superación de los cuellos de botella logísticos y de infraestructura del desarrollo sostenible, tuvieron una gran relevancia en el impulso de un nuevo patrón de desarrollo. Además de eso, el PAC, junto a otros programas de incentivo a la producción y la innovación, como el Inovar Auto, por ejemplo, buscaban aumentar las tasas

de inversiones, complementando, de esa forma, el incremento del consumo generado por la dinamización del mercado de consumo de masas.

Téngase en cuenta que todos esos avances se produjeron en un cuadro de reducción de la relación entre la deuda pública y el PIB (de 60% a 34%) y de inflación mantenida bajo un riguroso control, siempre dentro del espacio delimitado por el sistema de metas, no obstante la grave crisis internacional. Es de destacar que la reducción relativa de la deuda pública se obtuvo sin privatización del patrimonio público o la creación de nuevos impuestos. Al contrario, tuvimos una corrección de la tabla de impuesto de la renta, exoneraciones importantes en la crisis y amnistías fiscales.

Además, y este es un punto de gran relevancia, la emergencia de las nuevas políticas se dio en el marco de un intento de fortalecimiento de la democracia brasileña. En efecto, la transparencia administrativa y la independencia de los poderes fueron fortalecidas. No hubo debilitamiento de los poderes Legislativo y Judicial, ni se intentó establecer una relación directa entre el mandatario y el pueblo, característica de las democracias monistas y plebiscitarias vigentes en otros regímenes. Tampoco se intentó buscar una extensión del mandato, no obstante la popularidad del presidente Lula, ya al final de su gobierno, de un increíble 80%.

En síntesis, Brasil aumentó su importancia económica en el escenario poscrisis, al contrario de lo que sucedió con las naciones más desarrolladas. Asumió el liderazgo internacional en energía limpia y en la explotación de la biodiversidad, en un momento en que el desafío de construir una economía verde, con bajo índice de carbono, moviliza a todo el planeta. Avanzó en su papel destacado en la producción de alimentos, en una coyuntura internacional que proyecta un déficit creciente entre la oferta y la demanda de productos agrícolas. Reveló su inmenso potencial de exportador de petróleo y derivados, tras el descubrimiento de los grandes campos petrolíferos del pre-sal. Aumentó su protagonismo internacional, gracias a una política externa osada y creativa. Construyó un importante mercado interno de consumo de masas, con la inclusión social de decenas de millones de familias, y consolidó sus instituciones republicanas y el Estado democrático de derecho.

La constitución de un conjunto consistente de políticas y programas sociales, construido mediante la creación de un sinnúmero de programas innovadores

también destinados a distribuir el ingreso, generar oportunidades y promover la inclusión social (ProUni, ReUni, Economía Solidaria, Luz para Todos, Territorios de la Ciudadanía, Mi Casa Mi Vida, etc.) resultaron en un aumento exponencial de la organicidad, alcance y eficacia de la política social del Estado brasileño.

De esta manera, en los gobiernos del PT las políticas de distribución del ingreso y de inclusión social cobran una centralidad antes completamente inexistente. La visión anterior, según la cual los problemas sociales serían resueltos esencialmente por el crecimiento económico y por el mercado de trabajo, complementados marginalmente por políticas de carácter compensatorio y por la inversión aislada en la universalización de la educación, es sustituida por una acción sistemática y enfática en la eliminación del ya referido bloqueo del proceso de habilitación.

La transferencia masiva y condicionada de ingresos, el acceso al crédito para el consumo y la producción y a la tierra, la sistemática y sustantiva ampliación del poder de compra del salario mínimo, el acceso facilitado a la vivienda popular, la inversión en servicios públicos destinados a los sectores populares, como Luz para Todos, la ampliación de las oportunidades en el área educativa, además de muchas otras vertientes de la política social, contribuyeron decisivamente a la fuerte dinamización del mercado interno de consumo de masa, verificada en los gobiernos de Lula y Dilma, que jugó un papel decisivo en el apalancamiento de la demanda agregada y en el impulso al crecimiento económico.

Esa fuerte dinamización del mercado interno, construida por una amplia y consistente política social, representa una singularidad histórica en el proceso de desarrollo de Brasil. De hecho, a partir del gobierno de Lula, el crecimiento económico está acompañado de un sustantivo, consciente, sistemático y exitoso esfuerzo de redistribución del ingreso, incorporación de los excluidos al mercado de consumo y ampliación de las oportunidades para los segmentos más pobres de la sociedad. En realidad, fue ese gran esfuerzo el que dio forma, sustancia y consistencia al crecimiento económico reciente al que se asistió en aquel período.

El pre-sal y la inversión en educación

En el contexto de esa nueva era de desarrollo, las inversiones en investigación y desarrollo de Petrobras fueron recompensados de forma extraordinaria por el descubrimiento del pre-sal. Tales hechos indican que esa capa profunda contiene cerca de 176 mil millones de barriles recuperables. Inexorablemente, Brasil se convertirá en potencia petrolera tardía, en un mundo que todavía dependerá del petróleo por mucho tiempo, pues, a pesar de las recientes inversiones en energías alternativas, la matriz energética mundial aún es dependiente de los hidrocarburos en aproximadamente 65%.

Es evidente la importancia estratégica de ese gran descubrimiento de petróleo en el subsuelo marino. Este es importante no solo para Brasil, sino también para la economía mundial y, en especial, para los países importadores de petróleo.

Ante tal hecho, los gobiernos del PT introdujeron un nuevo marco para las nuevas áreas, con regímenes exploratorios basados en repartos. La diferencia no es banal. Implica una opción estratégica de profundas consecuencias. En el régimen de concesiones, el petróleo, una vez comenzado el proceso de extracción del subsuelo, pasa a pertenecer a la empresa concesionaria. En el régimen de reparto, la Unión mantiene la propiedad de las reservas y del petróleo. En este caso, el Estado tiene una flexibilidad mucho mayor para planear y efectuar las inversiones que considere prioritarias al desarrollo sostenido, así como para establecer el ritmo de la explotación, observados los límites técnicos para ello.

El nuevo marco regulatorio establecía también que Petrobras sería la gran operadora del pre-sal, lo que nos permitiría enfrentar los desafíos relativos al aumento de nuestra capacidad de refinación, fundamental para el equilibrio de la balanza comercial brasileña de hidrocarburos, y del proceso de sustitución de importación de equipos destinados a la producción de petróleo, como las caras y sofisticadas plataformas marítimas, así como de las inversiones en gasoductos y en la producción de las áreas del post-sal.

Hay que considerar que las inversiones que Petrobras venía haciendo para viabilizar el pre-sal (plataformas, buques, nuevos puertos, gasoductos, etc.)

tenían un enorme impacto positivo en la industria nacional, especialmente en la naval, así como en la generación de tecnología de punta en varias áreas.

Además de eso, los gobiernos del PT adoptaron la decisión histórica de canalizar 75% de los *royalties* de esa riqueza para financiar la educación y 25% para hacer frente a los gastos de salud de su población.

Los gobiernos de Lula y Dilma hicieron esfuerzos extraordinarios en el sentido de expandir la educación tecnológica y la educación superior. En efecto, el legado de los gobiernos de Lula y Dilma en la educación profesional y tecnológica es impresionante.

Mientras el gobierno de FHC terciarizó el sector, pasando a manos de estados, municipios, empresas y organizaciones no gubernamentales la expansión de la oferta de educación profesional e inviabilizando la expansión de la oferta, los gobiernos de Lula y Dilma hicieron en trece años lo que los demás gobiernos no fueron capaces de hacer entre 1909 —cuando se crearon las primeras escuelas técnicas en nuestro país— y 2002.

La red federal de educación pública experimentó la mayor expansión de su historia. De 1909 a 2002, fueron construidas tan solo 140 escuelas técnicas en el país. Entre 2003 y 2016, Lula y Dilma concretaron la construcción de más de 500 nuevas unidades, totalizando 644 campus en funcionamiento. Son 38 Institutos Federales presentes en todos los estados, ofreciendo cursos de calificación, educación secundaria integrada, cursos superiores de tecnología y profesorado.

Además de la creación y expansión de la Red Federal de Educación Profesional, Científica y Tecnológica, otras iniciativas contribuyeron a la ampliación de la oferta, en especial el Programa Nacional de Acceso a la Educación Técnica y el Empleo (PRONATEC), el mayor programa de educación profesional y técnica de la historia de Brasil.

Pero la gran revolución se produjo en la educación superior. A partir de los gobiernos de Lula y Dilma, la universidad dejó de ser un espacio reservado a las élites y pasó a ser ocupada por los hijos e hijas de agricultores, empleadas domésticas y trabajadores de la construcción civil. Los hijos del albañil y la empleada doméstica tuvieron la oportunidad de convertirse en doctores. A partir de 2003, lo que antes era visto como gasto pasó a verse como inversión.

Esas características y singularidades del reciente proceso de desarrollo brasileño ocurrido en los gobiernos del PT, aquí expuestas de forma muy sucinta, nos permiten hablar de un proceso de desarrollo que, si bien no representó una total ruptura política con el antiguo sistema de representación y con los presupuestos macroeconómicos del tipo de intereses, cambio y generación de superávits primarios, contribuyó a generar un nuevo país, mucho más justo, igualitario y soberano que el antiguo.

Crisis, golpe y retroceso

La oposición al gobierno de Dilma no reconoció la victoria legítima de 2014 y pasó a actuar de todas las formas, junto con los medios partidarizados y el gran capital, para desestabilizar el segundo mandato de la presidenta. El propio candidato derrotado prometió, en un discurso en el Parlamento, impedirle a la presidenta gobernar, lo cual de hecho se hizo.

Así, enseguida después de las elecciones de 2014, ante la necesidad de alteración de la meta fiscal, la oposición al gobierno de Dilma empezó a hablar de «*impeachment*» y de crimen de responsabilidad relativo a las cuestiones fiscales. La oposición y los medios hegemónicos utilizaron ese momento para desconstruir todos los resultados de los períodos anteriores, ya sea en términos de crecimiento, de distribución de renta e incluso de sostenibilidad fiscal. Y se inicia un largo período de fuerte inestabilidad política, potenciado en 2015, con la elección de Eduardo Cunha para presidir la Cámara de Diputados. En esa cámara, fueron aprobados los famosos «pautas bomba», que aumentaban el gasto público sin criterio, y rechazadas medidas importantes, que podrían haber aliviado la crisis que se iniciaba.

Cabe señalar que los programas económicos, especialmente los llamados ajustes fiscales, necesitan estabilidad política para producir resultados. Ningún programa económico, aunque sea consistente, puede funcionar en un ambiente político de extrema inestabilidad y baja gobernabilidad, como el que vivió la presidenta Dilma en su segundo mandato.

Como agravante, a partir de 2014 comienza la llamada Operación Lava Jato, una operación policial y judicial inicialmente dedicada a investigar desvíos en Petrobras a favor de altos funcionarios y proveedores, pero que muy pronto se transformó en una operación político-partidaria, impulsada por la Red Globo de

Televisión y todos los medios anti-petistas. Además de criminalizar, ante la opinión pública, al gobierno del PT, la Lava Jato dismanteló las cadenas productivas del sector del petróleo y gas, la industria naval, la construcción pesada y la exportación de servicios, fundamentales para la economía el país.

Otro factor de la crisis fue la caída brutal de los precios de las *commodities* —sobre todo del petróleo y del mineral de hierro—, que redujo la ganancia de las empresas y los depósitos del gobierno, contribuyendo aún más a la depreciación de nuestra moneda. En enero de 2016, los precios de esas *commodities* correspondían a casi la mitad de los de 2009, y eran hasta cuatro y cinco veces menores que los valores alcanzados en el período de 2011 a 2013.

El cambio de la política monetaria de los Estados Unidos también afectó el ambiente económico. Ese cambio acentuó la devaluación cambiaria y afectó las perspectivas de crecimiento de la economía mundial. El hecho de que los Estados Unidos volvieran a elevar las tasas de interés, después de años de tasas bajas, contribuyó de forma decisiva a la devaluación cambiaria, con efectos inflacionarios, y a la desaceleración económica en el corto plazo.

Se sumó a eso la desaceleración de la economía china, que pasa por un momento de agotamiento de su patrón de crecimiento, y aún no ha logrado establecer una nueva dinámica. El escenario de tasas superiores a 10% quedó atrás, haciendo cada vez más clara la imposibilidad de que se restablezcan, a corto plazo, las tasas superiores a 7% de crecimiento.

Además, Brasil sufrió la mayor sequía de los últimos 80 años. La reducción del régimen de lluvias en el Sudeste y el Nordeste aumentó el costo de la generación de energía eléctrica, debido a la necesidad de mantener interconectadas prácticamente todas las termoeléctricas brasileñas.

Frente a la necesidad de reequilibrio fiscal, el gobierno no pudo seguir absorbiendo, a partir de 2015, la mayor parte del costo de la generación de energía eléctrica, como lo venía haciendo. Esto, naturalmente, resultó en un reajuste de las tarifas de energía. Al igual que ocurrió con la modificación de la tasa de cambio, este reajuste generó un efecto restrictivo e inflacionario en el corto plazo.

Finalmente, no se puede dejar de hablar de la fuerte contracción fiscal realizada en 2015. El Gobierno Federal, buscando conquistar la gobernabilidad

fuertemente amenazada por el cuadro político profundamente deteriorado, realizó, a lo largo de todo el año 2015, una gestión fiscal ortodoxa y de austeridad, al promover la mayor contención de gastos discrecionales (R\$ 79,5 mil millones) desde la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Ante ese escenario, en julio, el gobierno envió la propuesta de cambio de meta al Congreso Nacional, reduciendo el superávit del sector público consolidado de R\$ 66,3 mil millones a R\$ 8,7 mil millones. En octubre, el gobierno envió otra revisión de esta propuesta, reduciendo aún más la proyección del superávit, debido a la insuficiencia de la reducción, derivada básicamente a los cambios en los parámetros económicos estimados, tanto por el gobierno como por el mercado.

Fue ese intento de flexibilizar la meta fiscal, en un escenario de total incapacidad de revertir el resultado fiscal por medio de más recortes, que acabó siendo utilizado como pretexto para el golpe del *impeachment*.

Desde las manifestaciones de junio de 2013, la oposición al PT y sus aliados de la prensa en sectores del Estado y del sistema judicial venían diseminando una campaña de odio al partido y de descalificación de la política. En la contienda electoral de 2014, esa campaña creció de forma organizada en las redes sociales (donde eran demonizados los nordestinos y los pobres) y de manera sistemática en los periódicos, revistas, radio y televisión. Esa campaña de odio fue canalizada contra la presidenta desde el mismo instante en que se confirmó su reelección.

De ese modo, extraoficialmente, se inició, en octubre de 2014, la tercera vuelta electoral: una campaña destinada a derribar un proyecto de gobierno popular, que fue capaz de promover una gran transformación social, reconocida internacionalmente como una de las mayores revoluciones sociales pacíficas de las últimas décadas en el mundo.

Se cuestionó, de forma inédita y ridícula, un sistema de votación seguro y moderno, elogiado en el mundo entero y motivo de orgullo para Brasil. Más tarde, el PSDB intentó además impedir la asunción de Dilma Rousseff, minutos antes de la ceremonia oficial, sobre la base del cuestionamiento de los gastos de campaña, que ya habían sido aprobados por la Justicia Electoral.

La crisis fiscal, que se habría podido enfrentar con apoyo del congreso en su inicio, se convirtió en el terreno de una batalla política y de comunicación.

Todas las iniciativas para recuperar las cuentas fueron saboteadas por el Congreso dominado por los golpistas y sus aliados, mientras el PSDB alimentaba *la* campaña por el *impeachment*.

Una conjugación que incluyó al Tribunal de Cuentas de la Unión, parte del Ministerio Público y hasta jueces de las cortes superiores cambiaron las reglas de análisis de cuentas para acusar a la presidenta Dilma de utilizar fondos del presupuesto de forma ilegal en 2014 y 2015, los llamados «pedaleos fiscales» ignorando que esas mismas prácticas habían sido válidas hasta entonces. Sobre esa base, abogados contratados por el PSDB presentaron en la Cámara un inédito pedido de *impeachment* sin crimen de responsabilidad.

Eduardo Cunha, poderoso presidente de la Cámara de Diputados, fue uno de los artífices del golpe. Usó su influencia para generar un clima de *impeachment* dentro del Congreso, meses antes de hacer avanzar el proceso de impedimento de Dilma en una mezcla de desesperación y venganza, después que diputados petistas anunciaran su voto contra él en el Consejo de Ética, donde se tramitaba el proceso de suspensión de su cargo.

La primera defensa de la presidenta, reunida en más de mil páginas, mostraba que el gobierno no había cometido irregularidades ni violado la Ley de Responsabilidad Fiscal y la Ley Presupuestaria Anual. También demostraba que los «pedaleos» eran prácticas comunes en la administración pública, ejercidas inclusive en gobiernos anteriores. Lo que había cambiado, de forma oportunista, era la interpretación del tribunal.

Mientras Eduardo Cunha entretejía acuerdos con la oposición para iniciar un proceso en el momento más oportuno, Michel Temer marchaba de la vicepresidencia a la traición. Primero renunció a la función de coordinador con el Congreso, después publicó una carta con críticas a Dilma, hasta lanzar un programa de gobierno neoliberal y diametralmente opuesto al que había sido aprobado por las urnas.

El día 2 de diciembre de 2015, horas después que tres integrantes del PT en el Consejo de Ética votaran a favor de abrir un proceso contra Cunha, el Presidente de la Cámara, usando una prerrogativa exclusiva del cargo, determinó la apertura del proceso de *impeachment*, dejando claro que se trataba de un acto de venganza.

Estimuladas por la televisión, se realizaron marchas a favor del *impeachment* en fines de semana los meses de marzo y abril. El día 17 de abril de 2016, el mundo asistió, perplejo, a una votación patética donde las señoras y señores diputados federales pro-*impeachment* explicaban sus votos haciendo dedicatorias a sus familias con motivos de aniversarios, nacimientos, fallecimientos, de contenido moral y de fundamento religioso, incluida una apología a la tortura y una invocación a un torturador.

Así, el golpe quedó con un serio problema mundial de imagen. Y le tocó al Senado, en la votación final del *impeachment*, intentar darle una apariencia de normalidad al golpe, alegando obediencia a los ritos procesales, pero igualmente sin conseguir señalar un crimen de responsabilidad de Dilma Rousseff. El 31 de agosto de 2016, por 61 votos contra 20, el Senado consumó el golpe del *impeachment*.

Un año y medio después de la expulsión definitiva de la presidenta inocente por el Senado, al mando de una pandilla dirigida por Eduardo Cunha y Michel Temer, Brasil está en un proceso acelerado de destrucción en todos los niveles. Nunca se destruyó tanto en tan poco tiempo.

Las primeras víctimas fueron la democracia en el sistema representativo. El golpe continuado, que se inició después de las elecciones de 2014, tuvo como primer blanco el voto popular, base de cualquier democracia y fuente de legitimidad del sistema político representativo.

Esa fragilidad democrática y el secuestro de la política por el «mercado» permiten la destrucción de todos los legados sociales de Brasil. En efecto, el golpe no busca solo destruir el legado social específico del PT, sino también el legado social de la Constitución Ciudadana, que instituyó el Estado de Bienestar brasileño, y hasta el mismo legado social del laborismo, consagrado en la protección de la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT). La Enmienda Constitucional nº 95 impedirá las inversiones públicas en educación, salud y previsión social, haciéndonos retroceder al siglo pasado, en términos de servicios públicos. Combinada con la cruel Reforma Previsional, que inviabilizará las jubilaciones y pensiones de los más pobres, tal enmienda destruirá el Estado de Bienestar creado por la Constitución de 1988 y todo un conjunto de derechos sociales a ella asociados. A su vez, la Reforma Laboral, al «flexibilizar» la protección laboral asegurada en la CLT, nos hace retroceder

a los tiempos de la República Vieja, cuando la «cuestión social» era un mero asunto policíaco.

Todos los programas sociales relevantes están siendo destruidos o fragilizados por el gobierno no electo: Farmacia Popular, Mi Casa Mi Vida, Más Médicos, Ciencia sin Fronteras, Luz para Todos, Bolsa Familia, etc., ninguno escapa a la tijera criminal del austericidio golpista.

Tal destrucción, masiva y persistente, se expresa, entre otros indicadores, en el hecho de que más de un quinto de los hogares de Brasil (15,2 millones) ya no tienen ingresos procedentes del trabajo, formal o informal. Se manifiesta también en el ignominioso retorno de la pobreza y de la desigualdad. Se expresa en el inadmisibles regreso de Brasil al Mapa del Hambre.

Sin embargo, el mayor daño económico lo sufrieron los mecanismos de que disponíamos para apalancar nuestro desarrollo. Así, Petrobras y su política de contenido local, que había recuperado la industria naval y la construcción civil pesada, ahora son vendidas y desmanteladas. Pozos del pre-sal, del post-sal, refinerías, gasoductos y demás son vendidos a precios de remate y las plataformas y embarcaciones que antes generaban empleos en Brasil ahora generan empleos en Holanda y Singapur. El crédito público, particularmente el del BNDES, que fue fundamental para la superación de la crisis de 2009, ahora es asfixiado por un gobierno que no logra contener sus déficits ocasionados por las constantes caídas de las reservas y de la actividad económica.

Con la negativa austericida de retomar las inversiones públicas y con la imposibilidad del retorno de las inversiones privadas nacionales, el golpe recurre a la venta depredadora del patrimonio público al capital internacional y a la destrucción de la soberanía como último recurso para mantenerse e intentar tapar temporalmente sus gigantescos agujeros financieros, cebados por las más altas tasas de interés reales del mundo.

Así, el golpe puso a Brasil en venta. Y por precios en rebaja. Además de la cesión de Petrobras y el pre-sal, están en venta las tierras, la Amazonía y sus vastos recursos estratégicos, las riquezas minerales, puertos, aeropuertos, bancos públicos, la estratégica Eletrobras, una de las mayores empresas de electricidad del mundo y hasta la misma Casa de la Moneda, responsable de la fabricación de nuestro dinero. En el fondo, es la vuelta a un Brasil colonial, que se integrará a las «cadenas productivas globales», como mero productor de

commodities, sin agregación de valor alguna y sin desarrollar ciencia y la tecnología propias.

A ese proceso depredador y miope de desnacionalización de nuestro patrimonio y de nuestra economía, se suma una política externa que, al contrario de la política externa activa y altiva del gobierno anterior, se muestra desvergonzadamente omisa y sumisa. De país cortejado y con amplio protagonismo en todos los foros regionales y globales, con Lula habiéndose convertido en un auténtico líder mundial, nos transformamos en paria de las relaciones internacionales, con Temer siendo ignorado y despreciado donde osa aparecer. De país que afirmaba sus intereses propios en la integración regional, en la geopolítica Sur-Sur y en la articulación de los BRICS, nos convertimos en mero satélite de los intereses de los Estados Unidos y sus aliados.

Nunca Brasil descendió tan bajo a los ojos del mundo.

A pesar de todo ello, el golpe no destruyó, y no destruirá, el mayor activo de Brasil: el pueblo y su inmensa capacidad de luchar. Es el pueblo brasileño que rechaza claramente al gobierno golpista, reprobado por más del 80% en todas las encuestas. Es el pueblo brasileño que manda su mensaje de esperanza al apoyar la vuelta a la democracia y el Estado de derecho, la restauración de la soberanía nacional, la reconquista de los derechos, y exige elecciones libres y democráticas, con la participación de todas las fuerzas políticas. Es el pueblo brasileño que quiere elegir una vez más elegir a Lula presidente, para que Brasil vuelva a ser un país de oportunidades y de justicia social.

El legado del PT y el futuro

Brasil creó, pese a todas las limitaciones políticas y económicas, un ciclo interesante, que supo combinar crecimiento con distribución de ingresos, reducción de la pobreza y ampliación de oportunidades. En efecto, en los años de gobierno del PT, bajo la conducción, en un primer momento, de Lula, el primer obrero que gobierna el país, y, en un segundo momento, de Dilma Rousseff, la primera mujer que comanda la nación, Brasil pasó por grandes y profundos cambios, cambios que se mantuvieron incluso con la crisis, hasta la eclosión del golpe de Estado.

A contramano de lo que ocurrió y ocurre en muchos países industrializados,

Brasil venía pasando por un proceso que combinaba, en una sinergia virtuosa, crecimiento económico, eliminación de la pobreza extrema y rápida reducción de las desigualdades sociales y regionales. Estábamos logrando, en un tiempo histórico muy corto, modificar el perfil estructural de nuestra sociedad y revertir, a pesar de las dificultades creadas por el recrudecimiento de la crisis, el cuadro estagnación que se había instalado en el país desde el inicio de los años ochenta.

Se puede argumentar, está claro, que otros países de América Latina y de Asia también pasaron por procesos semejantes de crecimiento económico con reducción de las desigualdades. Sin embargo, la experiencia de Brasil tenía algunas importantes singularidades que merecen ser destacadas.

En primer lugar, al contrario de lo ocurrido en algunos otros países de América Latina que también pasaron por períodos recientes de distribución de ingresos y reducción de la pobreza, la experiencia social brasileña se dio en el contexto de una política económica que, aunque divergente de la ortodoxia dogmática, mantuvo el equilibrio macroeconómico, el control férreo de la inflación y el estricto respeto a los contratos. No hubo fáciles concesiones. Eliminamos la pobreza extrema y redujimos nuestras históricas desigualdades sociales disminuyendo, al mismo tiempo de modo sustancial, nuestra deuda interna y las tasas de inflación. Construimos elevados superávits comerciales y acumulamos voluminosas reservas, superando, así, la histórica vulnerabilidad externa de nuestra economía. Esa es una diferencia importante, en un escenario mundial de incertidumbres y de agudos cuestionamientos, que tiende a inhibir las inversiones y la reanudación del crecimiento. Sin embargo, esa es probablemente una característica irrepetible, dadas las actuales características de la economía mundial y de la economía brasileña.

En segundo lugar, esa experiencia se desarrollaba en el contexto de un continuo perfeccionamiento de nuestra joven democracia y de sus instituciones republicanas. Al contrario de lo que ocurre en otros países emergentes importantes, Brasil disfrutaba de plenitud democrática, con entera libertad de prensa, separación y equilibrio entre los poderes y creciente fortalecimiento de la transparencia administrativa y de los órganos de control.

En tercer lugar, el desarrollo reciente de Brasil iba de la mano de una creciente integración regional, con repercusiones positivas para nuestros

vecinos y la creación de un ambiente de paz y prosperidad en toda América del Sur. La consolidación y expansión del MERCOSUR, en especial, propició el definitivo vaciamiento de las tensiones con Argentina y el enfrentamiento conjunto de muchos problemas económicos y sociales de la región. Además, a pesar de su gran diversidad étnica y religiosa, Brasil es un país cohesionado y pacífico.

En cuarto lugar, el desarrollo de Brasil en este último decenio venía combinado con la reducción creciente y sustancial de la deforestación de la Amazonía y la disminución significativa de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, Brasil ya tiene una matriz energética bastante limpia y renovable, basada esencialmente en hidroeléctricas, para el suministro de electricidad, y parcialmente en biomasa, particularmente etanol, para el transporte. Así, nuestra gran fuente de emisiones de gases de efecto invernadero provenía de las quemas realizadas para desmontar grandes áreas, especialmente en la región amazónica. Con la creciente y sustancial reducción de esas quemas y con el compromiso internacional voluntario, asumido en la COP-15, de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero entre 36% y 39% hasta 2020, Brasil se convirtió en uno de los países que más contribuye, entre los países emergentes, al combate al calentamiento global. El reciente desarrollo brasileño era, pues, crecientemente sostenible, algo que lo diferenciaba enteramente de otras experiencias de desarrollo. Y Brasil pretendía colocarse en la vanguardia de la economía verde, explotando, de forma sostenible, el enorme potencial de su inmensa biodiversidad.

Todas esas son diferencias importantes, que distinguían el desarrollo reciente de Brasil de las experiencias semejantes de otros países emergentes. Un estudio del *Boston Consulting Group* destaca que el desarrollo reciente de Brasil fue el que tuvo mayor calidad, entre los 150 países objeto de la investigación. El diferencial de Brasil estaba en la calidad de su desarrollo, y no en sus tasas de crecimiento. Por eso, Brasil despertaba curiosidad. Por eso, la experiencia brasileña debe ser estudiada y comprendida.

Pues bien, después de la emergencia de ese nuevo período de desarrollo, quedó patente la posibilidad de ser de izquierda sin perder el horizonte de la democracia y de su necesaria profundización, sobre la base de la universalización de los derechos económicos y sociales. Participamos de una

construcción histórica colectiva que estaba siendo paulatinamente moldeada por nuevas fuerzas políticas, inéditos escenarios internos y externos y demandas sociales seculares; un complejo proceso en curso que lleva, todavía, el distintivo sello personal del liderazgo del presidente Lula y de la presidenta Dilma.

El análisis de ese período histórico se hace aún más necesario en esta coyuntura de agudización de la crisis mundial, en la cual las políticas ortodoxas de austeridad vienen fallando en hacer retomar el crecimiento e inviabilizando el funcionamiento de las democracias.

Así, el legado de los gobiernos del PT, más que ofrecer la memoria de un pasado de grandes realizaciones, puede ofrecer la memoria del futuro de un modelo que extrapole la repetición fracasada del neoliberalismo hegemónico por el capitalismo financiero.

La Argentina de Néstor y Cristina; la restauración conservadora y el futuro en disputa

Jorge Drkos*

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner: 2003-2015

La Argentina que irrumpe en el siglo XXI estuvo marcada por los sucesos de los fatídicos días 19 y 20 diciembre de 2001, en los que estalló el modelo económico, político y social, implementado por la dictadura militar a partir de marzo de 1976 y profundizado en la década de 1990 por los gobiernos civiles posteriores, que sumergió en la pobreza y la indigencia a más del 50% de nuestro pueblo.

Al estallar ese modelo, en el contexto de la represión ordenada por el agonizante gobierno de Fernando de la Rúa, tras la instauración del Estado de sitio 39 personas fueron asesinadas por fuerzas policiales y de seguridad, entre ellas 9 menores de edad, lo que provocó la renuncia del presidente. En los quince días posteriores, tuvimos cinco presidentes, circulaban dieciséis «cuasi monedas», y algunos mandatarios provinciales denunciaban el Pacto Constitutivo de la Nación y querían establecer sus propias relaciones internacionales. Había un país al borde de la disolución. El asesinato de los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, cometido por la policía de la provincia de Buenos Aires en una protesta pública, llevó al presidente interino, Eduardo Duhalde, a adelantar las elecciones presidenciales.

La crisis social y económica también fue la crisis de la política y el sistema representativo en su conjunto. La percepción social era de falta de alternativas y esperanzas, la convicción de que los partidos habían abandonado sus ideales para acordar con los grupos hegemónicos de poder. Un sentimiento de frustración y enojo, justificado por cierto, fundamentaba el descrédito de la política como espacio de transformación y participación popular, ya que lejos

* Jorge D'rkos es Doctor en Medicina, fue ministro plenipotenciario de la cancillería Argentina (2004-2015), senador por Buenos Aires (1995-1999-2003), diputado convencional constituyente en la Reforma de la Constitución de Buenos Aires (1994) y diputado de la Provincia de Buenos Aires (1989-1993). Es secretario de Relaciones Internacionales del Frente Transversal, integrante del Frente para la Victoria / Unidad Ciudadana y secretario ejecutivo adjunto de la COPPPAL.

estaba ella de poder modificar la realidad que había llevado a millones de personas a los márgenes más periféricos de la exclusión.

Es en ese contexto, con la fractura del bloque de poder y tras la renuncia de Carlos Menem a participar del ballottage de la elección presidencial en curso, el 25 de mayo de 2003, con solo 22% de los votos y un desempleo cercano al 27%, que Néstor Kirchner asume la Presidencia de la República. El nuevo mandatario recibió una estructura estatal vaciada casi por completo de significantes y significados. Al Estado lo habían llevado a su mínima expresión: era incapaz de controlar y articular políticas públicas capaces de establecer justicia y equidad social. Esto fue producto de las acciones ejecutadas, en los treinta años anteriores, por gobiernos democráticos que, por incapacidad o complicidad, lo dejaron fundido y despojado de recursos humanos y financieros.

La reconstrucción de los tres poderes del Estado no era una cuestión formal. Restablecer la autoridad presidencial era necesario. Había clara percepción en la sociedad de que los presidentes no podían o no querían representar el interés del conjunto, por presión de sectores y grupos económicos. Quien ocupaba la presidencia no era realmente quién tomaba las decisiones. Esto llevó a un deterioro de la institución presidencial. Lo mismo sucedía con el Poder Legislativo, que por defección, por presión o por corrupción, en vez de votar por lo que era necesario para las mayorías, aprobaba leyes a pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI), leyes de impunidad para los genocidas de la dictadura o leyes de flexibilización laboral para los grandes capitalistas. La mayoría de los legisladores dejaron de representar los intereses populares y contribuían con su conducta al deterioro de la confianza en las instituciones. Por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en connivencia con influyentes funcionarios del Poder Ejecutivo y el silencio cómplice de la mayoría del Congreso, permitió el indulto a los genocidas, que garantizó impunidad a los asesinos y convalidó la destrucción del Estado nacional vía privatizaciones, despojó de cifras millonarias al país y condenó a la miseria a millones de compatriotas.

Néstor Kirchner reconstruyó la credibilidad de la autoridad presidencial. Supo interpretar las demandas y la voluntad popular. Su toma de decisiones y su accionar al frente del Ejecutivo fue rápida. Con firmeza política e independencia

de los poderes fácticos, estableció un vínculo directo de comunicación con el pueblo y dio los primeros pasos para atender las urgencias sociales. La primera acción del gobierno de Kirchner fue resolver un prolongado conflicto docente en la provincia de Entre Ríos, gobernada en ese momento por la Unión Cívica Radical (UCR).

Claves en los inicios de la gestión de Kirchner fueron: el cuestionamiento al accionar de la justicia; la prédica contra el modelo neoliberal; el enfrentamiento al FMI y la desvinculación de sus recetas; y la propuesta de construcción transversal en la política, mediante la convocatoria a los sindicatos, los empresarios y los movimientos sociales. Esta primera construcción, que podríamos denominar «instrumental», no solo era responsabilidad de su gobierno. En su planteo y concepción incluía a distintos actores sociales, económicos y políticos. Recuperar el funcionamiento democrático y mejorar la calidad institucional, no era una cuestión menor.

La segunda construcción fue la del «modelo económico social» de perfil industrialista, distributivo, de acumulación diversificada e inclusión, que significó la contracara de la economía y la transferencia de recursos y riquezas que operó durante el funcionamiento del modelo neoliberal de los años noventa: acumulación contra transferencia.

Las acciones del gobierno estuvieron orientadas a resolver el problema de la pobreza y la indigencia, y a poner en debate la cuestión estructural de fondo que la motiva: la redistribución. La esencia de este combate consistió en transferir, ni más ni menos, ingresos y riquezas de los sectores más ricos a los más pobres, y comenzar a devolverle al Estado su rol de ordenador de las demandas, con la prioridad de recuperar los puestos de trabajo para millones de desocupados.

Comienza así, en la Argentina, un ciclo iniciado por Néstor Kirchner (2003-2007) y continuado por Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), en el que se impulsaron políticas públicas acompañadas de un fuerte consenso social y de las herramientas legales correspondientes. Se recuperó independencia económica, soberanía política y justicia social. Mención especial merece la reivindicación, necesaria e inédita, de los derechos humanos, que permitió reparar las secuelas generadas durante la última dictadura. Bajar el

cuadro del dictador Jorge Videla del edificio del Ejército Argentino tuvo un simbolismo que recordará la historia de nuestro país.

Reordenar la deuda interna y externa, poner límites a los organismos internacionales de financiamiento, tomar decisiones con autonomía y de manera independiente a las recetas impuestas durante décadas, y desarrollar un modelo político y social acorde con las necesidades propias de la nación y las provincias, fueron algunos de los avances de este ciclo. El país se desendeudó, se renegoció la deuda externa y se produjo una quita histórica de casi el 70% del capital. Al finalizar Cristina su mandato, la deuda pública nacional ascendía aproximadamente a U\$221 700 millones, lo que equivalía al 43% del PIB y el 13% en deuda externa. En 2002, era del 166% del PIB y 96% de la deuda, respectivamente.

En materia de justicia y derechos humanos, se removió la Corte Suprema de Justicia y se constituyó otra, y el parlamento, con el eje Memoria, Verdad y Justicia, anuló las leyes de «obediencia debida» y «punto final», y el indulto a los genocidas, lo que permitió reabrir los juicios a los militares responsables de crímenes de lesa humanidad. Fueron condenados, de manera efectiva, 733 imputados por crímenes imprescriptibles y se impulsó el juicio a civiles responsables y cómplices.

Una de las políticas más transformadoras realizadas durante estos años fue la nacionalización de los fondos de los jubilados y pensionados (AFJP). Se recuperó el criterio de aporte y reparto solidario, contra el dogma liberal de ahorro individual, en el que las únicas beneficiadas eran las empresas aseguradoras. Basta recordar las habituales marchas de jubilados los días miércoles frente al Congreso Nacional, que reclamaban inútilmente un aumento de sus pensiones. La jubilación mínima tuvo una subida de 1 500%, en un contexto en el cual aumentaron y mejoraron las prestaciones sanitarias y sociales. Más de dos millones de amas de casa obtuvieron el derecho a la jubilación y, por ley, se fijó un doble aumento anual a jubilados y pensionados. La recuperación de esos recursos fue la plataforma de importantes proyectos sociales, como el PROCREAR (créditos para construcción de viviendas), la Asignación Universal por Hijo (AUH) por trabajador, registrado o no, o incluso desocupado, que resultaron un eficaz paliativo para los sectores más

desprotegidos. Al finalizar el mandato de Cristina Fernández, en 2015, la Argentina contaba con las jubilaciones mejor pagadas de toda la región.

Los trabajadores comenzaron a discutir sueldos y derechos en paritarias libres. Se produjo una mayor tasa de afiliación a los gremios, y una mejoría de los salarios reales y las condiciones de trabajo. Se reformaron las leyes educativas, como la de financiamiento que permitió un aumento progresivo de la inversión total en educación, ciencia y tecnología hasta superar la meta del 6% del PIB. Se puso en marcha el Programa Conectar Igualdad, que distribuyó 5 millones de *netbooks* a estudiantes secundarios para reducir la «brecha digital». Se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y cientos de científicos retornaron al país gracias a un plan de fomento estatal.

Hubo un avance sin precedentes en los últimos cincuenta años en obras públicas y desarrollo energético. Se construyeron 2 677 km de autopistas y 5 486 km de nuevas rutas, que permitieron conectar regionalmente un territorio tan extenso y diverso, y fueron ejecutadas 856 143 soluciones habitacionales (construcción de nuevas viviendas, reparación y ampliación).

Durante los mandatos de Néstor y Cristina se crearon y pusieron en funcionamiento 10 Universidades Nacionales y se construyeron 2 250 escuelas. Los gobiernos anteriores, entre los años 1989 y 1999, habían construido solo 7 escuelas, y entre 2000 y 2002 ninguna. Se crearon el parque temático para difusión del conocimiento científico y tecnológico «Tecnópolis» y el «Centro Cultural Kirchner», inimaginable una década atrás, como tampoco lo eran los dos satélites de comunicaciones puestos en órbita, diseñados y construidos en el país por científicos argentinos.

La política económica, con un tipo de cambio competitivo, posibilitó un crecimiento que rindió rápidos frutos en el desarrollo diversificado de una nueva matriz productiva. Un fuerte impulso a la industria local, la sustitución de importaciones, la exportación de productos con valor agregado, la creación de miles de puestos de trabajo y la redistribución del ingreso, permitieron recuperar y expandir el mercado interno. Por primera vez en la historia de la Argentina, del total exportado en 2010, las *manufacturas de origen industrial* (34%), superaron a las *manufacturas de origen agropecuario* (32%). Los subsidios a los servicios públicos posibilitaron una mayor distribución de la

riqueza sustentada en tres pilares: el aumento del empleo, el alza de los salarios y las políticas fiscales progresivas.

En un proceso que insumió debates a lo largo y ancho del país en foros abiertos y democráticos, se puso fin a una norma vigente desde la dictadura de Videla. Se propuso y se aprobó en el Congreso una ley de carácter antimonopólico, como lo fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, reconocida a nivel internacional. Se derogó la ley que permitía enjuiciar por injurias y calumnias a periodistas. No hubo ningún juicio del Estado contra periodistas. Estas medidas permitieron que se ejerciera una libertad irrestricta de expresión.

Se creó el Sistema de Televisión Abierto Digital con más de 20 canales libres y gratuitos provistos por la plataforma satelital de la empresa estatal ARSAT, se aprobó la Ley de Reforma Política, se democratizó la representación y se fortalecieron los mecanismos de participación e inclusión de las mujeres y los jóvenes, que pueden votar a partir de los 16 años. Se reguló y garantizó pluralidad en la publicidad electoral, además de fijar un techo al aporte privado al financiamiento de las campañas. Se limitó la extranjerización de tierras mediante el establecimiento de un tope a la compra de propiedades por parte de extranjeros, por cuestiones vinculadas a la defensa nacional, y a la protección de la soberanía, la integridad territorial y los recursos naturales estratégicos. Se reconocieron nuevos derechos, como los consagrados en la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Se aprobó una nueva Ley de Migraciones y se estableció el Plan «Patria Grande» para regularizar la situación de millones de inmigrantes latinoamericanos, darle reconocimiento legal al trabajo doméstico y garantizar el salario mínimo, la cobertura sanitaria y la previsional.

Bajaron las tasas de mortalidad infantil y se amplió el Calendario de Vacunación Obligatoria. Se adoptó una Ley de Medicamentos Genéricos y una Ley de Educación Sexual y Procreación Responsable y se estableció la distribución gratuita de medicamentos por el Sistema Público de Salud para el tratamiento del HIV y la diabetes, entre otras patologías.

Se llevaron adelante acciones que permitieron recuperar instrumentos esenciales para las estrategias de desarrollo de la nación, como la estatización

o nacionalización de empresas que habían sido privatizadas en los años noventa. Al cumplirse veinte años de su enajenación, el Congreso sancionó, el 3 de mayo de 2012, la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, que declaró de interés público lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos, propuso crear el Consejo Federal de Hidrocarburos y declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y de Repsol YPF Gas S.A., en manos de capitales extranjeros hasta ese momento. Otros casos emblemáticos fueron la recuperación de la línea aérea de bandera «Aerolíneas Argentinas», el servicio de agua y cloacas, el correo y los ferrocarriles.

En el plano internacional, fue fundamental el rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) concretado en la reunión de mandatarios del continente celebrada en la ciudad de Mar del Plata. La demanda histórica de soberanía sobre las Islas Malvinas y el respaldo recibido a esa causa nos comprometieron, aún más, en el proyecto de impulsar una Patria Grande sin fronteras. La Argentina fue impulsora y protagonista de los procesos de integración, desde reformular el rol del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), hasta promover la constitución de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La sociedad, y en particular los más jóvenes, volvieron a confiar que es posible la transformación mediante la acción política. Fue un logro que se internalizara el concepto de «lo nuestro» en su sentido más amplio: en lo cultural, en lo político, en lo social y en lo económico, sin renunciar al ejercicio colectivo de la memoria.

Se avanzó en la reparación de las secuelas sociales generadas en los noventa, en el reconocimiento y generación de nuevos derechos. Fueron doce años de cambios políticos, sociales, económicos, en los que se recuperó el rol del Estado, se fortaleció el mercado interno, disminuyeron las desigualdades sociales y se resolvió el conflicto social sobre la base del diálogo, con búsqueda de consensos y sin represión. Estas medidas, ayudaron a reconstruir y ordenar el país, pero es justo reconocer, que lo recuperado y reparado fue parte de lo que habíamos perdido en décadas anteriores.

Los conflictos en la gestión

La crisis con el sector agropecuario por la suba de retenciones a la renta extraordinaria en la denominada «resolución 125», la disputa con el grupo de multimedios Clarín, la relación con los sindicatos, la inflación, la inseguridad, la tragedia ferroviaria de «Plaza Once», las dificultades con el Poder Judicial, la muerte del fiscal Nisman, el cepo cambiario, las disputas internas en el gobierno, la definición de las candidaturas electorales, los errores cometidos y los déficit en la gestión, erosionaron la tarea del gobierno e influyeron negativamente en el comportamiento electoral de sectores vinculados al trabajo y a las clases medias, tan proclives a las migraciones políticas.

A continuación se abordarán los asuntos que se consideran más relevantes, sin quitarle valor al resto de situaciones mencionadas aquí, u otras que por cuestiones de espacio no han sido incluidas, y que pudieron tener en mayor o menor medida un impacto en la pérdida de la elección presidencial de octubre del 2015 que desplazó del gobierno al Frente para la Victoria.

Resolución 125: el conflicto agrario

A comienzos del 2008, la crisis económica internacional empezó a manifestarse de distintas maneras. El acceso a créditos internacionales era complicado. La necesidad de divisas para cubrir las demandas internas, afrontar los compromisos de la deuda externa y el vencimiento de los bonos emitidos, hacía necesario gestar nuevos instrumentos para cubrir el déficit. Las hipotecas basuras hicieron que importantes capitales fueran a la búsqueda de otros activos, entre ellos la soja, de la cual la Argentina era, y sigue siendo, el tercer productor mundial. Esta planta oleaginosa, de cuya producción exportamos el 90%, ese año había incrementado su valor en el mercado internacional. Se vio en esos indicadores una oportunidad para aumentar la recaudación fiscal. En marzo de ese año, la presidenta Cristina Fernández presenta la Resolución 125, que intentaba hacer más progresivo el impuesto a las exportaciones. El mecanismo de aplicación establecía que, si el precio aumentaba, los exportadores pagaban más, y si disminuía pagaban menos. De un 35% de retenciones fijas a la exportación de soja, se pasó a un régimen móvil y a cobrar proporcionalmente al aumento en la tonelada. Al aplicar la

resolución, el valor era de U\$500.00; por lo tanto, el impuesto subía al 44%, lo que implicaba, en términos fiscales, un incremento en la recaudación superior a los U\$3 000 millones.

No se establecían segmentaciones o diferencias entre los grandes pools sojeros, los medianos y pequeños productores, lo que constituyó un error. Al tratar a todos los sectores de la misma manera, se produjo una reacción conjunta sin precedentes:

La medida del gobierno [...] generó agrupamientos políticos y gremiales no menos llamativos contra su aplicación, dando lugar al conflicto agrario más importante de la historia argentina. Se había generado en definitiva una lucha de clases inmensa alrededor de la apropiación de las rentas y ganancias extraordinarias generadas por los precios internacionales de la soja, que conmovió a toda la sociedad argentina. Pero sobre la base de la raíz económica del conflicto, relativamente simple, se sumaron una tras otra, capas y capas de confusiones políticas, ideológicas, simbólicas y culturales fruto de lo extraordinario de los agrupamientos generados de uno y otro lado de la protesta, que contribuyeron a ocultar y enredar las verdaderas motivaciones que movilizaban a unos y a otros alrededor de esta lucha.⁶¹

Un inesperado bloque de cuatro entidades rurales de distintos y contradictorios intereses constituyó la «Mesa de Enlace», integrada por la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria, las Confederaciones Rurales Argentinas y COMINAGRO, para oponerse a la medida. Los medios de comunicación (posteriormente abordaremos en particular su accionar) mediante mecanismos de distorsión de la información predispusieron a sectores importantes de la población en contra del gobierno.

El conflicto que dividió al país se extendió durante 127 días e incluyó una huelga de comercialización de granos, cortes de ruta, actos y movilizaciones multitudinarias y cacerolazos, todos ellos alternados con negociaciones que no lograron acercar posiciones entre las partes. Finalmente, el Ejecutivo, con el objeto de descomprimir la situación, decidió enviar al Legislativo un proyecto de ley para que fuesen los legisladores quienes tomaran la decisión de llevar

⁶¹ Juan Manuel Villulla: «Apuntes críticos para el debate sobre el conflicto agrario de 2008», Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (UBA) – CONICET.

adelante este cambio en el sistema impositivo, habilitando a un protagonismo inédito al Congreso, que luego, con el transcurrir de los meses, cambiaría la configuración política de su propio gobierno. En una sesión histórica, la votación terminó empatada, lo que obligó al vicepresidente Julio Cobos a dirimir la situación, quien manifestó: «Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Mi voto es en contra», y con ello selló su alejamiento definitivo del gobierno del cual formaba parte. De esta manera el proyecto que había enviado el Ejecutivo, y que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados, fue rechazado. Al día siguiente, la Presidenta ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08 y la situación impositiva quedó igual que antes.

La confrontación con el agro había dejado de ser un problema meramente económico para transformarse en una disputa por el poder. El enfrentamiento a las corporaciones internacionales y grupos locales que manejan el negocio del complejo sojero, acompañada por la derecha política, la mayoría de los medios de comunicación y sectores urbanos, tuvo dos efectos inmediatos que repercutirían en los próximos años. La primera repercusión política fue la derrota del gobierno por parte de estos grupos: luego de la extensa disputa, el gobierno perdió las elecciones legislativas de 2009 y, con ello, la mayoría en el Congreso. La segunda fue que para millones de argentinos se hizo explícito el impresionante poder político, económico y mediático que este tipo de grupos económicos ostentan.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El conflicto con el Grupo Clarín

Los grupos mediáticos concentrados en la Argentina, tal como sucede en el resto del continente, no ganan elecciones pero ayudan a perderlas. Se han convertido en factores de poder insoslayables, sobre todo a partir de la década de 1990. Han construido, con la complicidad y complacencia de los gobiernos de derecha, verdaderos monopolios de la tergiversación. Desde allí desestabilizan, crean condiciones para gestar los denominados «golpes blandos», configuran una realidad y construyen una subjetividad que termina colonizando a la opinión pública.

Esta manipulación del pensamiento contiene, como uno de sus objetivos centrales, deslegitimar la política y, por ende, las acciones de los gobiernos de izquierda, progresistas o populares que surgieron a partir de 1998 con la elección del comandante Hugo Chávez Frías a la Presidencia de Venezuela. La sugestión y la reiteración de mensajes negativos hacen que estos medios muten la libertad de expresión en libertad de agresión. Somos sociedades en riesgo. Los relatos falsos, las conspiraciones, la construcción de climas de acusación contra los funcionarios, la manifiesta hostilidad, la incentivación del odio y la agresión, y el impulso de confrontaciones, fabrican condiciones para que las víctimas terminen apoyando a sus victimarios. Muy lejos quedó la «verdad», la pluralidad y el disenso. Hoy los medios de comunicación social (MCS) son la censura, actúan para impedir que la verdad se conozca. Ante esta expropiación de la palabra a la que nos fue llevando la concentración de los MCS, se hace necesario que el Estado intervenga, que accione para garantizar la pluralidad de voces, que genere instrumentos legales de control de los monopolios, para que la distribución de la palabra sea también distribución de la riqueza social y cultural.

Néstor Kirchner tuvo con los medios de comunicación una relación contradictoria: por un lado, no avanzó en la modificación de la legislación de la dictadura y se tomaron medidas que favorecieron a esos grupos (se extendieron las licencias de radiodifusión y se autorizó la fusión en el mercado de la televisión por cable entre Cablevisión y Multicanal); y, por otro lado, sus discursos negativos sobre el rol de los medios de comunicación fueron un antecedente central que, después de concluido el conflicto con el campo, decidió a Cristina Fernández de Kirchner a impulsar la reforma de la obsoleta norma.

La norma vigente en el 2009 era un decreto-ley sancionado por la dictadura militar, que el 24 de marzo de 1976 impuso un proyecto de país al servicio de la oligarquía agraria, el poder financiero y las trasnacionales. El régimen utilizó el terror económico, desindustrializó el país, hundió las economías regionales, entregó el patrimonio nacional e implementó el terrorismo de Estado con 30 000 compañeros desaparecidos, miles de exiliados y las organizaciones populares diezmadas. Para llevar a cabo ese proyecto, necesitaba silenciar toda voz que intentara mostrar la realidad. Entre otras medidas, sancionó la

Ley de Radiodifusión y entregó la empresa productora de papel para imprimir diarios (Papel Prensa) a los voceros mediáticos de los grupos de poder.

Con la recuperación de la democracia, en 1983, se impulsan numerosas propuestas para derogar la norma y sancionar una nueva ley, pero las fuertes presiones de los medios oligopólicos impidieron su tratamiento. En marzo de 2009, se presenta un anteproyecto de ley debatido en 24 foros provinciales, más en innumerables encuentros regionales abiertos a la participación, sin ningún tipo de restricciones, en todo el país. Con los aportes recogidos, más las modificaciones sugeridas por la oposición, se aprueba en octubre de ese año la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que garantizaba el derecho a la información y la libertad de expresión, y democratizaba los medios. Esa ley establecía la desmonopolización de los grandes grupos monopólicos y obligaba a realizar una adecuación, con un límite a lo que cada grupo empresarial podía operar en señales de TV abierta, de cable y radios AM y/o FM. En ningún caso, el sector privado en su totalidad podía superar el 33% de las licencias.

El Grupo Clarín, viendo amenazada su posición dominante, hace entrar en acción al «partido judicial» y obtiene una medida cautelar que suspende la aplicación de ese artículo durante tres años. Posteriormente, continúa con argucias jurídicas que contaban con la complicidad de los jueces para estirar los plazos y llegar a las elecciones de 2015, especulando con un triunfo de la oposición para no cumplir con la ley. Ante las trabas legales presentadas, se realizan masivas movilizaciones a las puertas de los tribunales federales, para exigir que se cumpla la norma. En esa tensión y disputa llegó al fin el mandato de Cristina Fernández, sin la adecuación y el cumplimiento de los límites que fijaba la ley aprobada. Al apenas asumir el gobierno, Mauricio Macri, por decreto, termina con la Ley de medios, disuelve la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual creada para aplicarla, y pone en funcionamiento un Ministerio de Comunicación a imagen y semejanza de lo solicitado por el Grupo Clarín y sus amigos de los medios concentrados, como el diario *La Nación*. Centrada la disputa en el artículo de la desmonopolización, quedaron sin profundizar aspectos importantes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como eran y siguen siendo el reconocimiento legal y el llamado a concurso para regularizar la situación de cientos de radios FM

surgidas a partir de la década de 1980, apuntalar el funcionamiento de los canales locales y regionales abiertos desde el 2009 y brindar un mayor apoyo económico a los medios alternativos que hoy son tan necesarios, entre otras cuestiones que quedaron pendientes de resolución.

La tragedia ferroviaria de Plaza Once

El sistema ferroviario argentino, nacionalizado en 1948 por el entonces presidente Juan Domingo Perón, fue privatizado, desmembrado y destruido en los años noventa durante, el gobierno de Carlos Menem. La red ferroviaria operativa, de cubrir una extensión cercana a los 45 000 km., pasó a tener 5 000 km. Solo quedaron funcionando los trenes urbanos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, con un material obsoleto y una antigüedad de 50 años. El ferrocarril generaba desarrollo e integración. El cierre de ramales condenó al aislamiento, a la muerte económica o a la desaparición, a numerosos pueblos que habían progresado y crecido a su paso.

El 22 de febrero de 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández, un tren de pasajeros chocó contra un freno hidráulico al final de su recorrido en la estación de Plaza Once, lo que causó 51 muertos y más de 700 heridos. Esta tragedia fue aprovechada por la derecha, con una extendida y furibunda campaña mediática, para mostrar al gobierno como el culpable, lograr su condena pública e impulsar el proceso judicial que terminara con los responsables políticos detenidos. Las pruebas reunidas permitieron asegurar que el tren embistió los parachoques porque el conductor no accionó el freno. La pericia sobre los mismos demostró que estaban en condiciones. El juicio oral realizado culminó con la culpabilidad del maquinista y otras 20 personas, entre ellos los directivos de los exconcesionarios Trenes de Buenos Aires, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y el que cumplía funciones en ese momento, Juan Pablo Schiavi. Esta fue una señal importante. Demostró que el gobierno no interfería con la justicia y que empresarios o funcionarios no eran protegidos y podían ser juzgados y condenados. En septiembre del 2017, se inició un segundo juicio, contra el exministro Julio De Vido, sobre las responsabilidades políticas, causa que aún se encuentra en trámite, pero forma parte del acoso judicial que realiza la actual administración macrista contra los exfuncionarios kirchneristas.

Las tragedias nos interpelan, nos obligan, a preguntarnos qué hicimos bien o mal, si se podía haber evitado la tragedia o qué podríamos haber hecho. En esa sumatoria de interrogantes y de búsqueda de respuestas, el gobierno abandonó la inercia que traía con el tema y decidió tener un rol más activo en el manejo y control de los ferrocarriles. El Congreso aprobó la creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, el instrumento legal y operativo para la gestión de las líneas interurbanas y el manejo del transporte de cargas. Las empresas adjudicatarias de las privatizaciones nunca realizaron las inversiones comprometidas, lo que motivó que se comenzara a invertir en nuevas vías, trenes de última generación, señalamiento y medidas de seguridad. La renovación y modernización total de los trenes urbanos durante los últimos años de gestión fue bien recibida por los usuarios, pero el daño mediático y político ya había cumplido su objetivo.

La restricción externa y el cepo cambiario

La estructura económica argentina está fuertemente extranjerizada, y depende de una ingente cantidad de insumos importados para funcionar. A medida que la economía crece, aumentan las importaciones, lo que hace imprescindible tener los dólares para pagarlos.

En 2011, para frenar la fuga de capitales y administrar el uso de las reservas, Cristina Fernández adopta lo que fue denominado «cepo cambiario», medida que instrumentaba restricciones para la compra y venta de divisas. Con esto el gobierno buscó cuidar la economía, evitar el endeudamiento, y garantizar la inversión y el abastecimiento en los sectores de la alimentación y la industria, entre otros. Había que sortear el obstáculo de la restricción externa y permitir que maduraran algunos de los proyectos en marcha, como el desarrollo del complejo científico tecnológico INVAP, el desarrollo de Vaca Muerta, primera reserva mundial de petróleo no convencional, y el reemplazo de importaciones por producción nacional, entre otros.

La sociedad argentina ha padecido innumerables crisis económicas, con el derrumbe de su moneda nacional, lo que predispuso históricamente a que los pequeños ahorristas de clase media, comerciantes y/o profesionales, buscaran proteger sus ahorros o capital comprando dólares. Mediante una apelación a la memoria histórica y colectiva de esta sociedad, proclive al atesoramiento en

moneda extranjera, los sectores exportadores y financieros, con la complicidad de los medios de comunicación, generaron un clima desestabilizante, igualando el problema y el comportamiento del pequeño ahorrista con el de los lobbies de las multinacionales, la oligarquía agrícola, y los bancos y financieras que fugan capitales al exterior. Lo cierto es que la escasez de dólares, incrementada por la negativa a vender los cereales de la última cosecha por parte de la oligarquía agraria, fue otro de los motivos que predispuso negativamente a estos sectores sociales contra el gobierno.

El «partido judicial»

Luego de lo sucedido con la Resolución 125, de la confrontación con los grupos mediáticos, y de haber perdido las elecciones legislativas del 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo la capacidad de reinventar su gestión. El gobierno logró recuperar la iniciativa política y recomponerse como proyecto hegemónico. Las principales medidas que contribuyeron a fortalecer una base social activa de apoyo fueron la estatización de los fondos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y, en términos más estrictamente políticos, el debate y las movilizaciones en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de Matrimonio Igualitario. Otro factor a tener en cuenta fue el mejoramiento de la situación económica. Se generaron condiciones que culminaron en 2011 con la reelección de Cristina.

Sin embargo, este amplio respaldo popular no alteró la inaplicabilidad de la Ley de Medios, detenida largamente por las medidas cautelares. Esto produjo, durante el último tramo de la gestión, un deterioro en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Las diferencias se palparon, tanto en las declaraciones públicas, como en medidas concretas. A la larga lista de desencuentros se sumaron una serie de fallos polémicos, entre ellos el que dictaba una medida cautelar a favor de la Sociedad Rural Argentina, que le permitía no pagar las cuotas de la deuda que tenía con el Estado nacional por la compra del Predio Ferial de Palermo, realizada durante la gestión de Carlos Menem.

Símbolo de la oligarquía agropecuaria y ganadera, este edificio es conocido popularmente como «La Rural». Allí se realiza la feria anual agrícola-ganadera.

Es, además, uno de los centros de exposiciones más importantes del país, donde se llevan a cabo exposiciones y eventos de todo tipo. Es un predio de 30 hectáreas, ubicado en una zona de altísimo valor inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires, valuado en 135 millones de dólares, que cuenta con 45 000 metros cubiertos y un estacionamiento subterráneo con capacidad para 1 000 automóviles.

La Presidenta anunció que impulsaría la democratización de la Justicia argentina. Refiriéndose al fallo mencionado, declaró: «[Hay] un divorcio entre la sociedad y la Justicia. Es hora de que cada uno de los poderes del Estado nos hagamos cargo de las cosas que pasan. Nosotros exigimos a todos los poderes del Estado la misma conducta de decoro, independencia, respeto a la voluntad del Parlamento y la voluntad popular». Luego, concluyó con un análisis del Poder Judicial en el país: «Vamos a tener que poner en marcha, y creo que la sociedad lo reclama, y todos deberán entenderlo, una democratización del Poder Judicial, porque es en definitiva el Poder que decide sobre cosas, es el último eslabón en la decisión».

Entre las propuestas más importantes podemos mencionar la Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura, cuyos miembros pasarían a ser elegidos por el voto universal, limitar las medidas cautelares a un plazo máximo de seis meses, con obligación a dictar sentencia sobre la cuestión de fondo, democratizar el ingreso a la carrera judicial mediante concursos públicos. También se planteó que las declaraciones de bienes de los jueces fueran públicas y terminar con el privilegio de que no pagaran impuestos a los altos ingresos, de lo cual estaban eximidos por «ellos mismos». A pesar de ser aprobadas estas reformas en el Congreso, la Corte las declaró inconstitucionales y no pudieron aplicarse. Las reformas estructurales impulsadas generaron resistencias y muchas decisiones quedaron frenadas en los tribunales.

La democracia en la Argentina tiene entre sus deudas pendientes llevar adelante una reforma profunda del Poder Judicial, que sigue respondiendo a intereses corporativos como reconociera el Dr. Eugenio Zaffaroni exjuez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al afirmar que el Poder Judicial está estructurado para darle «seguridad jurídica» a los poderosos en detrimento de las mayorías populares, aquellas para las que la justicia es, en el mejor de los

casos, un milagro. Sin decirlo, está diciendo que esa estructuración no es un «defecto» del sistema, sino una condición necesaria para que este sistema funcione.

La muerte del fiscal Nisman

Otra maniobra para desgastar al gobierno, fue presentar como un asesinato la muerte del fiscal Alberto Nisman, que había sido designado por Néstor Kirchner al frente de la unidad especial para esclarecer el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). La explosión en el edificio ocurrió el 18 de julio de 1994. Pasaron 24 años, un lapso en el que los únicos hechos comprobados son la bomba, los 85 muertos y los 300 heridos. En enero de 2013, la Presidenta anunció que había alcanzado un acuerdo con el gobierno de Irán, que incluía la creación de una Comisión de la Verdad, integrada por juristas internacionales propuestos por cada país, para interrogar en Teherán a los ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol. El Memorandum de Entendimiento fue debatido y aprobado por el Congreso de la Nación sin que nadie cuestionara su legalidad. El Tratado Internacional representaba un avance en una causa trabada desde hacía años por una doble imposibilidad: Irán no extraditaba a sus ciudadanos sospechados, y la Argentina no puede enjuiciar en ausencia.

Para Nisman, esa decisión presidencial desacreditaba sus conjeturas, en las que involucraba directamente al gobierno de Irán como responsable por el atentado a la AMIA. Esa convicción estuvo alimentada durante años por los servicios de inteligencia argentinos. En diciembre del 2014, luego de meses de situaciones conflictivas con las autoridades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Poder Ejecutivo desplaza de su cargo al jefe de Contrainteligencia, Antonio «Jaime» Stiuso. El acuerdo con Irán fue motivo de una de esas controversias.

La SIDE siempre compartió las hipótesis sugeridas por la CIA, el MOSSAD y la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, que conocía previamente las decisiones judiciales que se tomarían. Los correos y cables filtrados por WikiLeaks y publicados en los libros Argenleaks y Politileaks, del periodista Santiago O'Donnell, revelan como Nisman llevaba borradores de resoluciones a esa embajada para ser corregidos hasta conseguir su aprobación, y se

disculpaba cuando no avisaba previamente sobre alguna medida judicial vinculada a la causa AMIA.

En enero de 2015, el Fiscal vuelve sorpresivamente de un viaje de vacaciones que realizaba por Europa con sus hijas y realiza una denuncia penal contra la Presidenta y otros funcionarios por un supuesto pacto secreto detrás del memorándum. Este libelo era endeble jurídicamente y fue rechazado en instancias judiciales. La imputación tuvo enorme repercusión mediática y el Fiscal fue citado por el Congreso Nacional para «ampliar» lo dicho. Esa cita nunca se concretó y Nisman fue encontrado sin vida en su departamento el día previo a su concurrencia.

Nisman entendía que ese intento por interrogar a los sospechosos escondía el objetivo de desvincular a Irán de la causa AMIA, realizar transacciones comerciales con ese país e intercambiar petróleo por granos. Nada de esto se realizó: Argentina nunca compro petróleo iraní, que por su composición química no se puede destilar en nuestro país; el comercio entre ambas naciones no aumentó; nunca hubo una Comisión de la Verdad, ni acción alguna que pudiera favorecer a los sospechosos. Además, no se pidió que se levantaran, ni se levantaron, las órdenes de captura de Interpol contra los acusados y, por último, el acuerdo nunca fue ratificado por Irán y, por lo tanto, nunca entró en vigencia. La acusación fue desestimada en primera instancia por el juez Daniel Rafecas por inexistencia de delito. La Sala II de la Cámara Federal confirmó el fallo argumentando que «el Memorándum, votado por las dos cámaras del Congreso Nacional, puede ser considerado bueno o malo, pero nunca podría constituir un delito».

Durante la investigación de la muerte del Fiscal, quedó claro que no era una pieza más en el ajedrez de Estados Unidos e Israel para el Medio Oriente. A medida que la misma fue avanzando, la figura del Fiscal pasó, de ser impoluta, a formar parte de una trama de intereses económicos y geopolíticos de los cuales él también fue víctima. Sin embargo, en los tramos iniciales, la derecha, con los agentes de inteligencia desplazados, el Poder Judicial y la Embajada de los Estados Unidos, armaron una agresiva campaña y fomento con la complicidad de los medios y la prensa adicta, con movilizaciones acusando al gobierno de Cristina Kirchner de haber instigado su asesinato.

Con el cambio de gobierno en el 2015, la denuncia de Nisman fue reimpulsada por las organizaciones judías vinculadas al gobierno actual. Pidieron la reapertura del Juicio por el Memorandum a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que adaptada a los nuevos aires políticos, vía Cámara de Casación, resolvió reabrir el caso, imputando a la expresidenta Cristina Fernández y al excanciller Héctor Timerman de traición a la patria. Asimismo, dictó prisión preventiva y encarceló al exsecretario Legal de la presidencia, Carlos Zanini, y a los dirigentes Fernando Esteche y Luis Delia. La resolución del juez Claudio Bonadío, como afirma el Dr. Francisco Fuster: «[...] debe evaluarse jurídicamente pese a su indudable motivación política, porque su carencia de fundamentos y el dogmatismo en el que incurre es, no solo una descalificación intrínseca del fallo, sino la mejor prueba de la intencionalidad política de la que se encuentra imbuido». Estamos ante una clara persecución política contra Cristina Fernández, sus funcionarios y dirigentes populares, que cuenta con el apoyo de la derecha norteamericana e israelí, para castigar a aquellos dirigentes que no son permeables a sus políticas.

Por último, en marzo de 2018, la muerte del Fiscal aún se está investigando. Las primeras pericias indicaron que se suicidó. La alianza político-judicial-mediática está tratando de instalar nuevamente la hipótesis del asesinato por parte de un inverosímil comando iraní-venezolano-cubano, pero citando a la primera fiscal del caso, la Dra. Viviana Fein, «no hay ni una sola prueba de que se haya tratado de un homicidio».

Las organizaciones gremiales

En los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, los sindicatos recuperaron salarios e instituciones laborales, y se revirtieron tendencias regresivas como la flexibilización laboral y la tercerización.

El desarrollo del movimiento obrero en la Argentina siempre estuvo vinculado a las transformaciones sociales, políticas y económicas ocurridas en el país. El surgimiento del peronismo, a partir de 1943, con el reconocimiento de derechos laborales postergados y una redistribución inédita hasta entonces de la riqueza, generaron una movilidad y recomposición de fuerzas en la sociedad. Las acciones de Perón en esos primeros años son centrales para que las organizaciones sindicales y el movimiento obrero, casi en su totalidad,

se convirtieran en la «columna vertebral» del movimiento político. Esta definición de «pertenencia» generó una relación no exenta de vaivenes con Kirchner y, posteriormente con Cristina, en la Casa Rosada.

La relación del gobierno con los sindicatos tuvo tres momentos relevantes: del 2003 al 2007, negociación y contención de la conflictividad; a partir del 2007, una incorporación al esquema del poder institucional que llegó hasta el 2011; y el último tramo, que coincide con el fin del mandato de Cristina, de abierta confrontación, con la realización de cinco paros nacionales.

En mayo de 2003, el movimiento obrero estaba dividido en tres sectores: la Confederación General del Trabajo oficial (CGT oficial) conducida por Rodolfo Daer; la Confederación General del Trabajo disidente (CGT disidente) o Movimiento de Trabajadores Argentinos, encabezada por el dirigente camionero Hugo Moyano; y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), liderada por Hugo Yasky.

La unificación de la CGT bajo el liderazgo de Moyano y el acompañamiento que realizó la CTA, permitió que Néstor Kirchner fuera uno de los pocos presidentes que tuvo a toda la dirigencia sindical apoyando su gobierno. Se mantuvo la doble indemnización por despido y, con respecto a la política salarial, continuó el otorgamiento de sumas no remunerativas que, a partir de julio del 2003, se fue fortaleciendo a través de la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, congelado desde el año 1993.

En el 2009, la desocupación se acercaba a un dígito. El reclamo masivo y popular ya no era la creación de puestos de trabajo, sino la mejora del ingreso. La continuidad del proyecto requería de su profundización. El estímulo de la demanda en una economía con altas tasas de desocupados no tiene las mismas lógicas que cuando el índice se reduce al 8%. En la primera situación alcanza con la promoción del empleo; en la segunda se requiere la mejora del salario.⁶²

La plena vigencia de convenciones colectivas de trabajo y la discusión libre en paritarias, permitió que el salario mínimo y vital aumentara el 2,424%. Esto llevó a que el pago del impuesto a ganancias, más conocido como a los

⁶² Carta abierta, noviembre de 2009.

sueldos de altos ingresos, fuera un problema presente en los últimos años de gobierno. Los aumentos salariales y la no actualización del mínimo no imponible, llevaron a que un número creciente de trabajadores pasaran a tributar.

Una de las reivindicaciones puntuales y reiteradas en las medidas de fuerza que llevó adelante la CGT, a esa altura abiertamente en confrontación con el gobierno, fue solicitar que se modificara la norma o actualizar los montos salariales por los que se pagaba. La negativa gubernamental a acceder a este reclamo llevó a que un número importante de trabajadores votara en contra del candidato oficialista en 2015.

Corrupción

El expresidente argentino Dr. Arturo Frondizi (1958-1962), derrocado por un golpe militar, expresó que «las acusaciones de corrupción son el pretexto preferido de la derecha para derribar gobiernos populares». La mafia mediática y el Poder Judicial son los instrumentos utilizados para atacar gobiernos populares en Latinoamérica. En nuestro país, estas denuncias intentaron desprestigiar al gobierno y sembrar dudas sobre sus acciones. Algunos casos de corrupción fueron presentados como elementos estructurales que alcanzaban a todo el gobierno, lo que debilitó su imagen ante la opinión pública. Estos hechos aislados tuvieron una respuesta inmediata. No se protegió a funcionarios y, en las pocas ocasiones que pudieron comprobarse fehacientemente las acusaciones, como fue el caso de Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte o de Felisa Miceli exministra de Economía, fueron separados de sus cargos y condenados posteriormente por la Justicia. Se trató de hechos aislados y circunscriptos. Ningún gobierno está exento de estos hechos. En nuestra gestión la resolución de estos casos fue sin dilaciones, mientras que en los gobiernos de derecha el tema es estructural. Solo basta recordar lo sucedido en la década de 1990 con las privatizaciones, donde los niveles de corrupción fueron obscenos y la apropiación de lo público fue una constante. En la actualidad, los paraísos fiscales son la entraña misma de la corrupción y del delito financiero mundial, como en los *Panamá Papers*, donde aparecen los funcionarios de la actual gestión, incluido el presidente Mauricio Macri.

Lo que menos les interesa a estos sectores es la lucha contra la corrupción. En realidad, lo que pretenden es deslegitimar, difamar y generar rechazo a la política como instrumento de transformación. Las denuncias son la excusa que esconde el verdadero objetivo: destruir la posibilidad de crear una sociedad solidaria, que distribuya la riqueza y genere nuevos derechos. Como expresara Marcelo Koenig: *no existen vacíos explicativos. Cuando no hay una fuerza política que se convierta en polea de transmisión entre los que conducen y las masas, a la realidad siempre la explican los medios masivos de comunicación en función de sus propios intereses.*

La batalla cultural por el «sentido común»

Lo realizado en materia de distribución de la riqueza, ya sea por subsidios en los servicios públicos, la Asignación Universal por Hijo, y el aumento salarial y a las jubilaciones, permitió aumentar el nivel de consumo e impulsó el ascenso social de las clases más postergadas. Estas políticas de redistribución de la riqueza, como dijera el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Lic. Álvaro García Linera, fueron sin «politización social». No fuimos capaces de generar un nuevo sentido común. Esta definición no es discursiva. Tiene que ver con cómo nos ubicamos en el mundo con lo cultural y con lo ideológico. Culmina afirmando que «no hay revolución verdadera sin una revolución cultural». En esta disputa no alcanza con los espasmos democráticos de nuestras sociedades, escrito esto con todo respeto, y sí las asambleas y la elaboración de documentos son importantes, pero con esto solo no alcanza. No hemos construido un andamiaje que permita enfrentar y apropiarnos de lo que la derecha controla. Las universidades, las redes de fundaciones, las ONG, las publicaciones y los medios de comunicación, son los instrumentos con los que construyen cotidianamente «ese» sentido común. La posibilidad de revertirlo está en realizar, en el día a día, un trabajo de concientización, una pelea cuerpo a cuerpo y en todos los frentes para intentar revertirlo. Es necesario recomponer y reconciliarse con la base social para profundizar nuestra lucha por una patria justa, libre y solidaria.

La restauración conservadora

La política es puja de intereses, es debate de ideas, movilización y conflicto. Germán Abdala (1955-1993), diputado nacional peronista y dirigente sindical afirmaba que: *Los poderosos no necesitan la política, porque ya tienen el poder, ya sea a través del dinero, de las armas o las corporaciones. El pueblo sí necesita de la política porque es la única manera que tiene para construir poder y cambiar las cosas.*

La derecha derrotada por una insurrección popular en diciembre del 2001, llega nuevamente al gobierno en 2015. Los responsables de aquel proyecto: la alianza entre la oligarquía rural, los grupos empresarios vinculados a la exportación, la derecha aliada a la Unión Cívica Radical, las multinacionales, las corporaciones mediáticas y el «partido judicial», llevan adelante una nueva etapa de restauración conservadora. La historia de nuestro país enseña que, después de cada ciclo de reformas, llega uno reaccionario. Así fue tras el golpe militar de 1955 que derroca a Juan Domingo Perón, con la dictadura de 1976, con las presidencias de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, para retornar con Mauricio Macri en las elecciones de octubre de 2015, a través del voto popular.

Ejercer la autocrítica no debe llevarnos a poner énfasis en los aspectos negativos exclusivamente y perder de vista lo realizado. El ciclo kirchnerista se inició en la peor crisis económica y social de los últimos cien años, con el país arrasado por políticas que enriquecían a unos pocos y condenaban a la miseria a la mayoría de nuestro pueblo. Néstor y Cristina gobernaron enfrentando corridas bancarias, paros y piquetes patronales, fusilamientos mediáticos, campañas de difamación y operaciones judiciales, a nivel local e internacional. Los combatieron desde todos los frentes, por los aciertos de su gobierno, y por los intentos de modificar la estructura productiva y distributiva del país.

Es momento de análisis crítico y no de autocrítica despiadada. Analizar el escenario pos ballotage 2015, implica tener en cuenta nuestros errores y la eficacia que tuvo en el resultado negativo el bombardeo mediático, que erosionaron la credibilidad en la gestión. En este contexto, fuimos a las elecciones con problemas y divisiones internas, que no pudieron trasladar al plano de las candidaturas la novedad y la ruptura que significó el kirchnerismo en la política nacional. A lo anterior debemos agregar la persecución judicial a

Cristina y el encarcelamiento «arbitrario» de importantes funcionarios de nuestro gobierno, que marcaron los tiempos electorales y la fuerza en los comicios parlamentarios del 2017.

La estrategia del oficialismo es clara: echarle la culpa al gobierno anterior que dejó un país deficitario, quebrado por el populismo y la corrupción. Dice que lo único que se puede hacer es volver al mundo y a la normalidad, aplicar el ideario del modelo neoliberal, destruir al kirchnerismo y tender un puente de gobernabilidad al «peronismo racional», o a los que acepten la gobernabilidad de la nueva época de predominio del mercado por sobre los intereses del país y del pueblo argentino. Fragmentar nuestro espacio político fue y es su tarea principal. Luego de las elecciones del 2011, el Frente Para la Victoria no pudo mantenerse unido: se fue dividiendo en los años siguientes en varios espacios.

Para este fin contaron con aliados propios y ajenos. Algunos de ellos utilizaron un discurso cercano culturalmente al peronismo para generar desconcierto y contradicciones. Estos dirigentes «reniegan públicamente» de las políticas de Macri, pero en aras de una supuesta «gobernabilidad» facilitan el tratamiento legislativo y votan positivamente sus leyes para avanzar en las reformas previsionales, laborales y fiscales que perjudican a trabajadores y jubilados.

El macrismo no es mayoritario, pero sí constituye una minoría intensa ejercida por los actores reales del poder y tiene en claro que la disputa, de ahora al 2019, será por el control del justicialismo. Debemos entender que, en el núcleo duro de todos estos movimientos, está el poder real: los grupos económicos, los medios de comunicación, el Poder Judicial y la Embajada de los Estados Unidos.

Es innegable la importancia del peronismo como fuerza política necesaria para ganar en el futuro. A pesar de los intentos realizados para reemplazarla, ninguno de sus referentes tiene el liderazgo popular de Cristina Fernández de Kirchner. Esta es nuestra fortaleza y nuestra fragilidad. Sin el peronismo unido, no se puede, y sin Cristina tampoco. Su presencia es en punto de referencia ineludible de todo lo que resiste y se opone al gobierno. Desde ese liderazgo y desde lo colectivo habrá que encontrar los contenidos posibles para darle sentido a la unidad que construya la victoria, no sobre los recuerdos del pasado, sino sobre las propuestas de futuro que vuelvan a enamorar y

convencer a las mayorías populares. Construir la transversalidad, interpelar y sumar a otros sectores políticos y sociales, de manera que la suma de las partes sea cualitativa y cuantitativamente diferente y superior a cada una de ellas.

Lo que puede parecer utópico es necesario. Desarrollar acciones que dejen atrás las experiencias de alianzas o frentes electorales transitorios, para avanzar en la construcción de un nuevo instrumento político y social. Es necesario un acuerdo programático de oposición al modelo, suscribir una declaración constitutiva y de principios, sumados a un estatuto que regule el funcionamiento y la democracia interna. Ese acuerdo tiene que garantizar la representación federal y sectorial. Ha de ser capaz de articular organizaciones políticas, sociales y ciudadanos que compartan una concepción y práctica frentista.

Es imprescindible prepararnos para dar la batalla en el terreno de las ideas, porque allí anida el germen de la victoria. La unidad no será la expresión de la voluntad, sino de una correlación de fuerzas que ordene, detrás de un diseño político, ideológico y organizativo, una institucionalidad común a todas las fuerzas que integran y potencian el Frente para la Victoria – Partido Justicialista o Unidad Ciudadana (nombre del frente electoral que llevó a Cristina como candidata a senadora nacional en las recientes elecciones legislativas). Se necesita un frente político-social, amplio y diverso, que resista y luche junto al movimiento obrero organizado. Ese frente constituirá el obstáculo más serio para que el gobierno de Macri desarrolle su política de entrega de la soberanía económica y política.

América Latina y el Caribe, un futuro en disputa

El contexto latinoamericano y caribeño del 2018 es el de una región en disputa. Atravesamos por una etapa de complejidades en la que las fuerzas populares y de izquierda enfrentan, en escenarios no propicios, a los «poderes» que no rinden cuenta de sus acciones, que no participan de elecciones pero definen los modelos de confrontación. Son los que actúan mediática o jurídicamente para derrocar, perseguir y/o encarcelar a los líderes populares.

El tiempo de ascenso de los movimientos populares, propio de la primera década del siglo XXI, viene enfrentando, con aciertos y errores, una

contraofensiva del imperio y las fuerzas de la derecha, que se inició en el 2002 contra el comandante Hugo Chávez, continuó luego con los golpes parlamentarios y cívico-militares que destituyeron a Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay y Dilma Rousseff en Brasil, sin olvidar los intentos fallidos en Ecuador y Bolivia. Estas situaciones afectaron los procesos que se desarrollaban al interior de nuestros países, y operaron en forma negativa en el plano regional, al provocar un deterioro y retroceso en el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC. Los desequilibrios mencionados fueron y son utilizados como insumos por nuestras oligarquías en alianza con los Estados Unidos para hostigar y desestabilizar permanentemente los gobiernos populares. El triunfo de Donald Trump, modificó los términos tradicionales de la globalización y aceleró el acoso y el asedio económico, diplomático y militar contra los gobiernos y las fuerzas progresistas y de izquierda.

En Brasil, la ratificación y ampliación de la condena a Lula por el Tribunal de Segunda Instancia de Porto Alegre es de una gravedad inusitada, y va más allá de la injustificada y grosera intentona de proscribir al expresidente. Están desmantelando los avances alcanzados en materia social, en salud, en educación, en soberanía política y en el relacionamiento internacional. Han congelado el gasto social por 20 años, han arrasado con los derechos de los trabajadores, se intenta terminar con los derechos previsionales y han puesto a disposición de las multinacionales del petróleo y del capital financiero internacional las reservas del PRESAL. Uno de los objetivos centrales del golpe y de impedir la candidatura de Lula, es apropiarse de una de las reservas mundiales más importantes de hidrocarburos, y el otro, inhabilitarlo debido a la posibilidad que tiene de ganar las elecciones de octubre de 2018, recuperar el gobierno de su país y convertirse nuevamente en un actor político global.

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, después de un amañado y sospechoso juicio, está preso. Se convocó una consulta popular que tenía como uno de sus objetivos centrales impedir la reelección presidencial, para que Rafael Correa no pueda volver a ser candidato. Evo Morales enfrenta una campaña de desprestigio, con operaciones mediáticas que intentan desgastar y deslegitimar su figura, como quedó demostrado con las falsas acusaciones que impidieron que en el referéndum de 2016 se aprobara la modificación constitucional destinada a habilitar su nueva postulación como candidato

presidencial. En Argentina, donde están presos exfuncionarios y dirigentes populares sin justificación legal, y donde hay presos por protestar, se vive la persecución a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a toda su familia, con una obsesión y una capciosidad legal que demuestra que solo hay un interés político en las causas.

El desconocimiento del Grupo de Lima al proceso electoral venezolano del próximo 22 de abril, es una «cortesía» de los mandatarios de estos catorce países a la reciente gira del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, que en una rimbombante muestra de hipocresía y doble moral, condena a Venezuela por no respetar la institucionalidad democrática. Lo curioso del caso es que entre los firmantes está el golpista Michel Temer. ¡Qué decir de Juan Orlando Hernández, que en una pirueta jurídica logró su reelección presidencial, algo que la Constitución de Honduras prohibía, en unas elecciones fraudulentas, que hasta la OEA –¡la OEA condenó!–. Ni que hablar del dueño de casa, el peruano Pedro Pablo Kuczynski, que recientemente indultó al exdictador Alberto Fujimori, quien está acusado de corrupción y puede ser destituido por el Congreso. A estas declaraciones se suma la creciente amenaza de agresión militar de los Estados Unidos que, con la ayuda del presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien luego del histórico Acuerdo de Paz con las FARC viene siendo denunciado por poner en riesgo el proceso debido a los constantes incumplimientos y violaciones de lo negociado y aprobado con tanto esfuerzo. A todo ello se suma que el Comando Sur de los Estados Unidos ha reforzado la presencia militar en la Triple Frontera de Brasil-Colombia-Perú y en la de Argentina-Brasil-Paraguay, en un intento de cercar a Venezuela, que pone en riesgo la paz en toda la región.

Nuestros gobiernos han sido descalificados por cuestiones económicas vinculadas a la crisis que vive el sistema capitalista, que han afectado los niveles de crecimiento de nuestros países, y por acusaciones de corrupción que, con falsedades mediáticas, construyen en la opinión pública el veredicto de culpabilidad del acusado. Es la guerra jurídica en su plenitud, el *lawfare*, término anglosajón (law: ley y warfare: guerra), neologismo creado por el profesor Charles J. Dunlap Jr., de la Duke University School of Law estadounidense, que en 2001 lo definió para el Harvard Carr Center, como «el uso de la ley como un arma de guerra». Es la utilización del «partido judicial»

que, articulado con los medios de comunicación, desprestigian, inhabilitan y provocan condenas previas, sin juicio, sin pruebas objetivas, a dirigentes políticos de la oposición. Lo que no pueden lograr con el acompañamiento electoral del pueblo lo consiguen con esta metodología que, entre otras cosas, sirve para derrocar gobiernos y proscribir candidatos.

Es mentira lo que argumentan y, ante lo que está sucediendo, ratificamos una vez más que la derecha latinoamericana en acuerdo con el imperio, decidió no respetar los principios democráticos, manipular la justicia y no respetar la Constitución. El verdadero objetivo de esta ofensiva, como en el caso brasilero o venezolano, sigue siendo el mismo: hacerse del control del petróleo y contrarrestar la presencia creciente de Rusia y China en la región.

Después de una década donde se lograron cambios significativos en economía, política, participación social, redistribución de la riqueza, fortalecimiento del rol del Estado, disminución de las desigualdades, en los países donde perdimos el gobierno hay una reconstrucción agravada de lo ocurrido en las décadas de 1980 y 1990. Las consecuencias económicas, políticas y sociales se dan en un contexto de altos niveles de represión y persecución de nuestros líderes.

Vivimos en democracias adulteradas, donde hay que descolonizar el «sentido común» construido mediáticamente y hacer que la distribución de la riqueza sea con politización social, ya que la revolución cultural es imprescindible. La economía debe estar bajo control de los sectores políticos. La derecha nunca es leal. Los sectores del poder económico nunca van a ser parte de procesos políticos que afecten sus intereses y propongan un orden económico justo y solidario. No podemos dejar en manos de una derecha, que es la corrupción institucionalizada, la bandera de la ética y la moral. Hay que generar nuevos instrumentos de control y transparencia en la gestión, y no separar lo que decimos de lo que hacemos.

Una de las batallas centrales de la etapa se da en los medios de comunicación, y si bien desde el Foro de São Pablo y la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) se vienen desarrollando estrategias conjuntas de articulación y capacitación sobre el rol de los medios y el uso adecuado de las redes sociales, es vital avanzar más rápidamente en consolidar una red de comunicadores continental, generar

intercambios de información, agenda propia, recuperar la iniciativa y contrarrestar el accionar de los grupos monopólicos.

Es fundamental construir un nuevo orden jurídico y constitucional, que elimine resabios conservadores de nuestras Constituciones para darle continuidad a los liderazgos populares, y otorgar rango constitucional a los nuevos derechos conquistados. Hay que terminar con la doble vara en el análisis de las reelecciones. En países del denominado primer mundo un jefe de Estado puede ser reelecto indefinidamente y en nuestras democracias se le cuelga el mote de autoritarios o de querer perpetuarse en el poder.

Las estructuras partidarias o de nuestros movimientos están en conflicto. Forman parte de la disputa para vaciarlos de contenidos y significados. Las diferencias internas o personales no deben ser un instrumento del enemigo para destruir lo que tantos nos cuesta armar. Para proteger a nuestros líderes, el desafío es construir, de manera horizontal y democrática, es aceptar la diferencia, es agotar la discusión en la búsqueda del consenso, porque es allí, en lo colectivo, que se refuerza y potencia el liderazgo.

Debemos estar convencidos que no hay batallas individuales de cada país, de que es necesario recuperar una agenda regional que plasme un nuevo esquema de acción, coordinación e integración de las fuerzas populares y de izquierda.

Son tiempos difíciles, pero lo difícil fortalece nuestra lucha. Ya lo dijo Marx en 1848: nada es para siempre, nada es continuo; más temprano que tarde surgirá una nueva oleada. Ningún imperio es eterno. Ningún pueblo tiene garantizado nada, la única certeza es que las luchas se ganan en unidad.

La unidad en la diversidad, la unidad en la acción son el punto de encuentro. La solidaridad en la lucha y la organización en la resistencia son la tarea del momento. Si podemos construir este camino, podemos afirmar que el futuro está en disputa.

Lugo: ¿progresismo político en el Paraguay?

Roberto Codas*

¿Fue el gobierno de Fernando Lugo una singularidad, una anomalía, o un accidente histórico? Considerando sus compromisos, gestiones y acciones, ¿se lo puede calificar como «progresista»? ¿Tuvo alguna proposición de cambio más significativo para un Paraguay hasta ahora casi siempre gobernado por grupos políticos afines a sus élites oligárquicas? En este breve texto, nos proponemos aproximarnos a entender qué representó el gobierno del ex obispo católico (2008-2012) en la historia reciente del Paraguay.

La condición histórica del Paraguay se refleja principalmente en la vigencia del sistema clientelista, con la hegemonía del Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana, ANR) en el poder desde 1948, incluyendo 34 años de dictadura de Stroessner y 23 de los 28 años de la era actual de democracia liberal. También en el breve período que tuvo el Ejecutivo, de junio de 2012 a agosto de 2013 con la renuncia forzada de Lugo, el principal partido opositor (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) sostuvo las mismas prácticas y esquemas, con lo que la afirmación inicial sobre el sistema clientelista puede confirmarse para ambos partidos «tradicionales».⁶³ Y durante sus más de 200 años de historia independiente, el país tuvo en gran mayoría gobiernos representativos de sus clases dominantes, que se caracterizaron por las disputas entre facciones, especialmente desde la guerra contra la triple alianza (Brasil, Argentina y Uruguay) y casi desaparición del país, en 1870.⁶⁴

* Roberto Codas es un periodista y economista paraguayo, formado en comunicación social en la Universidad de São Paulo, y con curso de doctorado en la New School for Social Research de Nueva York. Su producción reciente incluye el ensayo "Assessing Paraguay's possible futures" (in: Paraguay and Peru, political, social and environmental issues. Nova Science Publishers, New York, USA, 2017); y los análisis mensuales de tendencias sobre Paraguay ("Claves y Tendencias", DESA, Paraguay, www.desa.com.py).

⁶³ El Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana, ANR), con 2,3 millones de afiliados, y el Liberal Radical Auténtico (PLRA) con 1,3 millones de miembros, suman así 60% del padrón electoral paraguayo, dejando para todo el resto de fuerzas políticas organizadas y votos independientes la diferencia. (El 60% constituye el número consolidado de afiliados a los dos grandes partidos, ya que existe casi 30% de afiliaciones múltiples).

⁶⁴ Reseñas de la historia del país, con bases teóricas diferentes, se pueden revisar en las obras de Blas Garay: (<http://es.scribd.com/doc/79211770/Breve-Resumen-de-La-Historia-Del-Paraguay-Blas-Garay-Portal-Guarani>); Efraín Cardoso: http://portalguarani.com/586_efraim_cardozo/1095_breve_historia_del_paraguay_1994_por

Lugo tomó el mando presidencial de este esquema de gobierno, estableció un gabinete mixto en el que las principales autoridades económicas fueron miembros o cercanos al PLRA o de otros signos conservadores, y en el área social los nombrados fueron principalmente de grupos o partidos de izquierda. En sus pocas y parciales definiciones de su propia posición política, Lugo decía que él pretendía estar en el medio del abanico político, utilizando la imagen de que su posición era «*mbytétepe, poncho jurúicha*».⁶⁵

En sus casi cuatro años de gobierno, las modificaciones al esquema de gobierno paraguayo fueron en su mayoría superficiales y muchas veces inconsistentes, y algunas innovaciones vinieron casi siempre como adiciones a los esquemas clientelistas vigentes, no como cambios de fondo.

Legado de Stroessner

El dictador Alfredo Stroessner (1954-1989) instauró el dogma, básico pero eficaz, de «democracia sin comunismo», que combinó con la práctica de la «represión preventiva», con el fin de abortar cualquier intento de oposición más radical en su propia génesis.⁶⁶ A esta aplicación rigurosa de la «doctrina de seguridad nacional» se le agregaba una práctica clientelista amplia, con la estructura del Partido Colorado presente en todo el país a través de sus «seccionales», desde las que se gestionaban los diversos servicios estatales a los miles de miembros del partido oficial.

efraim cardozo.html); Oscar Creydt: (http://portalguarani.com/595_oscar_adalberto_creydt/1250_formacion_historica_de_la_nacion_paraguaya_por_oscar_adalberto_creydt.html) y; Hugo Richer: (<https://www.scribd.com/document/63151388/N%C2%BA-123-Paraguay-fin-de-un-periodo-historico-Hugo-Richer-PortalGuarani>).

Sobre la etapa formativa de la nación paraguaya, sigue siendo referencia el trabajo de Sergio Guerra: *Paraguay: de la independencia a la dominación imperialista. 1811-1870*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana (1991).

⁶⁵ En guaraní, «en el medio, como la boca del poncho», expresión que se utiliza para indicar el centrismo. Aunque la interpretación que se dio, «post facto», es que en realidad Lugo acostumbra manejarse de manera individual, sin darle mayor relevancia a las dinámicas de los grupos o estructuras políticas con las que opera. (<http://osvaldozayas.blogspot.com/2014/10/del-poncho-juru-la-carretilla.html>).

⁶⁶ El régimen de Stroessner realizaba con regularidad todo el ritual de la democracia representativa, con elecciones cada 5 años, un Congreso activo con dominio colorado y una minoría opositora dócil. En la lógica de la «represión preventiva», mantenía vigente el estado de sitio que solamente se suspendía el día de las elecciones presidenciales.

Adicionalmente, las mismas estructuras y un complejo sistema de relaciones personales y grupales servían de «agencia de empleos» informal en las que se lograba acceso a puestos estatales para familiares y amigos de los colorados. Se llegó a la formalización de este esquema, de modo que nadie podía ingresar a la función pública, ni al ejército o a la policía, si no tenía su «afiliación» a la ANR.

La caída de Stroessner no implicó un cambio sustancial de sistema de poder, más bien se le incorporó una «epidermis democrática» al sustrato autoritario.⁶⁷ Luego de casi tres décadas de vigencia de este esquema, la epidermis ha tenido su evolución en algunos aspectos y ámbitos, pero sobre todo el sustrato tiende a ejercer su determinación «en última instancia», como se puede decir específicamente de la unión de grupos y voluntades que se dio para el «jaque mate» a Lugo.

Para ello, se tuvo un sostenido proceso de «construcción del enemigo»⁶⁸ desde el momento en que Lugo ascendió a la presidencia, con la presencia enervante de Hugo Chávez..., y la participación de figuras reconocidas de la izquierda paraguaya en el gabinete del ex obispo católico. Para darle perspectiva histórica a los hechos, se debe considerar que la ocasión anterior en la que hubo presencia de la izquierda en el marco político legal paraguayo fue 52 años antes, en 1946, durante la llamada «primavera democrática».⁶⁹

En aquel momento, la breve apertura política concluyó con una represión contra todas las fuerzas recientemente admitidas al escenario político, seguida de una guerra civil (enero-agosto de 1947), en la que se estima que murieron

⁶⁷ Esta premisa tiene su fundamento en el análisis de Jorge Lara Castro, quien en varios artículos publicados durante una década ha explicado la dinámica y vigencia del estado post stonista. Entre sus escritos, sirven de referencia los siguientes: Jorge Lara Castro (1994). «Problemas de la democracia en el capitalismo atrasado», *Acción*, abril-mayo de 1994, y Jorge Lara Castro (2006): «El límite de la dictadura perfecta», *Acción*, junio de 2006.

⁶⁸ Umberto Eco: *Construir al enemigo*, Lumen, Argentina, 2013. «[...] cuando el enemigo no existe, es preciso construirlo». Así como a Eco en su ensayo citado, a nosotros nos interesa principalmente «el proceso de producción y demonización del enemigo». Eco lo define así: «se construyen como enemigos no tanto a los que son diferentes y que nos amenazan directamente [...] sino a aquellos que alguien tiene interés en representar como amenazadores aunque no nos amenacen directamente, de modo que lo que ponga de relieve su diversidad no sea su carácter de amenaza, sino que sea su diversidad misma la que se convierta en señal de amenaza», op. cit., p. 16.

⁶⁹ «La agenda inconclusa de la primavera democrática», Carlos Gómez Florentín, 2012, (<http://www.ultimahora.com/la-agenda-inconclusa-la-primavera-democratica-n998987.html>).

violentamente unas 30 000 personas entre militares, militantes de partidos y movimientos y víctimas de ocasión.

Se interpreta aquel momento histórico en el continente sudamericano planteando que las masas —trabajadores, campesinos y estudiantes— accedieron a la arena política en el espacio abierto para detener el avance fascista y nazista. Al concluir la guerra, se inició un reacomodamiento en la esfera de influencia de Estados Unidos, con el claro propósito de contener el avance de la Unión Soviética.⁷⁰ En el Paraguay, es claramente aplicable el concepto de los investigadores estadounidenses citados, de que «el compromiso de las élites latinoamericanas (y de las clases medias) con la democracia, en la medida que existía más allá de la pura forma retórica, de ningún modo implicaba la aceptación de una amplia participación popular en el proceso». A nuestro criterio, esa explicación referida al período inmediato a la conclusión de la II Guerra Mundial todavía se ajusta en buena medida a la situación paraguaya actual.

Al final de la década de 1950 e inicio de la siguiente, luego del período de mayor violencia e inestabilidad, finalmente el poder militar y la principal fuerza política, el Partido Colorado, comulgan intereses en el ascenso al poder del general Alfredo Stroessner. Su larga dictadura (1954-1989) marcó y sigue definiendo muchos aspectos de la formación social paraguaya.

Período pos-Stroessner

Una simple secuencia de hechos iniciales en el paso de la dictadura de Stroessner a la democracia liberal sirve de inventario:

- En 1988, se inició una crisis palaciega, entre el general presidente dictador y su consuegro general Andrés Rodríguez, alimentada por

⁷⁰ «El desenlace de la coyuntura de la posguerra en América Latina puede ser explicado principalmente por la continuidad del poder de las clases dominantes, rurales y urbanas, y de los militares. Estos no fueron debilitados, mucho menos, destruidos, por la II Guerra Mundial como en muchas otras partes del mundo. Fueron apenas forzados temporalmente a adoptar una posición defensiva al final de la guerra y después de su conclusión estaban determinados a restaurar el control político y social amenazado por la movilización política de las “clases peligrosas”, la militancia sindical, el avance de la izquierda y, tal vez, por la misma democracia. El compromiso de las élites latinoamericanas (y de las clases medias) con la democracia, en la medida que existía más allá de la pura forma retórica, de ningún modo implicaba la aceptación de una amplia participación popular en el proceso democrático...». Leslie Bethell e Ian Roxborough: *Latin America between the Second World War and the Cold War, 1944-1948*, Cambridge University Press, 1997, p. 19.

contradicciones entre sus intereses comerciales y detonada por la evidencia de que Stroessner priorizaría a su hijo mayor, también militar, para sucederle en el poder.

- Rodríguez articuló la conspiración militar con algún soporte civil colorado, que resultó en el golpe de estado organizado por las principales autoridades militares y del Partido Colorado, excluyendo a los «fieles» a Stroessner pero no a la mayoría de los privilegiados por el poder dictatorial vigente hasta ese momento.
- La resolución del conflicto se dio con la reasignación de propiedades empresariales, inmobiliarias y otras actividades económicas, y una apertura democrática en cuanto al juego electoral, libertad de prensa y corrección de distorsiones en las reglas de mercado.
- En lo formal y fundamental, el gobierno siguió siendo colorado. Al asumir el nuevo gobierno tras el derrocamiento de Stroessner, viendo una imagen del equipo de gobierno del general Rodríguez, se dice que el ex dictador comentó: «ahí solo faltó yo...»⁷¹

El nuevo liderazgo instaurado en y desde el Partido Colorado realizó una reingeniería política en el Paraguay, como parte de su recomposición hegemónica, con iniciativas como la nueva Constitución de 1991, que movió el balance entre poderes dando mayor relevancia al Legislativo. Se aseguró una libertad de expresión que abrió los espacios de opinión pública. En el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) se dio la aprobación de diversas leyes sociales para paliar la pobreza y exclusión, y se inició una apertura hacia ideas «progresistas», incluyendo una cercanía del Paraguay a las nuevas iniciativas integracionistas latinoamericanas.⁷²

Pero la evolución colorada siempre fue compleja, contradictoria, como se puede notar en el análisis publicado en 2006:

⁷¹ Una descripción más completa de la secuencia de gobiernos en este período democrático se puede leer en Roberto Codas: «Assessing Paraguay's Possible Futures», en *Paraguay and Peru: Political, Social and Environmental Issues*, Editor: Karla Santiago, 2017, Nova Science Publishers, New York, p. 161 y ss.

⁷² El momento culminante de esta nueva actitud paraguaya se dio durante la conferencia de Mar del Plata, en que George W. Bush vino a intentar imponer el ALCA. En la ocasión, sorprendió el discurso del presidente Duarte Frutos, tomando posición clara con los países progresistas de la región. El momento histórico está registrado en el documental «Al Carajo», de Martín Granovsky: (https://www.youtube.com/watch?v=mXc_bnGGwK4).

El presidente de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, pertenece a una generación de nuevos líderes populistas progresistas de América Latina, cuyos rasgos son sorprendentes. Su partido, la Asociación Nacional Republicana (el Partido Colorado), es un empeinado «peronismo» rural, capaz de gobernar cueste lo que cueste, incluso al costo de no resolver ningún problema. La diplomacia de Nicanor es una incógnita. Se trata de una nueva política pendular, que ya no oscila entre Brasil y Argentina, los países que permiten o impiden que el país acceda al exterior, sino entre el Mercosur y el ALCA: es decir, entre los gobiernos progresistas del Cono Sur latinoamericano, que paradójicamente bloquean el desarrollo de Paraguay, y el presidente George W. Bush, el «americano malo» del Norte, que sin embargo puede tirar un balón de oxígeno a una sociedad que se está asfixiando.⁷³

El gobierno de Duarte Frutos concluyó con la derrota electoral colorada en 2008 ante la Alianza Patriótica para el Cambio, dando lugar a la primera transición a otro signo político sin violencia en la historia independiente paraguaya, al asumir Fernando Lugo la presidencia del país. Pero en ese tránsito, se fijaron desde las élites económicas y políticas también los límites de maniobra del sistema de poder, sobretodo de la medida en que sería viable «poner a los más humildes como sujetos de política y no meros objetos de ella».⁷⁴

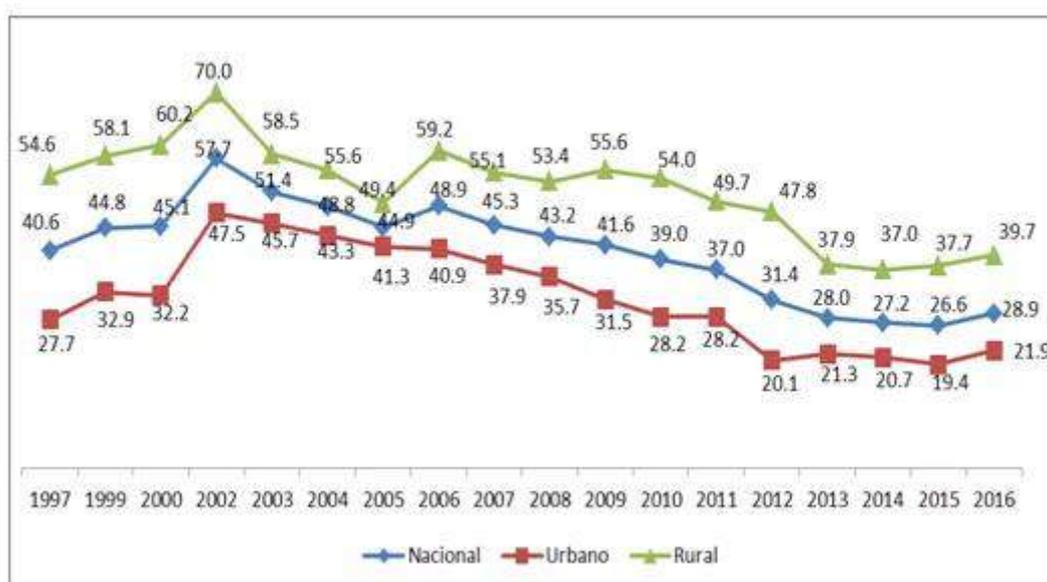
En el gobierno de Lugo, así como en el anterior de Nicanor Duarte Frutos, se produjo una reducción importante en los niveles de pobreza en el Paraguay, principalmente en función de programas de «transferencias monetarias condicionadas» a la población más pobre. Estos esquemas asistenciales, sin embargo, tienen la característica de reducir los niveles de pobreza sin efectuar una transformación en la actividad laboral o productiva de los pobres, generalmente dejándoles en condición de «vulnerabilidad».

⁷³ José Carlos Rodríguez: «Entre el Mercosur y el ALCA», *Nueva Sociedad*, mayo-junio de 2006.

⁷⁴ Aram Aharonian: *El progresismo en su laberinto. Del acceso al gobierno a la toma del poder*, Ediciones Ciccus, Buenos Aires, 2017.

Como se puede ver en el gráfico, el gobierno colorado de Duarte Frutos (2003-2008) tuvo un período inicial de ajuste de las cuentas del país, que había quedado en 2002 en situación de «default selectivo». En su fase media y final, se dio un «énfasis social» que inició la tendencia a la baja del índice de pobreza. En el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012) y en el breve de Federico Franco, luego de la destitución de Lugo (2012-2013), se mantiene el impacto positivo de la gestión social, y se llega a 28% de pobres, 21 puntos menos que el pico del año 2006. Los inicios del gobierno colorado conservador de Horacio Cartes enfatizan los mismos programas sociales, inclusive los amplían, pero los sectores rurales con más población pobre no tienen prioridad y su actividad productiva no logra generar un mínimo de ingresos genuinos, con lo que los niveles de pobreza vuelven a aumentar.

Evolución de la incidencia de la Pobreza Total por Área de Residencia. Periodo 1997-2016



Fuente: Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, Paraguay.⁷⁵

Se puede decir que la política de Lugo fue poco clara en cuanto a la transformación productiva y social, dando señales equívocas, en algunos casos con acento «progresista» y en otros momentos complaciendo a los sectores conservadores, especialmente a los vinculados a la producción primaria, que constituyen el 41% del PIB paraguayo y el 43% de las exportaciones del país.

⁷⁵ DGEEC: Boletín de Pobreza, 2016.

Otro sector fundamental para la reproducción de la economía paraguaya opera fuera de la legalidad y la fiscalidad del país. Se trata de la «economía subterránea», cuyo movimiento y dinamismo marcan claramente el rumbo económico del país. Según un estudio reciente, el tamaño de la «economía subterránea» equivale a casi el 40% del Producto Interno Bruto del Paraguay, estimándose un valor anual de más de US\$ 11 000 millones.⁷⁶

AÑOS	% E.S.	PIB BCP EN MILES DE GS.	E.S. EN MILES DE GS.	PIB OFICIAL EN MILLONES DE US\$	ECONOMÍA SUBTERRÁNEA EN MILLONES DE US\$	TIPO DE CAMBIO
2002	33,5	36.156.212.345	12.112.331.136	6.327	2.119	5.715
2003	30,7	42.324.219.772	12.993.535.470	6.588	2.023	6.424
2004	33,2	47.999.043.590	15.935.682.472	8.060	2.676	5.955
2005	31,0	53.962.326.677	16.728.321.270	8.772	2.719	6.152
2006	32,2	59.996.506.120	19.318.874.971	10.662	3.433	5.627
2007	34,1	69.426.262.230	23.674.355.420	13.838	4.719	5.017
2008	30,7	80.734.753.242	24.785.569.245	18.504	5.681	4.363
2009	38,1	79.117.170.175	30.143.641.837	15.954	6.079	4.959
2010	37,9	94.934.255.214	35.980.082.726	20.028	7.591	4.740
2011	39,0	108.794.640.599	42.429.909.834	26.009	10.143	4.183
2012	40,2	108.832.260.329	43.750.568.652	24.690	9.925	4.408
2013	38,2	125.152.244.904	47.808.157.553	28.915	11.045	4.328
2014 (*)	39,7	137.797.686.415	54.705.681.507	30.657	12.171	4.495
2015 (*)	39,6	144.242.480.897	57.120.022.435	27.803	11.010	5.188

Fuente: Economía subterránea, 2016, p. 48.

⁷⁶ *Economía Subterránea*. Asociación PRO Desarrollo Paraguay, Asunción 2016. El reporte señala que «la Economía Subterránea encierra mucho más que el comercio fronterizo; implica además lavado de dólares, tráfico de drogas prohibidas, piratería, etc.», p.52. Este submundo criminal, con inserción en el poder político del país, tiene vigencia cada vez más evidente en la actualidad, aunque opera hace varios años dominado por organizaciones criminales brasileñas, principalmente el Primer Comando Capital. (<http://epoca.globo.com/brasil/noticia/2017/06/o-violento-plano-de-expansao-no-paraguai-da-maior-faccao-brasileira.html>).

El escenario en el cual debió operar Lugo y sus aliados era, según estos datos, especialmente adverso para iniciar un proceso reformista, así ya lo había experimentado en carne propia su antecesor Duarte Frutos cuando intentó encaminar medidas levemente progresistas. Adicionalmente, la confluencia de los poderes económicos, tanto formales (legales) como subterráneos, permitía anticipar una actitud de resistencia a cualquier intento de abrir la agenda política hacia la izquierda.

Un cronista que fue parte del entorno luguista presenta el siguiente escenario inicial del gobierno Lugo:

Altísimos niveles de corrupción en la administración pública, con mafias de narcotraficantes y contrabandistas —que alquilan jueces y fiscales cuando las circunstancias lo requieren— que financian a ciertos sectores de los partidos políticos tradicionales, en medio de una arrolladora e impune expansión de las multinacionales de los agronegocios a expensas del campesinado pobre y el medio ambiente, fueron los elementos que alfombraron el sendero de bienvenida al gobierno de Fernando Lugo.⁷⁷

Méndez formula algunas ideas de lo que pudo ser la construcción de una hegemonía alternativa en aquel momento de la historia paraguaya:

El ex obispo católico, apenas asumió la responsabilidad gubernamental, debió implementar de inmediato dos tareas fundamentales:

1. Construcción de una alianza más o menos fiable dentro del Congreso que le permitiera cierta gobernabilidad. Demolición del antiguo régimen corrupto y criminal.
2. La realización del primer punto dependía de la habilidad política de Lugo y sus colaboradores, aun cuando eran perfectamente previsibles las tremendas dificultades para avanzar hacia acuerdos mínimos con un Congreso ultra conservador y corrupto. El Partido Colorado, el UNACE del general Oviedo y algunos componentes de la ultraderecha liberal y del neoliberal Patria Querida, constituyen una inmensa mayoría en el Congreso, capaz de aplastar cualquier atisbo democrático con acento en la justicia social y de combate a la

⁷⁷ Idilio Méndez Grimaldi: «Batalla contra el imperialismo, la oligarquía y la corrupción», en *Gobierno Lugo. Herencia, Gestión y Desafíos*, BASE IS, Asunción, 2009, p. 29.

corrupción. No obstante, Lugo fue sorteando a los tumbos esta tremenda dificultad.⁷⁸

Lo que describe Méndez Grimaldi sintetiza bien el abordaje político que predominó el gobierno de Lugo:

[...] el presidente dudó (y seguía dudando mientras se escribían estas líneas) para combatir frontalmente la corrupción y el crimen organizado. A pesar de su promesa electoral, no ordenó ninguna auditoría general de la administración del Estado y por lo tanto cargó con todo el bagaje de corrupción de la administración colorada, como mínimo de los últimos 19 años pos-stronistas.⁷⁹

Pero la evidente tendencia de Lugo a no definir posiciones, a «dejar estar», no significó que la acción gubernamental no tuviera un signo y un sentido. El predominio de las tendencias conservadoras dentro de su equipo de gobierno se fue notando a medida que transcurría su administración, y aunque no diera a sus aliados liberales el protagonismo político que le requerían (en especial su vicepresidente liberal, Federico Franco) en cuanto a la agenda económica se tuvo una continuidad en lo fundamental, comenzando por el nombramiento en el ministerio de Hacienda de Dionisio Borda, que ya había ocupado este puesto en la fase inicial del gobierno de Duarte Frutos. En el ámbito de las obras públicas, el ministro liberal Efraín Alegre gestionaba proyectos con vistas a una mayor participación del capital privado, anticipando una priorización de proyectos de «alianzas público privadas» que los referentes de izquierda en el gobierno de Lugo rechazaban abiertamente. Un caso especialmente revelador se dio cuando el ministro Alegre y el presidente Lugo impulsaron un proyecto de concesión del aeropuerto de Asunción que, luego de aprobado por el Congreso, fue vetado por Lugo.⁸⁰

El gobierno Lugo fue expresión de una amplia alianza de actores políticos y sociales, en un abanico que iba desde la izquierda hasta la derecha. En la práctica, se tuvo un discurso más progresista, hablando de la necesidad de

⁷⁸ Ídem.: p. 30.

⁷⁹ Ídem.

⁸⁰ (<http://www.abc.com.py/nacionales/alegre-confia-en-que-lugo-promulgara-ley-de-concesion-de-aeropuertos-321887.html>).

«grandes reformas» y la «recuperación de la soberanía del país». Pero ya en el gabinete de Lugo quedaba clara la división de posiciones. El gabinete económico (Hacienda, Agricultura y Ganadería, Obras Públicas, etc.) fue para liberales y moderados, mientras que ministerios y secretarías con funciones «sociales» fueron ocupadas por la izquierda (Ministerio de Salud, Secretaría de Acción Social, etc.). En el balance, y desde la coyuntura electoral en la que la mayoría de votos de Lugo fueron aportados por el conservador Partido Liberal, en los momentos decisivos, en las acciones (no en el discurso), la gestión de Lugo tuvo el sentido de «custodiar el sistema», más que de intentar transformarlo.

En cuanto a los gestos y acciones orientados a ampliar su base de apoyo popular, se pudo registrar un conjunto de iniciativas de carácter más bien simbólico, que los sectores conservadores supieron coartar sin mayor dificultad, operando en el Congreso y en la justicia paraguaya.

En el balance, se puede indicar que Lugo no amplió la base de apoyo social y político de manera significativa durante su gestión presidencial, más bien dejó estar y hacer, con lo que se pudo afirmar que «sigue prisionero del viejo esquema corrupto y criminal...»⁸¹

La habilidad de los sectores conservadores de imponer su agenda y posiciones puntuales en relación a cualquier intento de reforma significativa fue suficiente para:

[...] marcar la cancha a la neófito conducción gubernamental, indicándole por y hasta dónde podía moverse en materia de política económica. Las políticas insinuadas tanto por Lugo como por algunos ministros al principio del mandato, sobre la inclusión de un impuesto a la exportación de materias primas para aumentar la bajísima presión tributaria del país, así como las relacionadas con la bandera electoral de reforma agraria integral, fueron en la práctica, dejadas de lado, porque estas medidas según la teoría neoliberal, repetida hasta el hartazgo por la prensa paraguaya, afectarían las ganancias de las empresas perjudicando el clima de negocios, lo que reduciría la inversión privada. Así, la opción preferencial por los pobres de la corriente teológica mencionada, fue

⁸¹ Ídem.: p. 35.

sustituida por la opción preferencial por los ricos y la defensa de sus negocios y privilegios...⁸²

En lo concreto, los sectores populares que podrían haber dado un margen de maniobra y espacio político distintos a Lugo más bien vieron al ejecutivo luguista adoptar medidas de acento conservador para enfrentar la coyuntura del momento: un plan de mitigación de los efectos de la crisis financiera, dedicación prioritaria a obtener financiamiento externo, antes que intentar mejorar la recaudación tributaria, propuestas de concesiones de obras públicas, y un esquema de presupuesto nacional sin gran cambio en relación al gobierno anterior.

A la vez, claramente ausentes estuvieron las propuestas de reformas estructurales —agraria, tributaria, etc.— que al menos iniciaran el camino hacia un nuevo modo de desarrollo.

En un área que se dio un cambio de enfoque importante, las relaciones exteriores, el gobierno de Lugo obtuvo resultados notables. Específicamente con el socio principal y dominante del Paraguay, Brasil, se dio una negociación que llevó al «acuerdo Lula-Lugo» de 01 de septiembre de 2009.⁸³ En dicho acuerdo, se modifican puntos del tratado binacional bajo el cual se construyó la hidroeléctrica de Itaipú, firmado en 1973 por los dictadores Garrastazu Medici y Stroessner. Las condiciones subordinadas de Paraguay al Brasil se expresaron en toda su amplitud en dicho tratado, que le dio a Brasil los principales beneficios de la represa hidroeléctrica, hasta hoy la de mayor producción de electricidad en el mundo. En lo que fue el primer cambio significativo en ese marco legal binacional, el gobierno de Lugo logró que el Brasil aceptara la modificación del tratado de Itaipú, con lo que el Paraguay pasó a recibir 300% más de ingresos, de USD 120 millones a USD 360 millones anuales.

Contrariamente, el área de política pública en la que más se esperaba «algo diferente» de Lugo era la política agraria, reconociendo que la tenencia y uso de la tierra rural constituye el elemento principal en el complejo conservador «oligárquico» dominante durante toda la historia nacional del país. Sin

⁸² Luis Rojas Villagra: «¿Quiénes y cómo definen la política económica de la era Lugo?», en BASE-IS, op. cit., p. 51.

⁸³ (<https://www.scribd.com/document/20636773/Texto-Completo-Declaracion-Conjunta-25-de-Julio-2009>).

embargo, el equipo de Lugo nunca osó incidir en esa área, más allá de lo simbólico. Esto por la oposición que generaba *a priori* cualquier noción de cambio. Comenzando por el Congreso que, como indica el analista:

[...] ya se sabía, pero uno hubiera esperado que el escaso margen de maniobra que le quedaba al Ejecutivo pudiera haber sido aprovechado por Lugo para obtener ciertos avances. Tener el poder administrativo no es poca cosa cuando las ideas están claras. Sin embargo, la gran heterogeneidad de los integrantes de la APC y del propio gabinete que conformó el presidente, fue otro factor que creó desasosiego en los sectores que esperaban ver avances en un país en el que la distribución de la tierra es la más injusta del mundo. Desde el ya aludido partido Liberal en el extremo derecho del espectro político, hasta sectores que se autoproclaman de izquierda «dura», pasando por variadas formas de socialdemocracia-progresismo, crearon un ambiente de contradicciones en materia de políticas públicas que produjeron como resultado la neutralización de acciones. El gabinete, igual, desde obedientes discípulos del neoliberalismo en Hacienda, pasando por aprendices de represores en Interior, hasta supinos ignorantes de la materia en Agricultura y Ganadería, o bien pensantes ex-militantes en carteras sociales, se logró lo que se tenía que lograr; desconcierto primero y desilusión después. Sin proyectos claros, con notables contradicciones en su accionar, la reforma agraria prometida se empantanó en una ciénaga de imputaciones, amenazas, y cloacales laberintos judiciales.⁸⁴

Paralelamente, se fue «construyendo al enemigo» en el sentido de Eco, con un creciente accionar mediático y político, no dedicado a lo que hacía o decía Lugo, sino a lo que podría ocurrir de proyectarse al futuro su liderazgo. El «fantasma del comunismo» resurgió en la rutina de la opinión pública, alertando a una población generalmente conservadora y poco educada, despertando temores y presagios.⁸⁵

⁸⁴ Tomás Palau Viladesau: «La cuestión agraria. Principal espacio de acumulación del capital en el Paraguay», en BASE-IS, op. cit., p. 67.

⁸⁵ «El documento que se utilizó para juzgar a Lugo planteó una circularidad en las acusaciones: algunos de las causales de enjuiciamiento se sostenían en las otras, y entre ellas sostenían una “culpabilidad” que no fue acompañada por ninguna evidencia. Los argumentos utilizados fueron una clara prolongación de horizontes de sentido stronistas, o discursos hegemonizados durante la dictadura, que volvieron para justificar el juicio».

Mientras tanto, los sectores populares paraguayos tuvieron poca capacidad de propuesta, lo que describe la investigadora del siguiente modo:

Había un consenso en la necesidad de unidad de todos los sectores para «estironear» a Lugo hacia los sectores populares, para respaldarlo en el cumplimiento de sus propuestas electorales. Se sentía un clima en que el nuevo escenario político era más propicio para avanzar, tanto en las luchas como en los procesos unitarios. Una vez más, la realidad demostró que las buenas voluntades no bastan, que los procesos — lastimosamente— son más complejos y que las visiones y lecturas políticas, así como logran importantes momentos de unidad, también son las que nos llevan por atajos distintos.⁸⁶

Poco más de un año en el gobierno de Lugo, Marielle Palau sintetiza el pensamiento de los líderes populares paraguayos:

Los sectores populares asumen que el escenario futuro y las conquistas que se puedan alcanzar dependen de la propia fuerza de las organizaciones. De no superarse el fraccionamiento del campo popular, la correlación de fuerzas no va a permitir enfrentar a los sectores conservadores y una vez más se dejará pasar una histórica oportunidad para avanzar en la construcción de una alternativa emancipatoria, anticapitalista y antipatriarcal. Las próximas elecciones municipales darán la oportunidad para que la izquierda paraguaya —tanto social como política— demuestre que aprendió la lección de las pasadas elecciones nacionales: dispersa en innumerables listas, sólo le hace un favor a la derecha.⁸⁷

Y... todo indica que siguieron haciéndole favores a los sectores conservadores, gobernando de manera errática, sin un proyecto claro y una hoja de ruta

Magdalena López: «La presencia de la “Guerra contra la Triple Alianza” en las narrativas en torno al juicio político a Fernando Lugo Méndez en Paraguay (2012)», Estudios Paraguayos - Vol. XXXIV, Nº 1 - 2016, p 10.

⁸⁶ Marielle Palau: «Gobierno de Lugo: ¿escenario de construcción de alternativas?», en BASE-IS, op. cit., p. 125.

⁸⁷ *Ibíd.*: p. 128. El resultado de las elecciones municipales mostró que los partidos conservadores mantenían el número de municipalidades con 95% intendentes de su signo político. Las candidaturas no tradicionales sumaron menos del 5% de los intendentes.

consistente de políticas públicas. La producción de propuestas de políticas⁸⁸ se daba pero sin una clara manifestación de opciones del ex obispo presidente, para entonces acosado por la aparición de hijos procreados durante su gestión como sacerdote y obispo, generando una importante «batalla secundaria» que desvió recursos políticos debilitando la posición de liderazgo del presidente.

El episodio final del gobierno Lugo constituyó un buen ejemplo de la manera inconsistente y poco eficaz de construir poder desde el Poder Ejecutivo. Ante la masacre de campesinos en Curuguaty, Lugo cambió al ministro del Interior por un colorado, esperando con ello desmovilizar la conspiración entonces en marcha, uniendo a los dos partidos principales y algunos menores con representación en el Congreso. Ante la inminencia del desenlace adverso, Lugo no convocó apoyo popular y la gestión de UNASUR en defensa de su gobierno no tuvo efecto interno, a pesar de la correlación de fuerzas favorable en América del Sur en aquel momento. El presidente paraguayo aceptó un procedimiento legislativo claramente arbitrario y casuístico y fue destituido en un juicio político «express», en el que los acusadores ni siquiera se preocuparon por argumentar jurídicamente las razones para enjuiciarlo.

Actualidad y perspectiva

En las elecciones de 2013, que señalaron el regreso al poder del Partido Colorado, Lugo encabezó la lista de senadores del Frente Guazú, que eligió 5 senadores (del total de 45). Los elegidos son personalidades que vienen del gobierno de Lugo, y representan a grupos variados del progresismo y la izquierda, sin un proyecto político unificador. Lugo ejerció su liderazgo incuestionado en el limitado campo de la izquierda durante los años del gobierno de Cartes, aunque en la fase reciente aceptó aliarse al presidente colorado conservador en un intento de revisar la constitución para permitir la

⁸⁸ El gobierno de Lugo tuvo dos documentos estratégicos, resaltando así la dualidad interna en su gabinete: el ministro de Hacienda Dionisio Borda lanzó su «Plan Estratégico Económico Social, PEES» (http://www.portalguarani.com/2036_fernando_armindo_lugo_mendez/19155_plan_estrategico_economico_y_social_pees_2008-2013__presidencia_de_fernando_lugo.html) y el jefe de gabinete, Miguel López Perito, presentó su «Política Pública para el Desarrollo Social Paraguay para Todos y Todas» (http://www.portalguarani.com/detalles_museos_otras_obras.php?id=27&id_obras=2088&id_otras=302, sin que se intentara tener una coherencia estratégica entre ambos).

reelección presidencial, que fue frenado por un conjunto de fuerzas políticas y sociales que rechazaron la evidente ilegalidad de la maniobra.

Para la elección presidencial del 2018, Lugo vuelve a encabezar la lista senatorial, con los mismos electos en 2013, a pesar de la evidencia del desgaste político resultante de la alianza con un gobierno en retirada y con resultado negativo para las mayorías pobres del país.

Más allá del resultado electoral que puedan lograr, la falta de renovación en las candidaturas hace que el Frente Guazú con Lugo a la cabeza tenga un perfil similar al de los partidos tradicionales, que también van a la elección con renovación casi nula en sus cuadros legislativos.

Así como en el 2008, en esta elección de 2018 la izquierda vuelve a aliarse con el Partido Liberal, esta vez con un candidato presidencial de dicho partido y un candidato a vicepresidente propuesto por el Frente Guazú. La plataforma política sobre la que proponen estas candidaturas menciona apenas vaguedades y expresiones de deseos para dar respuesta a la iniquidad social vigente en el Paraguay. Parafraseando a Marx, la historia puede repetirse, pero la segunda vez no como tragedia sino como farsa.⁸⁹

⁸⁹ Carlos Marx, en *El 18 Brumario de Luis Bonaparte*: «Hegel dice en alguna parte que la historia se repite dos veces. Le faltó agregar: primero como tragedia y después como farsa».

La izquierda chilena en su laberinto

Daniel Martínez *

Este artículo se propone tres cosas:

1. Reanalizar brevemente los aspectos esenciales del período presidencial de Allende y la Unidad Popular, con una perspectiva «desde abajo», que permita sacar lecciones de la forma en que era sobrepasado el marco legal y político-institucional del país.
2. Esbozar una interpretación de la conducta política, el vacío ideológico y la ausencia de ética en las fuerzas de izquierda que compusieron la llamada Concertación y que se trasladan de una u otra manera a su sucesora, la Nueva Mayoría.
3. Utilizar los instrumentos anteriormente señalados para intentar comprender a las izquierdas chilenas que, siendo mayoría, se desempeñaron con tanta impericia en las elecciones de 2017, como para ser derrotados por los herederos de Pinochet.

Las contradicciones de la izquierda «dentro» del sistema con la izquierda «antisistémica».

El presidente Salvador Allende siempre dejó establecido que su proyecto era alcanzar el socialismo de manera pacífica: la llamada vía chilena al socialismo. Esta vía implicaba avanzar por etapas progresivas y hacer las transformaciones dentro del marco legal vigente. Leyes como la de nacionalización del cobre, la estatización de las áreas claves de la economía y la reforma agraria, dan fe de que sus decisiones estratégicas se regían por lo normado y no atentaban contra el sistema.

A lo largo de todo el gobierno de Allende, con avances en el proceso de transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales, el sistema nunca estuvo en peligro, un sistema al cual estaban aferradas las direcciones políticas de los grandes partidos, los dirigentes de las principales centrales sindicales, artistas, intelectuales y personalidades de la cultura.

* Daniel Martínez es sociólogo y escritor, asesor del Partido del Trabajo de México.

No ocurría lo mismo con sus bases, que se sentían más motivados a profundizar y defender el proyecto de transformaciones, que a respetar una institucionalidad a la cual percibían —con toda justicia— como una barrera para el avance del proceso.

El presidente Allende y la Unidad Popular, UP, heredan e integran un marco institucional que progresivamente fue desbordado por la dinámica de la lucha de clases, por ciudadanos y campesinos movilizados, por el movimiento obrero organizado, por pobladores, jóvenes, mujeres e indígenas, en busca de que el proceso se radicalizara y acercara la tan distante y utópica meta del socialismo por la vía pacífica.

Pocas veces —o nunca— se menciona en los análisis que, frente a cada ofensiva de los sectores dominantes, la respuesta de los actores sociales subalternos organizados no fue únicamente defender al presidente Allende. Los sectores trabajadores, militantes y sindicalistas más avanzados en la construcción de un doble poder, pensaban que había que proteger al Gobierno como conquista del pueblo, pero sobre todo, estimaban que había que defender y profundizar el proceso de transformación revolucionaria con las herramientas de las que disponían: ocupación de fábricas sin interrupción de labores, manifestaciones en la calle, autodefensa de las poblaciones y territorios agrícolas, embriones de control obrero y de abastecimiento directo, etc.

Pero no solo eso. Tuvimos en Chile, ya en esos años, las primeras experiencias prácticas de que las oligarquías aceptan las reglas del juego electoral solo cuando los resultados de las urnas los favorecen. De lo contrario, cuando los sectores populares ganan las elecciones con las reglas del adversario, no tienen la menor vacilación para empezar a conspirar, manipular las instituciones que aún están en sus manos y transgredir el propio orden institucional que dicen defender.

Lo que ocurre en estos días en Venezuela, Brasil y Honduras, solo para mencionar los casos más recientes, encuentra su antecedente histórico en los años del gobierno de Allende en Chile. La intervención estadounidense, en una amplia gama de acciones ilícitas, también.

La «democracia dolosa» es la nueva versión de las oligarquías, que no están dispuestas a perder sus privilegios. Entiendo por democracia dolosa a aquella

que deliberadamente enfrenta un veredicto en las urnas sabiendo de antemano que no está dispuesto a aceptarlo si le resulta desfavorable. En la democracia dolosa está la voluntad implícita de las clases dominantes de engañar al ciudadano que vota, por la vía del fraude, o incumpliendo los compromisos y las obligaciones institucionales comprendidas en la legislación electoral.

Las confrontaciones que el modelo chileno quería evitar a cualquier costo fueron desbordando al gobierno por la derecha y por la izquierda. En paralelo a las intenciones de Allende, se daba una insurrección de la burguesía que se confrontaba contra la «revolución desde abajo».

Más allá de buscar dónde estaba el punto intermedio del socialismo por la vía pacífica, tarea a estas alturas ociosa y difícil, la lección que nos interesa es que: a medida que un gobierno popular o progresista aplica su programa y toma medidas a favor de los trabajadores, de los pobres, se incrementa el respaldo popular, y se extiende incluso a sectores sociales que inicialmente no respaldan el proyecto. Pero a medida que comienzan a disfrutar los efectos favorables de las medidas transformadoras, cambian progresivamente de postura a favor del gobierno. Más aun, tienden a desarrollar sus propias organizaciones de base, cuya finalidad es defender lo alcanzado y al gobierno que las promueve.

Esto explica en parte que, a pesar de las serias dificultades materiales que se enfrentaban producto de la agresión norteamericana y el sabotaje de sus aliados locales, el gobierno de la UP aumentara sus votos en las elecciones que hubo durante el período. Y que, paradójicamente, mientras más se avanzaba por las vías institucionales, más cercano estaba el golpe, ya que la fascistización acelerada de la clase media chilena demostraba, sin disimulo, su voluntad de quebrantar el orden, con tal de detener al gobierno popular.

En la actualidad, mientras algunas izquierdas tardan en sacar enseñanzas del pasado, Estados Unidos y sus representantes locales ya aprendieron esa lección y contraatacan apenas comienzan en algún país las primeras transformaciones y cambios de carácter popular. Ya saben que mientras más tiempo pase y más se aplique un programa de transformaciones progresistas, de carácter popular, más se amplía la base social dispuesta a apoyar cambios revolucionarios.

Por eso se apresuran a desestabilizar todo asomo de gobierno progresista o bien, de manera preventiva, interferir en los procesos electorales ya sea para descalificar candidatos antiimperialistas o validar resultados fraudulentos, para travestir a los derrotados en vencedores, haciendo caso omiso de la voluntad popular expresada en las urnas.

En el Chile de los años 70, previo al golpe de estado, el aumento de los salarios, la nacionalización del cobre, la reforma agraria y los beneficios que traía para las capas trabajadoras, la mayor participación y gestión obrera conjunta, hacían que los sectores de vanguardia de los trabajadores estuvieran ansiosos de acelerar el proceso y que a las crisis provocadas por la derecha o la agresión estadounidense, la respuesta fuera de elevar los niveles de conciencia y gestar embriones de poder que enfrentaran de manera autónoma las agresiones reaccionarias.

La contradicción dialéctica es que el poder popular se desarrollaba en nombre de la defensa de «su» Gobierno, pero sobre la base de reivindicaciones propias de los trabajadores, de la clase, con herramientas de lucha que sobrepasaban ese mismo Gobierno, así como a todos los partidos y poderes constituidos. Las bases esgrimían reivindicaciones que iban mucho más allá del marco político fijado por el proyecto de Salvador Allende, pero casi siempre en nombre de la «vía chilena al socialismo».

Es necesario añadir para la reflexión, que los sectores políticos más radicales —el MIR, el ala izquierda del PS y los sectores cristianos revolucionarios— tuvieron argumentos, pero carecieron de la fuerza política organizada como para proponer de manera concreta un proyecto alternativo al de Allende, a la estrategia de una transición legal, pacífica, al socialismo. Los sectores que desbordaron al gobierno de la UP por la izquierda, no tuvieron capacidad de crear una fuerza social revolucionaria y una alternativa política nacional capaz de detener el golpe por la vía del poder popular.

La falta de unión entre la izquierda chilena con las principales fracciones del movimiento social, fue una dificultad real para el proceso revolucionario. Un legado esencial para las nuevas generaciones de chilenas y chilenos es que no basta con reencontrar el camino de las movilizaciones sociales si no se crea un extenso movimiento que sume a las izquierdas y a los movimientos sociales, si

no bajo las mismas banderas, por lo menos bajo objetivos comunes con claro sentido de clase.

Dos preguntas claves: ¿Se puede construir un proyecto sólido de izquierda sin la participación de los diversos sectores que componen el espacio popular? ¿Se puede elaborar un proyecto económico alternativo dejándolo a cargo de los economistas y especialistas de las finanzas? A ambas preguntas la respuesta es no.

Pero no por dogmatismos añejos, sino por la forzada interrelación que debe crearse y que, en los experimentos transformadores hasta aquí conocidos, no se ha logrado a plenitud. De las oligarquías nacionales nunca esperamos nada porque no está en su propuesta, pero si esperábamos en su momento que los mejores cuadros del partido revolucionario —que había asumido el rol de dirigir el proceso de transformaciones a nombre de la revolución— tuvieran la capacidad para elaborar una política económica y una democracia participativa para vigilar su aplicación. Que fueran capaces de consultar a sus bases y colocar, de manera prioritaria en el centro del proyecto de cambios, los intereses específicos de los trabajadores.

Las experiencias de los cordones industriales en Chile, la participación de los trabajadores en la gestión de las relaciones económicas, enseñan que tanto la liberación nacional como los primeros pasos hacia el socialismo pasan por la liberación del trabajo, por diversas formas de control social sobre los procesos productivos. Chile enseñó que para avanzar en el proceso de transformaciones son necesarios: el Poder Popular, una redefinición de la política, de la economía y de la relación entre el poder y la legalidad.

En un lenguaje más clásico: que la nueva democracia sobre la que se construya la liberación está obligada forzosamente a resolver la contradicción entre la población que solo posee su fuerza de trabajo, y la población que posee los medios de producción y el control sobre las políticas económicas. Si lo anterior es verdad, también es cierto que la dialéctica entre economía y democracia propone una pregunta vital: ¿quiénes deciden qué se debe producir y cómo se debe distribuir? Si alguna razón aceleró el golpe militar en Chile, fue que los sectores trabajadores de vanguardia comenzaban a tomar en sus manos las respuestas a las interrogantes señaladas.

Creemos que es el socialismo, como objetivo de largo aliento, el único que permite entender y rediseñar la dialéctica entre de la democracia y la economía en las diversas etapas de la transición. La democracia participativa y la economía diversificada permiten avanzar en un proceso de transformaciones y tomar decisiones estratégicas sobre temas fundamentales como la propiedad, las formas de posesión, la gestión de la producción de bienes y servicios, así como las posibles alternativas.

En resumen, la definición del modelo económico y la democracia que le de sustento a la política económica, determinan qué socialismo queremos construir y cómo lo vamos a hacer. Adelantando que el nuevo tipo de orden social, más que pensarlo con prevalencia del Estado, debe pensarse sobre un modelo histórico donde el ideal de la propiedad socialista de todos sea dual, que no se transfiera totalmente a las manos de los que tienen la representación (dirigentes políticos y sindicales) y que permanezca también en las del pueblo trabajador (y sus órganos de poder). Es decir que el gobierno desde arriba se complemente con el gobierno desde abajo.

En el caso chileno, la virulencia con que fueron atacados los cordones industriales y los embriones de Poder Popular por la dictadura de Pinochet, desde el mismo día del golpe, ilustra sobre la amenaza que la oligarquía criolla sentía. Lamentablemente la izquierda chilena no logró entender la importancia estratégica que tenía para la defensa del proceso y la consolidación de sus objetivos el haber desarrollado formas de poder desde abajo.

Tanto en la experiencia chilena como posteriormente en la Nicaragua sandinista, coexistieron diversas formas de propiedad. El mayor grado de propiedad y la capacidad de incidir en el rumbo económico y político del país estaban dados por la dimensión de propiedad en manos de los trabajadores. En ambos casos, en especial en Nicaragua porque el experimento duró más tiempo, se comprobó que debemos avanzar mucho en el carácter ideológico que le otorgamos a la propiedad y despojarla del peso clasista que la acompaña. Hay que salir de la ortodoxia y asumir que puede haber distintas formas de propiedad sin que necesariamente los «propietarios» se conviertan en nuestros enemigos.

Al contrario, la propiedad privada, la propiedad social, la cooperativa o estatal, u otras que surjan en el futuro, deben ser negación de la explotación,

de apropiación del trabajo ajeno, pero no estigmatizar al propietario, sino a la conducta de quienes justifiquen —desde la posesión de los medios— el derecho a controlar la participación en las formas de poder de un país en transformación.

La experiencia chilena durante Allende, de trabajadores dueños de sus fábricas que extendían su poder desde diversas formas de propiedad al control de la distribución de los productos, por ejemplo, demostraba que era posible dar mayor espacio pluralista al control democrático de las necesidades de la mayoría. Agregando que la satisfacción de las necesidades materiales de la población, solo son totales si incluye las aspiraciones espirituales, democráticas, de participación en los destinos de la nación, al derecho a la existencia, a la libertad de decidir y a tener voz y voto en la vida democrática de la nación.

Tal vez un buen abordaje para entender el camino al socialismo de nuestros días en América Latina, consista en otorgar la calidad de propietarios a la mayoría de los ciudadanos bajo variadas formas de producción, sean estas estatales o no. El aprendizaje histórico de la experiencia chilena, enseñaba que la pluralidad democrática en las relaciones sociales de producción, no solo mejoraba las condiciones para vencer a su adversario de clase, sino que ampliaba el rango de la democracia y la participación, en la medida que es la mayoría del pueblo la que decide, ordena, administra, elige y revoca a sus representantes en el sistema productivo y gubernamental.

El carácter socialista de la experiencia chilena surgía desde abajo, de una fuerza social revolucionaria en ciernes que impulsaba políticas socializadoras del poder, la producción y la cultura. El embrionario poder popular que se gestaba en Chile ilustraba que la economía y la democracia son interdependientes, que se condicionan mutuamente y que la primera solo es posible en plenitud si va acompañada de la otra.

Por desgracia esos avances quedaron sepultados con la represión desatada por la dictadura pinochetista.

La izquierda cupular estaba desnuda y tenía los pies de barro

Entraremos a describir y analizar brevemente el proceso de «Concertación» de la izquierda chilena, que regresó al gobierno después de la dictadura

pinochetista, a la luz de una óptica actual y sobre el entendido inicial: en Chile se confrontaron dos ópticas, la de la socialdemocracia desde arriba y la del socialismo desde abajo, lo que condicionó las maneras de hacer política de la izquierda.

La hipótesis de esta parte es: la izquierda chilena del siglo XXI, la que se reclamó heredera de los proyectos de la UP, estaba desnuda y tenía los pies de barro, pues quiso gobernar sin contar con una sólida base popular. Peor aún, nunca se interesó realmente en crear esa base.

Para ayudarnos en este trayecto, replanteamos la pregunta: ¿Se puede construir un proyecto sólido de izquierda sin el apoyo del mundo popular?

La Concertación, como su propio nombre lo anuncia, es un conglomerado pluriclasista, que junta coincidencias y hace omisión de principios ideológicos. Confunde la búsqueda de consenso, como condición democrática, con una simulación que tiene más de método administrativo de cuotas que de escuchar distintas voces.

El consenso de la autodenominada Concertación de Partidos por la Democracia se compone de la decisión de la cúpula de la izquierda chilena que, ansiosa de recuperar las importantes cuotas que había ocupado en los años setenta, se sirve de la mayoritaria fuerza antidictatorial generada durante el reinado de Pinochet, para lograr el retorno a una ansiada democracia, funcional a sus fines. Presentada como plataforma de relanzamiento de las transformaciones iniciadas durante el período de la Unidad Popular, apenas se limitó a restaurar un régimen político tradicional, manteniendo intactos los fundamentos neoliberales del Chile dictatorial.

La Concertación se desespera, lucha y negocia por la recuperación de sus cuotas y espacios políticos gubernamentales. El problema del poder lo deja para después. En ningún momento se plantea que «retornar al gobierno» no es lo mismo que «el retorno de la democracia».

La sucesión de gobiernos «concertacionistas», que hacen política, pero sin ética, no se plantearon retomar las experiencias históricas para contar con la participación de la gente. Para la coalición el desafío era retornar a una normalidad, remedo de democracia, donde los cambios debían ser técnicamente acertados, aunque no fueran necesariamente los más justos o prioritarios para la población.

En Chile durante los veinte años posteriores a la dictadura, los gobiernos se definieron como una coalición de centroizquierda. En estricto rigor no se trató de gobiernos de izquierda. La izquierda había logrado un respaldo popular en las urnas cuando el No ganó el plebiscito, pero la oposición a la dictadura se asustó de su propia fuerza y dilapidó el resultado, en el que 3.967.569 de los votantes, casi el 56%, rechazaban a Pinochet, para iniciar la reinstalación de un gobierno popular.

Recurriendo al lenguaje actual: se trató de un gobierno progresista. Agregaríamos nosotros, tan progresista como podía ser el partido Demócrata Cristiano, que cumplió un papel de opositor y desestabilizador del gobierno de la Unidad Popular, pero que, desplazado del eje central del poder por la dictadura, terminó por encontrar un espacio en el ala más derechista de la Concertación.

La constitución de la alianza entre las fuerzas de izquierda, en particular con el Partido Socialista y la Democracia Cristiana es presentada como un laborioso proceso de entendimientos y de madurez política, en donde las contradicciones fueron superadas en función de un beneficio mayor, el retorno a la democracia. Pero la historia acepta más de una interpretación de los hechos. Otra de ellas es que la democracia a la cual retornaron los partidos políticos no contemplaba las aspiraciones del pueblo y se remitía a un acuerdo cupular entre grupos de poder que compusieron una «hegemonía compartida», en la que iban a coexistir una economía neoliberal con un gobierno de discurso social progresista.

No se trata de menoscabar el valor político de que el conjunto de sectores de oposición a la dictadura lograran poner en pie un gobierno de características democráticas formales. Comparado con el período anterior de dictadura militar y violaciones permanente a los derechos humanos, era un significativo avance. La insuficiencia de este acuerdo cupular, es que prescinde, desde sus inicios, de las aspiraciones de transformación de los sectores populares que durante todos los años que duró la dictadura estuvieron en la resistencia contra Pinochet.

Entre 1990 y 2010 la Concertación conquistó electoralmente cuatro veces el gobierno, dos con presidentes de la DC (el primero, Patricio Aylwin entre 1990 y 1994 y el segundo, Eduardo Frei entre 1994 y 2000), dos con presidentes del

bloque de izquierda (el tercer gobierno presidido por Ricardo Lagos (PS-PPD) entre 2000 y 2006 y el cuarto y el último, presidido por Michelle Bachelet entre 2006 y 2010).

Las legítimas expectativas de la ciudadanía que, de variadas formas, enfrentó durante diecisiete años un modelo socioeconómico que había agudizado la pobreza y desigualdad a niveles nunca vistos en Chile, se vieron frustradas. La población entendía que retornar a la democracia no solo era volver a un régimen de respeto a los derechos humanos y funcionamiento de las instituciones republicanas.

Volver a la democracia, para las bases antidictatoriales maduras en la represión y la lucha clandestina, significaba volver a un modelo económico de equidad, derechos compartidos, de relaciones sociales con base en el autogobierno, la autogestión, la auto construcción del sujeto popular. El pueblo chileno post dictatorial quería retornar a una democracia que había alcanzado a tocar con la punta de los dedos en los años 70. Una democracia que le permitiera participar en la definición de sus necesidades, en las decisiones políticas y económicas que las garantizaran y en el control de ella.

Es decir, relaciones que trajeran de regreso la participación directa y creciente en la gestión pública, donde la democracia tuviera carácter transversal en todos los ámbitos de la sociedad. La agenda máxima de la Concertación era terminar con la dictadura y consolidar un régimen democrático formal, regresar a las clásicas relaciones entre partidos y sociedad, en tanto que para los ciudadanos esa era la agenda mínima, que aspiraban extenderla a la economía y al proceso de normalización.

Según una medición de una empresa encuestadora de la época (CEP), entre las causas que motivaron a la mayoría a votar «No» en el plebiscito, primaba la mala situación económica (72%) —más que los derechos humanos (57%)—, debido a la cesantía y la mala distribución del ingreso. Es decir que las causales económicas eran la primera motivación para oponerse a la dictadura.

Tal vez es buen momento a estas alturas, recordar a los lectores que el inicio el llamado retorno a la democracia en Chile coincide con el derrumbe del muro de Berlín y el desplome del socialismo burocrático. Este giro profundo en la política mundial significó un desafío para aquellos que luchaban por el socialismo, porque obligaba a una autocrítica de lo hasta allí actuado a nombre

de esa ideología y levantar nuevas propuestas que superaran los errores y excesos cometidos.

Desde luego, siempre cabía la opción de aprovechar el desánimo que permeaba el socialismo a escala mundial y combinarlo con las teorías que se apresuraban a invitarnos al funeral de la ideología proletaria y a enterrar ideas subversivas, como que la lucha de clases seguía existiendo.

Era el momento histórico ideal para enrumbar las propuestas revolucionarias por derroteros novedosos, con propuestas económicas y de democracia renovada. La idea de que el Estado debía consolidarse por la vía de retomar el control absoluto de los medios de producción no solo estaba obsoleta, sino que en las condiciones específicas de Chile ya había experimentado notables avances por otros rumbos innovadores. Las vivencias de los trabajadores chilenos ratificaban que no puede haber «democracia popular» sin «control popular» del modelo económico. Es decir que el Poder Popular descansa sobre la Democracia y la Economía participativas.

Los gobiernos de la Concertación, uno tras otros, marginaron a sus bases del debate del modelo económico. Abrieron amplios y sabias discusiones sobre Derechos Humanos, sobre la justicia, el castigo y el perdón en las filas dictatoriales —reivindicaciones por demás necesarias y legítimas— pero se reservaron para la elite tecnócrata la redefinición del modelo económico.

En realidad, este ya estaba definido por el sector hegemónico heredero de la dictadura y a la Concertación solo le correspondía envolverlo en papel progresista, con tonalidades populares y de justicia social, pero la coalición jamás se propuso cuestionar los fundamentos del modelo engendrado por los llamados Chicago Boys.

A los analistas del período se les hace fácil interpretar de que la construcción de la identidad política nacional, el nuevo progresismo, debía despojarse de cualquier asomo de rol autoritario para el Estado, y que la superación de la pobreza y desigualdades se alcanzaría por medio de progresivas reformas estructurales. Del proyecto de vía pacífica al socialismo, la izquierda chilena transitó sin mayor complejo al neoliberalismo erigido en doctrina de pensamiento. La nueva contribución teórica de la Concertación y sus grandes pensadores era que del proyecto autoritario pinochetista, se podía evolucionar a una versión «de rostro humano», donde el mercado sería un imparcial fiel de

la balanza al cual se le podrían encontrar otras virtudes, todas ellas favorables a las necesidades de una sociedad traumatizada por dos décadas de dictadura.

La orfandad de las izquierdas, después de la caída del campo socialista, sirvió como argumento para abandonar la lucha por una sociedad sin explotación del hombre por el hombre y darse por satisfechas con un proyecto reformador, defensor de los derechos humanos, de lucha contra la impunidad, a favor de la igualdad socioeconómica y la plena democratización de las instituciones

La democratización puso nuevamente en escena a los viejos actores políticos de siempre, cuya «identidad de izquierda» se legitimaba en las acciones políticas del pasado y un discurso sobre Derechos Humanos que les eximía de definirse en materia de orden económico. La noción de lucha de clases fue barrida del vocabulario político, como palabra obscena y hasta peligrosa para la estabilidad de la frágil democracia naciente, a la cual no se le podía agredir ni siquiera con una huelga o una manifestación en las calles.

Las élites partidarias y los tecnócratas asumieron la responsabilidad de monopolizar el diálogo técnico de la economía liberal de mercado y de diseñar las fórmulas que le darían un nuevo rostro humano. Los actores políticos que constituyeron la Concertación también se adueñaron del concepto de unidad de la izquierda que, de una idea de sumar a las fuerzas populares bajo un programa común pasó a ser un acuerdo político de alianzas superestructurales que se alternaban en el gobierno bajo proyectos similares, unificados sobre el respeto de las leyes del mercado. Cualquier otra interpretación quedaba vetada, para que no pusiera en peligro lo avanzado ni fuera a provocar el malestar de los militares y sus aliados de derecha y extrema derecha.

Aquellos que sostenían que, para la superación del modelo socioeconómico heredado, era posible y necesario avanzar en paralelo en la democratización política y en las transformaciones estructurales fueron marginados por poner en peligro la paz y la unidad nacional. La izquierda cupular ya había logrado un entendimiento y cualquier discurso de radicalización podía poner en peligro el pacto que hacía posible que Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), pudieran compartir espacios parlamentarios y de poder sin recelos. La urgencia de la izquierda por reintegrarse al juego político democrático y que las Fuerzas Armadas regresaran a los cuarteles fueron las

premisas determinantes de un nuevo pacto social desideologizado y supraclasista.

La nueva izquierda y la democracia cristiana administraron las posibilidades de transformación estructural socioeconómica, bajo el argumento que paulatinamente sería posible obtener mayores tasas de crecimiento y una reducción de la pobreza en el campo social. Todo era cuestión de tiempo y de paciencia, de los más perjudicados por el sistema, que eran convocados a entender la moderación en los cambios estructurales.

En conclusión, la postura de la dirección gubernamental de mantener la continuidad del modelo económico neoliberal y que se presentó como la única vía posible para garantizar la democratización política, en realidad lo que logró fue preparar las mejores condiciones para el retorno de la derecha al poder.

Ser mayoría y perder las elecciones

La hipótesis que acompañan esta tercera parte de nuestro análisis es: En el Chile actual, más que para elegir gobierno, la gente vota para sacar gobiernos.

Desde 2010, y con más fuerza en el 2011, en Chile se abre un proceso de movilización social que involucró a capas medias, maestros y estudiantes, profesionales y grandes sindicatos de la administración pública. Un conglomerado audaz y exasperado, que no llegaba a palpar los beneficios que sucesivos gobiernos de la Concertación insistían en propagandizar como avances concretos de la democracia.

¿Su mayor defecto? No supieron llevar sus movilizaciones a las grandes masas de clase popular chilena, que tanto lo necesitaban. Las nuevas generaciones de estudiantes e intelectuales movilizados, rompiendo con los mitos de la «estabilidad» y «paz social» que la Concertación reclamaba, pertenecían principalmente a establecimientos educativos y universidades de larga trayectoria. Es justo reconocer que supieron convocar a más sectores sociales, centrales obreras y otras organizaciones.

Sin embargo, la primera constatación es que es muy difícil sacudirse cuarenta años de la hegemonía neoliberal que había penetrado en todos los ámbitos de la sociedad. En Chile la doctrina neoliberal no estaba en la economía solamente, había permeado la cultura, los hábitos y costumbres de extensas capas de la sociedad. Y aquellas que estaban marginadas, no

aspiraban a destruirlas, sino a ser incorporadas y sumarse al proyecto que se reclamaba exitoso y de futuro.

Las movilizaciones juveniles pusieron en pie una contrahegemonía que levanta como banderas los valores de lo público y cuestiona con gran fuerza el lucro en educación. Pero esas banderas, no lograban involucrar a sectores mayoritarios de los trabajadores agredidos por el sistema y que no terminaban de encontrarle el lado humano a un sistema neoliberal que seguía manteniéndolos en precarias condiciones. La posibilidad de un cambio real de paradigma despertaba dentro y fuera de la Concertación, pero sin llegar a concretarse como proyecto alternativo que sumara a las grandes fuerzas populares.

¿Qué llegaron a hacer? Algo muy meritorio, instalaron en la agenda pública la idea de que el modelo chileno estaba agotado y que había que romperlo desde las bases, habida cuenta que desde la cúpula esa idea era impensable. Abrieron la idea de que las revueltas eran legítimas y que era urgente exigir en las calles un salto adelante en las condiciones del modelo en materia educativa, en la educación, la salud, las pensiones, la vivienda y otras.

¿Pero por qué estas demandas no encontraron respuestas favorables en el amplio mundo de los trabajadores y otros sectores de la sociedad que estaban siendo perjudicados por la prolongación del modelo neoliberal?

Porque lo que querían escuchar era un proyecto de unidad nacional, y en la campaña electoral se escucharon muchas voces en contra y raras propuestas que realmente sirvieran de eje central para crear una fuerza popular transformadora.

La última elección chilena buscó sumar mayorías relativas en contra del gobierno saliente o en contra de un gobierno de derecha con reminiscencias dictatoriales, pero no se constata una propuesta programática que sirviera de expresión coherente y organizada en defensa de los deseos y necesidades del pueblo.

Y la verdad no tenían que ir muy lejos los chilenos de izquierda para encontrar referentes que correspondan a esa definición, de un proyecto que sea beneficioso para amplios sectores de la población. Bastaba con mirar del otro lado de la frontera y ver en Bolivia y Ecuador, dos ejemplos claros de

propuestas programáticas de alcance nacional, que encuentran un profundo eco en la población.

También es verdad que la sociedad chilena actual hace complicada las cosas porque una extensa clase media empobrecida no está dispuesta a alterar el orden neoliberal, más bien aspiran a sumarse a ser la parte inferior de una sociedad de consumo.

La Concertación cultivó y estimuló el aspiracionismo de sectores empobrecidos por el «neoliberalismo de rostro humano», incorporándolos al consumo masivo capitalista, por la vía del endeudamiento crónico. Por esa razón, la población tiene temor de quedarse sin empleo y no tener cómo pagar sus deudas y esos temores no fueron despejados por las campañas de las izquierdas que competían.

Los errores electorales, incluyendo la ausencia de elecciones primarias, sin duda operaron en contra de una alternativa de izquierda desde la primera vuelta. Pero lo determinante fue la incapacidad de las diversas corrientes para enfrentar de una vez por todas el profundo carácter reaccionario que se enmascara en el «neoliberalismo a la chilena» que al final de cuentas es el mismo que en otras latitudes y que puede hablar distintos idiomas, pero sigue pensando en inglés.

El electorado joven que recién se integra a la política tiene como motivación principal el rechazo a la forma de gobernar de la Nueva Mayoría. Incluso su principal dirigente y candidata, Beatriz de Jesús Sánchez Muñoz, tenía dos años y medio cuando fue el golpe de estado y había alcanzado los 20 cuando la dictadura dio paso a la restauración democrática.

En el fondo, los votantes del Frente Amplio son electores anti Nueva Mayoría. Muchos más están en contra del partido oficialista que del partido de derecha. Incluso, muchos simpatizantes del Frente Amplio consideran que la victoria y gobierno de la derecha los posiciona a ellos y debilita a la Nueva Mayoría.

La derrota de las izquierdas, en las elecciones de noviembre 2017, deja algunas lecciones:

- La derecha tuvo más y mejores propuestas para los sectores populares que la izquierda

- La izquierda no ha construido un discurso capaz de hacer retroceder en la población chilena los arraigados valores y la cultura que la dictadura y la derecha han anclado profundamente en sus mentes
- Sigue pendiente la elaboración de un proyecto político de izquierda que sea capaz de escuchar antes de dar recetas que no auscultan el sentir político e ideológico de las mayorías perjudicadas por el sistema
- Es cierto que hay una postura anti neoliberal consistente, pero que no penetra, no llega a las grandes masas populares que tendrían el empuje necesario para iniciar una verdadera transición en Chile
- Urge un diálogo abierto y fraterno para construir un contrahegemonía que desplace los aspectos políticos y económicos del actual modelo
- Concretar un proyecto político-histórico con bases realmente populares.

La lección de la unidad

Una de las causas para la derrota de la izquierda chilena, que nadie pone en duda, fue la división con que se enfrentaron estas elecciones.

Si la política entendiera de aritmética y la izquierda de unidad, los resultados de la primera vuelta indicaban que el progresismo superaba ampliamente a la derecha. Sin embargo, en segunda vuelta los votantes favorecieron a Sebastián Piñera.

La abstención en las elecciones presidenciales de 2017 fue de más del 50% de personas habilitadas para sufragar que no lo hicieron. De acuerdo al último informe emitido por el Servicio Electoral de Chile (SERVEL), escrutado el 92% de los votos, solo 6 325 858 de un universo de 14 308 151, sufragaron. Esto es, un 44%. De la minoría que votó, un 54,5% se inclinó por el candidato de la derecha Sebastián Piñera Echeñique. Solo un 45,5% de esa minoría lo hizo por el candidato de izquierda Nueva Mayoría, Alejandro Guillier Álvarez.

Tal vez el otro 50% que no asiste a votar lo haría si se escuchara su opinión previamente y sintiera que después de las elecciones cambiarán favorablemente las cosas de su vida concreta.

La falta de renovación, con la misma oferta de candidatos desde que volvió la democracia en 1989, y el manejo oligárquico de los partidos tradicionales llevó a que mucha gente se marginara de la política. En su discurso, el Frente Amplio avanzó hasta constatar la desilusión y desconfianza hacia la clase

política, pero careció de visión y empuje para levantar una propuesta alterna que fuera más allá del rechazo a lo ya hecho.

La izquierda que necesitamos

Las actuales fuerzas políticas de izquierda intentan que la democracia representativa liberal sea el terreno donde se diriman los espacios de acción de las fuerzas populares.

Buscan que la democracia actúe como muro defensivo del neoliberalismo autoerigido en doctrina y del capital financiero. El fracaso de los partidos tradicionales lleva al nacimiento de nuevos partidos —de izquierda o progresistas— que aspiran a una revolución de las relaciones con la ciudadanía y los movimientos populares, con el fin de ser más eficaces en la lucha contra las fuerzas antidemocráticas.

Aunque sigo pensando que el socialismo es nuestro destino estratégico, es claro que, para muchos sectores de la sociedad dispuestos a ser nuestros aliados, los objetivos más inmediatos son la democracia y un modelo que deje atrás el neoliberalismo.

Las grandes interrogantes son: ¿cómo es esa democracia que reivindicamos y cuál es el modelo económico posneoliberal que le daría sustento?

En lo que respecta a la democracia, ya la definimos al inicio de este trabajo como dolosa, postura que evidencia la emboscada en que nosotros mismos aceptamos caer: si nos negamos a participar en el juego electoral nos automarginamos por voluntad propia de la «vida democrática de la nación». Si aceptamos competir con las reglas del enemigo, en la eventualidad de obtener el triunfo, es el propio adversario el que se encarga de desconocer las reglas y desconocer la voluntad de las mayorías.

La alternativa inicial debe ser la articulación unitaria de todas las distintas fuerzas de izquierda. Aunque los procesos electorales son la prueba de fuego de la unidad, debemos ir más allá y no supeditar la propuesta unitaria a un hipotético triunfo presidencial o parlamentario, ya que con o sin elecciones por delante, la unidad es un objetivo primordial de un proyecto de transformaciones revolucionarias.

Para lograr la unidad es forzoso elaborar un programa que no solo contemple objetivos económicos y democráticos, sino además los mecanismos

internos que aporten garantías a los trabajadores de que podrán vigilar el avance y cumplimiento de las tareas que darán satisfacción a sus reivindicaciones.

Los desafíos electorales de 2018 y 2019 revisten una gran importancia, y la unidad de las izquierdas es vital para ganarlos, no solo porque repercuten favorablemente en las necesidades materiales de la población, sino además porque traen ráfagas de optimismo a las fuerzas populares de todo el Continente.

De ambas cosas estamos muy necesitados.

El FMLN en el gobierno y su resistencia a la estrategia desestabilizadora del imperialismo y la oligarquía salvadoreña

César Villalona*

El final de la guerra

La victoria del partido ARENA en las elecciones presidenciales de 1989 significaron el fin del proyecto reformista contrainsurgente encabezado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el imperialismo norteamericano, en el marco de la Guerra Popular Revolucionaria conducida por el FMLN. El partido de la oligarquía se puso al frente del Estado y sustituyó la dictadura militar con etiqueta reformista por una dictadura militar netamente oligárquica, sustentada, al igual que el proyecto reformista, en el poder del imperialismo norteamericano.

Menos de tres años después, el 16 de enero de 1992, los Acuerdos de Paz le ponían fin a la guerra y enrumbaban al país por nuevos senderos. El FMLN se desmovilizó y se integró a la vida política legal y los militares perdieron el control del Estado. La dictadura militar con fachada de gobierno civil fue reemplazada por un sistema de democracia representativa bajo dominio de la derecha oligárquica.

Cuando terminó la guerra, ARENA controlaba casi todo el Estado y contaba con un aliado internacional (el gobierno de Estados Unidos) que emergía como un poder mundial unipolar tras el derrumbe del llamado campo socialista europeo. ARENA controlaba el Órgano Ejecutivo, tenía holgada mayoría en la Asamblea Legislativa (39 de 84 diputados y diputadas), gobernaba en la mayoría de las alcaldías y tenía un poder decisivo en la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Consejo Central de Elecciones (así se llamaba entonces) y la Corte de Cuentas, donde ejercía el control junto al Partido de Conciliación Nacional (PCN), su principal aliado político de entonces.

* César Villalona es economista dominicano-salvadoreño.

El FMLN, en cambio, pese a que se insertó con fuerza en la vida legal, a su acumulado social, a su numerosa y fuerte militancia y a sus fuertes vínculos internacionales, no tenía presencia en el Estado y estaba en proceso de conversión en partido político. Además, el entorno externo no le era favorable porque el campo socialista ya no existía en Europa, el FSLN había perdido las elecciones en Nicaragua en 1990 y Cuba había entrado en el llamado Período Especial.

Sin embargo, pese a que la derecha controlaba casi todo el Estado, en el país se inició un proceso en doble vía: la oligarquía acrecentó su poder económico tras la aplicación del programa neoliberal y redujo su poder político, sobre todo después de las elecciones de 1994, cuando el FMLN comenzó a avanzar en los procesos electorales (salvo en 1999) hasta ganar las elecciones presidenciales de 2009 y 2014.

El programa de ajuste: la oligarquía se fortalece económicamente

Los gobiernos de ARENA aplicaron un programa de ajuste estructural inspirado en la doctrina neoliberal, que plantea reducir el peso del Estado en la economía y darle total apertura al mercado. El programa supuestamente pretendía reinsertar la economía en el mercado internacional y crear un modelo económico de exportaciones industriales y agroindustriales que sustituyera el modelo agroexportador cafetalero y algodonero agotado desde finales de los años ochenta.

El programa de ajuste incluyó tres componentes: la privatización de 32 empresas y actividades públicas (banca, telefonía, distribución de energía, fondos de pensiones, entre otras), la liberalización de la economía (libertad de precios y apertura externa vía reducción de aranceles) y la reforma tributaria regresiva, tras la reducción de 35% a 25% de la renta empresarial, la supresión de los impuestos al patrimonio y a las exportaciones de café y azúcar, la creación y aumento del IVA y la creación de otros tributos al consumo.

El programa neoliberal que se aplicó en los cuatro gobiernos de ARENA debilitó al Estado, fortaleció a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, concentró más la riqueza y el ingreso, afectó al agro (que de los 20 años de gobiernos de ARENA tuvo 10 de crecimiento negativo y cuatro de

estancamiento) y generó una mayor emigración hacia las ciudades y hacia el exterior, donde la población emigrante se multiplicó por cuatro.

Pero la agroexportación no fue sustituida por un modelo de exportaciones no tradicionales, sino por uno de servicios comerciales y financieros dependiente de las remesas familiares que constituyen la segunda fuente de divisas, después de las exportaciones. El sector principal de la economía pasó a ser el comercio, que capta el 20% de crédito (contra un 15% de la industria y un 3% del agro), genera el 30% del empleo y le aporta la mayor parte de los ingresos al gobierno. Y la principal actividad comercial la constituyen las importaciones, que se multiplicaron por diez en los años 1989-2008, duplicaron las exportaciones y superaron toda la producción agropecuaria e industrial juntas.

Las importaciones se desarrollaron debido a la masiva entrada de dólares por remesas y donaciones que le siguió al fin de la guerra, a la estabilidad cambiaria de ocho años (1992-2000), a la dolarización iniciada en 2001, que eliminó todo riesgo de devaluación y ancló definitivamente el precio del dólar, y a los TLC, principalmente los firmados con México y Estados Unidos.

La expansión de las importaciones en los años noventa contrastaba con el poco crecimiento de las exportaciones, que no tenían estímulo cambiario. El gremio de exportadores pedía insistentemente la devaluación de la moneda nacional, el colón, pero los grupos oligárquicos, que eran exportadores y cuyos negocios principales habían pasado a ser el comercio importador y la banca, obligaron al gobierno a mantener la estabilidad cambiaria y posteriormente impusieron la dolarización. Para ellos, la devaluación significaba el encarecimiento de las importaciones y de la deuda externa en términos de moneda nacional, deuda que habían contraído los bancos por cientos de millones de dólares.

La decisión de dolarizar se tomó en 1995, pero como para ese año no había suficientes reservas monetarias para dolarizar, el gobierno decidió frenar el crecimiento económico para controlar un poco las importaciones, acumular reservas monetarias y luego dolarizar. Para detener el crecimiento del PIB, el BCR elevó tres veces el encaje legal y frenó el crédito. El medio circulante, que había crecido en un promedio anual de 24% entre 1991 y 1995, solo creció 6% en los años 1996-2000. El PIB, que había crecido a un promedio de 7% en

1992-1995 solo creció 3% entre 1996-2000. Cuando las reservas monetarias duplicaban las de 1995, se dolarizó la economía al comenzar el año 2001.

Con el nuevo modelo económico se conformaron varios grupos empresariales de capital nacional, sobre todo alrededor del negocio de las finanzas (bancos, pensiones y seguros) y del gran comercio importador. Esos grupos, que durante años acumularon fortunas principalmente de la producción cafetalera, recuperaron algunas de las empresas estatizadas en los años ochenta y se apropiaron de otras empresas públicas. Luego, entre 2007 y 2008 vendieron las instituciones financieras y ampliaron su articulación con el capital extranjero, sobre todo de Colombia, Panamá, Estados Unidos y Centroamérica, donde proliferan sus negocios comerciales y de servicios.

Los nuevos grupos económicos controlan, solos o aliados al capital extranjero, la mayoría de empresas importantes del país y su riqueza es mayor que antes de la guerra. Siguen articulados entre sí y están más vinculados al mercado de Estados Unidos, del que dependen por el lado del comercio y de las remesas familiares.

El programa de ajuste aplicado por ARENA redujo el empleo en el agro y la industria y trasladó mano de obra hacia el sector servicios, donde labora la mayoría de la población. Eso significa que disminuyó el peso del campesinado y de la clase obrera industrial en la estructura del empleo nacional y se expandió el proletariado de servicios. En las principales ciudades se consolidó un sector de subsistencia de gran dimensión que modificó la tradicional estructura de clases del país. Miles de pequeños negocios se constituyeron en una alternativa de empleo reproductora de la pobreza. Sus propietarios y propietarias representan un segmento amplio de la población pero la mayoría no están organizados y no tienen demandas ante el Estado. Ese sector, que era grande cuando terminó la guerra, no deja de crecer.

La dolarización le puso una amarra al mercado, pues al suprimir la política monetaria y cambiaria impide que el BCR emita moneda, otorgue créditos, aumente el medio circulante y estimule las ventas, las ganancias y las inversiones de las empresas.

Para el 99% de los empresarios, que no son exportadores ni pueden fugar capitales, la dolarización trabó la expansión de sus negocios. Pero la oligarquía no resiente el poco crecimiento de la demanda interna, pues controla la mayor

parte de las exportaciones y puede fugar capitales hacia el exterior por miles de millones de dólares, como lo viene haciendo desde finales de los años noventa del siglo pasado.

La oligarquía se debilita políticamente

Aunque la oligarquía amplió su fortuna, su peso político en el Estado y en la sociedad fue disminuyendo hasta perder el control del Órgano Ejecutivo en 2009, cuando el FMLN ganó las elecciones presidenciales.

El FMLN tuvo su primera participación electoral en 1994, cuando quedó en segundo lugar, por encima de los partidos tradicionales, el PDC y el PCN, pero por debajo de ARENA, que obtuvo 39 diputaciones contra 21 del FMLN y ganó las elecciones presidenciales en la segunda vuelta electoral. ARENA también ganó en 207 municipios y el FMLN ganó en 15. Pocos meses después de las elecciones, la representación del FMLN en la Asamblea Legislativa disminuyó a 14, tras la salida de siete diputados y diputadas que se fueron a la derecha.

La salida de los diputados fue el inicio de una batalla política-ideológica que se libró en el FMLN casi hasta el año de la victoria presidencial (2009) entre un proyecto de izquierda y otro de derecha, lucha que se agudizó cuando otra corriente derechista, que se autoproclamaba renovadora pero que asumía posturas antisocialistas, controló la dirección del partido en los años 1997-2000. Incluso, cuando la corriente revolucionaria volvió a ser mayoría en la dirección, en el año 2000, tuvo que librar una lucha contra los remanentes de los «renovadores», muchos de los cuales crearon un partido en 2005 que se alió con ARENA en las elecciones de 2009 y luego se disolvió.

Sin embargo, pese a sus crisis interna, el FMLN comenzó a crecer y a ganar más diputaciones y alcaldías. Para 1997 obtuvo casi la misma cantidad de diputados y diputadas que ARENA (obtuvo 27 y ARENA 28) y ganó en más de 50 alcaldías, incluidas las de San Salvador y otras ciudades importantes del país. En lo adelante, la historia del FMLN sería la de un avance casi continuo, salvo en las elecciones presidenciales de 1999, cuando la corriente de derecha controlaba el partido. Los mayores empujes del FMLN, previo a la victoria electoral de 2009, ocurrieron en las elecciones legislativas y municipales de 2003, cuando por primera vez superó a ARENA en la votación nacional, y en

las elecciones presidenciales de 2004, cuando duplicó su votación llevando a Schafik Hándal como candidato.

Ante el avance del FMLN desde mediados de los años noventa, ARENA creó un frente de derecha, junto al PCN y al PDC, que le permitió aplicar el programa neoliberal. Pero ese programa y la corrupción pública y privada desgastaron a ARENA ante la población mientras el FMLN avanzaba conducido por su corriente revolucionaria. Además, a escala internacional, y sobre todo en América Latina, habían surgido nuevos gobiernos de izquierda y progresistas aliados del FMLN, mientras el imperialismo norteamericano se debilitaba a escala mundial, tras la derrota de sus principales planes (ALCA, Plan Puebla Panamá y control del mundo árabe y el Medio Oriente) y el avance de China y el BRICS.

El cambio de 2009: dualidad de poderes y reformas sociales

En ese contexto de debilitamiento del proyecto oligárquico y de creación de un entorno internacional más favorable para la izquierda, el FMLN ganó las elecciones presidenciales de marzo de 2009 con un presidente aliado pero sin contar con las condiciones jurídicas y políticas que le permitieran hacer cambios estructurales. Aunque la Constitución exalta el poder del pueblo, no establece la Constituyente como mecanismo para su propia transformación ni le da más protagonismo a la población que la posibilidad de votar en los comicios electorales. Quién aprueba las reformas constitucionales es la Asamblea Legislativa, con mayoría simple en una legislatura y la ratificación de una mayoría calificada en la siguiente legislatura.

La fase que se abrió tras la victoria electoral del FMLN se podría caracterizar como de dualidad de poderes. En 2009, la derecha conservaba mayoría en la Asamblea Legislativa y controlaba la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral y otras instituciones públicas importantes. El FMLN pasó a dominar, con algunas fuerzas aliadas, en el órgano Ejecutivo y mantuvo una importante presencia en la Asamblea Legislativa, pero como fuerza minoritaria frente al bloque de derecha. El FMLN tenía más peso social y ganó las elecciones en primera vuelta contra toda la derecha unificada. Pero la derecha conservaba un caudal electoral considerable.

En la mecánica de la dualidad de poderes, el ascenso del FMLN al Órgano Ejecutivo y su permanencia en él significan el ascenso político de las clases y capas sociales explotadas y oprimidas que anhelan mejorar sus condiciones de vida. Y el debilitamiento de ARENA significa el debilitamiento del poder de la oligarquía y el imperialismo norteamericano. En el FMLN se concentran las esperanzas de las clases y capas sociales que anhelan cambiar la realidad en favor de sus intereses pero que no tienen el poder necesario para acometer las transformaciones del Estado y abrirle paso a un proyecto revolucionario. Y en ARENA y en otros instrumentos de la oligarquía se concentran los intereses de esa clase social, que perdió peso en el Estado pero conserva un dominio considerable en áreas importantes de ese Órgano de Poder y todavía gravita ideológicamente sobre amplios sectores de la población.

La dualidad de poderes tenía que conducir a una agudización de la lucha de clases en el terreno político e ideológico, tal como ha ocurrido desde 2009. Romper dicha dualidad es la tarea esencial, tanto del proyecto revolucionario como del proyecto imperialista-oligárquico, pues la hegemonía política es una condición para la estabilidad de cualquier régimen político. Para la clase explotadora es la garantía de su proyecto económico y político. Y la misma deducción es válida para las clases explotadas y oprimidas con conciencia política.

En ese marco, y sin posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente que pudiera modificar la Constitución en un sentido favorable a los intereses del pueblo, el ascenso del FMLN al Órgano Ejecutivo no significaba el inicio de un proceso de transformaciones revolucionarias de la sociedad, sino de aplicación de un programa de reformas que derrotaran el neoliberalismo, mejoraran las condiciones de vida del pueblo y le dieran hegemonía política al proyecto revolucionario. Ya se sabe que reforma y revolución no se contraponen, salvo cuando la primera se estanca y no permita avanzar hacia la segunda. Pero no solo se trataba de hacer reformas, sino de lograr que la población se apropiara de ellas, las defendiera y elevara su conciencia política y su nivel de organización, condiciones indispensables para fortalecer y ampliar los espacios de poder de la izquierda y las fuerzas progresistas.

De manera que para el FMLN, el gobierno surgido de las elecciones de 2009 debía detener el programa neoliberal, crear las bases de un modelo económico

sustentado en los sectores productivos, redistribuir el ingreso en favor de los sectores de menos recursos, reducir el desempleo y la pobreza, mejorar la salud y la educación del pueblo así como el clima de seguridad, matar el miedo a la izquierda incubado en una franja importante de la población, ampliar y fortalecer los niveles de conciencia y organización popular, evidenciar ante la población los principales actos de corrupción de los gobiernos de ARENA y procurar que por lo menos algunos de ellos fueran enjuiciados, lograr una correlación en la Asamblea Legislativa que no obstruyera las principales acciones del Ejecutivo y desarrollar una política exterior soberana y de vínculos con los gobiernos de izquierda y progresistas. Esas eran las principales tareas del gobierno del FMLN.

El éxito de ese programa le permitiría al FMLN avanzar en los siguientes procesos electorales e ir creando una correlación política cada vez más favorable para el proyecto revolucionario. Para el FMLN estaba claro que el momento que se vivía en el país no era de derrota del capitalismo, sino de liquidación del neoliberalismo y de construcción de una hegemonía de izquierda.

La crisis económica heredada y el contenido de las reformas

ARENA dejó un país con un aparato productivo debilitado, una fuerte dependencia de importaciones de alimentos y de remesas familiares, una pobreza que afectaba al 40% de los hogares y unos indicadores de empleo, salud, educación y vivienda muy deplorables. También dejó un país con una grave vulnerabilidad ambiental, un agobiante clima de inseguridad y un Estado débil, con menos propiedades, sin política monetaria ni cambiaria y altamente corrompido, pero con mucho peso de la derecha en sus diferentes instituciones. Además, la crisis internacional afectó la economía nacional. En 2009 el PIB disminuyó -3.1% (todos los sectores tuvieron producción negativa), las exportaciones bajaron -17%, cayó la inversión privada, pues el crédito de los bancos a las empresas disminuyó -65 por ciento, se perdieron 27 000 empleos entre mayo de 2008 y mayo de 2009 y el déficit del gobierno llegó casi al 6% del PIB.

En ese contexto, del gobierno debía tomar medidas que mitigaran los efectos de la crisis e iniciar programas sociales que beneficiaran a la población

con menos recursos. Un hecho que ayudó a emprender esa labor fue la crisis que sobrevino en ARENA tras su derrota electoral, cuando 14 de sus 32 diputados crearon otro partido llamado Gran Alianza republicana (GANAR). La división de ARENA modificó la aritmética en la Asamblea Legislativa y le permitió al FMLN lograr una correlación favorable para que la Asamblea aprobara algunas medidas demandadas por el gobierno. El debilitamiento de ARENA también originó una fractura en el bloque de derecha que había apoyado el programa neoliberal. Desde entonces ARENA no ha podido recomponer la firme alianza que tuvo con el resto de la derecha.

Para intervenir en la economía el Estado solo disponía de política fiscal, del crédito de la banca pública (apenas el 6% del total) y de los servicios que ofrecen sus empresas que sobrevivieron a las privatizaciones de ARENA.

El primer gobierno del FMLN inició los siguientes programas sociales que han mejorado con el segundo gobierno:

- a) **Ciudad Mujer:** Se brinda atención en salud sexual y reproductiva, educación colectiva y atención infantil, así como servicios de atención a la violencia de género y autonomía económica. Hay sedes de Ciudad Mujer en 6 departamentos del país, donde han sido alrededor de millón y medio de mujeres.
- b) **Dotación de Paquetes Escolares:** Beneficia a 1.3 millones de estudiantes de parvularia a bachillerato.
- c) **Alimentación y Salud Escolar:** El Programa cubre 1 millón de niñas y niños.
- d) **Ayuda Temporal al Ingreso (PATI):** Beneficia a 67,000 jóvenes de 16 a 24 años.
- e) **Comunidades Solidarias Urbanas y Rurales:** Se lleva a cabo en 412 asentamientos urbanos de 25 municipios, donde se ofrecen bonos de educación, se da atención integral a las personas adultas mayores y se mejoran las capacidades para que puedan obtener un empleo. En el área rural se realiza en 100 municipios en pobreza extrema severa y alta.
- f) **Pensión Básica Universal:** Consiste en la entrega de 50 dólares al mes a 32 mil 400 personas adultas mayores en condiciones de pobreza y que no cotizaron a la seguridad social durante su vida laboral.

g) **Programa de Agricultura Familiar (PAF):** A casi medio millón de productoras y productores agropecuarios, se les entrega paquetes agrícolas de semilla de maíz y fertilizante y paquetes de semilla de frijol. Se realiza transferencia tecnológica para la producción sostenible de alimentos a 65 mil 631 de ellos.

También se inició una profunda reforma de salud mediante la cual se eliminó la «cuota voluntaria» en los servicios de salud, se crearon 575 Equipos Comunitarios de Salud (Ecos Familiares) y se aprobó la Ley de Medicamentos que reduce y controla el precio de éstos en un 40 por ciento. La dotación de medicinas en los centros de salud pasó de 50% en 2008 a un 80% en 2016, se aumentó la cantidad de establecimientos de salud (de 413 en 2008 a 815 en 2016), se construyen varios hospitales, se amplió la cobertura de parto hospitalario en el Sistema Nacional de Salud (de 43,7% a 98%), se creó el Programa de Lactancia Materna en los primeros 6 meses, para contribuir a la reducción de la mortalidad y desnutrición infantil. La reforma permitió ampliar la cobertura, reducir la mortalidad materna y la infantil, entre otros logros importantes.

Esos y muchos otros avances sociales le permitieron al FMLN ganar las elecciones presidenciales de 2014, objetivo estratégico esencial para continuar las transformaciones. También contribuyó a dicho triunfo la denuncia pública de la corrupción durante los gobiernos de ARENA, que asumieron tanto el presidente Funes, como la representación del FMLN en la Asamblea Legislativa y la dirección del partido. Y se sumaron otros hechos y circunstancias que afectaron a ARENA y favorecieron al FMLN.

El segundo gobierno del FMLN amplió los programas de paquetes escolares, alimentación escolar y pensión básica. También creó programas nuevos, como el de las computadoras para niñas y niños que estudian en escuelas públicas, el de Jóvenes con Todo, entre otros. También recuperó la empresa de energía geotérmica, que genera el 25% de la energía del país y que estaba en proceso de privatización cuando ARENA dejó el gobierno. También creó Banca Mujer y ha profundizado la reforma de salud y los logros en educación.

Los programas sociales se financian con ingresos públicos provenientes de un mayor gravamen a las rentas de las grandes empresas y a los bienes de

consumo no esenciales. El Estado también se fortaleció con la creación de un nuevo banco público, la recuperación de la empresa geotérmica y la creación de muchas unidades de salud, farmacias especializadas, hospitales, sedes de Ciudad Mujer y otras instituciones públicas. O sea, han fortalecido la propiedad del Estado y se han tomado medidas tributarias progresivas (mayor pago por la renta empresarial y liberalización del pago de renta a 80,000 personas asalariadas). Y lejos de continuar con la apertura de mercado se aprobó una Ley de Medicamentos que obligó a la reducción de los precios de más de 7 mil medicinas.

Los gobiernos del FMLN detuvieron el programa neoliberal y han fortalecido al Estado en el ámbito económico, pero lo hecho por los gobiernos de ARENA solo se ha revertido en una pequeña parte. Derrotar el neoliberalismo seguirá siendo una tarea pendiente incluso para el tercer gobierno del FMLN que habrá de surgir en 2019. Lo mismo ocurre con el nuevo modelo económico, cuyas bases financieras y tecnológicas no se han desarrollado. La economía sigue girando alrededor de los servicios comerciales y financieros.

Sala de lo Constitucional: instrumento contra al gobierno y el FMLN

Desde el primer gobierno del FMLN, la oligarquía y el imperialismo encontraron en cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional elegidos en julio de 2009, el instrumento que necesitaban para desestabilizar la gestión gubernamental y ayudar a ARENA a recuperarse de la ruptura que había sufrido tras el surgimiento de GANA. Al perder el control sobre los órganos Ejecutivo y Legislativo, donde el FMLN comenzó a hacer alianzas con otros grupos de derecha, la oligarquía se atrincheró en la Sala de lo Constitucional, cuyos fallos son de obligatorio cumplimiento, incluso aunque violen la propia Constitución.

La Sala de lo Constitucional tiene cinco magistrados propietarios y cinco suplentes, pero las decisiones se toman con un mínimo de cuatro propietarios. Y resulta que desde julio de 2009 hay cuatro que coinciden en casi todas las decisiones, el 90% de las cuales han afectado al gobierno y al FMLN, y han beneficiado a ARENA y a los grupos oligárquicos, de quienes reciben un apoyo público cada vez más entusiasta.

En los años 2009-2011, los cuatro magistrados aliados emitieron fallos que les generaron apoyo en importantes sectores sociales, incluso en sectores

progresistas, quienes creyeron que esos magistrados tenían «buenas intenciones» y no respondían a intereses políticos partidarios. Un fallo que les generó simpatía en la población fue el que emitieron contra un periódico de derecha que publicó fotografías de un menor sentenciado a siete años de internamiento por haber asesinado a un estudiante. Los magistrados también anularon la legalidad de dos partidos de derecha que no lograron los votos necesarios para mantener su personalidad jurídica y sus nombres. Otro fallo que le gustó a ciertos sectores, y que es violatorio de la Constitución, fue el que permite las candidaturas no partidarias. Desde ese momento, la Sala comenzó a emitir resoluciones que obligaban a cambiar aspectos constitucionales, o sea, con algunas de sus decisiones asumió el papel que le compete a la Asamblea Legislativa.

Pero a partir del año 2012, cuando el FMLN asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa y lograba acuerdos con partidos de derecha minoritarios para facilitar algunas acciones del gobierno, los magistrados mostraron su agenda política para desestabilizar al gobierno, afectar al FMLN y favorecer a ARENA. Desde entonces, la Sala ha emitido 10 fallos que afectaron las finanzas del gobierno y protegieron los intereses empresariales, sobre todo de las empresas evasoras de impuestos, contra las cuales se había aprobado tributos que la Sala anuló. El siguiente cuadro muestra algunas de esas resoluciones.

Algunos fallos de la Sala de lo Constitucional contra las finanzas públicas

Medidas	Fecha	Costo (mill \$)
1. Anulación impuesto 1% a las ventas de las empresas que declaran pérdidas	15 nov 2013	90
2. Anulación impuesto al Fondo para la Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito	7 feb 2014	40
3. Anulación impuesto a las Llamadas Telefónicas del Exterior	1 abril 2014	80
4. Anulación Ley de Amnistía Tributaria, que daba facilidades a contribuyentes morosos	28 nov 2014	300
5. Anulación de la venta de bonos por 900 millones	13 julio 2016	900
Total		1,410

Los magistrados también han anulado más de 10 decisiones del Órgano Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa y varias elecciones de funcionarios de la Corte de Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia y de otras instituciones públicas, por supuestamente estar vinculados al FMLN, como si la militancia partidaria fuera un impedimento para ocupar cargos públicos.

La Sala llegó al extremo de anular un sistema de transporte público de pasajeros en el área metropolitana de San Salvador, alegando errores en el otorgamiento de la concesiones a las empresas de buses. Decenas de miles de personas que se transportaban diariamente por ese sistema se vieron afectadas por la decisión de la Sala, que busca anular uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno y generar malestar en la población, que en general no reacciona contra los fallos de la Sala, salvo un sector organizado del movimiento popular.

Los magistrados hasta le impidieron al ex presidente Mauricio Funes tomar posesión del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), bajo el alegato de que no fue elegido para esa institución, a pesar de que las normas del PARLACEN establecen que los ex presidentes ingresan automáticamente como diputados propietarios. Al poco tiempo de tomar esa medida, la Fiscalía General de la República la emprendió contra Funes, quien no pudo hacer uso del fuero y tuvo que abandonar el país. La persecución contra Funes es parte de la estrategia imperial de golpear a la izquierda en el orden moral, para generarle desgaste político. Es en esa lógica que hay que entender la resolución contra Funes emitida por los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Los magistrados de la referida Sala han arremetido contra todos los órganos de poder. Y lo han hecho sobre todo cuando la Asamblea Legislativa logra elegir para presidir dichos órganos a personas vinculadas al FMLN o a algunos partidos minoritarios de la derecha. Los magistrados han golpeado hasta a la propia Sala, cuando anularon la decisión de la Asamblea Legislativa de trasladar hacia ella a dos magistrados electos en 2012, decisión que hubiera quebrado el poder de los cuatro. Con mucha astucia, los cuatro se protegieron y anularon la designación de dos que les quitaría el poder político

En fin, el llamado grupo de los cuatro ha golpeado el programa del gobierno y ha actuado decididamente para darle poder a ARENA y debilitar al FMLN. Pero pese al bloqueo de la Sala, el primer gobierno del FMLN logró buenos resultados para el pueblo y, junto a una correcta estrategia del FMLN, garantizó la victoria de 2014.

El plan del enemigo tras la victoria del FMLN en 2014

Tras la segunda derrota de ARENA en las elecciones presidenciales, la dirección de ese partido y la Embajada de Estados Unidos comenzaron a diseñar un plan que se aplicó con más claridad cuando ARENA logró recuperarse de la derrota y lograr 35 diputaciones en las elecciones para la Asamblea Legislativa de marzo de 2015. Con esa cuota en la Asamblea, ARENA impide las decisiones que requieren mayoría calificada de dos tercios, la elección de la mayoría de funcionarios de segundo grado, la aprobación de préstamos, bonos y donaciones, entre otras. Y si el FMLN logra acordar con los otros partidos algunas decisiones que requieren mayoría simple (como la aprobación de algunos tributos), ARENA recurre a la Sala de lo Constitucional para que las anule. De manera que desde el año 2015, el Congreso tiene más dificultades para imponer las medidas que requiere el gobierno para profundizar las transformaciones.

El plan de ARENA y la Embajada tiene los siguientes puntos:

1. Bloquear las finanzas públicas: ARENA casi nunca vota por el Presupuesto y muchas veces ha impedido que la Asamblea Legislativa apruebe préstamos y la emisión de bonos. Y si algún tributo se aprueba, gente vinculada a ARENA y al principal gremio de la oligarquía, la ANEP; recurren a la Sala para procurar su anulación. Esas decisiones contra los ingresos públicos van acompañadas de una campaña sistemática de los dirigentes de ARENA y de la ANEP así como de los medios de prensa de la derecha, para tratar de convencer a la población de que los problemas financieros del gobierno no se deben a la falta de ingresos, sino al exceso de gastos y a la corrupción pública, aunque nunca hayan denunciado algún caso de corrupción. La persecución contra el ex presidente Funes procura alimentar la idea de que los gobiernos del FMLN han sido muy corruptos. Y al vincular a Funes con la

corrupción se intenta desvalorizar sus denuncias contra los gobiernos de ARENA y generar la sensación de que la izquierda no defiende valores morales. Porque no solo se trata del ataque al ex presidente, sino a funcionarios del gobierno actual y a dirigentes del FMLN calumniados hasta por un senador de Estados Unidos.

2. Bloquear el plan de seguridad pública: ARENA y la Embajada piensan que si el plan da frutos y la criminalidad disminuye y comienza a ser derrotada, el pueblo le daría más respaldo al gobierno y al FMLN. La forma de bloquear el plan es atacando las finanzas públicas y estimulando las acciones de grupos criminales cuyas armas provienen principalmente de Estados Unidos.
3. Generar malestar en la población, sobre todo si el gobierno, ante la precariedad financiera que arrastra desde finales de 2015, retrasa algunos pagos, recorta la inversión social o toma otras medidas impopulares por el lado de los ingresos y de los gastos.
4. Golpear al FMLN, sacándole funcionarios de algunos cargos importantes. Esa tarea la asumieron los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, que impidieron la continuidad de un magistrado del FMLN en el Tribunal Supremo Electoral y expulsaron a otro que fue elegido por la Asamblea Legislativa. Los cuatro magistrados también anularon a varios de la Corte de Cuentas y a uno del Consejo Nacional de la Magistratura. Junto a las acciones de los magistrados, la embajadora de Estados Unidos presiona a algunos partidos minoritarios de derecha para que no se alíen al FMLN en la Asamblea Legislativa. En este componente del plan, también hay que señalar, la campaña de desprestigio contra algunos dirigentes del FMLN y ciertos funcionarios del gobierno.
5. Utilizar los hechos internacionales que fuesen convenientes contra el gobierno y el FMLN. En este punto, los medios de prensa de la oligarquía convirtieron la crisis de Venezuela en un hecho casi de la vida nacional. También utilizan a su favor el avance de la derecha en Argentina y Brasil.
6. Crear una crisis institucional que pudiera dar al traste hasta con la continuidad del gobierno. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional, como dijimos antes, han emitido fallos contra importantes órganos de poder y continuamente desafían al gobierno con fallos absurdos desde la lógica jurídica pero bien atinados desde la lógica política, para que el gobierno

desacate algún fallo y desate una feroz oposición de la prensa de derecha, los gremios de las grandes empresas, los políticos de derecha y hasta el gobierno de Estados Unidos, cuyo injerencia en la vida nacional no guarda mucha formalidad.

Ese plan va para tres años de haberse puesto en marcha, pero al cerrar el 2017 se puede decir que el gobierno y el FMLN lograron derrotarlo en sus partes fundamentales, por las siguientes razones:

- a) Se impidió que las finanzas públicas colapsaran, a pesar del bloqueo de ARENA (a tributos, venta de bonos, préstamos y donaciones) y de la Sala de lo Constitucional (anulación de la reforma al Fideicomiso de Pensiones, inconstitucionalidad del Presupuesto Nacional y bloqueo a algunos tributos). La reforma de pensiones y el aumento de la recaudación fiscal (8.3% hasta octubre) le permitieron al gobierno solventar sus principales necesidades financieras.
- b) Aunque el enemigo creó situaciones que generaron algunos descontentos (retrasos en pagos a proveedores, recorte del escalafón de salud y otras), no se generó un movimiento de protesta en las calles, aunque hubo algunos brotes pequeños, focalizados e inducidos. Los programas sociales han continuado y algunos se han ampliado, como el de paquetes escolares y el de pensión. También han surgido programas nuevos, como el de computadoras para niños y niñas que estudian en escuelas públicas, los que lleva a cabo el Instituto Nacional de la Juventud, entre otros.
- c) Pese a la precariedad de las finanzas públicas, el Plan de Seguridad ha tenido éxitos. Los homicidios disminuyeron en un 27% y en San Salvador bajaron a la mitad.
- d) El FMLN mantuvo su capacidad de alianza en la Asamblea Legislativa. Logró derrotar a ARENA en muchas iniciativas, donde ese partido se quedó solo: aprobación del Presupuesto, reasignación de fondos del presupuesto, elección de funcionarios de segundo grado, etc.
- e) La Sala de lo Constitucional no logró quebrar la institucionalidad, pese a sus múltiples acciones desestabilizadoras: anulación de diputados y diputadas suplentes, magistrados de la Corte de Cuentas y magistrados del TSE, atentado contra el sistema de transportes del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), inconstitucionalidad del Presupuesto Nacional, entre

otras. Todos los fallos de la Sala han sido acatados, incluidos los que quebrantan el orden constitucional, pues el gobierno y el FMLN no pueden dar solo una batalla contra esa estructura de poder, que sería una batalla superior a sus fuerzas. El equilibrio estratégico en el sistema político impide que la Sala de lo Constitucional llegue a deponer al gobierno. Un hecho como ese generaría una crisis de tal ferocidad que sus propios atizadores no podrían soportar.

- f) La economía cerró bien en 2017, con mayor crecimiento del PIB, aumento de las exportaciones y estabilidad de precios (inflación de 1.83% hasta noviembre).

A lo anterior hay que agregar una mejoría en el entorno internacional, tras las victorias del FSLN en Nicaragua y del PSUV en Venezuela, el avance de la izquierda en Honduras, pese al fraude, la superación de los obstáculos legales para la candidatura de Evo Morales en Bolivia y la derrota del imperialismo en Siria, para solo mencionar algunos hechos relevantes.

La necesidad de la hegemonía

El avance del FMLN no se tradujo en una hegemonía de izquierda que permita aplicar un programa de transformaciones estructurales en todos los órdenes. Hay cambios importantes sobre todo en el terreno político, que arrancaron con los Acuerdos de Paz y se han profundizado desde 2009, pero siguen intactos el modelo económico y el sistema de explotación. Además, hay un equilibrio entre la izquierda y el proyecto de ultraderecha que representa ARENA.

La política neoliberal no ha continuado y el Estado está apoyando a los sectores populares, pero el neoliberalismo no ha sido derrotado ni se ha creado un modelo económico y político al servicio de los sectores populares.

El poder económico del capital nacional y extranjero sigue siendo muy grande en el país. Además, su ideología gravita en segmentos importantes de la población, dado su control de los principales medios de comunicación, de universidades, iglesias y otras instituciones creadoras de ideología. También hay que destacar que el peso político del gobierno de Estados Unidos en la vida nacional no ha disminuido.

El equilibrio en el sistema político le dificulta al FMLN (aunque no lo impide) avanzar en la transformación económica y social. Y si no se avanza en lo económico-social no se puede romper el equilibrio político y lograr la hegemonía de la izquierda. Por lo tanto, romper ese equilibrio es uno de los principales retos del FMLN para seguir gobernando y cambiando el país. Así fue concebido en los documentos programáticos aprobados en el Congreso del partido realizado a finales de 2015, donde se establecieron siete objetivos fundamentales para los próximos años:

- a) Construir un país en paz derrotando las mafias, el crimen organizado, las pandillas y otras formas de delincuencia.
- b) Erradicar el neoliberalismo y fortalecer al Estado, la propiedad social, mixta, social e individual, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas.
- c) Sustituir el actual modelo económico comercial-financiero excluyente por un modelo sustentado en una economía productiva y solidaria, que garantice la soberanía y seguridad alimentaria, la canasta básica ampliada y el desarrollo socioeconómico sustentable en beneficio de las mayorías.
- d) Profundizar la democracia política, económica, social y cultural en un marco de mayor participación popular, en la búsqueda de una sociedad menos desigual, con equidad entre hombres y mujeres y con la sustentabilidad ambiental como garantía del buen vivir.
- e) Combatir la pobreza con vistas a su erradicación.
- f) Alcanzar y profundizar la hegemonía política, ideológica, económica- social y cultural del proyecto revolucionario.
- g) Reivindicar los derechos económicos, sociales y políticos de los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior.

El logro de esos objetivos no significaría la creación de una sociedad socialista, pero sí implicarían una mejoría sustancial en las condiciones de vida del pueblo, un avance importantes de la propiedad social, la construcción de un Estado económicamente fuerte y bajo conducción de la izquierda y un proyecto revolucionario con una solidez que le permita seguir avanzando en la transformación revolucionaria de la sociedad y en la liquidación de los grupos oligárquicos.

El FMLN puede realizar una revolución social mediante rupturas parciales sucesivas con el sistema capitalista. Para ello es fundamental seguir

avanzando en las reformas iniciada en 2009, ampliar los vínculos con la población, elevar la conciencia política del pueblo, aislar a la oligarquía y a sus instrumentos de lucha mediante las alianzas con los sectores afectados por el programa neoliberal, fortalecer al partido y seguir mejorando el desempeño del gobierno.

El imperio contraataca

Orlando Núñez *

Introducción e hipótesis de trabajo

Desde que nos independizamos de Europa hemos vivido políticamente un proceso constante de revoluciones y contrarrevoluciones de diferente envergadura, unas luchando contra las injusticias del orden establecido y otras a favor de la restauración de dicho orden.

Por revolución entendemos un proceso que se inicia a partir de un discurso y una gran voluntad política, encarnada en organizaciones y acciones encaminadas a cambiar, por la fuerza y/o la hegemonía, clases y regímenes políticos, sistemas socioeconómicos —y, en menor medida valores de la civilización patriarcal en que hemos vivido hace ya varios milenios.

La primera revolución de cuerpo entero que nació y que sobrevive hasta ahora es la revolución burguesa y capitalista, incubada entre los siglos XVI y XVII y que a partir de entonces no ha cesado su fase expansionista; es una revolución en marcha a pesar de las crisis generadas por sus fabulosos impulsos tecnológicos, competencia entre empresas y guerras entre naciones; crisis que de no progresar hacia otro sistema se convierten en oportunidades funcionales al propio sistema. El carácter expansivo de las revoluciones burguesas ha sido posible por un elemento que irrumpe a escala mundial en el siglo XVI llamado imperialismo, encargado de crear condiciones favorables para el capital y el mercado, así como velar y restaurar el orden burgués capitalista, allá donde se hubiera alterado.

La segunda revolución, nacida en el seno de la primera es la revolución socialista, la que tuvo su primera gran experiencia a lo largo de todo el siglo XX e inicios del siglo XXI; la misma logró desplazar a las burguesías nacionales donde se llevó a cabo y fortalecer el papel del Estado como organizador de las transformaciones y síntesis de las contradicciones del sistema imperante y de las relaciones internacionales. En todo este tiempo la revolución transitó tanto

* Orlando Núñez es director Centro para el Desarrollo Rural y Social Promoción, Investigación y Desarrollo (CIPRES) de Nicaragua.

por súbitos cambios violentos, como lo hizo la revolución burguesa capitalista, como por cambios llevados a cabo en forma pacífica y progresiva, también utilizados por la revolución burguesa.

Un punto importante a destacar es que cada revolución se hace en contra del sistema anterior, tanto a nivel nacional como a nivel internacional: la revolución capitalista, contra el régimen feudal y los imperios anteriores; la revolución socialista, contra el régimen capitalista, los imperios occidentales y el imperialismo como fenómeno mundial en sus expresiones militares, políticas, económicas y culturales. De aquí se desprende que una revolución socialista no estará consolidada si no altera la correlación de fuerzas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

En este momento asistimos a un contraataque del imperialismo norteamericano, que en América Latina y el Caribe nació con la Revolución Cubana en 1959 y hoy se apresta con la misma saña a erradicar todo movimiento, por muy modesto que sea, emprendido desde la otra acera de sus intereses. Y esta ofensiva no se manifiesta solamente con aquellos regímenes de orientación socialista o socialdemócrata, sino contra aquellas pretensiones de las clases políticas nacionales para completar la revolución burguesa. Cuando decimos que el imperio contraataca es porque los aparatos militares, políticos y económicos del imperialismo o régimen mundial de las corporaciones, está poniéndose al día en suelo latinoamericano caribeño, paralela y simultáneamente como lo está haciendo en el resto del mundo (Medio Oriente, Euro-Asia y Asia del Pacífico). Un contraataque contra los regímenes progresistas e izquierdistas, pero también contra los regímenes liberales y neoliberales que no han aceptado *la nueva fase del imperialismo capitalista, como es la de borrar las fronteras nacionales que impiden al capital imperialista su acumulación infinita y donde no quede más que un solo gobierno mundial y unas cuantas instituciones y empresas mundiales encargadas de disciplinar las conductas colectivas*. La diferencia está en que así como los ricos ya no se fían de confiar el gobierno a una burocracia civil o militar, haciéndose cargo ellos mismos de ocupar la silla presidencial y otras instituciones (Trump en Estados Unidos, Piñera en Chile), tampoco el Estado-imperial y las corporaciones económicas imperialistas se fían del control de las oligarquías locales (clanes minoritarios que controlan la vida nacional) para

mantener y hacer progresar el orden interno a favor del orden imperial. Una contraparte que funciona a la altura de esta pretensión sería el poder de la Iglesia Católica, cuyas leyes y rituales funcionan en cada país como si estuvieran en Roma. Cada vez más, las leyes e instituciones estadounidenses valen al interior del resto de países; es como que si lo político se pusiera al día de la realidad económica imperante.

A partir de este razonamiento y en base a las experiencias nacionales sostendremos como principal hipótesis de trabajo que *es el imperialismo capitalista el adversario principal de los pueblos nacionales*, pues tal como están las cosas ninguna oligarquía, cada vez menos nacional, cuyos intereses todavía están tejidos en varios campos al interior de la nación, está en capacidad de sobrevivir o resistir, ya sea a la dinámica de acumulación del capitalismo mundial, como al hostigamiento de aquella fuerza social vinculada a una opción de orientación nacionalista o socialista. Esta hipótesis, cuya expresión histórica repasaremos en este artículo, puede corroborarse fácilmente a partir de aquellas experiencias donde se constata que frente a cualquier cambio nacional fueron las fuerzas del imperio las responsables y encargadas directamente de golpear a los regímenes y clases insubordinadas.

Este artículo, insertado en una antología de las experiencias latinoamericanas caribeñas de gobiernos progresistas y de izquierda, así como del impacto en ellas de la estrategia desestabilizadora desarrollada por el imperialismo y las oligarquías locales, está dedicado al proceso sandinista en Nicaragua; un fenómeno protagonizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quien cumpliendo casi 60 años de experiencia (1960-2018) ha pasado por casi todos los momentos históricos recorridos por los países que ensayaron la transición hacia un nuevo sistema socioeconómico llamado socialismo. Por lo dicho anteriormente y por demanda de los organizadores de la antología, el análisis de la experiencia nicaragüense lo haremos desde una perspectiva latinoamericana. Pero hay otra razón, como es que el campo de batalla de las revoluciones es tanto nacional como internacional.

A continuación anotamos los diferentes momentos de la Revolución Sandinista, cuya comprensión incluye no solamente la relación con los Estados Unidos, sino también con el quehacer político latinoamericano y caribeño, pues, como sabemos, la Revolución Sandinista, al igual que el resto de procesos

políticos nacionales, no se explica fuera del contexto latinoamericano caribeño, pero mucho menos se explica sin la presencia y accionar de los Estados Unidos de América.

Antes de enlistar los acontecimientos contemporáneos de la Revolución Sandinista quisiera señalar como antecedente tres grandes intervenciones militares de las fuerzas norteamericanas desde que somos una república independiente, a saber: a) la intervención militar norteamericana a mediados del siglo XIX (1856-1857), cuando un grupo de filibusteros apoyados por el gobierno norteamericano y las élites libero-conservadoras locales se tomaron Nicaragua, pusieron a un presidente gringo que restableció la esclavitud, el que fue derrotado por fuerzas centroamericanas y fusilado en Honduras; en esa época las fuerzas patrióticas no fueron acusadas de comunistas ni de terroristas, pero sí de oponerse a la política expansionista de los Estados Unidos; b) la intervención militar norteamericana durante el primer tercio del siglo XX (1912-1933), cuando el gobierno gringo se hizo cargo de frustrar la revolución liberal (1893-1909) y finalmente administrar durante más de dos décadas el gobierno y la política de Nicaragua (1912-1933), hasta que las tropas extranjeras fueron adversadas y expulsadas por una lucha guerrillera encabezada por el general Sandino (1927-1934); antes de la intervención gringa el gobierno de Nicaragua de afiliación liberal fue acusado de buscar apoyo en otros países para construir el Canal Interoceánico; a su vez, el líder de la lucha por la soberanía (Sandino) fue acusado de bandolero y asesinado por mandato de la embajada norteamericana; c) la intervención de los Estados Unidos a finales del siglo XX, ocasión en que organizó, entrenó y financió a la contrarrevolución nicaragüense para luchar contra el gobierno revolucionario sandinista (1980-1990), época que terminó con el desarme de las tropas contrarrevolucionarias y la posterior derrota electoral del Frente Sandinista, quien era acusado de comunista. Al menos estas tres intervenciones militares que suman varios quinquenios muestran que el análisis de las contradicciones y limitaciones de las fuerzas nacionales, no son suficiente para explicar lo sucedido.

Ciertamente que Mesoamérica y el Caribe presentan un nivel de intervención militar directo mucho más pronunciado que en América del Sur. Sin embargo, la presencia de los aparatos de inteligencia gringa, las bases militares gringas

instaladas en el subcontinente, las agencias internacionales gringas, los grandes medios de comunicación gringos, las medidas de política exterior del gobierno norteamericano, han sido y siguen siendo decisivos en los acontecimientos políticos nacionales. Piénsese por ejemplo, en el Plan Cóndor que apuntaló las dictaduras militares en Suramérica, la preparación militar gringa en Panamá de las fuerzas armadas nacionales, las políticas neoliberales impuestas por el gobierno gringo, los golpes de Estado organizados por la CIA, los tratados comerciales, las políticas de desestabilización de gobiernos progresistas, etc.

Momentos de la Revolución Sandinista

La Revolución Sandinista que tiene sus antecedentes en la guerra de Sandino (1927-1934) y en la guerrilla sandinista (1961-1979), se ha mantenido cerca de 30 años y dura hasta nuestros días (1979-2018), ha pasado por diferentes momentos, que de una u otra manera han vivido los diferentes movimientos revolucionarios latinoamericanos y caribeños, pero que como dijimos anteriormente expresan la vida y obra de la revolución y de la contrarrevolución en el continente. Una revolución se define no solamente por sus acciones para hacer avanzar la historia, sino también por aquellas acciones encaminadas a resistir la embestida de sus adversarios nacionales y mundiales.

1. Nicaragua padeció una larga y sangrienta dictadura militar creada y apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, la dictadura de los Somoza (1934-1979). La mayoría de los países latinoamericanos y caribeños han padecido similares dictaduras. Uno de los rasgos de la dictadura somocista es que sus dictadores no murieron en la cama, sino a manos de patriotas (1956) y revolucionarios (1980), en este último caso, el dictador fue ajusticiado por un comando latino-americano-caribeño.
2. En Nicaragua se desencadenó una lucha revolucionaria, en el campo y en la ciudad, la que inspirada por el triunfo y la orientación socialista de la Revolución Cubana (1959), arrancó en los años sesenta (1961) y culminó con el triunfo militar del Frente Sandinista (1979). La lucha armada ha sido durante los últimos 50 años, el primer instrumento de la revolución latinoamericana y caribeña, momento que culmina cuando las guerrillas colombianas empiezan el proceso de desarme (2017-2018).

3. En Nicaragua se vivió una década de cambios revolucionarios de orientación socialista (1979-1990), emprendidos en medio de una guerra de agresión militar por parte de los Estados Unidos, llamada Guerra de Baja Intensidad, caracterizada por la combinación de fuerzas locales y de fuerzas norteamericanas, engendrando una guerra de guerrillas de carácter contrarrevolucionario que fustigó y neutralizó las transformaciones sociales, al costo de miles de jóvenes muertos en los campos de batalla. Las medidas implementadas por la Revolución Sandinista fueron similares a la de los gobiernos socialistas del siglo XX, cuando el PIB estatal superó el 90%. Es obligado señalar la solidaridad latinoamericana y mundial que en los diferentes momentos y campos de la lucha tuvo la Revolución Sandinista, tanto por parte de gobiernos como de organizaciones de solidaridad, sin la cual la misma no hubiera sido posible.
4. El Frente Sandinista sufrió una derrota electoral en 1990 que inició un período de 17 largos años de restauración conservadora, en que las fuerzas sandinistas pasaron a la oposición (1990-2006). En este período, mientras el pueblo nicaragüense padecía las políticas neoliberales, las fuerzas sandinistas se fogueaban, desde abajo, en una encarnizada lucha contra gobiernos contrarrevolucionarios apoyados por los Estados Unidos. A pesar del triunfo militar, la Revolución Sandinista opta por la democracia electoral, método que será emprendido posteriormente por la mayoría de los movimientos de izquierda latinoamericana y caribeña.

Gracias a la correlación de fuerzas heredada por la Revolución Sandinista, el Frente Sandinista logra tres acuerdos con el nuevo gobierno: la Constitución, el Ejército y la Reforma Agraria campesina, lo que permitió la recuperación de las fuerzas revolucionarias, desgastadas por la guerra, la intervención y la derrota electoral. El Frente Sandinista estaba inhibido de tomarse el gobierno por la fuerza, pero sí pudo utilizar su poder de veto a la gobernabilidad, sobre todo por una hegemónica fuerza popular que ocupaba las calles y campos del país.

5. Tres intentos fallidos por mantener y recuperar el gobierno por los votos y cuyas derrotas electorales, reconocidas por el Frente Sandinista (1990-1996-2001), contribuyeron a alimentar una política de desprestigio que llegaba tanto del lado de la derecha como de la izquierda mundial. Posteriormente,

los diferentes movimientos políticos de la izquierda latinoamericana caribeña que logran acceder al gobierno por los votos, también sufrieron derrotas electorales. Quiero recordar que las victorias y derrotas nacionales de ambos bandos no han significado ganar con el 100%, pero tampoco perder con el 100%, lo que implica que en ningún momento las posibilidades de la revolución o de la contrarrevolución están extinguidas. Esto es más cierto para la derecha, pues su principal fuerza contrarrevolucionaria está en los Estados Unidos.

6. Tres victorias consecutivas por parte del Frente Sandinista (2006-2011-2016), en las que progresivamente aumentaba su porcentaje de votos, lo que permitió continuar en la medida de lo posible con las políticas de la década revolucionaria. Al igual que pasó con otros movimientos revolucionarios latinoamericanos-caribeños, las victorias electorales ganadas limpiamente son, cada vez más, desconocidas por la derecha continental y el imperialismo norteamericano. Vale la pena anotar que las victorias electorales por parte de un gobierno progresista no han tenido la legitimidad que tienen las fuerzas del orden, en parte debido a la aplastante propaganda de los medios internacionales controlados por un pensamiento y una militancia de derecha, en parte por una escéptica postura de lo que ha quedado de la izquierda que mantiene una crítica mayor contra los gobiernos progresistas o de izquierda que frente a los gobiernos de derecha.

Hoy, el Frente Sandinista de Liberación Nacional gobierna a través de una coalición denominada Unida Nicaragua Triunfa, en la cual participan movimientos políticos de todos los signos posibles. Junto a Nicaragua, se mantienen en el gobierno diversos movimientos de izquierda, a saber, Cuba, El Salvador, Venezuela y Bolivia; el resto han perdido el gobierno por los votos o por golpes de Estado. Como puede verse, la soberanía nacional, la democracia representativa inclusiva, así como la restitución de derechos básicos para los marginados del sistema, sobre todo en materia de justicia social, siguen siendo las principales banderas de la izquierda latinoamericana caribeña y que la derecha local e imperial quiere arriar.

Un primer balance o una primera constatación es la terquedad de las posibilidades. Fue posible que después del asesinato y desmovilización de las fuerzas de Sandino y a pesar de una férrea dictadura militar, resurgiera el

sandinismo y alcanzara un triunfo militar. Fue posible una revolución armada aún después de la Revolución Cubana y de las reformas a la política exterior norteamericana. Fue posible resistir militarmente al imperialismo durante 10 años en una desgastadora guerra de baja intensidad. Fue posible recuperar el gobierno por los votos, después de haber perdido tres elecciones seguidas y teniendo en contra a todas las fuerzas políticas conservadoras (el capital, la iglesia, los medios de comunicación, una mayoría ciudadanía liberal y neoliberal). Fue posible retomar las políticas sociales, después de casi dos décadas de neoliberalismo. Fue posible recuperar y alcanzar un nivel de estabilización económica y política, con unas cuentas nacionales y una restitución de derechos ejemplares a nivel del continente. Fue posible mantener una seguridad ciudadana y una contención del narcotráfico y la delincuencia callejera. Fue posible un entendimiento con prácticamente todas las fuerzas políticas, ideológicas y económicas, con las cuáles nos habíamos enfrentado anteriormente. Fue posible construir un proyecto de unidad nacional para defender la soberanía nacional.

Claro está que nada de eso ha sido suficiente para contener la ofensiva del gobierno de los Estados Unidos, aun cuando los partidos de la derecha, liberal, conservadora y neoliberal, hayan colapsado o se hayan pasado al campo de la soberanía nacional liderada por el Frente Sandinista.

Dicho esto quisiéramos hacer un recuento histórico que permita un análisis comparativo entre los diferentes procesos de lucha y de cambio en América Latina y el Caribe, sean de carácter progresista o de izquierda, así como su enfrentamiento con las fuerzas desestabilizadoras del imperialismo y las oligarquías locales. Proceso que se encuentra en marcha y cuyo desenlace se mantiene en un equilibrio crítico, pues la historia ha sido terca en ambas direcciones.

Antecedentes de la revolución latinoamericana y caribeña

A partir de la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII y después de cada revolución triunfante o derrotada aparece la tesis de que se trata de la última revolución y que a partir de entonces la historia continuaría por un camino evolutivo al que llamaron progreso. En estos últimos doscientos años, dos tipos de revolución acapararon el protagonismo social, a saber, la revolución

burguesa y la revolución socialista, con cierto matiz intermedio, correspondiente a los procesos de cambio socialdemócratas.

La verdad es que a pesar de las crisis y de la hegemonía del capital sobre el trabajo, centenares de revoluciones de ambos signos han continuado apareciendo, en medio de triunfos y retrocesos. Entre las variables comunes que atraviesan los distintos fenómenos revolucionarios se encuentran, a) un beligerante impulso tecnológico en la economía, b) una mayor concentración y centralización empresarial y c) una polarización creciente de las fuerzas sociales en disputa.

1) Las revoluciones modernas o proyectos de emancipación violenta por parte de las clases subalternas nacieron como revoluciones burguesas emancipándose de los reinados o independientes, mientras que los movimientos de liberación anticolonialistas nacieron emancipándose de las metrópolis, a partir del siglo XVII y hasta nuestros días, en Inglaterra (1642-1689), Estados Unidos (1776), Francia (1789), Europa y en todo el llamado Tercer Mundo (siglos XIX-XX). Entre los casos paradigmáticos tenemos: a) la Revolución Inglesa por parte del parlamento contra la monarquía absoluta, b) La Revolución Independentista de las 13 colonias inglesas que conformaron la Unión Americana, frente al poder imperial de Inglaterra, c) La Revolución Francesa contra la monarquía, la nobleza, el clero y lo señores feudales; fueron estas revoluciones las que de-sencadenaron y alentaron el capitalismo como sistema y la burguesía como clase social dominante, teniendo como soporte el desarrollo tecnológico de las fuerzas productivas y el comportamiento de las masas anteriormente subordinadas, d) Las revoluciones independentistas de América Latina en el siglo XIX y el proceso de descolonización a lo largo de los siglos siguientes, XIX y XX; procesos que se llevaron a cabo precisamente contra los regímenes europeos y norteamericanos que habían salido triunfante de sus propias revoluciones y que rápidamente se encaminaron hacia la conformación de potencias coloniales e imperiales, d) Las revoluciones socialistas y antiimperialistas a lo largo de todo el siglo XX, tanto en Europa, como Asia, África y América Latina, e) Las revoluciones democráticas y antiimperialistas en América Latina y el Caribe, durante los primeros 20 años del siglo XXI.

Desde el nacimiento de los estados nacionales europeos y de los imperialismos posteriores, se generó una división internacional del trabajo que dura hasta nuestros días y que separó a las naciones como naciones imperiales e industrializadas y naciones periféricas dedicadas a la producción de alimentos y materias primas para la exportación a las potencias metropolitanas.

Todo este proceso ha venido conformando un sistema imperialista que proviniendo del imperialismo colonial, continúa como imperialismo de carácter comercial, industrial y financiero, hasta el actual imperialismo globalizado y neoliberal; sistema que mantiene subordinada e insubordinada a las clases subalternas del mundo metropolitano y a los países periféricos. Al interior de este proceso se mantienen dos fuerzas en permanente tensión: por un lado la competencia al interior de las fuerzas del capital y por otro lado la lucha entre el capital y el trabajo.

Uno de los elementos más importantes cuando de revolución hablamos es el que tiene que ver con el control del poder por una nueva clase política sobre la clase dominante anterior. En el caso de las revoluciones de orientación socialista se trata utilizar ese poder para destruir el sistema económico anterior, basado en la propiedad privada del capital y construir progresivamente un nuevo sistema económico, basado en la propiedad colectiva del capital — estatal, cooperativa y autogestionaria. Cuando se habla del poder hay que diferenciar tres aspectos, a saber, a) El Estado y sus instituciones, es decir, los aparatos políticos e ideológicos con los cuáles la nueva clase mantiene su hegemonía política e ideológica, b) La propiedad o el control sobre los medios de producción y de cambio, en función del crecimiento, la distribución y la cogestión entre el Estado y las nuevas fuerzas sociales c) las relaciones de poder o cadenas de acciones que inclinan la orientación social de la conducta cívica y política hacia uno de los polos de los proyectos en pugna.

2) A partir del marxismo y de las doctrinas socialistas y comunistas en el siglo XIX, los procesos sociales estuvieron acompañados de revoluciones independentistas frente a las potencias imperiales, así como revoluciones de orientación socialista al interior de las naciones. Este escenario tuvo uno de sus mayores escenarios y desenlaces a partir de la I y II Guerra Mundial, teniendo

como protagonistas a Europa y los Estados Unidos, por un lado, y al resto de los pueblos periféricos por el otro lado.

Desde la Revolución Rusa en 1917, los procesos socialdemócratas europeos entre 1945 y 1973, la Revolución China en 1949 y un sinnúmero de revoluciones en el Tercer Mundo, se vivió una polarización entre un bloque capitalista de mercado por un lado y un bloque socialista que desplazó a las burguesías, por otro lado. Un espacio intermedio conformaron los países del norte europeo donde se combinó la presencia de una clase capitalista, una significativa incidencia de la clase obrera y de las cooperativas, construyendo tripartitamente los llamados regímenes socialdemócratas, donde se combinó y avanzó en construir una democracia incluyente de las tres fuerzas señaladas, amplias libertades públicas para toda la ciudadanía y un significativo bienestar social de la población.

A lo largo del siglo XX se vivió lo que se llamó la Guerra Fría donde los proyectos capitalistas y socialistas-comunistas se disputaban la hegemonía en el mercado mundial, el control de las innovaciones y aplicaciones de la tecnología, la fuerza armamentista, pero sobre todo la influencia sobre los poderes nacionales que salían de su estatus colonial.

El surgimiento de la Unión Soviética como segunda potencia mundial y la amenaza de que los países tercermundistas tomaran el camino del socialismo, atemperó la agresividad del imperialismo norteamericano a lo largo del siglo XX, no sin antes sufrir sendas derrotas militares en diferentes partes del mundo: Europa del Este después de la II Guerra Mundial, así como diversos movimientos de liberación nacional que desembocaron en regímenes socialistas en Asia, África y América Latina. Durante este siglo la izquierda avanzaba a través de la sindicalización de la clase obrera, la reforma agraria, la cooperativización campesina y una agenda revolucionaria antiimperialista y antiburguesa, con significativos éxitos en diferentes partes del mundo. Durante este tiempo se vivió una manifiesta lucha de clases a través de luchas populares y nacionales.

Las naciones tercermundistas mantuvieron una doble lucha por su liberación nacional hacia afuera y su emancipación social hacia adentro: a) la lucha contra el colonialismo europeo y la lucha contra el imperialismo

norteamericano, b) la lucha contra las oligarquías o élites subordinadas a las metrópolis imperiales.

3) El éxito de las revoluciones en el ámbito de la soberanía, la democracia y la justicia social no se acompañó, en los países socialistas, de avances en los sistemas democráticos y de las libertades públicas para la amplia ciudadanía. La mayoría de estos países fueron gobernados por partidos comunistas en forma centralizada y con muy pocos espacios para la participación ciudadana. La lucha económica contra el capital, descuidó los mecanismos de mercado, la competencia por la productividad económica del capital y del trabajo, así como la competencia por la simpatía que las masas manifestaron por el consumo de bienes ligeros, lo que debilitó económica y políticamente la hegemonía de los gobiernos socialistas. Si a esto le añadimos una desgastadora competencia armamentista, no debiera sorprender el desenlace que el campo socialista tuvo a finales del siglo pasado.

A partir del proceso de desestalinización, con la muerte de Stalin en 1956, empezó una conciencia crítica en los países socialistas, y se comenzó a movilizar y a cuestionar las formas económicas y políticas de aquellos regímenes. A finales el siglo XX, el socialismo soviético se derrumbó desde adentro, no tanto por las fuerzas del capital o de la burguesía, como por las fuerzas del mercado, encarnadas en una población descontenta por la falta de democracia y de bienes de consumo cotidiano, situación que fue aprovechada por las fuerzas ideológicas, económicas y militares del imperialismo, hegemonizadas por el imperio norteamericano. La suerte del resto de países socialistas que no habían alcanzado una acumulación endógenas y que estuvieron en gran parte subsidiados militar y económicamente por la Unión Soviética, compartieron el derrumbe de la Unión Soviética. Los países que tuvieron mayor suerte fueron aquellos países que encabezaron la transformación hacia economías de mercado con un mayor o menor control por parte de los partidos comunistas, entre los de mayor éxito pueden citarse la China Comunista y Vietnam. El resto de países tuvieron que transitar hacia economías de mercado capitalista en peores condiciones, fuertemente presionados por una contraofensiva neoliberal que desbarató todo el andamiaje socioeconómico que los sustentaba.

Con el derrumbe de la Unión Soviética, las fuerzas de izquierda se dispersaron y perdieron fuerza, sobre todo los partidos comunistas, en la mayoría de los países del mundo. Gran parte de la intelectualidad de izquierda descubrió la democracia burguesa y apostó a una ruta democrática y reformista que apenas se diferencia del discurso y la práctica impuesta por los organismos internacionales occidentales.

4) En América Latina, los pueblos organizados como movimientos de liberación nacional habían alcanzado una significativa beligerancia, sobre todo a partir del triunfo armado de Argelia en África, Vietnam en Asia y Cuba en América Latina. A partir del triunfo de estas revoluciones, sobre todo en América Latina, se desencadenaron luchas guerrilleras contra los regímenes políticos colonizados y contra las dictaduras militares. Después de cinco décadas de lucha armada y del surgimiento de movimientos sociales que acompañaron a los partidos políticos, muchos países lograron alcanzar victorias que permitieron frenar la ofensiva imperialista y sus medidas neoliberales, regímenes que en la última década sucumbieron frente a la hegemonía del capital global, a la competencia del mercado y a la agresividad imperial, quien aprovechó la situación y se preparó para arrasar con todo gobierno inclinado a retomar por medios democráticos los viejos programas nacionalistas de redistribución de la riqueza y del poder.

En el ínterin muchos países, sobre todo asiáticos, lograron desarrollar significativos procesos de industrialización para sus países, tanto los que venían del socialismo como los que estaban alineados por el capitalismo de mercado abierto. Esta situación rompía el monopolio de un pensamiento independentista que daba por hecho que ningún país podría industrializarse mientras viviera bajo la influencia del imperialismo norteamericano.

5) A finales del siglo XX y primera década del siglo XXI, se desencadenó en América Latina un proceso de democratización sin precedentes, a pesar de la ofensiva neoliberal y quizás aprovechándose de los estragos causados por la misma sobre la población. Varias organizaciones de izquierda tomaron el gobierno, gran parte de los parlamentos, varias alcaldías y otros espacios institucionales. De esta manera, la izquierda se ponía al día con la democracia, una asignatura pendiente y cada vez más reclamada por la derecha y por la izquierda crítica.

En las primeras dos décadas del siglo XX, el panorama aparecía muy alentador para el destino de América Latina. Teníamos (y tenemos) en nuestro haber una Revolución Cubana que se mantiene incólume desde 1959, ejemplo revolucionario sin precedente en cuanto a la resistencia a la mayor embestida del imperialismo norteamericano después de la intervención armada en Vietnam, aunque con un desgaste económico y social inmenso.

Después de la Revolución Cubana, el anticomunismo arreció sus estragos contra una débil población ideologizada alrededor de la doctrina liberal, campaña que no logró impedir otra revolución armada, esta vez en Nicaragua, acaecida con el triunfo de Frente Sandinista de 1979. A partir del triunfo sandinista, renace la confianza en la posibilidad de emprender una revolución antiimperialista y de orientación socialista en América Latina, confianza que se había debilitado a raíz del golpe de Estado del ejército pinochetista contra la revolución chilena, la que había accedido a la presidencia a través de métodos electorales. Sin embargo, para entonces, la mayor parte de las guerrillas que habían atravesado el subcontinente estaban sufriendo una gran ofensiva que los marginó y exterminó.

En 1999, veinte años después de la revolución sandinista, toma posesión en Venezuela un gobierno electo por los votos. Desde entonces, diversas organizaciones de izquierda tomaron el gobierno por la vía electoral en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, en gran parte por la conciencia de una población tremendamente golpeada por las reformas neoliberales y en gran parte por la alianza entre organizaciones políticas de izquierda y movimientos sociales de tendencia izquierdista o nacionalista.

Con la Revolución Bolivariana, encabezada por el gobierno venezolano en 1999, una euforia revolucionaria recorría prácticamente todo el subcontinente, incluida muchas islas del Caribe, quienes al integrarse al programa de ayuda petrolera de Venezuela (Petrocaribe), alimentaron su patrimonio latinoamericanista.

Sin embargo, no es lo mismo acceder al gobierno por medio de elecciones que controlar todas las instituciones y sobre todo las fuerzas armadas. Como dijo una vez Hugo Chávez, hablando de la experiencia chilena, «las revoluciones pueden ser pacíficas, pero no desarmadas». Efectivamente,

cuando la presidencia no tenía el control ni del resto de instituciones o el apoyo del ejército, estos gobiernos sucumbieron al contraataque imperialista.

Desde entonces el imperialismo pasó a la ofensiva con el ánimo de arrasar con todo gobierno u opción soberana. Los gringos renovaron sus viejos pasos, los que se están concretando con la política proteccionista para ellos e injerencista para nosotros por parte del gobierno de Donald Trump. El imperialismo está decidido a borrar la historia y a borrar la geografía de los otrora Estados nacionales, como sugerimos en la hipótesis planteada al inicio de este artículo.

6) Uno a uno los procesos nacionalistas fueron agredidos sin piedad y en forma sistemática en todos los países de la región. Golpe de Estado militar en Honduras por el delito de convocar a una referendo sobre la re-elección presidencial por parte del presidente Zelaya; golpe de Estado parlamentario en Paraguay contra el presidente Lugo y sus políticas de redistribución de la riqueza; golpe de Estado cívico-militar en Venezuela contra el presidente Hugo Chávez por sus tempranos y exitosos esfuerzos por la integración latinoamericana, así como por su acercamiento con la Revolución Cubana; Golpe de Estado parlamentario y judicial en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff por el alineamiento con el proceso de integración latinoamericana. Campaña de desprestigio y desestabilización política contra los gobiernos progresistas de Ecuador y Bolivia. Derrota electoral en Argentina, Chile y Honduras, división de la izquierda ecuatoriana después de haber logrado un triunfo electoral. Recrudescimiento de las medidas de desestabilización política y guerra económica contra los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Reforma de los tratados comerciales a favor de la economía norteamericana y en contra de países como México y Centroamérica. Despiadada agresión contra los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, con el fin de pisotear toda pretensión de coexistencia pacífica entre América Latina y los Estados Unidos. Últimamente, el gobierno de los Estados Unidos está decidido a que se cumpla la ley del Oeste: todo el poder al sheriff, a las infanterías y al juez federal, montando tribunales penales que tienen jurisdicción en todos y cada uno de los países bajo la influencia del gobierno de los Estados Unidos.

Uno de los rasgos de la ofensiva contrarrevolucionaria es que los clanes oligárquicos parecen haber decidido gobernar directamente, no solamente

porque acusan de blandengue a los funcionarios gubernamentales, sino porque las corporaciones necesitan cada vez más del Estado para rescatar o recuperar viejos y nuevos beneficios para sus empresas, desde el multimillonario Donald Trump en los Estados Unidos hasta el multimillonario Sebastián Piñera en Chile, por solo citar a los más representativos, la derecha o los grupos corporativos parecen confiar más en los propios ricos que en un gobierno para los ricos.

¿Qué hacer?

¿Qué hacer, con una vía electoral que no parece tener oportunidad para la izquierda, pues el imperialismo gringo-europeo está decidido a no reconocer el triunfo electoral de ningún gobierno progresista o izquierdista, mucho menos a permitir la instauración de regímenes mínimamente nacionalistas en América Latina? En el caso de las elecciones en Venezuela, la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos ya emitieron su juicio, desconociendo el resultado electoral. Para estas potencias, la única izquierda que aceptan es la izquierda muerta o derrotada.

¿Qué hacer frente a los descarados fraudes electorales de los partidos de la derecha? ¿Qué hacer cuando después de la victoria de un gobierno, apenas progresista, comienza un proceso de desestabilización política, recurriendo incluso a descarados golpes de Estado, militares, parlamentarios, judiciales, campañas mediáticas de desestabilización política, sanciones directas a los funcionarios democráticamente electos, como si viviéramos al interior del territorio norteamericano? Hasta ahora ningún golpe de Estado se ha llevado a cabo en América Latina sin el consentimiento, el apoyo o la decisión del gobierno de los Estados Unidos y sus agencias.

Y no estamos hablando de gobiernos comunistas, ni siquiera de gobiernos socialistas en la mayor parte de los casos, pues se gobierna sin poder salir de la economía de mercado, donde los capitales, sobre todo transnacionales, mantienen su hegemonía sobre las débiles y dependientes economías, apenas iniciando un incipiente proceso de disminución de la pobreza y de industrialización.

¿Qué hacer cuando las empresas transnacionales se están tomando la economía de nuestros países, sin ninguna consideración de orden ecológico o

de despegue industrial? Empresas transnacionales extractivistas de minerales y otras materias primas, así como del excedente económico succionado por los grandes monopolios dedicados al consumismo, bancos comerciales que a la par que nos endeudan siguen desplazando a los limitados grupos de burguesías locales, convertidas cada vez más en testaferros de los monopolios extranjeros.

¿Qué hacer cuando después de cada derrota electoral de la izquierda, todos los avances en materia de disminución de la pobreza se revierten y la desigualdad social vuelve a remontar? ¿Qué hacer cuando no parece posible ni siquiera expropiar a los enclaves industriales, comerciales y bancarios, pues gran parte de su capital de operaciones se mantiene resguardado en los grandes bancos situados en la metrópolis? En una situación donde además nuestras economías apenas tienen excedentes, ya no digamos capital, para iniciar un proceso de acumulación endógena.

¿Qué hacer cuando el Estado Mundial de nacionalidad norteamericana y las grandes corporaciones del imperialismo, tanto políticas como económicas y mediáticas, ejercen una influencia devastadora en América Latina?

7) Siempre supimos que la democracia electoral representativa es una forma de dividir a nuestros pueblos. Mientras más partidos políticos participan en la contienda electoral más dividida y fragmentada queda la población, división que se lleva a cabo al interior de los mismos partidos, como vimos en las últimas elecciones donde perdió la izquierda en Chile, incluso en países donde ganó una coalición progresista, como es el caso del movimiento Alianza País en Ecuador.

Por eso es que a los revolucionarios del siglo pasado no se les ocurría optar por participar en las elecciones. Siempre hablamos de revoluciones armadas, donde se despojaba al capital privado de sus principales medios de producción, desplazando a la burguesía y entregando la administración del gobierno a una clase política revolucionaria, a cambio de que gobernara a favor de la soberanía nacional y la justicia social. Pero al mismo tiempo supimos que necesitábamos capital nacional y extranjero para desarrollarnos a pesar de la diferenciación social y la desacumulación económica que estos capitales infligían a nuestros países, situación que se volvió más crítica a partir de la implosión del régimen soviético.

Pero de pronto, comenzamos a hacer de la necesidad una virtud y nos volvimos más demócratas que los liberales y que los neoliberales. Gobernamos descuidando y debilitando la alianza y la participación de los movimientos sociales y populares. Gobernamos con las mismas instituciones de la democracia burguesa y a veces teníamos la impresión que lo que estábamos haciendo era administrar el sistema a favor de las grandes empresas transnacionales, intentando redistribuir un presupuesto a costa de entrar en un proceso de iliquidez y de endeudamiento que nos hizo perder el control de la economía, incluso en su forma liberal.

Mostramos un gran prejuicio y una falta de solidaridad con aquellos procesos revolucionarios que después de ganar las elecciones siguieron luchando por el control total de las instituciones, prefiriendo y optando por salvar la cara democrática, haciendo concesiones a una burguesía que había perdido toda base social en sus propios países.

8) Si ya sabemos el resultado del nuevo guión que estrenamos después del derrumbe de la Unión Soviética, ¿qué tenemos que hacer para avanzar en la soberanía nacional, iniciar la acumulación endógena y el despegue económico, al mismo tiempo que sentimos la presión de las masas populares por una mayor equidad social, una asignatura tan pendiente como la propia democracia?

La historia no ha clausurado las revoluciones

Una interpretación por parte de intelectuales y líderes políticos de derecha y hasta de tradición izquierdista es que ya las revoluciones fueron clausuradas por la historia, actualizando la tesis del fin de la historia, es decir, de las transformaciones sociales, fuera del imperialismo-capitalista.

Después de cada revolución política, victoriosa o derrotada, el adversario siempre concluye que asistimos al final de las revoluciones, afirmación que la historia se ha encargado de desmentir. Por lo tanto, no debíamos de excluir de la agenda política la irrupción de nuevas formas revolucionarias para cambiar el mundo, por muy crítica que se encuentre la correlación de fuerzas a favor de los más desposeídos.

En el caso de las revoluciones políticas, el poder estatal y la voluntad política de las masas siguen siendo disputados por los procesos revolucionarios y

contrarrevolucionarios. En el caso de las revoluciones sociales, burguesas o socialistas, el control de la tecnología y la creación-apropiación de riqueza siguen siendo el alma de la disputa.

Hoy en día, sobre todo a raíz de la implosión del bloque soviético, las revoluciones políticas de orientación socialista han girado hacia economías de mercado y aceptado la presencia de capital transnacional, como China o Vietnam; teniendo mucho éxito en cuanto a la producción y distribución de la riqueza. El único socialismo aceptado es un socialismo socialdemócrata que ofrezca las medidas neoliberales como solución a las crisis y que proponga gobernar no solamente contra las masas empobrecidas, sino contra los empresarios (pequeños, medianos o grandes) locales o nacionales.

En el caso de América del Sur, varios gobiernos nacionalistas han sido desplazados de las principales instituciones de gobierno, precisamente por una voluntad y acción política consciente del gobierno de los Estados Unidos. En otras palabras, el imperialismo ha pasado a la ofensiva, ostentando su fuerza y mecanismos contrarrevolucionarios. Las últimas declaraciones y acciones políticas del presidente, la Cámara de Representantes y del Senado, las agencias financieras internacionales, incluido el Comando Sur de los Estados Unidos, están mostrando una voluntad y una agresividad contrarrevolucionaria sin precedentes, particularmente contra países que emprendieron de una u otra manera el camino de defender y sostener la soberanía, como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. A pesar de lo cual mantenemos la segunda hipótesis, afirmando que la historia no ha clausurado las revoluciones, por lo que deberemos inventariar las fuerzas políticas que nos pueden permitir frenar la contrarrevolución en marcha.

¿Con qué fuerzas se cuenta para hacer la revolución? Según los resultados de las elecciones presidenciales, parlamentarias o municipales, tanto la derecha como la izquierda latinoamericana han ganado o han perdido por una diferencia de 5% a 10%, es decir, que cuando cada una de las fuerzas en disputa pierde la presidencia se hace guardando alrededor del 45% de los votos de la población; con la ventaja histórica de que las luchas electorales ya no son entre liberales y conservadores, como en el siglo pasado, sino entre la derecha pro-imperialista y organizaciones que luchan por la soberanía nacional, la democracia participativa-representativa y por la redistribución de la

riqueza, comenzando por disminuir los índices de pobreza y avanzando en disminuir la desigualdad social. No reparar en esta simple cifra es subestimar la fuerza que guarda la derecha en la población en cuanto a desestabilización respecta, pero también implica desestimar la fuerza política que guarda la izquierda, aun perdiendo las elecciones, para mejorar la concientización, organización y movilización de las masas en aras de frenar la embestida del imperialismo global y neoliberal.

Sabemos asimismo, que las revoluciones armadas a la vieja usanza, se hacían con menos del 20% de la población participando en las mismas. De donde se desprende que contar con un promedio del 45% de los votos es un patrimonio formidable, ya sea para construir el poder popular, como para frenar los ímpetus de la derecha en el gobierno.

¿Pero qué es lo que ha pasado? Que al igual que la democracia electoral representativa liberal, a los votantes solamente los invitamos a participar en política apenas un día cada cinco años. El resto del tiempo, esta masa popular queda esperando la próxima elección. En la mayoría de los casos no participa activamente en el gobierno ni en los programas de gobierno. Se queda en sus casas en forma pasiva, como si la lucha de clases se congelara o se terminara después del día de las votaciones.

Hay experiencias de países como Nicaragua que cuando perdieron las elecciones las fuerzas políticas y sociales de izquierda se mantuvieron movilizadas: primero para evitar su desaparición; segundo para defender las conquistas de la revolución; tercero para aspirar a vetar cualquier medida neoliberal que atentaba con retroceder la voluntad política y las instituciones hasta antes del somocismo y de la era liberal. La otra experiencia es la de Venezuela que después de haber perdido la Asamblea Nacional, mantuvo su movilización en las calles y logró ganar tres elecciones seguidas para la Asamblea Constituyente, para gobernadores y para gobiernos municipales, preparándose ahora para ganar las elecciones en el mes de abril del año 2018.

9) No todas las revoluciones han sido desencadenadas por revoluciones armadas desde abajo en contra del ejército. A mediados del siglo pasado hubo algunos cambios revolucionarios llamados populistas, como los de Cárdenas en México, Getulio Vargas en Brasil, Juan Domingo Perón en Argentina, Juan José Torres en Bolivia, Jacobo Arbenz en Guatemala, Omar Torrijos en

Panamá, Juan Velazco Alvarado en Perú y Hugo Chávez en Venezuela, emprendiendo reformas mucho más radicales que las emprendidas por algunos de los gobiernos denominados socialistas. Lo particular de estos casos es que tales movimientos y reformas radicales nacieron del seno de las propias fuerzas armadas, lo que parece paradójico, pues es en el seno de las fuerzas armadas de donde han salido las dictaduras militares más sangrientas y antipopulares de América Latina.

Por ende, no se puede ni se debe descartar a las propias fuerzas armadas como un potencial, más que progresista, para emprender un proceso de alianzas que permita resistir las embestidas del gobierno norteamericano. Los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua muestran la importancia que tiene una buena relación con las fuerzas armadas del ejército, la policía y los ministerios de gobernación. Lo que implica insertar en nuestra estrategia una política de alianza con las fuerzas armadas, precedidas en todo momento por un trabajo ideológico alrededor de la soberanía nacional, tema que ha sido tradición endosar su defensa a las fuerzas armadas.

En el caso de Cuba, sin la participación estratégica de las fuerzas armadas tanto a nivel político y social, incluso a nivel económico, la correlación de fuerzas para el régimen castrista sería diferente. En el caso de Nicaragua, la política del Frente Sandinista ha sido la de estrechar lazos fraternos y permanentes con las fuerzas armadas y la policía, a pesar de una crítica insistente de que los militares no deben meterse en política, argumento más que cínico viniendo de la derecha que precisamente ha utilizado múltiples veces las fuerzas armadas para tumbar a gobiernos de izquierda. En el caso de Venezuela, si no fuera por la lealtad de las fuerzas armadas se hubiera consumado el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez y difícilmente la Revolución Bolivariana encabezada por el presidente Nicolás Maduro habría resistido el proceso de desestabilización económica y política.

10) Por otro lado, no todos los cambios revolucionarios tienen que hacerse desde el poder estatal, es decir, desde arriba. Hay políticas y cambios revolucionarios que también se hacen desde abajo. En primer lugar tenemos la lucha ideológica por parte de los partidos y movimientos sociales, trabajando en alianza orgánica para influenciar ideológicamente a la población alrededor de un programa político que tarde o temprano tendrá que encarnarse en

acciones concretas. Pensemos por ejemplo en las tomas de tierra por parte de los campesinos; las huelgas activas de los sindicatos obreros, así como de su permanente presión para mejorar sus salarios, sus condiciones de trabajo y su nivel de vida; las luchas de las mujeres contra la desigualdad de oportunidades y contra el acoso, los abusos, la discriminación, la explotación sexual, la trata de mujeres, los feminicidios; los pobladores luchando por un presupuesto participativo; ya no digamos del estudiantado, gremio orgulloso de haber sido la conciencia crítica de la sociedad y una cantera de cuadros de las revoluciones.

En el caso de Nicaragua existe una política de diálogo vinculante entre el gobierno, los sindicatos y la empresa privada para discutir problemas del orden económico social, como el salario mínimo, el que se define en forma tripartita; esta es una manera de incorporar a los sindicatos en la gestión de la economía y de los asuntos sociales que les competen como trabajadores y como ciudadanos. Por supuesto que en este campo sobran las críticas de la derecha y de una parte de la vieja y nueva izquierda posmoderna que recomienda que los movimientos sociales se alejen de los partidos políticos y del ejercicio de los programas de gobierno para no contaminarse, como si no supiéramos nosotros que la derecha ha construido el fantasma de la sociedad civil precisamente para ganarse a estos sectores a favor de las políticas neoliberales.

Hoy en día, hay una serie de nuevas banderas, emprendidas desde el feminismo, los migrantes, los ecologistas, la frustración de los jóvenes, etc., que ameritan un programa especial por parte de la izquierda. Hay que resistir al prejuicio de que estas luchas deben de estar alejadas de la política, como si no supiéramos nosotros la utilización que hace el orden establecido para captar la energía juvenil a favor de los intereses comerciales e ideológicos del sistema imperante.

Existe un sector estratégico en toda revolución, como son los estudiantes y las organizaciones estudiantiles, desde donde han salido muchísimos movimientos políticos beligerantes, así como sobresalientes militantes revolucionarios, sin que hasta ahora los partidos los tengan en sus programas como aliados estratégicos en las luchas ideológicas y revolucionarias.

En el caso del gobierno sandinista, gran parte de la paz y la reconciliación lograda con la población ha sido a través del trabajo, la participación de los jóvenes, las mujeres, los sindicatos, las cooperativas, los movimientos sociales

en general; incluyendo cargos de responsabilidad en las diferentes instituciones, a nivel de ministros, diputados, alcaldes y concejales; en el caso de las mujeres, Nicaragua está a la cabeza en el mundo en cuanto a la cantidad de mujeres, alcanzando más del 55% en los puestos públicos.

Hay que decir que parte del peso de los movimientos sociales en la cogestión del gobierno se inició cuando el Frente Sandinista estaba en la oposición, logrando desde entonces acuerdos con tales movimientos para acceder conjuntamente al poder. Claro está que una vez en el gobierno la participación se hace más orgánica y con mayor representatividad en las instituciones del Estado, tanto a nivel nacional como local. Existe una política llamada de responsabilidad compartida con todas las fuerzas de la nación donde no es extraño ver organizaciones sociales, trabajadores, estudiantes, campesinos, obreros, jóvenes trabajando con los ministerios en los diferentes programas de gobierno, incluyendo el trabajo con la policía para prevenir y combatir la drogadicción, la delincuencia, la inseguridad ciudadana, la llegada de los mareros de los países vecinos, que no hubiera sido posible sin esta simbiosis entre las estructuras gubernamentales y los movimientos sociales. En este sentido valga recordar que lo peor que puede hacer un gobierno progresista, izquierdista o revolucionario es llegar al poder y no cumplir con esta estrategia, como le pasó a algunos partidos políticos una vez llegados al gobierno, lo que los debilitó y tuvieron que hacer más concesiones de las necesarias a las fuerzas conservadoras.

Podemos decir que si algo le ha ayudado al Frente Sandinista para gobernar con una privilegiada estabilidad política ha sido la alianza con los movimientos sociales, una estabilidad y una seguridad ciudadana que es ejemplo a nivel de toda Mesoamérica (México y Centroamérica).

11) Si la alianza entre las organizaciones políticas y las organizaciones sociales es fundamental, no menos estratégica es la alianza con las fuerzas conservadoras que empiezan a ser conscientes que ese orden establecido no necesariamente les beneficia, aunque ideológicamente los mantiene orgánicamente cercanos. Nos referimos a los pequeños, medianos y grandes productores, tanto nacionales como regionales, así como a las fuerzas religiosas y del capital. Durante la Revolución Sandinista de los años ochenta, fueron las fuerzas de la Iglesia Católica y del capital, aliado con los

parroquianos populares y una parte de los pequeños productores, quienes estuvieron a la cabeza de la contrarrevolución. Desde la derrota electoral en 1990, el Frente Sandinista montó un programa estratégico que todavía le presta su nombre al gobierno, como es la unidad y la reconciliación nacional, en primer lugar con las fuerzas populares de la contrarrevolución nicaragüense, en su mayoría campesinos que habían sido licenciados por los regímenes neoliberales. A estos campesinos e indígenas que se enrolaron en las filas contrarrevolucionarias, el Frente Sandinista les tendió la mano y los incorporó a su plan de lucha. Gracias a esta formidable fuerza combinada de sandinistas y contrarrevolucionarios, la reforma agraria continuó en los períodos de los gobiernos neoliberales, tanto fue así que cuando el Frente Sandinista retoma el poder continuó la titulación de tierras, consiguiendo tierras para los contras y un área para los gobiernos autonómicos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe que supera el área total de nuestro vecino país El Salvador.

En segundo lugar, la política de alianzas con las antiguas fuerzas contrarrevolucionarias (de origen somocista, liberal y conservador), se expresó también con la oferta de diputaciones y alcaldías para todas estas fuerzas que al final conformaron una coalición llamada Unida Nicaragua Triunfa, lo que ha permitido al Frente Sandinista dividir a la oposición hasta llevarla al colapso en que se encuentra hoy en día. Por supuesto que sobran las críticas al Frente Sandinista señalando que ha traicionado su legado histórico al incorporar a las viejas fuerzas conservadoras, pero populares, a su proyecto.

En tercer lugar se procuró enfriar la contradicción y el antagonismo con las iglesias católicas y evangélicas, apoyando las escuelas y colegios de las diferentes iglesias, alcanzando una distensión muy alejada del enfrentamiento que se tuvo durante los años ochenta. Por supuesto que también a este respecto sobran las críticas por parte de intelectuales acusando al Frente Sandinista de pactar con sus antiguos enemigos, ignorando que lo que importa en una política de alianzas, para la cual no hay excepciones, es el control de la hegemonía.

Finalmente, llegó el momento de hacer las paces con el capital nacional e internacional. En primer lugar porque el nuevo gobierno sandinista encontró un gobierno completamente desmantelado por las políticas neoliberales, en

segundo lugar porque la quiebra de las barreras arancelarias habían dejado al país casi sin mercado. En ese momento, lo primero que hizo el Frente Sandinista fue buscar mercado para una burguesía nacional que se había quedado prácticamente fuera de la competencia. Así nacieron nuevos mercados en Cuba, Venezuela, Centroamérica, Rusia, entre otros. Al igual que en los casos anteriores la crítica por parte de la izquierda posmoderna tildó al Frente tanto de pro-capitalista como de pro-comunista, como si tuviera opción para conseguir el capital que necesitaba para despegar económicamente al país o como si estuviéramos en la Guerra Fría en que no se podía comercializar con los antiguos países comunistas, cosa que dicho sea de paso están haciendo y en forma más beligerante el resto de países centroamericanos.

12) Otro factor estratégico, si de revolución latinoamericana hablamos, es la política de integración política y económica latinoamericana. La llegada del programa de intercambio de petróleo por alimentos entre Venezuela y más de 20 países del Caribe, fue el mejor ejemplo de lo que significa una relación comercial justa por complementaria. Esa alianza bolivariana permitió a Nicaragua alcanzar los mejores índices en infraestructura económica y social de la región, incluyendo el crecimiento económico. Se hicieron todas las carreteras programadas desde hace cincuenta años, se logró llevar la infraestructura de electrificación de 45% al inicio del gobierno sandinista a 95%, tanto a las zonas urbanas, periurbanas como rurales, lo que permitió por primera vez crear las condiciones para que el campesinado, principal productor de alimentos del país, tuvieran la posibilidad de acceder a los mercados nacionales, incluso internacionales, como no se había podido hacer en el pasado.

El aumento de las exportaciones se duplicó en los primeros años de gobierno y Centroamérica, junto con Venezuela, alcanzaron el segundo lugar, después de los Estados Unidos. Dicha política se criticó hasta la saciedad por parte de los sectores más allegados a los Estados Unidos, aludiendo que no había que confiar en un mercado emergente que pronto caería. Tal crítica se convirtió en una profecía auto-cumplida a partir de la caída de los precios del petróleo y de la guerra económica montada sobre la Revolución Bolivariana de Venezuela.

Por el lado de la integración política son manifiestos los logros frente a la ofensiva latinoamericana, al bloquear pretensiones estadounidenses de establecer un tratado comercial leonino entre los Estados Unidos y América Latina (ALCA), el levantamiento de la censura para que Cuba pudiera ser parte de la OEA, la condena latinoamericana al golpe de Estado en Honduras y últimamente la reciente condena de todos los países latinoamericanos, incluyendo los regímenes de derecha, frente a la amenaza del presidente de los Estados Unidos para invadir militarmente a Venezuela. A pesar de estos logros, la crítica de la derecha y de la izquierda posmoderna es una crítica combinada: por un lado se critica al régimen sandinista de seguir hostigando a los Estados Unidos, al mismo tiempo que se critica el mantener un decente nivel de acercamiento, con las agencias internacionales controladas por Washington, llámese FMI, BM, OMC, OEA. El caso de la OEA es paradigmático y paradójico, pues a raíz de las últimas elecciones en Nicaragua, la OEA aprobó los mecanismos electorales que refrendaron la legitimidad de las elecciones y de las victorias del Frente Sandinista y de las elecciones en Nicaragua, lo que no impidió que el gobierno de los Estados Unidos enviara como premio una enmienda que castiga a Nicaragua (Nica-Act) por no cumplir con los principios de la democracia electoral, declarando el mismo secretario Almagro que tal actitud no era lo más oportuno para seguir avanzando en las condiciones democráticas en que se desenvuelven el proceso democrático. Este mismo organismo, la OEA, reprueba las recientes elecciones en Honduras y se pronuncia para que se repitan, momento en el cual el gobierno de los Estados Unidos se precipita por reconocer al gobierno hondureño, surgido, dicho sea de paso del golpe de Estado contra el presidente Zelaya. Mostrando así el doble rasero del arbitrio del gobierno de los Estados Unidos.

13) La presidencia no detenta todo el poder, pero puede liderar las instituciones que se vayan ganando, no solamente cuando se está gobernando, sino incluso cuando se ha perdido la presidencia. Cuando la Revolución Sandinista perdió el gobierno en 1990, ofreció a sus partidarios gobernar desde abajo. Gobernar desde abajo significa juntar todos los representantes institucionales sandinistas en el nuevo gobierno (diputados, alcaldes, magistrados electorales, magistrados de la Corte de Justicia, jueces locales y nacionales, cuadros de las fuerzas armadas y de la policía, responsables de los

tendidos electorales, periodistas de las emisoras de radio y televisión sandinistas, empresarios sandinistas, gremios de pequeños y medianos productores, sindicatos y asociaciones en general, embajadores destituidos, intelectuales y artistas organizados, asociación de mujeres. Con estos representantes se conformaron gabinetes donde el partido evalúa y diseña semanalmente la vida política del país, así como las luchas para frenar la ofensiva contrarrevolucionaria. Además de esas reuniones, el Frente Sandinista, a la cabeza de sus principales líderes siguieron recorriendo ciudades y comarcas del campo, manteniendo la esperanza. A la par que se lanzaba toda una campaña de reconciliación entre los desmovilizados del ejército sandinista y los desplazados miembros de los comandos contrarrevolucionarios. Política de alianza que se le ofreció a todos los otros partidos. El resultado fue que el Frente Sandinista mantuvo sus fuerzas intactas y las comenzó a foguear al calor de las protestas para frenar las medidas neoliberales.

Una actitud similar observamos en lo que queda del movimiento de la Revolución Ciudadana en Ecuador, liderada por el expresidente y líder de tal movimiento, Rafael Correa. Este ejemplo y las movilizaciones populares que observamos en Argentina, Chile, Brasil, nos muestran que ya la izquierda no se rinde por derrotas electorales, consciente de que la lucha electoral es una de tantas luchas posibles, manteniéndose las organizaciones políticas desplazadas de la presidencia junto y dentro de las organizaciones populares y los movimientos sociales para continuar la lucha.

14) Como corolario de lo que hemos dicho hasta ahora aparecen tres conclusiones: a) en primer lugar el desmentido de que ya se acabaron las revoluciones. Contra todo pronóstico y aunque la derecha mantenga todos los poderes, la izquierda mostró que se puede alcanzar una mayoría política electoral, aún bajo una correlación de fuerzas desfavorables: el apoyo gringo a los partidos de derecha, el apoyo del capital y la iglesia a los partidos de derecha, el apoyo de los medios de comunicación a los partidos de derecha, la influencia del consenso de Washington sobre la opinión pública, b) en segundo lugar que la lucha armada no es el único método de operar de las revoluciones, aunque es imprescindible contar con las fuerzas armadas, una vez que se haya accedido al gobierno, c) que independientemente de que se controlen todas las

instituciones, sin una fuerza política organizada que combine la presencia en las instituciones públicas con las fuerzas sociales en el trabajo, en los centros estudiantiles, en los barrios y en las calles, los cambios emprendidos pueden volverse reversibles.

¿Y ahora cuál es el delito?

Con la presidencia de Trump, el imperialismo ha pasado a montar su nueva fase, gobernar dentro y fuera de los Estados Unidos, como si el mundo fuera una sola nación y el poder de Washington fuera una sola cabeza que gobierna con sus aparatos en función de sus empresas transnacionales. No se trata solamente de romper las fronteras arancelarias y el libre movimiento para los capitales, no se trata solamente de la globalización del mercado y del capital, no se trata solamente del ejercicio de las agencias internacionales gringas operando en suelos nacionales a lo largo del mundo. Se trata de que la ley y los aparatos represivos (ejército y árbitros penales) de los Estados Unidos, ejerzan su jurisdicción al interior de todas y cada una de las naciones del mundo entero.

Frente a esa situación y frente a la desproporcionada ofensiva estadounidense, no solamente en el Oriente Medio, sino en la aparentemente abandonada Latinoamérica, uno se pregunta cuál es el delito para merecer semejante embestida.

A juzgar por los hechos, la respuesta es que el imperialismo no necesita razón alguna para desestabilizar gobiernos extranjeros en general. No importa que los movimientos revolucionarios accedan al poder por la vía electoral y que expresen manifiestamente que no están por la lucha armada, no importa que se mantenga la economía de mercado y la hegemonía económica del capital transnacional, no importa que los gobiernos revolucionarios mantengan buenas relaciones con el capital privado, la iglesia católica y que respeten la libertad de prensa y los derechos humanos. No importan que los partidos socialistas de corriente socialdemócrata acepten la doctrina neoliberal y hasta la implementen cuando están en el gobierno. Más aún, ni siquiera importa que los gobiernos sean de derecha o de izquierda: no importa que los movimientos políticos sean amigos o adversarios de los Estados Unidos.

Hay gente que piensa que la agresividad del gobierno de los Estados Unidos es debido a nuestras malas calificaciones en diferentes aspectos consagrados por el actual orden económico internacional. Anteriormente se nos decía que el problema de la izquierda es que solamente accede al poder por las armas y que no gobierna con una mayoría política. Posteriormente, sobre todo después de haber alcanzado el triunfo electoral varias veces, se nos dice que el problema es que nos peleamos con el capital y la iglesia; pero cuando un movimiento accede al gobierno y mantiene buenas relaciones con la iglesia y con el capital, se nos dice que el problema es que no hemos resuelto el problema de la inflación, el pleno empleo o el endeudamiento externo, como si todos los gobiernos del mundo han resuelto este problema. Finalmente, cuando gobiernos progresistas obtienen un resultado inmejorable en cuanto a las cuentas nacionales, se nos dice que el problema es que somos amigos de los chinos y de los rusos; sin embargo, existen gobiernos de derecha amigos de los Estados Unidos que mantienen relaciones políticas y económicas con los chinos, como Panamá y Costa Rica, por ejemplo, sin que el gobierno de los Estados Unidos los acuse de criminales.

Entonces, nos preguntamos nosotros: ¿cuál es el verdadero delito para padecer las políticas de desestabilización del gobierno norteamericano para con los gobiernos de izquierda o progresistas? Aparentemente solo queda como respuesta que para tener la simpatía del gobierno de los Estados Unidos, hay que ser un gobierno de derecha, huérfano de toda soberanía nacional; sin embargo, cuando observamos el tratamiento del actual gobierno de los Estados Unidos para con México, también se nos cae tal hipótesis. El presidente de los Estados Unidos, principal portavoz del gobierno gringo es mucho más crudo al manifestar y constatar que los Estados Unidos no tienen amigos, sino intereses, políticos, ideológicos, económicos y culturales. Pero qué pasa, insistimos, con aquellos países donde los intereses de los Estados Unidos están garantizados, como el caso de México. En ese caso, la respuesta del presidente de los Estados Unidos es que todos estos países situados al sur del Río Bravo «son países de mierda» a quienes hay que odiar como ellos odian a los negros, latinos o árabes.

Frente a tal constatación, solo nos queda poner en agenda de nuevo la revolución, sin apellido ni franquicia alguna. Una revolución que empieza como

empezaron todas las revoluciones, como una lucha por la soberanía nacional, sin caer en la ingenuidad de creer que algún día el gobierno norteamericano estará tan interesado en nuestra soberanía como lo está en la suya.

Ahora bien, poner en agenda la revolución, bajo cualquier método o circunstancia, implica, en primer lugar, un acertado diagnóstico de lo que ha pasado y de lo que está pasando. En segundo lugar, implica unir nuestros esfuerzos a nivel continental, tanto al interior de América Latina y el Caribe, como con las fuerzas progresistas al interior de los Estados Unidos. En tercer lugar, diseñar una estrategia que permita alterar la correlación de fuerzas, desde el discurso, las formas organizativas, la estrategia para debilitar a las fuerzas locales de la derecha, la política de alianzas que nos permita avanzar en la hegemonía política nacional y continental. En cuarto lugar diseñar y popularizar un programa de opinión y de participación que cuestione todas las lacras del sistema, desde la explotación económica hasta la corrupción de funcionarios públicos en contubernio con los empresarios.

Socializar las experiencias, los logros y errores, por parte de las organizaciones políticas y sociales, es lo que esta antología se propone. Intentando enriquecer y afinar la agenda para continuar el debate y la lucha.

Reflexiones acerca del ejercicio de gobierno por partidos de izquierda y progresistas

Marcelo Caruso *

«No es posible negar categóricamente a priori la posibilidad teórica de que bajo la influencia de una combinación muy excepcional (guerra, derrota, crack financiero, ofensiva revolucionaria de las masas, etc...), los partidos pequeño burgueses sin excepción de los estalinistas, pueden llegar más lejos de lo que ellos quisieran en el camino de una ruptura con la burguesía. En cualquier caso una cosa está fuera de dudas: aún en el caso de que esa variante poco probable llegara a realizarse en alguna parte y un “gobierno obrero y campesino” llegara a constituirse, no representaría más que un corto episodio en el camino de la verdadera dictadura del proletariado».

León Trotski

(Programa de transición de la IV Internacional, 1938).

La posibilidad de que los partidos de izquierda pudieran gobernar en un Estado capitalista era considerada, antes y después de la Revolución Rusa, como una ilusión reformista con muy poco futuro. Aun para lograr gobernar un modelo de capitalismo de Estado, se afirmaba que era necesaria la revolución, como lo había demostrado la Comuna de París y la Revolución Rusa en sus inicios. Esta valoración profética de León Trotski, inicialmente compartida por el Partido Bolchevique, fue incluida en el Programa de Transición que pretendía mantener organizados y en la lucha política anticapitalista, a los revolucionarios internacionalistas que se oponían al estalinismo. Desde entonces, muchas son las diferencias de época, pero también muchas las semejanzas y aciertos en su predicción.

En primer lugar, debemos considerar que la utilización de la *guerra* como una forma de lucha adecuada para la disputa de los espacios de poder, como un momento en el proceso de lucha política y de clases, hoy es mucho más frecuente, normalizada, y está acompañada por formas de dominación hegemónica en los ámbitos económicos, financieros, culturales y ambientales, que requieren de la violencia como un complemento inevitable.

Cien años después, se puede afirmar que la crisis sistémica que ha provocado la fase neoliberal del capitalismo, genera crisis y fracturas

* Marcelo Caruso es miembro de la Coordinadora Socialista y de los espacios de unidad de la izquierda colombiana. Consultor y profesor universitario en temas de democracia directa y sostenibilidad medioambiental, doctor en Ciencias Filosóficas. Parte de su obra la escribió como Fermín González Chávez.

recurrentes en su ordenamiento represivo y control internacional de las sociedades resistentes, que llevan a esas situaciones «anómalas» en el funcionamiento del sistema, como el que la izquierda llegue a gobernar, que no entraban en los cálculos de los bolcheviques. También se puede afirmar que hoy son comunes en Latinoamérica y el Caribe las *ofensivas*, levantamientos e insurrecciones de los sectores populares, explotados y excluidos, frente a las agresiones a los derechos humanos y de la naturaleza, y al crecimiento de las desigualdades sociales, lo cual nos coloca en un escenario de conflicto social y político que, con alzas y bajas, plantea que lo excepcional se convierta en algo corriente, y que *los cortos* e irrepetibles *episodios*, en la lucha por construir una sociedad conducida «por los productores libres y asociados», no sean tan *cortos* y se puedan extender, detener, y repetir en forma mejorada.

Con lo anterior estamos argumentando, que la categoría de ciclos de gobiernos de izquierda y progresistas que se utiliza para marcar sus comienzos y finales, como péndulos del poder a izquierda y derecha, son algo más que eso. Son procesos que expresan un nivel relativamente estable de la correlación de fuerzas políticas, sociales y culturales, donde las críticas sociales antisistémicas, con sus altibajos, serán crecientes y recurrentes, y por lo tanto, permitirán en *cortos* períodos históricos, nuevos y diversos *episodios* de gobiernos antineoliberales. Serán la expresión del derecho a las «revanchas sociales y políticas», que dependerán en sus avances exitosos del aprendizaje que se realice de las experiencias anteriores o en curso. Un indicador social de este resultado desigual y combinado, es que en todos los procesos de gobierno que han sido golpeados o resisten en medio de grandes dificultades propias y ajenas, más de un 30% de la población vulnerable persiste en el apoyo consciente y en la fidelidad a sus propuestas realizadas o prometidas.

Como parte del costo de este complejo aprendizaje, habrá que avanzar paralelamente y a más lentas velocidades, por la vía de la construcción de hegemonía en manos y cabeza de poderes populares. Por un período histórico de transición a una fase superior de las correlaciones de fuerzas, coexistirá esa disputa inestable por el acceso a funciones de gobierno que permitan construir contrahegemonía dentro del bloque histórico dominante, conviviendo con lo que se ha llamado la lucha emancipatoria, que va organizando y construyendo poderes duales sociales con fuerte peso territorial.

Mientras que las luchas emancipatorias, revolucionarias por su programa anticapitalista son parte de la historia de las luchas sociales y de clase, las contrahegemónicas por la vía electoral son aún muy jóvenes. El haber logrado entrar a la opción de gobernar es consecuencia de las crisis estructurales del sistema, las que hace 100 años se consideraban como posibles y terminales para el sistema capitalista, mientras que hoy comprendemos que nos toca vivir y sufrir sus crisis secuenciales, pero también sus renaceres más agresivos. Por eso, el balance de los resultados alcanzados no pueden ser derrotistas ni idealizados. Así se dio, así fue. Pudo ser mucho mejor pero ese es el nivel de conciencia de las direcciones y de poder autónomo e independiente de los pueblos que las sostienen. En clave popular, «eso es lo que ha dado la tierrita», y la próxima vez deberá ser mejor.

Pero tampoco se puede caer en el conformismo, pues la oportunidad pudo y puede ser mucho mejor aprovechada, y los reiterados errores son la consecuencia de los errores históricos del proceso que conocimos como el «socialismo real», deformado y burocratizado, y que se concentraron en lo que se conoció como *estalinismo*, categoría conceptual de ejercicio del poder político, que va más allá de los errores y crímenes de quien dio origen al nombre. Con esto no pretendemos caer en el facilismo de tirarle el agua sucia a la revolución más importante de la humanidad, ni a quienes la degeneraron, sino que queremos mostrar que ese fenómeno no fue una «desviación» propia de la sociedad feudal rusa, sino que es una estructura mental irracional y de poder que, en distintos marcos históricos, afecta gravemente las etapas de la evolución de la humanidad hacia su liberación, y que en la lucha cotidiana por una sociedad y un mundo mejor, que llamamos socialista, tendremos que tener muy en cuenta las enseñanzas que nos van dejando los ejercicios particulares de poderes políticos y estructurales, como parte de nuestra filosofía de la praxis.

Hoy podemos decir que ha desaparecido el *estalinismo* clásico, que, a pesar de sus brutales errores, se soportaba en los avances alcanzados con la planificación estatizada, inicialmente democrática, de la economía. Esa legitimidad heredada pero no merecida, les permitió perdurar en el poder durante 50 años de coexistencia conciliadora con el capitalismo y autoritaria con sus pueblos. Para solo caer como producto de su incapacidad de

regenerarse y adecuarse a los nuevos pensamientos y energías críticas que se iban liberando, sea como producto de la propia existencia de ese campo socialista, como por el hecho histórico que significó la Revolución Cubana y, posteriormente, el mayo mundial de 1968, acontecimiento este último, que por su carácter anticapitalista y antiburocrático, deberemos prestarle especial y reflexiva atención en su próximo 50 Aniversario.

Los autoritarismos, conciliaciones y dogmatismos de hoy, que podemos llamar como un neoestalinismo diversificado, sean de Estados obreros, gobiernos denominados de izquierda o de liderazgos partidistas y sociales considerados de izquierda, son de mucho más corto plazo y de menos espacio político para consolidarse como «legítimos». Preservan del anterior estalinismo una visión de la revolución por etapas, lo cual ha afectado indiscriminadamente a los liderazgos de distintos sectores sociales y políticos, en tanto es una forma simple y aparentemente segura, de analizar la realidad y construir su estrategia transformadora, para, al mismo tiempo, blindarse frente al «aventurerismo generado por la impaciencia pequeñoburguesa», como califican a todo sector social que pretenda profundizar los contenidos antisistémicos de los procesos. En realidad, lo que producen y reproducen son miedos frente al enorme poder acumulado por su enemigo histórico, miedos a perder sus cargos dirigentes o de poder cedidos por el sistema, y miedos a que la población empoderada vaya más lejos de lo que sus aparatos y mentes estrechas logran abordar y controlar.

Ya no tienen el soporte de un campo socialista en competencia con el sistema capitalista, del que muchos de estos líderes ya habían renegado, y en sus políticas de conciliación con el capital han sido reemplazados, o se han convertido, en un tipo de socialdemocracia posibilista, originada y soportada en los desencantos militantes ante los partidos de la izquierda, y con la consecuente pérdida de confianza en *las masas*. Lo hacen sin abandonar del todo sus discursos socializantes, lo que les ha permitido hegemonizar la mayoría de los gobiernos progresistas y de izquierda, convencidos y convenciendo de que es posible sobrevivir y triunfar con una estrategia de evolución concertada con el capital, de paso pacífico «del gobierno al poder», siempre y cuando se logre controlar las presiones de los trabajadores y campesinos movilizados que exigen derechos «imposibles de garantizar», y

sobre todo, se excluya de las decisiones a los «radicales de la izquierda» que cohabitan en sus partidos de gobierno y por fuera de los mismos. Si algo deberemos reflexionar con las comunidades y pueblos, es que lo que fracasó fue el creer en que se podía avanzar conciliando con los poderes dominantes, pero también que no se podía hacer sin escuchar y darle la participación decisoria a quienes son los soportes sociales, culturales, emocionales y productivos de estos procesos, única forma de soportar y derrotar las inevitables contraofensivas sistémicas.

La primera confirmación de esta profecía bolchevique se ha cumplido. Se llegó a *gobernar en un Estado capitalista*. Pero también tiene plena vigencia la alerta temprana contenida en lo que concierne a los alcances y límites de la misma. En esa época primaban mucho más las prevenciones, y no se consideraba a la posibilidad de gobernar como una experiencia donde se enriquecerían la capacidad y conciencia de los trabajadores y los pueblos; pero tampoco se le niega, pues la esencia del pensamiento marxista a retomar ha sido la filosofía de la praxis, es decir, aprender de la experiencia propia y ajena para enriquecer el pensamiento teórico, que, en estos casos, dará nuevas luces a las futuras experiencias de gobierno y poder.

Hoy estamos viviendo una primera etapa de un corto episodio, contado en tiempos históricos, y si bien ya no existe el campo socialista «realmente existente» que propició un equilibrio inestable en la correlación mundial de fuerzas, se repiten los *crack financieros*, los estallidos de burbujas y de las múltiples crisis sistémicas, se agudiza la disputa por la hegemonía del mercado mundial y de las nuevas tecnologías, tanto entre los distintos imperialismos capitalistas, como con el llamado socialismo de mercado en que se ha transformado la Revolución China.

Inicialmente el estalinismo buscó acuerdos con Hitler para sacar a la Unión Soviética de la II Guerra Mundial, pero tardíamente y alertados por el ascenso del nazifascismo, comenzó a plantearse la estrategia de los Frentes Populares, donde los comunistas aceptaban alianzas con partidos de la burguesía «democrática», que los colocaban en casi total dependencia de las decisiones del aliado, el cual tenía todas las posibilidades electorales, económicas y militares para traicionar esa alianza, y luego reprimir a sus ingenuos aliados «bolcheviques», como repetidamente sucedió. Hoy las alianzas son a la

inversa, pues el peso social que sostiene a estos gobiernos es claramente crítico al sistema capitalista, pero en tanto «la crisis de la humanidad sigue siendo la crisis de su dirección», como decía el «profeta» mencionado, sus direcciones mantienen esos miedos y tienden a someterse al aliado de último momento, justificándose en la necesidad de aparecer como «potables» frente al poder hegemónico de los centros del capitalismo mundial. Potabilidad que los lleva a ser absorbidos por las políticas de ajustes neoliberales y luego destronados de sus frágiles y transitorios cargos de gobernantes.

El surgir y hacer de los gobiernos antineoliberales

Los llamaremos antineoliberales, pues en mayor o menor medida este ha sido el aspecto común que estos gobiernos han compartido, si bien con diferencias, pues mientras unos entienden al neoliberalismo como la fase actual del capitalismo financiero global, otros los conciben como un aspecto salvaje del capitalismo que se puede frenar, humanizar, y así regresar a su estadio anterior nacional y keynesiano. Lo que se puede afirmar es que fue la agudización de la explotación y dominación que generó la fase neoliberal del sistema capitalista, con la consecuente concentración monopólica del sistema financiero y productivo, lo que creó un creciente desempleo mundial, una caída creciente de la tasa de ganancia, y una acelerada explotación de la naturaleza, con el consecuente descontento social y el aumento de las resistencias y luchas ofensivas populares, contexto que abrió la puerta a gobiernos progresistas y de izquierda sin que socialdemócratas, neoestalinistas y revolucionarios, estuvieran estratégica ni concretamente preparados para asumirlos.

La improvisación, a veces creativa y otras veces destructiva, fue la constante de sus primeros esfuerzos. Sus errores fueron criticados pero también reiterados, pues la capacidad de escucha reflexiva y científica en sus líderes, fue apagada por los brillos momentáneos del ejercicio del poder. Los peligros profesionales del ejercicio del poder, que tan claramente había profetizado Rakovski en la fase de declinación de la Revolución Rusa,⁹⁰ se repitieron con formas de gestión adaptadas al sistema, con la aplicación de las recetas del

⁹⁰ Christian Rakovski: *Los peligros profesionales del poder*, agosto de 1928.

FMI, y más concretamente con la concentración del poder de gobierno en manos de nuevos caudillos, o mesías individuales y no colectivos como auguraba Walter Benjamin, con lo que desconocían las críticas de sus propios partidos y se alejaban de sus bases sociales.

Si bien en América Latina nadie puede negar el origen en la protesta social de estos gobiernos, lo que incluye a las burguesías locales, se escuchan en España voces de izquierda que niegan toda relación de partidos como «Podemos», con el Movimiento 15 M, de protesta de los indignados, que los precedió. Se intenta separar a los procesos sociales y democráticos contemporáneos de las luchas históricas y antisistémicas de los pueblos de Europa, de la misma forma que se quiere cortar las relaciones de las revoluciones del siglo XX con las luchas por gobiernos de izquierda en América Latina. Así las cosas, la historia comienza con mi lucha democrática actual, sin raíces de clase que la condicionen, y si se conquistan reformas y alguna transformación social, eso no tiene que ver con las luchas sociales y políticas de los pueblos, sino que es producto de líderes inteligentes, mediáticos, con un partido meramente electoral. En el debate interno de «Podemos» estos análisis no lograron imponerse, pero otra vez se demuestra que donde crece una nueva estrategia de poder contrahegemónico, nace a su costado el riesgo de que se creen nuevas castas políticas que tienden a reiterar aspectos del estalinismo, combinados con la apuesta socialdemócrata de gobernar humanizando el capitalismo neoliberal.

En los procesos que combinan las luchas por construir poderes sociales duales y alternativos con el gobernar Estados capitalistas en crisis, por lo general, sus dinámicas electorales han estado mediadas por liderazgos personalizados, fenómeno que se reproduce mucho más en los procesos político electorales que en los político sociales. De un candidato importa más su carisma que su formación y compromiso, pues eso significa votos, y como dicen los expertos en estos temas, nadie puede ir a elecciones sin intenciones de ganar. Situación más grave aun cuando las listas se ordenan por voto preferente, lo que lleva a desaparecer el programa y la función del partido, y suplantarlos por la propuesta y los compromisos que haga cada uno de los candidatos, generalmente en desmedro de los demás compañeros de campaña política. Y cuando ese candidato ha logrado un cargo de representación en el

legislativo, su reelección se convierte en una empresa electoral, donde sus colaboradores, compañeros de militancia financiados por el Estado, se deben colocar al servicio de esa causa personal, y no de los objetivos del partido.

Y si ha sido elegido alcalde, gobernador o presidente, sostener su imagen en las encuestas se vuelve el objetivo político principal, más allá de la posibilidad de hacer una crítica objetiva del trabajo realizado, buscando siempre la superación y la ampliación del impacto social y político transformador de sus acciones y políticas públicas impulsadas. Es bastante común que lo primero que hace un candidato de izquierda elegido es cambiar su número de celular para no tener que recibir hojas de vida, solicitudes de empleo, lo que también lo aísla de la posibilidad de recibir propuestas innovadoras, en tanto gradualmente deja de asistir a reuniones con sus viejos camaradas del partido, o de la organización social a la que ha pertenecido. En esa dinámica en la que cae preso, sus objetivos políticos como miembros de un gobierno nacional o local están en principio subordinados a él en el contexto del acuerdo de la democracia burguesa, lo cual marcaba el contenido de la «profecía» inicial, quedando en segundo lugar aquella de que el soberano debe ser el pueblo.

¿Pero qué sucede cuando los mismos sectores de la burguesía que han construido y gozado en su beneficio privado de esa normatividad democrática liberal, comienzan a violarla, desconocerla, o buscan revisarla para restringir los derechos de los sectores progresistas y de izquierda que han pasado a gobernar utilizando esas mismas vías?

El proceso de gobernar a un Estado capitalista mantiene su carácter desigual y combinado, donde lo desigual es muy diverso y variable de acuerdo con la historia y realidad de cada proceso nacional o local, mientras que lo combinado comienza por la necesaria conjunción dialéctica de lo social y lo político, de lo contrahegemónico electoral con lo emancipatorio de las causas sociales, papel al que estaban llamados históricamente los partidos políticos de izquierda, pero que al igual que lo sucedido en la mayoría de los procesos de tránsito hacia el socialismo, los gobernantes del Estado subsumieron al partido, provocaron su forzoso alejamiento de las luchas de los movimientos sociales y generaron distancias y rupturas entre los dos campos que estaban llamados a sostenerlos y articularlos. Así, hubo líderes que llegaron a reclamar el derecho del partido a su autonomía frente a los movimientos sociales, en respuesta a la

petición inversa que estos les hacían. Otros plantean que es correcto el acudir a la autocrítica, pero que en momentos de asedio de los medios y los grupos de poder debe primar la centralidad en la toma de decisiones. El problema es que desde que asumen estos gobiernos son y serán sometidos a ese acoso creciente, con lo cual quedaría excluido todo debate crítico y autocrítico y será siempre la voz de líder o gobernante la que defina. En esta lógica, quienes tienen la valentía de realizar la crítica en forma constructiva son los primeros alejados, y entre los que callan para sostenerse cerca del poder siempre existe la posibilidad de que se esconda el Judas maltratado listo para traicionar. Y cuando la traición interna o la de sus aliados aparece como inminente y se conjuga con los intereses golpista de la burguesía local, se llama a los sectores sociales y políticos afines a defender el proceso, pero ya en algunos casos ha sido tarde, pues la base social y política había dejado de creer en ellos, en sus partidos y en los líderes de las organizaciones sociales que callaron.

La teoría de la revolución permanente había planteado la importancia de romper con las visiones «etapistas» de la lucha revolucionaria, donde las etapas se suceden una a otra ordenadamente, y se asimilan a la idea de los ciclos. Pero así como las etapas no siempre se ordenan en forma escalar, y menos aún el surgimiento de una depende del fin de la otra, los llamados ciclos son también procesos simultáneos articulados y desarticulados entre sí, que permiten aprender de las derrotas, unos más rápido que otros, y preparar saltos y rupturas que llevan a saltar etapas supuestamente inevitables. Los pueblos indígenas de Bolivia discutiendo el socialismo, como lo hacía en Colombia Quintín Lame hace más de 70 años, al igual que los pueblos tribales de África que bajo el impulso de la Revolución Cubana y mundial intentaron avanzar a un socialismo raizal, no estaban fuera de época ni debían sentarse a esperar a la república burguesa, quienes sí lo estaban eran los líderes internacionales y nacionales de ese neoestalinismo que no entendieron el significado histórico cultural del tránsito de la lucha anticolonial hacia Estados y sociedades más justas y libres, construyendo la prometida utopía socialista de acuerdo a sus contextos, culturas y sus propias relaciones de producción. Fueron esas mismas esquemáticas concepciones y métodos llamados a «ordenar científicamente» los ciclos de ascenso revolucionario los que muchos de estos líderes aplicaron cuando llegaron a gobernar, donde el avanzar por

etapas era parte de sus aprendizajes y dogmas preestablecidos. Solo algunos de ellos fueron capaces de aprender sobre la marcha. Chávez fue el mejor ejemplo, llegando a comprender la importancia de dejarse impulsar por los pueblos que, en esos procesos participativos de movilización, adquieren conciencia y fortaleza política y organizativa, y con sus luchas los empujan a ir más allá de lo que en la superficie aparece como posible.

«Bendiciones» para los que resisten y luchan

Acudimos a las «bendiciones», que según la definición son «deseos benignos dirigidos a otra persona o grupo», pues hoy son muy frecuentes en el lenguaje popular, y supuestamente, muy útiles para enfrentar las dificultades de la sobrevivencia en esta fase de la sociedad capitalista. Lamentablemente, este ha sido solo el lado amable de los «nuevos» cultos religiosos, pues por otro lado han sido las creencias religiosas uno de los ejes centrales de la estrategia regresiva conservadora para confrontar a estos gobiernos alternativos. Junto con las percepciones maliciosamente construidas por sus medios de comunicación, acuden a la imagen de la idealizada familia cristiana, la que se supone amenazada por las luchas sociales que han obligado al Estado a cumplir con las garantías para los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las poblaciones discriminadas por su opción sexual y el enfoque de género.

El ambiguo papel jugado por la Iglesia Católica en el pasado cercano, sea frente a las dictaduras y guerras civiles, como en las conductas de abusos sexuales de sus prelados, ha llevado al aumento de la población atea y agnóstica, pero también a la proliferación de nuevos cultos carismáticos y pentecostales, surgidos de las iglesias evangélicas, bautistas, presbiterianas, metodistas, episcopales, luteranas y católica, los cuales se alejan del contenido bíblico e incluyen el culto a la prosperidad e indirectamente al dinero, todo al servicio de sus pastores. Es en esa fe, que llega a incluir lo sobrenatural, en la que se refugian muchos de los más excluidos y desesperados.

El fenómeno comenzó en Chile luego del golpe de Estado de Pinochet, apoyado en los miedos que generaba la represión, la crisis económica que aumentó la pobreza, y sobre todo, en el impacto político emocional de la derrota del gobierno de izquierda y socialista de Salvador Allende, cuyas

causas y enseñanzas nunca fueron socializadas a fondo con los trabajadores y las comunidades, pero tampoco asimiladas por quienes hoy gobiernan en nombre del pueblo. Por muchos años la izquierda chilena luchó heroicamente contra la dictadura exigiendo derechos humanos pero nunca se abordaron con profundidad los balances históricos sobre la incapacidad de respuesta de los líderes de partidos y sindicatos para ponerse al frente de unas mayorías dispuestas a defender su gobierno democrático y popular, y dar la vida enfrentando a un ejército dividido y solo apoyado por una minoría oligárquica. Ante ese vacío de verdad, de reflexión autocrítica sobre el que sería el primer ensayo de un gobierno de izquierda, los sectores populares se pasaron de la militancia social política, que costaba el exilio o la vida, a buscar en la fe cristiana su nicho de estabilidad emocional, lo cual fue aprovechado por una invasión de telepastores que llegan a vender la franquicia de sus iglesias como la de cualquier negocio, y disponen de todo el escenario para pasar del poder religioso al poder político. A Jesucristo le tocó pasar de la multiplicación de los panes y los peces, que era una idea de la época sobre cómo garantizar el derecho humano a la alimentación, a la multiplicación de los pesos y los votos al servicio de quienes pasan del oficio de falsos profetas, a falsos Mesías, y de allí a políticos corruptos.

El proceso es también desigual, y otra cosa fueron los sacerdotes católicos que piensan y aplican la Teología de la Liberación buscando el paraíso en la tierra, en clara ruptura con el sentido alienante y paralizador de las religiones oficiales. Ese fue su compromiso por los pobres, demostrado frente a las dictaduras en Brasil y en parte en Chile, y otro el que demostraron las jerarquías católicas que, en Argentina, utilizaban la confesión a las víctimas de los campos de tortura de la dictadura, para definir quién debía morir y quien podía «regenerarse». Lo cual se expresó también en las luchas de jesuitas y de Monseñor Romero junto al pueblo salvadoreño, por resolver el conflicto armado y avanzar en la construcción de paz. Desigualdad que fue evidente en Nicaragua, donde las mismas jerarquías de la Iglesia Católica que confrontaron la Revolución Sandinista pasan hoy a ser un fuerte aliado del gobierno sandinista.

Mientras en casi toda Centroamérica el imperialismo norteamericano impulsó con muchos recursos el crecimiento de las iglesias evangélicas, las que se han

derechizado y cooptado un gran público electoral, como se acaba de confirmar en la «democrática» Costa Rica, en Nicaragua se presenta una alianza entre el gobierno y las autoridades de la Iglesia Católica, dirigida a frenar ese auge carismático conservador, que ha sido útil para la estabilidad de las dos partes, más allá de las formas y contenidos que se le está dando, y que no compartimos, pues no resuelven el problema de la liberación de los seres humanos de toda forma de alienación. No hay una alienación buena y otra mala, pues la más benigna puede mañana tornarse dañina en tanto cambie quien la maneja. Y esa radical disputa de la orientación ideológica y política en el campo del cristianismo demuestra que al igual que en la época de los años sesenta, surgirán a izquierda y derecha, como de hecho ya sucede, movimientos que tendrán un fuerte papel social político en los procesos de la lucha sociales y de clases.

Esta contraofensiva del sistema también se apoyó, paradójicamente, en los sectores populares que gracias a las políticas de estos gobiernos pasaron de la pobreza a un nivel de vida con mayor garantía de derechos. Se dice con razón, pero como si fuera una traición, que la nueva pequeña burguesía no votó por quienes la favorecieron. Pero lo que no se explica es el por qué. Toda garantía de derechos que el Estado concede en forma paternalista, nunca es suficiente para quien la recibe, y va acompañada del miedo que pueda ser revertida; pero todo derecho que se conquista luego de un proceso colectivo y formativo de lucha, genera confianza, solidaridades a futuro y autoestima social. Estos gobiernos debieron combinar las garantías de derechos y las oportunidades laborales y de negocios por cuenta propia, con procesos de formación, de movilizaciones previas que exigieran esos derechos y organizaran a esas poblaciones, para luego el gobierno, como reconocimiento a esa forma de democracia directa, pase a concederlas, y así demostrar que la lucha social obtiene sus resultados cuando movimiento social y gobierno comparten los mismos valores e intereses de clase. Si solo se los convierten en pequeño burguesía con ánimos de continuar ascendiendo en la escala social en forma personalizada, o en comerciantes que hacen buenos negocios pero no importa con quién ni para qué, se está reproduciendo la pirámide de la escala social que prometió la burguesía y nunca fue capaz de concretarla. El gran objetivo no es tener más personas que asciendan en la escala social, sino que todos,

como un gran colectivo social con igualdad de oportunidades, puedan sentir que son capaces de vivir dignamente con su propio trabajo.

El regreso a nacionalismos excluyentes y discriminatorios fue otro frente de la contraofensiva de la derecha global, como se manifestó en Europa y Estados Unidos, pero que también encontró sus versiones progresistas, como son los independentismos frente a asfixiantes centralismos, que se fortalecen en Cataluña y Córcega, como también en las antiguas colonias, caso de Puerto Rico, excluidas y tratadas despectivamente por el rostro desnudo del imperio. Estrategia que no les ha funcionado en Latinoamérica, ya que estos gobiernos han centrado su accionar en propuestas de defensa de la soberanía nacional en respuesta a las amenazas de los grandes grupos económicos de poder transnacional, lo que permite que el nacionalismo tome su perfil progresista, integracionista y antiimperialista, al cual buscan frenar con el invento de la amenaza «castrochavista». Otra vez el proceso desigual, contradictorio, dependiendo en su combinación progresiva de las relaciones de poder que genera la lucha de clases en sus diversas formas y expresiones.

Los gobiernos locales en ciudades capitales

El primer gobierno de izquierda en una capital del Estado nacional fue el de Alfonso Barrantes entre 1984 y 1987, elegido alcalde de Lima por el frente de Izquierda Unida. No tuvo ni una sola denuncia de corrupción frente a su gestión y desarrolló novedosos programas sociales, como el vaso de leche para todos los niños, tomado del gobierno de Salvador Allende, junto con la promoción de la democracia y la garantía de derechos. Cuando tenía toda la posibilidad de triunfar en las siguientes elecciones presidenciales, la izquierda se dividió y triunfó la mezcla de nacionalismo y socialdemocracia oportunista de Alan García y el APRA. Poco se estudia esta experiencia que marcó una crisis prolongada de la izquierda peruana, pues no estaba preparada para responder al desafío de acceder al gobierno nacional.

A partir de allí fueron muchos los gobiernos alternativos en pequeñas y grandes ciudades y en gobernaciones hasta que llegaron los primeros triunfos presidenciales. Hoy se trata de reflexionar sobre las enseñanzas que se pueden obtener de todas estas experiencias, buscando patrones comunes de acciones y reacciones, de programas implementados y reacciones

encontradas, algo que se pretende dejar en manos de los lectores de esta obra de reflexión colectiva. Con algunos criterios comunes, como el asumir que cada caso ha sido y será distinto, y en eso incluimos la experiencia de los tres gobiernos seguidos de la alcaldía de Bogotá, en manos de gobiernos progresistas apoyados o integrados, en distintos niveles, por las fuerzas de la izquierda colombiana, en la cual nos concentraremos.

En la lucha interburguesa, gobernar en Bogotá era casi el salto asegurado a la Presidencia de Colombia. De allí la sorpresa para los grupos del poder hegemónico, que contando con la restricción a las libertades que implicaba la guerra civil colombiana, en la cual habían logrado retomar la iniciativa militar y mantenían bajo amenaza de muerte a los líderes sociales y políticos de izquierda, perdieran tres veces seguidas el manejo político del presupuesto territorial más grande del país.

La pregunta que hoy nos hacemos es hasta dónde era posible que avanzaran estos gobiernos progresistas del Distrito Capital, y hasta dónde estaban las élites del sistema dispuestas a soportarlas y convivir con ellas, sin acudir a todas las formas de lucha posibles. Las tibias medidas iniciales de gobierno fueron dirigidas a dar mayores garantías para el derecho a la salud, la educación, y a la diversidad étnica y sexual, lo cual no pasaba de una gestión de reformas «sin indiferencia», aunque importante para las poblaciones más excluidas. La apuesta inicial de los grupos de poder fue avanzar en la estrategia de cooptación del primer Alcalde, para impedir nuevas derrotas, el cual gobierna con funcionarios que muy poco tienen que ver con la izquierda, y al que finalmente logran cooptar, al punto que hoy es una ficha al servicio del sistema.

Pero su incompreensión del proceso social político se ratifica cuando sus partidos tradicionales vuelven a perder las elecciones, a pesar de sus esfuerzos clientelistas. Nuevamente la apuesta es dirigida a aprovechar el tibio perfil del nuevo Alcalde que, sin necesidad, ofrece gran parte de su administración a funcionarios del liberalismo, pero sus preocupaciones crecen cuando este comienza a amenazar las arcas de la corrupción de los partidos tradicionales en alianza con los grandes contratistas del país. El problemita es que ese ataque no se basó en combatir esa alianza corrupta, como ya exigía la comunidad, sino que su grupo familiar entra en la disputa por la apropiación de

la renta del mercado de las obras públicas. Organismos de control y fiscalía pasan a aprovechar esa oportunidad no esperada y apuntan por esa vía a enterrar definitivamente la opción de un gobierno de izquierda en lo local y nacional.

La reacción de la izquierda, entonces articulada en el Polo Democrático Alternativo no fue en su conjunto lo suficientemente visionaria para romper pública y políticamente con ese foco de corrupción, y dejó su decisión «a la espera del fallo de la justicia» como si esta no fuera una institución politizada. Unos no quisieron hacerlo pues estaban incluidos en el negocio, otros dudaron pues temían dañar a su partido, y otros no pudieron provocar pronunciamientos trascendentes que permitieran afrontar la dimensión de la olla que se estaba por destapar y cómo esta repercutiría en el quehacer político. Cuando el Alcalde es apresado se intenta retomar la continuidad del proceso con un corto período de gobierno con mayor perfil de izquierda, pero el daño para el PDA ya estaba consumado. Afortunadamente, un sector de la izquierda liderado por quien sería el tercer Alcalde ha roto con el PDA denunciando la corrupción con anterioridad al escándalo mediático, y se pone al frente de una campaña contra la corrupción en todo el espectro del Estado, lo que le garantiza nuevamente el triunfo electoral. Esto último demuestra la paciente comprensión de la población, en particular de los sectores populares, pero también la debilidad que hereda un gobierno con una izquierda debilitada por su división, estigmatizada y con enfrentamientos sectarios.

Paralelamente se desarrolla un debate sobre la ruptura del falso paradigma de que en la izquierda no hay corrupción, que ya venía siendo cuestionado pero se justificaba como si fueran casos aislados, al igual que lo ha hecho históricamente la burguesía. Faltaba entender que después del derrumbe del socialismo burocratizado, los ladrillos del muro de Berlín habían caído sobre la cabeza de un amplio sector de la izquierda revolucionaria, generando una pérdida de la voluntad y entrega desinteresada por la que se filtró la decepción y con ella la corrupción. En tanto hoy la izquierda amplia se disponga a gobernar el Estado capitalista, el primer riesgo a controlar con la activa participación de las comunidades es la corrupción de sus funcionarios como forma de cooptación y posterior descrédito político.

El tercer Alcalde se inicia despidiendo a toda una camada de funcionarios progresistas y de izquierda que habían logrado entender el funcionamiento del Estado, pues los asimila con la corrupción de la familia gobernante. Los reemplaza por sus antiguos compañeros de lucha y personas que le manifiestan su apoyo, muchos de ellos sin experiencia de gobierno. Toda su gestión es de inmediato atacada y perseguida pero no encuentran pistas de corrupción. De ahí que pasan a utilizar la falta de experiencia y los errores de los nuevos funcionarios y el estilo cerrado de toma de decisiones del Alcalde, para hacer de la ineficiencia en la gestión la principal bandera de desprestigio, lo que impacta sobre las capas medias. Y con esa relativa validación, acuden a la justicia y a los organismos de control para que políticamente lo persigan y destituyan.

Un ejemplo de la reaccionaria ofensiva jurídico administrativa es la respuesta a la decisión del Alcalde de reestatizar más del 50% de la recolección de basuras, uno de los más grandes negocios públicos-privados. Decisión justa que fue tomada sin la participación de las comunidades interesadas, que incluso llegaron a plantear formas de asociatividad y cooperativismo para que no fuera un Estado burocratizado quien la llevara adelante, pero no fueron escuchados por los vestigios neoestalinistas en los funcionarios encargados. Sin embargo, fue un hecho de gran significación política de defensa de lo público, combinado con la organización y garantías para los trabajadores del reciclaje, tal vez el oficio más explotado y no reconocido, sin antecedentes en las ciudades gobernadas por la izquierda. Por un día no se recogen basuras como parte de un empalme boicoteado por las empresas privadas salientes, y en corto plazo se resuelve la destitución del Alcalde por parte del reaccionario Procurador de la Nación, posteriormente destituido por corrupción en su nombramiento. Frente a esa amenaza ya decretada, el Alcalde llama a toda la población a manifestarse en un Cabildo Abierto frente a la sede de la Alcaldía colindante con el Congreso Nacional y el Palacio Presidencial, generándose una multitudinaria movilización que se toma e instala en la Plaza Central para escuchar a sus líderes y deliberar, todo contando con gran simpatía en la población y la reunificación creciente de las fuerzas de izquierda que comprenden el enfrentamiento de clases que se ha instalado.

Todo el sistema se tambalea y los propios medios entran en confusión, pues es evidente la persecución política y la legitimidad de la protesta social, al punto que se logran medidas cautelares con la Corte Interamericana de Justicia que lo devuelve al cargo. Pero en lugar de mantener ese estado de movilización deliberativo para seguir gobernando como los famosos Cara al Pueblo que realizó la Revolución Sandinista, se abandona el estado de asamblea permanente desmovilizando a la población para continuar gobernando un aparato del Estado distrital en franca oposición y con unos medios de comunicación que retoman su ofensiva mediática buscando su mayor desprestigio posible, para que no se convierta en una alternativa presidencial exitosa.

En esa resistencia se comprobó que cuando la respuesta social es decidida y les golpea con legitimidad popular en su credibilidad sistémica, se pueden revertir sus golpes jurídico-políticos. ¿Pero, qué hacer frente a realidades como la de Honduras, tanto frente al golpe de Estado militar como al posterior fraude electoral grosero aceptado por el «demócrata» Secretario General que manipula la OEA? ¿Cuál debe ser la respuesta de ese poder social electoral en camino de convertirse en poderes duales cuando intenten repetir los golpes o impedir los nuevos triunfos electorales, considerando que esta situación de rebeldía frente a la desigualdad neoliberal continuará estallando en distintos países y con distintos procesos?

Si este será el determinante social político de la época, lo primero a entender es que las contraofensivas sistémicas que se están utilizando contra estos procesos contrahegemónicos y emancipatorios implican fuertes retrocesos, pero que en tanto no tienen perspectiva histórica ni voluntad de mantener y estabilizar un mínimo de garantías de derechos humanos, serán transitorios. En consecuencia, lo estratégico de la resistencia y contraofensiva social seguirá pasando por dos grandes ejes:

1. Realizar con urgencia balances políticos de lo sucedido en los distintos procesos del continente, en espacios conjuntos de las distintas fuerzas de izquierda implicadas y con la participación de los principales líderes sociales, sindicales y étnicos. Presentar las enseñanzas que cada proceso está generando y debatirlas aplicándolas a cada realidad nacional. Combinarla con el balance de la situación en cada país, donde la crítica y la autocrítica

deberá ser en lo fundamental de carácter conceptual y estructural, sin caer en la personalización de las responsabilidades, para centrar el debate en entender que los errores no fueron un problema de carácter personal, sino que lo personal puede desenvolverse, con intereses distintos a los inicialmente proclamados, por la falta de una democracia directa partidista, sindical, social y sobretodo territorial, que permitiera el seguimiento y control político por parte de los líderes medios y las bases políticas y sociales.

2. Continuar fortaleciendo las organizaciones sindicales, sociales, étnicas y territoriales, como organismos de doble poder en sus espacios de trabajo, de vida y de estudio, y preparar con ellos los planes de respuesta rápida que apunten como un punto álgido a la paralización del proceso productivo, financiero y comercializador que soporta a la ultraderecha autoritaria y dictatorial.

Una de la más grande resistencia civil a este tipo de golpes de mano antidemocráticos fue la Huelga General de 16 días de los trabajadores de Uruguay frente al golpe cívico militar que clausuró el Congreso de la República en junio de 1973, cuyas enseñanzas deberán actualizarse para los nuevos contextos del mundo del trabajo y de las resistencias populares. La pregunta es sobre qué tanto se podía resistir en esa lucha de los trabajadores, qué recursos se requerían para sostener a sus familias pero también para integrarlos a la lucha, y cómo se lograría que el conjunto de la población urbana y rural se sumara a esa movilización.

La Central de Trabajadores había resuelto públicamente que la huelga general sería la respuesta al golpe de Estado, pero no se tenía claro por las fuerzas políticas de la izquierda si se apostaba a que el paro, aislado, derrotaría al golpe de Estado e impediría la dictadura. Se esperaba de reacciones de sectores progresistas en las propias fuerzas armadas que ya se habían expresado, pero no se tenía programado los tiempos que podía durar, el cómo incidir en la lucha interna de los militares, ni como detener la feroz represión contra los líderes sindicales. El principal saldo de esta heroica huelga general de los trabajadores uruguayos fue que la dictadura nació deslegitimada, desenmascarada, y debilitada internamente para llevar adelante un modelo similar al aplicado por la dictadura argentina, la cual al imponerse tres años después, no encontró esa resistencia de clase, obtuvo cierta

legitimidad inicial en las capas medias, y pudo perpetrar la más grande atrocidad humanitaria del continente,⁹¹ mientras que el retorno de la democracia en Uruguay implicó el crecimiento gradual del Frente Amplio de toda la izquierda y su gobierno por ya tres períodos. Con fuertes debates internos y diferencias de proyectos estratégicos en el seno del Frente Amplio, la clase obrera en huelga general impuso la unidad estratégica y le puso sus límites a un proyecto neoliberal y represivo en Uruguay.

En el caso reciente de Honduras y en otros donde se puedan desarrollar en el futuro, países con riesgos de repetición de los fraudes, caso México, se deberán pensar en estrategias superiores a las que ya se implementaron sin lograr revertirlos, considerando que contarán con el silencio cómplice de la OEA y el apoyo del Presidente de Estados Unidos. El eje central en el análisis de estos casos pasa por pensar previamente qué cosas se pueden prever, evitar, y cómo responder a cada una de estas. En particular, en el manejo de los medios de comunicación y las respuestas a sus falsas verdades, y en contar con una gran masa de gente que controle voto a voto y paso a paso todo el proceso, como se realiza hoy en Uruguay y en Nicaragua. No se puede evitar fácilmente en Colombia la corrupción en las Registradurías Regionales, ni la compra de votos, pero una presencia internacional y una campaña de información y formación mediática vía redes sociales, como de hecho ya está en marcha, puede ayudar a frenar esa corrupción de la democracia. Pero si no existe la amenaza de tener que confrontarse con una suma de poderes duales convertidos en un centralizado poder popular, capaz de responder con un Paro Cívico Nacional dirigido a sostener el triunfo electoral o el gobierno en ejercicio, debe considerarse, como ya se ha demostrado, que estarán dispuestos a pasarse por la faja todos los controles y a violar su propia legalidad.

Siendo estos golpes y fraudes parte de una estrategia acordada con el imperialismo norteamericano, lo cual hoy no es discurso izquierdista sino una posición proclamada por su Presidente, la respuesta deberá ser también latinoamericana y caribeña. No se puede ocultar que nuestra solidaridad internacional sigue siendo más política que concreta e institucionalizada. Al igual que no se pudo avanzar en la integración económica, social y política del

⁹¹ Este párrafo se apoya en una entrevista realizada a Carlos Alejandro, líder sindical y del Frente Amplio de Uruguay.

continente, más allá de los esfuerzos valiosos pero insuficientes de UNASUR y la CELAC, no se ha tenido una capacidad de respuesta social y política orgánica y global que supere los espacios diplomáticos, los que además están en constante disputa y no obligan a nadie.

El nacionalismo antiimperialista es mucho más útil cuando se combina con la solidaridad internacionalista, como pregonaba y actuaba el presidente Chávez, caso ejemplar cuando los bombardeos del gobierno de Colombia contra las FARC en territorio ecuatoriano. Al igual que las acciones que hoy realiza Estados Unidos y sus aliados en el continente contra el gobierno de Venezuela, se deberán preparar con suficiente antelación y planeación, bloqueos socioeconómicos al comercio con los gobiernos que realizan y apoyan estos golpes y fraudes antidemocráticos, aislando sus embajadas y obligando a la ruptura de todo tipo de relaciones, realizar movilizaciones de carácter americano que paralicen la producción y movilidad en todos los países cómplices de estas acciones.

Son temas a incluir en los planes de acción política y en los balances de los procesos golpeados por esta contraofensiva imperialista, pero que comienzan por debatir el cómo reconstruir la unidad de las izquierdas en los espacios nacionales, la cual se ha agravado por nuestras incapacidades para responderle en conjunto a los enemigos de la democracia y tratar de resolver la encrucijada cargándole las responsabilidades a las otras fuerzas y grupos de la izquierda. Sucesos como la reciente división en las fuerzas progresistas que han gobernado en Ecuador, que tanto alegran a la derecha local y latinoamericana, son una puerta que se abre para que la aplastada derecha oligárquica regrese al poder. Y la responsabilidad no será exclusiva de Correa ni de Moreno, sino de las fuerzas sociales, políticas e indígenas que, respaldando a uno y otro, deberán unirse para preparar las nuevas etapas de la resistencia.

A punta de golpes de Estado y deslegitimando los mínimos democráticos y éticos del Estado de Derecho, se anuncian rupturas políticas en las fuerzas armadas, las que tendrán que decidir si, como en el pasado, asumen funciones represivas para las cuales no fueron concebidas. Las políticas migratorias no tendrán posibilidad de control, tanto en sentido Sur-Norte como en el Sur-Sur, y los inhumanos resultados que muestran las destrucciones de los Estados

naciones en Siria, Libia, Irak y Afganistán, se están repitiendo con Venezuela, donde los gobiernos latinoamericanos que buscan intervenir en sus asuntos internos, comenzando por Colombia, se están disparando en su propio pie.

Solo la compleja y difícil articulación virtuosa de las formas avanzadas de doble poderes territoriales y sectoriales, con las estructuras de poder político electoral contrahegemónico, podrá frenar esta irracionalidad generada por los miedos de perder el poder de las clases dominantes. Lograrlo dependerá de liderazgos colectivos y multidisciplinarios, no meramente electorales, con la suficiente comprensión crítica transformadora para conducir esos procesos hacia la construcción de bloques de poderes regionales, conformados por países gobernados por quienes se comprometan, simplemente, a defender y garantizar los derechos humanos y de la naturaleza.

El pos acuerdo de paz

Una cosa era negociar acuerdos de paz 20 años atrás, y otra es hacerlo luego de la agudización de la lucha de clases que se generó con el triunfo de los gobiernos progresistas y de izquierda. En el caso del conflicto armado colombiano, el nuevo escenario permitió que se abrieran negociaciones en un clima de mayores garantías regionales y mostró que se podía gobernar el Estado capitalista, que sin equipararse con la toma del poder a la que aspiraban los insurgentes, era posible utilizar ese poder político de gobierno para instalar reformas, impulsar poderes duales y avanzar en un camino más democrático en la disputa del poder económico. Pero era también previsible que lo que más preocupaba a los enemigos de los acuerdos era el riesgo de la reactivación de las luchas sociales al no existir más la amenaza de la guerra con todas sus consecuencias.

Hoy el temor de la clase dirigente colombiana pasa porque esa irrupción de lo social político, combinada con la corrupción de su justicia que llega hasta la Corte Suprema, abiera la posibilidad de extender hacia el espacio nacional, las experiencias de gobiernos progresistas y de izquierda conquistados en Bogotá. Estos miedos llevan a la ultraderecha a hablar del «peligro de un gobierno castrochavista», y a utilizar la presencia de las FARC en el campo político electoral para mostrarlos como los próximos gobernantes dictatoriales. De allí nace su estrategia de agredir en forma violenta a los excombatientes que

intentan realizar su campaña electoral, para la cual no tienen garantías que les permitan explicar sus programas y objetivos. Recuperar las confianzas de los sectores populares que apoyaron el NO en el plebiscito de la paz, implica trasladar el centro del debate a la desigualdad, pobreza y exclusión que genera el modelo extractivista y que hoy unifica a la derecha y la ultraderecha. Los enemigos del proceso de paz son los mismos que buscan impedir, desprestigiar y derrocar a los gobiernos progresistas y de izquierda del continente, para lo cual ya le han encontrado sus puntos débiles, que no son pocos, y cuentan con el apoyo abierto del gobierno de Estados Unidos, que ha resuelto que ningún dólar de su cooperación internacional podrá tener algo que ver con los acuerdos de paz y particularmente con las FARC, a la cual mantienen en su sesgada lista del terrorismo internacional. Estrategia que se complementa con el renacer de los grupos paramilitares, particularmente en las regiones costeras del país por su relación con el tráfico de estupefacientes, que están apostando a un nuevo-viejo escenario en el que se pase del avance que implica una paz imperfecta donde sobreviven formas de violencia a nuevas formas de violencia sistemáticas y organizadas en complicidad con sectores del establecimiento, como ya preanuncian los continuos asesinatos de líderes sociales populares y de excombatientes. La paz de Colombia es la paz del continente y la democracia en el continente será la democracia para Colombia.

Los desafíos no resueltos del progresismo en la telaraña institucional del capital

Antonio Elías*

Introducción

La grave crisis estructural de la economía latinoamericana se ha profundizado, al igual que su correlato de exclusión y segmentación social como consecuencia de las seculares relaciones centro-periferia y del avance del proceso de globalización.

El ciclo de altos precios de las materias primas en la primera década de este siglo no modificó esta situación; por el contrario, la matriz productiva es cada vez más primaria y la propiedad se ha extranjerizado en la mayoría de los países.

La dinámica capitalista mundial se basa en la existencia de: por un lado, países centrales proteccionistas, con Estados interventores que controlan el progreso científico tecnológico; y por otro, una periferia aperturista que compite por la Inversión Extranjera Directa y deja librada la economía a la iniciativa de las transnacionales y sus socios locales, lo cual, obviamente, profundiza la dinámica desigual y concentradora de la economía mundial y reafirma el papel de la periferia como la contracara complementaria de los países centrales y no como un camino hacia el desarrollo.

El funcionamiento del sistema se organiza a partir de un conjunto de instituciones y reglas, sintetizadas como «neoliberalismo», que buscan expandir el capitalismo en todos los territorios y en todos los ámbitos sin fronteras ni regulaciones en la llamada «globalización». Esas instituciones neoliberales globalizadas son la «telaraña» que envuelve, limita y, en muchos casos, atrapa a los gobiernos progresistas.

* Antonio Elías es Master en Economía, docente de la Universidad de la República, Uruguay; Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez; integrante de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, Vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico. Es miembro de Red de Estudios de la Economía Mundial, la Red de artistas e intelectuales en Defensa de la Humanidad y el Grupo de Economía Mundial de CLACSO.

En las relaciones entre el capital y el trabajo —donde predominan los procesos de flexibilización y precarización— se expresan con meridiana claridad los intereses de los sectores dominantes. Los bajos salarios, el desempleo, la segmentación social y la exclusión, son producto de una desigualdad estructural que se profundiza con las políticas de liberalización de los mercados.

Ese conjunto de reglas imponen y preservan la dominación del capital sobre el trabajo, y de los países centrales —controlados por el gran capital transnacional— sobre los países periféricos. De allí el título del documento «Los desafíos no resueltos del progresismo en la telaraña institucional del capital».

La ofensiva estratégica del capital

A partir de la crisis de principios de los años setenta y la fuerte caída de la tasa de ganancia, se produce una ofensiva del capital para imponer un nuevo modelo de acumulación. En la misma se pueden identificar varias fases y diferentes formas de dominación política. Las características de cada fase, en tanto son procesos sociales contradictorios que conllevan complejidades, avances y retrocesos propios del desarrollo de las tendencias del capital y de la correlación de fuerzas en cada país.

Los organismos multilaterales imponen una acción deliberada y programada en nuestros países, por lo cual se debe analizar la importancia que han tenido en nuestro continente los lineamientos del Consenso de Washington y las reformas de segunda generación del Banco Mundial, así como los cambios institucionales que se incluyen en los tratados de inversión y de libre comercio, en particular los tratados plurilaterales que actualmente impulsan los Estados Unidos.

En el marco de una reestructuración capitalista se han impulsado desde los organismos multilaterales cambios institucionales y políticas económicas tendientes a eliminar las fronteras que impedían la penetración del capital transnacional y el sistema de regulaciones que limitan o coartaban la maximización de beneficios.

La división de la ofensiva del capital en fases es obviamente una presentación estilizada y que, lógicamente, no se corresponde linealmente con

los procesos de cada uno los países de un continente caracterizado por la heterogeneidad.

Es de destacar, además, que los cambios de fases están precedidos de crisis económicas que provocan modificaciones, tanto en la formas de dominación como en las características del modelo de acumulación, incorporando nuevas estrategias para preservar o aumentar la tasa de ganancia del capital.

En una primera fase, de principios de los setenta a mediados de los ochenta, se intentó desarrollar un nuevo modelo de acumulación del capital destruyendo o reduciendo al mínimo los Estados de Bienestar del continente. Como ese objetivo no podía lograrse en un contexto democrático, se recurrió a dictaduras militares y/o gobiernos autoritarios, como instrumentos para destruir la capacidad de resistencia de los trabajadores y las fuerzas políticas que los representaban, a la vez que intervenían las universidades y perseguían a los intelectuales. Sobre la «tierra arrasada» se impusieron medidas económicas que hubieran sido inviables si se hubiera mantenido la democracia: se redujo el salario real, se bajaron los impuestos al capital y se abrieron las economías al exterior de forma unilateral, con una reducción drástica de los aranceles a las importaciones y la liberalización de los flujos financieros.

En la segunda fase, desde mediados de los ochenta a fines de los noventa —cuando son desplazadas las dictaduras en el marco de la crisis de la deuda externa— las políticas económicas implementadas en este período, por gobiernos democráticos, toman como punto de referencia al llamado Consenso de Washington—, un modelo económico con fundamentos neoclásicos, que expresa una clara orientación de mercado con apertura externa, asumiendo la teoría de las ventajas comparativas por la cual el libre mercado llevaría a la convergencia de las economías.

«En lo relativo a la inserción internacional se impulsa una apertura de la economía sosteniendo que el único crecimiento viable es el crecimiento hacia afuera [...] y da por sentado que un tipo de cambio unificado es preferible a un sistema de tasas múltiples».⁹² En esa misma dirección, plantea la importancia

⁹² John Williamson: *El cambio en las políticas económicas de América Latina*, Ediciones Gernika, México, DF, 1991, p.43.

de captar inversión extranjera directa como aporte de capitales, conocimiento y tecnología.

A la vez que plantea la liberalización financiera con tasas de interés determinadas por el mercado rechazando que se trate a las tasas de interés reales como una variable de política, propone mejorar el funcionamiento del mercado a través de la desregulación y del respeto a los derechos de propiedad que «constituyen un prerrequisito básico para la operación eficiente de un sistema capitalista».⁹³

La tercera fase se inicia a principios del nuevo siglo y se caracteriza básicamente por las reformas institucionales de segunda generación que se realizaron buscando viabilizar el cumplimiento de los objetivos del Consenso de Washington. En efecto, en los últimos años de la década de 1990 era notorio que dicho Consenso no había dado los resultados que se preveían. La hipótesis central para explicar los magros resultados fue que el marco institucional creado para implementar el modelo de desarrollo anterior (proteccionista y estatista) era inadecuado para llevar adelante las políticas del nuevo modelo. Las reformas de segunda generación se encuadran en esa concepción.

El modelo de acumulación que se impulsa en esta tercera fase de la ofensiva capitalista profundizó el desplazamiento del Estado por el mercado y la apertura de la economía bajo el reiterado y falso argumento de que la competencia con el exterior permitiría eliminar las ineficiencias a través del sistema de precios, a la vez que facilitaría el ingreso de capitales y de tecnología.

Implica, además, «el repliegue del Estado de la gestión directa de la infraestructura, la implantación de nuevos marcos regulatorios y la introducción de la competencia en ciertos servicios, la creación de nuevas instituciones para la regulación y el control de los servicios públicos, las privatizaciones y el ingreso de otros operadores nacionales e internacionales, [...] [como] rasgos comunes de esta transformación histórica».⁹⁴

⁹³ *Ibíd.*: p. 55.

⁹⁴ Banco Interamericano de Desarrollo: *Un nuevo impulso a la integración de la infraestructura regional en América del Sur*, Washington D.C., 2000, p.4.

Estas reformas llamadas de «segunda generación» pretenden expulsar el poder político de la economía y dar estabilidad a las reglas de juego económico autonomizando a los Bancos Centrales y creando agencias reguladoras independientes de los gobiernos de turno. Las políticas económicas, la estructura impositiva y las normativas para la inversión deben responder a los requerimientos del actual sistema globalizado, dejando estrecho margen para acciones fuera de los parámetros internacionales impuestos por las empresas transnacionales y el sistema financiero.

La cuarta fase, que comienza en la presente década demuestra que la crisis en los países centrales no detuvo la ofensiva del capital a través de la penetración de las empresas transnacionales en la mayoría de los mercados del continente americano porque «la sociedad contemporánea transita un camino de crisis, funcional a un proceso permanente de concentración y centralización del capital como forma de acumulación de los capitalistas [...], la crisis supone la salida de escena de algunos actores económicos y el ingreso de otros, en un nuevo escalón de desarrollo tecnológico y de capacidad de la fuerza de trabajo para transformar la naturaleza y al propio ser humano».⁹⁵

Como consecuencia del fracaso de la Ronda de Doha, la Organización Mundial del Comercio (OMC) dejó de ser el ámbito principal para que los países centrales impulsaran la realización de acuerdos internacionales. Durante más de dos décadas se realizaron acuerdos bilaterales de comercio (TLC) en todo el mundo, y en los últimos cinco años se ingresó en una nueva etapa: los acuerdos son plurilaterales, abarcan múltiples continentes y están hegemonizados por los Estados Unidos.

En el contexto de la crisis mundial desatada en 2008 en los Estados Unidos se busca la profundización hasta sus últimas consecuencias del modelo de acumulación vigente e implica la expansión del capitalismo contemporáneo en los ámbitos que aún están en manos del Estado y en la consolidación de una nueva estructura institucional impuesta por el capital transnacional.

En el gobierno de Barak Obama, Estados Unidos fue el principal impulsor de los tratados plurilaterales de nueva generación, por fuera de la Organización Mundial de Comercio (OMC), buscando profundizar la globalización y el

⁹⁵ Julio Gambina: *Crisis del capital (2007/2013). La crisis capitalista contemporánea y el debate sobre las alternativas*, Buenos Aires, FISYP, 2013, p.17.

dominio de las empresas transnacionales, entre los que se destacan el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) y el Trade in Services Agreement (TISA).

Con estos tratados plurilaterales Estados Unidos intentaba consolidar su modelo de acumulación y asegurar los mercados de sus principales áreas de influencia y, a la vez, frenar el avance de China y Rusia.

Con el acceso de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos se modifica sustancialmente la política exterior. Hizo su campaña electoral bajo la consigna «América Primero» y, cuando juró su cargo como presidente afirmó «Nosotros seguiremos dos simples reglas: comprar americano y contratar americanos».

El programa económico de Trump está dirigido a los desplazados de la globalización a los que les prometió reindustrializar los Estados Unidos para que haya fuentes de trabajo para los norteamericanos. Con ese fin realizaría una política de sustitución de importaciones, cuyos principales instrumentos serían: aumento de los aranceles a la entrada de productos «maquilados»; redefinir y acotar los tratados de libre comercio, como el NAFTA; rechazar los tratados plurilaterales como el Transpacífico; bajar los impuestos y subsidiar a las corporaciones que vuelvan a producir dentro de los Estados Unidos.

Para aumentar el nivel de actividad realizaría un shock de demanda tipo keynesiano a través de grandes inversiones en infraestructura financiada en parte por el Estado y en parte por el sector privado. La expulsión de los trabajadores inmigrantes «ilegales» —que tienen menores salarios y prestaciones— es otra de las medidas para favorecer a la mano de obra local. Todo esto enmarcado en un discurso xenófobo, básicamente contra latinos y musulmanes.

Otro punto de su plataforma de indudable importancia es su rechazo a los acuerdos contra el calentamiento global y su decisión de utilizar al máximo las energías tradicionales, incluido el *fracking*.

El devenir de la izquierda progresista

Luego de la caída del muro de Berlín y el colapso del socialismo real, sectores importantes de la izquierda abandonaron la concepción de la lucha de clases. La propuesta socialista fue sustituida por un discurso «izquierdista» que se

declaraba huérfano de proyecto, por lo que terminó, sin cuestionar el capitalismo, privilegiando la conciliación de clases expresada en las políticas de Estado y en la alternancia de partidos en el gobierno.

La lucha por una «democracia social y económica» que resumía y sintetizaba esta perspectiva izquierdista respecto a una democracia política burguesa que se limitaba, en el mejor de los casos, a garantizar el derecho al voto, se transformó, para muchos, en mejorar el nivel de vida de la población — sin redistribuir la riqueza acumulada— a través de una profundización del modelo del capital.

La conquista del poder y una salida anticapitalista —que suponen una ruptura del *statu quo*— quedaron de lado, no solo como práctica sociopolítica limitada por una determinada correlación de fuerzas, sino como sustento ideológico de muchas organizaciones de la llamada izquierda. Todo esto, por supuesto, con diferentes énfasis y niveles de profundidad en cada país.

En ese marco, en la primera década de este siglo —como contrapartida a la ofensiva neocolonial del capital y en el contexto de una importante crisis económica— los partidos de derecha fueron derrotados electoralmente por fuerzas políticas con raíces en la izquierda e importante base social en los trabajadores y en los pueblos originarios.

En los caminos de acceso al gobierno fueron cayendo y quedando de lado muchas banderas del programa histórico bajo el supuesto, nunca demostrado, de que no eran convenientes para la acumulación de fuerzas electoral. Se asumía así el axioma «politológico» de que las elecciones se ganan captando el centro del espectro político.

Las definiciones programáticas se fueron morigerando: primero, en forma ambigua, para acercar a sectores moderados; luego, frontalmente para obtener el aval de los señores del «mercado». Con ese objetivo se aceptaron cuatro principios: a) el mantenimiento y profundización de un orden constitucional y legal favorable al capital; b) la «política» no debe interferir las decisiones libres del mercado; c) la primacía de la democracia representativa sobre la participativa; d) el compromiso de garantizar la alternancia política, renunciando a los procesos de transición al socialismo.

Cuando los gobiernos progresistas asumen en su práctica dichos «principios» e impulsan la humanización gradual del capitalismo renuncian —

en los hechos— a los objetivos históricos de la izquierda. Así de claro, así de rotundo, para quienes entendemos que este modelo concentra y centraliza la riqueza a la vez que produce y reproduce la desigualdad y la exclusión.

Los gobiernos progresistas del Cono Sur, con todas sus diferencias, se inscribieron dentro de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para administrar la crisis. En Brasil y Uruguay llegan al gobierno fuerzas de izquierda que renuncian a sus objetivos fundacionales y asumen las reformas de «segunda generación» del Banco Mundial como si fueran un programa superador del neoliberalismo y tratan de atenuar los males del capitalismo sin enfrentarlo como sistema. Argentina, merece un análisis específico por múltiples razones, entre otras, porque aplicaron políticas económicas heterodoxas en disputa con los organismos multilaterales y mantuvieron un papel geopolítico de apoyo a los países progresistas más radicales. En los tres países, sin embargo, los cambios son fuertes en el plano electoral —con reiteradas victorias nacionales y regionales—, mínimos o nulos en lo ideológico, pero en lo económico e institucional profundizaron el capitalismo.

En Bolivia, Ecuador y Venezuela, los cambios fueron profundos y se expresaron, entre otros aspectos, en reformas constitucionales que apuntaron al fortalecimiento de la soberanía nacional, la inclusión de los pueblos originarios y construcción de poder social, a su vez, hubo avances importantes en el enfrentamiento con las empresas transnacionales restringiendo su capacidad de acumulación. Lo anterior, sin desmedro de reconocer que las reglas básicas del funcionamiento capitalista se mantienen.

Como consecuencia, en la mayoría de los países no se produjeron cambios significativos en el sistema de dominación —ni siquiera se avanzó en esa dirección— y en otros, donde se había avanzado mucho en una primera etapa ha habido frenos y retrocesos significativos. Todo ello en el marco de una heterogeneidad de situaciones que transformó el concepto «progresismo» en un gran paraguas que cubre a gobiernos cuyos procesos son distintos en contenido y profundidad.

El progresismo trascurre como una ofensiva táctica respecto a una ofensiva estrategia del capital. Es decir, lo que trata de hacer el progresismo es tomar medidas de diferente tipo según las circunstancias de cada el país. Las expresiones políticas del neoliberalismo fueron derrotadas por fuerzas con

trayectoria de izquierda muy importantes como el caso uruguayo y el caso brasileño — no tanto en el caso argentino porque el peronismo tiene muchos matices—, fue derrotada por los pueblos originarios como base social en Bolivia y Ecuador y fue derrotada en Venezuela por toda la actitud de Chávez y la actuación de su grupo. Sin embargo, estos gobiernos siguieron actuando en un sistema donde la globalización es dominante a nivel mundial —y lo sigue siendo—, donde las clases económicas dominantes siguen siendo las dueñas de los factores de producción y la institucionalidad política no cambió considerablemente.

Los impactos del ciclo económico

Durante casi una década los precios de las materias primas que exportan estos países tuvieron precios mucho más altos que en períodos anteriores y eso permitió un aumento significativo de los recursos de que disponía el progresismo.

Unos lo utilizaron para llevar adelante sus proyectos de cambios profundos (Bolivia y Venezuela), otro para avanzar en una primera fase y luego quedar a mitad de camino (Ecuador), y están los que simplemente usaron para buscar una legitimización social sin afectar al capital (Argentina, Brasil y Uruguay).

En efecto, los gobiernos del Cono Sur tuvieron estabilidad política y social porque contaban con recursos para desarrollar las políticas de conciliación de clase, atendiendo tanto las demandas de los trabajadores como la de los capitalistas. En este marco, disminuyó la pobreza y la indigencia, pero también se concentró la riqueza. Los dueños de medios de producción siguen siendo los mismos, inclusive con más riqueza y la penetración transnacional y la extranjerización de la economía es mucho mayor.

En este período de auge muchos de estos países tuvieron como objetivo fundamental captar Inversión Extranjera Directa (IED) como motor de desarrollo y para ello aceptaron las reglas que les imponían los Tratados Bilaterales de Inversión y las propias empresas transnacionales, reafirmando así las instituciones del capital.

La caída de los precios de las materias primas y el retraimiento de la entrada de capitales afecta económicamente y desestabiliza políticamente a los gobiernos progresistas. Ha habido un notorio aumento de la deuda externa,

sobrevaloración de las monedas nacionales y el tipo de cambio depende crucialmente de las impredecibles decisiones del gobierno de los Estados Unidos.

Ha habido un descenso de la actividad económica: desaceleración en Bolivia y Uruguay, y recesión en Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela, lo cual genera la caída del ingreso nacional, un aumento considerable del déficit fiscal y endeudamiento. En contextos críticos, como los señalados, caen los ingresos reales de trabajadores y pasivos, se reducen los recursos destinados a los servicios públicos y a políticas asistenciales dirigidas a los sectores más desprotegidos, lo que provoca una pugna distributiva entre trabajo y capital y el creciente empobrecimiento de sectores sociales que dependen de subsidios del Estado.

Lo anterior genera condiciones objetivas para la agudización de la lucha de clases, pero no existen condiciones subjetivas tales como conciencia, organización y dirección para poner en cuestión el dominio del capital.

En este proceso de retroceso económico el progresismo tiene reveses electorales importantes y múltiples procesamientos por corrupción:

- Argentina: Mauricio Macri triunfó en las elecciones presidenciales (22/11/2015) y fue la primera minoría en las legislativas (23/10/2017). Han sido detenidos, procesados y condenados múltiples funcionarios, políticos y sindicalistas allegados al Kirchnerismo.
- Brasil: Michel Temer accede a la presidencia, luego de la aplicación forzada de los mecanismos constitucionales para destituir sin causas legítimas a Dilma Rousseff su partido, sufrió una fuerte derrota en las elecciones municipales (02/10/2016). El ex presidente Luis Inácio Lula Da Silva, acaba de ser declarado culpable y condenado a 12 años de prisión por un tribunal de apelaciones (24/01/18) y corre serio riesgo su posibilidad de postularse en las próximas elecciones presidenciales.
- Bolivia: fue derrotada la propuesta de reforma constitucional para posibilitar la reelección de Evo Morales (21/02/2016), aunque igual podría ser candidato en las próximas elecciones presidenciales de 2019, por una resolución del Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia (24/11/2017).
- Ecuador: Lenin Moreno, gana las elecciones presidenciales como candidato del partido Alianza PAIS fundado y liderado por el expresidente Rafael

Correa y luego de asumir la presidencia cambia su posición política, hace un acuerdo con la oposición y rompe relaciones con Correa. El Vicepresidente Jorge Glas fue condenado a seis años de prisión por corrupción.

- Venezuela: en las elecciones parlamentarios obtuvo mayorías especiales la oposición (06/12/2015). El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró que los actos de la nueva Asamblea Nacional son y serán nulos mientras los tres diputados opositores de Amazonas cuya elección fue cautelarmente suspendida sigan juramentados (11/01/2016). Se elige la Asamblea Nacional Constituyente (31/07/2017) encargada de redactar una nueva Constitución y tiene facultades plenipotenciarias por encima de los demás poderes públicos del Estado.

Los reveses electorales señalados demuestran que la reducción de la indigencia, la pobreza y los avances redistributivos positivos y valiosos no crean conciencia; ese es el problema. Si a la gente le damos bienes y no las formamos ideológicamente para luchar por la defensa de los gobiernos que les permitieron acceder a esos bienes, cuando llegan los momentos de cambio, cuando vienen las épocas de crisis en ese momento actúan, no con conciencia de lo que hay que defender «el progresismo», sino con conciencia consumista.

Si bien los gobiernos progresistas hicieron un esfuerzo muy importante de apoyo a los movimientos sociales con el propósito de resolver la pobreza, no pudieron resolver los problemas distributivos en el momento de generar riqueza y redistributivos porque no se tomaron medidas contra la riqueza acumulada. Esto debido a que su actuación se desarrolló en un sistema capitalista bajo las reglas del neoliberalismo y de la globalización.

Ante el actual periodo, de precios bajos de materias primas, los gobiernos progresistas están enfrentando derrotas electorales significativas ya que los avances económicos no estuvieron acompañados de la formación ideológica necesaria para luchar por la defensa de los logros alcanzados. En este escenario, estos gobiernos deben luchar por implementar un programa que proponga el control nacional del proceso productivo y la reestructuración de la economía para lograr una redistribución radical de la riqueza y de la renta, núcleo fundamental de un modelo económico de izquierda, lo que implica, necesariamente, elevar los niveles de conciencia y organización de la población.

Es muy común, además, que se responsabilice a los gobiernos de las crisis aunque no sea su responsabilidad. En cualquier caso, no pueden ignorarse que las derrotas electorales, la ofensiva del capital y las agresiones imperialistas han sido facilitadas, en mayor o menor medida, por insuficiencias internas, tales como: el burocratismo, la corrupción, la lucha por el poder y, fundamentalmente, por profundas desviaciones o debilidades ideológicas.

Tampoco puede desconocerse que no se ha logrado la transformación de la base productiva en dirección a un proceso industrializador y que aumentó la primarización, la extranjerización y la vulnerabilidad de nuestras economías.

Los desafíos

La situación es particularmente compleja porque lo que queda del progresismo, luego de perder el gobierno en Argentina, Brasil y Ecuador, debe enfrentar una agudización de las agresiones imperialistas —por diversos métodos— para desplazarlos de las posiciones de gobierno. El objetivo principal e inmediato sigue siendo el gobierno de Venezuela —el que más esfuerzos hizo para fijar un horizonte socialista y una integración regional antiimperialista— al que se trata de aislar internacionalmente a la vez que se desarrolla una masiva campaña mediática buscando crear condiciones para legitimar todo tipo de confrontación interna y/o agresión externa.

Todo este proceso se encuadra dentro de una ofensiva estratégica del capital —que, como ya se señaló, lleva décadas— por instaurar un modelo de acumulación que le permita aumentar la decaída tasa de ganancia y trasladar los costos de las sucesivas crisis a los trabajadores de los países periféricos. Para ello necesitan: a) reducir al mínimo las fronteras y las regulaciones económicas a través de Tratados de Libre Comercio y de Protección de Inversiones cada vez más invasivos y lesivos para la soberanía nacional; b) aplicar políticas de ajuste para bajar los costos del Estado y de la mano de obra con políticas restrictivas de diverso tipo.

Los límites del progresismo y las condiciones para su desplazamiento quedaron establecidos cuando se aceptaron las instituciones políticas y económicas del sistema capitalista. La ofensiva actual para sustituirlos por fuerzas políticas totalmente sometidas a los designios del capital se explicaría, en gran medida, porque los gobiernos progresistas tienen contradicciones

internas importantes y no garantizan el cumplimiento de los objetivos económicos y geopolíticos de los Estados Unidos.

El acceso al gobierno, para los sectores de izquierda, era un camino que permitiría acumular fuerzas para avanzar hacia un horizonte socialista, lo cual no fue así, seguramente, porque las clases dominantes mantuvieron el poder que deviene de la propiedad de los medios de producción y de la hegemonía mundial del neoliberalismo.

Cabría preguntarse, entonces, en qué medida estos gobiernos acercaron, estancaron o incluso alejaron a las clases dominadas de la posibilidad de realizar transformaciones estructurales a favor del trabajo y en contra del capital. Esa es la cuestión que juzgará la historia.

Para cambiar esa realidad y que no vuelva a suceder lo mismo en procesos similares, el problema fundamental es pensar: ¿cómo se realiza la acumulación de fuerza necesaria para avanzar hacia un horizonte socialista poscapitalista? Para ello es imprescindible retomar las bases del marxismo, porque si no nos planteamos el socialismo como alternativa estamos simplemente recorriendo/administrando las crisis recurrentes del capitalismo.

Es imprescindible ampliar el estrecho margen de maniobra que genera la globalización proteccionista y militarizada. Para ello se debe enfrentar el poder económico mundial que se concentra y centraliza en las empresas transnacionales que ocupan nuestros territorios.

Es necesario un programa que: no subordine el desarrollo económico nacional a la inversión extranjera; no favorezca los intereses del capital a través de los TLC, los TBI y los tratados plurilaterales de nueva generación; no pretenda compensar los efectos de la explotación mediante políticas sociales focalizadas y asistencialistas.

Por el contrario, debería proponerse el control nacional del proceso productivo y la reestructuración de la economía para lograr una redistribución radical de la riqueza y de la renta, núcleo fundamental de un modelo económico de izquierda.

Decíamos en 2005: «La crisis de la hegemonía neoliberal puede revertirse si los gobiernos progresistas no llevan adelante cambios que por su profundidad sean el inicio de un nuevo modelo de sociedad».

Hoy los resultados están a la vista. Estamos en una nueva etapa de la lucha de clases y eso nos pone ante la responsabilidad histórica de contribuir a crear condiciones para llevar adelante un programa de cambios profundos que nos permitan avanzar hacia un horizonte socialista.

¡Ese es el desafío fundamental!

Ensayo sobre cómo abrir nuevamente la ventana

Valter Pomar*

Roberto Regalado, un camarada cubano, me invitó a contribuir en una «antología de ensayos sobre los gobiernos de izquierda y progresistas, y el impacto en ellos de la estrategia desestabilizadora desarrollada por el imperialismo y las oligarquías criollas».

Mi contribución consistió, en primer lugar, en conseguir un artículo de Gleisi Hoffmann, presidenta nacional del Partido de los Trabajadores. La tarea fue cumplida con la ayuda de dos compañeros que cabe mencionar: Ricardo Amaral y Marcelo Zero.

En segundo lugar, me correspondía escribir mi propio artículo para la antología. Y cuando estaba ocupado en esto, me acordé que hace no mucho tiempo, el mismo Roberto Regalado me solicitó que participara en otra antología, aquella titulada *La izquierda latinoamericana a 20 años del derrumbe de la Unión Soviética*.

Participé en esa antología, publicada en formato de libro por la Editorial Ocean Sur, con un texto que pomposamente llamé «Ensayo sobre una ventana abierta». En él aborde cuatro temas: «en qué situación se encontraba la izquierda latinoamericana en su conjunto en el año 1991; qué pasó con esta izquierda desde entonces; cuál es su situación actual; cuáles son sus perspectivas».

Escogí el año 1991, como es obvio, debido a la desaparición de la Unión Soviética, motivo por el cual en la parte inicial del «Ensayo sobre una ventana abierta» incluí un balance de la lucha por el socialismo desde 1917, cuyo desenlace resumí así: «La desaparición de la URSS y de las democracias populares del Este europeo fue, por tanto, resultado de una de las batallas de un proceso más amplio, a saber, la transición entre dos etapas del capitalismo: la del imperialismo clásico y la del imperialismo neoliberal».

* Valter Pomar es militante del Partido de los Trabajadores de Brasil y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de ABC. Entre 1997 y 2013 integró la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido de los Trabajadores, y entre 2005 y 2013 ejerció como secretario ejecutivo del Foro de São Paulo.

Afirmé también que si observáramos «la correlación mundial de fuerzas desde el punto de vista de las clases, el período inmediatamente anterior y posterior a 1991 es de derrota para las clases trabajadoras. Esta derrota puede ser medida objetivamente, en términos de extensión de las jornadas, el valor relativo de los salarios, las condiciones de trabajo y la oferta de servicios públicos y de democracia real».

Veinte años después del derrumbe, en 2011, la situación había cambiado «un poco, pero no tanto». A saber: «la ofensiva desencadenada por el capitalismo contra la clase trabajadora a partir de la crisis de los años setenta, perdió aliento. En algunos lugares, estamos logrando incluso recuperar parte del espacio perdido. Pero el escenario aún tiene mucho de tierra arrasada. En el plano ideológico, esto se traduce en una tremenda confusión y déficit teórico».

Mas, «paradójicamente, lo que viene ocurriendo en el mundo desde la crisis de los años setenta, particularmente después de 1991, confirma el acierto de las ideas fundadoras del marxismo». Y en América Latina estaríamos asistiendo, dos décadas después del derrumbe, a intentos variados de iniciar un nuevo ciclo socialista, a lo cual han contribuido cuatro factores, que transcribo a continuación tal como estaban redactados en el referido ensayo:

Primero: debido al «lugar» ocupado por nuestra región en la división del trabajo vigente en el período imperialista clásico, no tuvimos en nuestro continente una experiencia socialdemócrata equivalente al Estado de bienestar social, que cristalizase la creencia de que era posible conciliar capitalismo, democracia y bienestar social. Lo que llegó más cerca de esto (el populismo, especialmente el argentino) fue combatido con violencia brutal por las oligarquías y por el imperialismo. Con otras palabras, incluso donde la izquierda luchaba por banderas de tipo capitalista, la burguesía realmente existente era en general un sólido adversario. Esto, aunque no había eliminado las ilusiones, dio a las luchas de los años ochenta un sesgo mucho más radical, sin el cual algunos éxitos de la resistencia al neoliberalismo no habrían sido posibles.

Segundo: a pesar de los equívocos, de las limitaciones y principalmente a pesar del retroceso causado por la combinación entre

el bloqueo estadounidense y el colapso de la URSS, la valiente resistencia cubana impidió que asistiésemos, entre nosotros, a las escenas deprimentes y desmoralizantes vistas en el Este europeo y en la propia URSS. Además de eso, ciertas características de la sociedad cubana seguían siendo un diferencial positivo para el trabajador pobre de la mayoría de los países latinoamericanos; no era así, en Europa, en gran parte de los casos y de las personas. Esto hizo más fácil, para grandes sectores de la izquierda latinoamericana, mantener la defensa del socialismo, percibir las especificidades nacionales y mantener una actitud más crítica en cuando a modelos supuestamente universales, especialmente los venidos de otras regiones.

Tercero: la hegemonía neoliberal, combinada con el predominio estadounidense ocasionado por la desaparición de la URSS, era efectivamente y fue percibida inmediatamente como un riesgo, no solo para las izquierdas, sino para la soberanía nacional y para el desarrollo económico latinoamericano. Para muchas organizaciones de la izquierda regional, esto permitió compensar con nacionalismo y desarrollismo lo que se perdía o se diluía en términos de contenido programático socialista y revolucionario.

Cuarto: el fin de la URSS abrió inmensas oportunidades de expansión para las potencias capitalistas, especialmente para los Estados Unidos y para la naciente Unión Europea. De ahí se derivó una concentración de esfuerzos en el Este Europeo y en el Oriente Medio, acompañada de una cierta «despreocupación sistémica» con lo que estaba ocurriendo en el patio trasero latinoamericano. Esto explica, no el hecho en sí, sino la velocidad con que los partidos críticos del neoliberalismo llegaron al gobierno, a partir de 1998, en importantes países de la región.

Mientras tanto, y de manera que nuevamente llamé paradójica, fue a partir de 1998 que «se evidenciaron más ciertas consecuencias del fin de la URSS, así como las derivadas del surgimiento del capitalismo neoliberal. Implicaciones que pesaban sobre las acciones de la izquierda latinoamericana, exactamente en el momento en que comenzaba a conquistar los gobiernos nacionales de sus países».

Implicaciones: las izquierdas que «llegan al gobierno a partir de 1998, pero también aquellas que se mantuvieron desde entonces en la oposición, en algunos casos contra la derecha, en otros casos contra los gobiernos progresistas y de centroizquierda, no lograron superar la confusión ideológica y tampoco lograron resolver el déficit teórico, que se expresa en tres terrenos fundamentales: el del balance de los intentos de construcción del socialismo del siglo XX, el de análisis del capitalismo del siglo XXI y el de la elaboración de una estrategia adecuada al nuevo período histórico».

Aún respecto a eso, afirmé en el ensayo que «la confusión ideológica y la limitación teórica no constituyen un problema tan grave, cuando el viento está a favor. [...] Pero, cuando el viento no sopla a favor, la claridad teórica y la consistencia ideológica se tornan activos fundamentales». Y alerté que en aquel año 2012, estábamos en un momento de «vientos contradictorios».

Implicaciones políticas: «salvo raras excepciones, el conjunto de las izquierdas latinoamericanas incorporó la competencia electoral, parlamentaria y gubernamental, a su arsenal estratégico. O sea, incorporó un arma típica del arsenal socialdemócrata, en el exacto momento en que en el Viejo Mundo los aspectos progresistas de la democracia burguesa y de la socialdemocracia clásica están en declive».

En el ensayo argumenté que «la incorporación de esta arma fue posible por diversos motivos. De parte de las izquierdas, podemos citar la derrota político-militar de las experiencias guerrilleras, la reducción de los preconceptos (bien fundados o no) contra la «democracia burguesa», y la dinámica particular que permitió una más o menos exitosa combinación entre lucha social y electoral en cada país». Pero para que el arma electoral fuese utilizada con cierto éxito por las izquierdas, desde el final de los años noventa hasta ahora, es preciso considerar también el cambio relativo en la actitud de los Estados Unidos, de las derechas y de las burguesías locales, que en varios países no tuvieron los medios y/o los motivos para bloquear electoralmente a las izquierdas».

Y dije que, «pasada cierta euforia inicial, las distintas izquierdas latinoamericanas se toparon con los límites derivados del camino electoral. De diferentes maneras, hasta porque las izquierdas, los procesos y las culturas políticas son distintas, se fueron evidenciando las diferencias entre Estado y

gobierno; la difícil combinación entre democracia representativa y democracia directa; los límites de la participación popular y de los movimientos sociales; las diferencias entre legalidad revolucionaria y legalidad institucional. Además de eso, los mecanismos de defensa del Estado burgués —como la burocracia, la justicia, la corrupción y las fuerzas armadas— han operado con eficiencia, para constreñir a los gobiernos progresistas y de izquierda. Sea como fuere, quedó en evidencia que la izquierda latinoamericana necesita una mayor comprensión de las experiencias regionales y mundiales que echaron mano a las armas electorales como medio para tratar de transformar la sociedad».

Finalmente, un tercer tipo de implicación: «la comprensión de la etapa histórica en que vivimos», con mayor precisión la noción de que «el socialismo se encuentra todavía en un período de defensiva estratégica».

Sobre eso afirmé que «hace más de diez años la izquierda viene ampliando su participación en los gobiernos y enfrentando con mayor o menor decisión el neoliberalismo, pero por todas partes el capitalismo sigue siendo hegemónico».

Dije que eso no impedía a «algunos sectores de la izquierda de apellidar el proceso político en curso en sus respectivos países con nombres combativos (diferentes variantes de “revolución”), ni impide a otros sectores de la izquierda “resolver” las dificultades objetivas acusando a los partidos gobernantes de falta de combatividad y de firmeza de propósitos, lo que sin dudas es verdad en varios casos. Pero, más allá de las traiciones, del voluntarismo y del deseo, la verdad parece ser la siguiente: incluso donde la izquierda gobernante sigue fiel a los propósitos socialistas, las condiciones materiales de la época en que vivimos imponen límites objetivos».

Esencialmente, argumenté que «tales límites constriñen a los gobiernos de izquierda, hasta a los políticamente más radicales, a recurrir a métodos capitalistas para producir desarrollo económico, aumentar la productividad sistémica de las economías, ampliar el control sobre las riquezas nacionales, y reducir la dependencia externa y el poder del capital transnacional, especialmente el financiero. E, incluso, tales límites constriñen el financiamiento de las políticas sociales».

Recordé que «el capitalismo neoliberal provocó un retroceso en el desarrollo económico latinoamericano. Una de las consecuencias políticas de ese retroceso fue la dislocación, a favor de la oposición de izquierda, de sectores

de la burguesía y de las capas medias. Esa dislocación hizo posible la victoria electoral de los actuales gobiernos progresistas y de izquierda, y generó gobiernos pluriclasistas, vinculados genéticamente a la defensa de economías plurales, con un amplio predominio de la propiedad privada, en sus variadas expresiones, incluso las más contradictorias, como la propiedad cooperativa y el capitalismo de Estado». Al llegar a ese punto, en el «Ensayo sobre una ventana abierta», resumí así la situación:

En el año 1991, la izquierda latinoamericana venía de un doble proceso de derrotas: primero, la derrota del ciclo guerrillero de los años sesenta y setenta; después, la derrota del ciclo de redemocratización de los años ochenta. El fin de la URSS y el ascenso del neoliberalismo abren un tercer período, cuyo desenlace es distinto: se inicia en 1998 un ciclo de victorias electorales, que resulta en una correlación de fuerzas regional favorable, que aún se mantiene.

Las condiciones internas y externas que hicieron posible este ciclo de victorias permitieron a estos gobiernos, en un primer momento, ampliar los niveles de soberanía nacional, democracia política, bienestar social y desarrollo económico de sus países y sus pueblos. Pero, en lo fundamental, esto se hizo mediante una redistribución distinta de la renta, sin alterar la matriz de distribución y producción de la riqueza.

En un segundo momento, las limitaciones de la propia matriz de producción y distribución de la riqueza, acentuadas por otras variables — políticas, ideológicas, estratégicas, económicas, sociológicas, geopolíticas— hacen que los niveles de soberanía nacional, democracia política, bienestar social y desarrollo económico se mantengan en límites más estrechos de los deseados inicialmente por la izquierda, gobernante u opositora.

En aquel momento en que escribí «Ensayo sobre una ventana abierta», dice que estábamos:

[...] en este segundo momento, que coincide con un agravamiento de la situación internacional, que repercute de dos maneras fundamentales sobre la región: por un lado, complica sobremedida la situación de las economías que dependen del mercado internacional; por otro lado, aumenta la presión de las metrópolis sobre la región, concluyendo aquel

período de cierta «desatención estratégica» que facilitó ciertas victorias electorales.

Las limitaciones internas y el cambio de ambiente externo tienden a agudizar el conflicto, dentro de cada país, entre las fuerzas sociales y políticas que componen lo que llamamos izquierda; pueden, también, exacerbar algunas diferencias entre los gobiernos de la región.

Dicho esto, así resumí las perspectivas, tal como las veía en aquel momento:

Hay que considerar, en primer lugar, la incidencia sobre la región de macro-variables sobre las cuales no tenemos influencia directa: la velocidad y la profundidad de la crisis internacional, los conflictos entre las grandes potencias, la extensión e impacto de las guerras.

Destacamos, entre las macro-variables, aquellas vinculadas al futuro de los Estados Unidos: ¿recuperará su hegemonía global? ¿Concentrará energías en su hegemonía regional? ¿Agotará sus energías en el conflicto interno de su propio país?

Hay que considerar, en segundo lugar, el comportamiento de la burguesía latinoamericana, en especial, de los sectores transnacionalizados: ¿cuál es su conducta frente a los gobiernos progresistas y de izquierda? ¿Cuál es su disposición con respecto a los procesos regionales de integración? ¿Cuál es su capacidad de competir con las burguesías metropolitanas y aspirar a un papel más sólido en el escenario mundial? Del «humor» de la burguesía dependerá la estabilidad de la vía electoral y la solidez de los gobiernos pluriclasistas. O, invirtiendo el argumento, su «falta de humor» radicalizará las condiciones de la lucha de clases en la región y en cada país.

En tercer lugar, está la capacidad y disposición de los sectores hegemónicos de la izquierda —partidos políticos, movimientos sociales, intelectualidad y gobiernos—. La pregunta es: ¿hasta dónde estos sectores hegemónicos están dispuestos y conseguirán rebasar los límites del período actual, y con qué velocidad? Dicho de otra manera, cuánto conseguirán aprovechar esta coyuntura política inédita en la historia regional, para profundizar las condiciones de integración regional, soberanía nacional, democratización política, ampliación del bienestar social y del desarrollo económico. Y principalmente, si van a

lograr o no alterar los patrones estructurales de dependencia externa y concentración de la propiedad imperantes en la región hace siglos.

Considerando estas tres grandes dimensiones del problema, podemos resumir así las perspectivas: potencialidades objetivas, dificultades subjetivas y tiempo escaso.

Potencialidades objetivas: el escenario internacional y las condiciones existentes hoy en América Latina, en especial en América del Sur, hacen posibles dos grandes alternativas, a saber, un ciclo de desarrollo capitalista con trazos socialdemócratas y/o un nuevo ciclo de construcción del socialismo.

En cuanto a esta segunda alternativa, estamos, desde el punto de vista material, relativamente mejor que la Rusia de 1917, que la China de 1949, que la Cuba de 1959 y que la Nicaragua de 1979.

Dificultades subjetivas: hoy, los que tienen la voluntad no tienen la fuerza, y los que tienen la fuerza no han demostrado la voluntad de adoptar, a una velocidad y con una intensidad adecuada, las medidas necesarias para aprovechar las posibilidades abiertas por la situación internacional y por la correlación regional de fuerzas. Un detalle importante: no hay tiempo ni materia prima para formar otra izquierda. O bien la izquierda que tenemos aprovecha la ventana abierta, o se perderá una oportunidad.

El tiempo está escaseando: la evolución de la crisis internacional tiende a producir una creciente inestabilidad que sabotea las condiciones de actuación de la izquierda regional. La posibilidad de utilizar gobiernos electos para hacer transformaciones significativas en las sociedades latinoamericanas no va a durar para siempre. La ventana abierta a final de los años noventa todavía no se cerró. Pero la tempestad que se aproxima puede hacerlo.

Concluí aquel diciendo que:

[...] el juego aún no ha terminado, motivo por el cual debemos trabajar para que la izquierda latinoamericana, en especial aquella que está gobernando, y dentro de ella la brasileña, haga lo que debe y puede hacerse. Si ello sucede, podremos superar con éxito el actual período de

defensiva estratégica de la lucha por el socialismo. En resumen, la ventana sigue abierta.

Hoy, en febrero de 2018, más o menos seis años después de escribir lo que acabo de transcribir más arriba, me parece obvio que algo cambió y cambió para peor. La derrota electoral en Argentina, el golpe en Brasil, el fraude en Honduras, el vuelco en Ecuador, la difícil situación de Venezuela, el conjunto de la situación muestra cómo eran excesivamente optimistas los que hablaban de «cambio de épocas».

Pero, evitando el impresionismo periodístico, volvamos a los tres puntos citados más arriba.

Hoy, en comparación con 2012, podemos decir que la crisis internacional prosigue, crecen los conflictos entre las grandes potencias, aumenta la posibilidad de un conflicto militar en gran escala, los Estados Unidos están buscando de manera desesperada recuperar su hegemonía global y regional, al mismo tiempo que crecen los conflictos internos en aquel país.

Hoy también podemos decir que la burguesía latinoamericana decidió destruir a los gobiernos progresistas y de izquierda, dejar atrás los procesos regionales de integración, reafirmar su condición de socia menor de las burguesías metropolitanas, motivo por el cual se acabó la estabilidad de la vía electoral y se acabó la solidez de los gobiernos pluriclasistas. Dicho de otra forma, hay una radicalización de las condiciones de la lucha de clases en la región y en cada país.

También se está respondiendo a la tercera pregunta: al contrario de la propaganda que muchos de nosotros hacíamos, la verdad es que no fuimos muy lejos en la tarea de profundizar las condiciones de la integración regional, la soberanía nacional, la democratización política, la ampliación del bienestar social y el desarrollo económico, ni en la tarea de alterar los patrones estructurales de dependencia externa y concentración de la propiedad vigentes en la región hace siglos. Una de las pruebas de esto es la rapidez con que se está desmontando lo que hicieron los gobiernos progresistas y de izquierda en la región.

En resumen: la tempestad vino y cerró la ventana abierta al final de los años noventa. La pregunta planteada a la izquierda ya no es cómo aprovechar bien la ventana que estaba abierta. La cuestión que ahora está planteada, en

especial, a la izquierda brasileña, es cómo hacer para que la ventana se abra de nuevo.

Digo «especialmente para la izquierda brasileña», porque solo cambiando la correlación de fuerzas en Brasil podemos cambiar de forma duradera y radical la situación en el conjunto de la región. No se trata de quién viene primero y quién después. Se trata de constatar que Brasil es indispensable para reunir la masa de recursos humanos y materiales que son necesarios para la transformación radical y completa de nuestro continente.

¿Y qué puede decirse, entonces, de la situación brasileña?

En 2013, poco después del duodécimo aniversario del derrumbe, en Brasil conmemoramos 10 años de la llegada de Lula a la Presidencia de la República. En aquella época, el tono predominante en el Partido de los Trabajadores de Brasil y en la mayor parte de la izquierda brasileña era de extremo optimismo.

El mejor ejemplo de este optimismo es el libro *Un salto hacia el futuro*, escrito por Luiz Dulci y lanzado en marzo de 2013. Dulci fue un importante dirigente sindical de la categoría de maestros de nivel medio, participó en la fundación del Partido de los Trabajadores en 1980, hizo parte de nuestra primera bancada de parlamentarios federales, ejerció como ministro durante los ocho años de gobierno de Lula y escribió el libro mencionado cuando era uno de los directores del Instituto Lula. Por tanto, es una persona calificada para hacer un balance crítico y autocrítico de nuestra experiencia de gobierno. Pero, el libro no tiene nada de autocrítico. Por el contrario, su lectura deja claro cuán difícil era, alrededor del año 2013, mencionar y mucho más difícil aún debatir en serio los problemas, las deficiencias, las dificultades, las amenazas que rondaban a la izquierda brasileña, y que se derrumbaron sobre nuestras cabezas pocas semanas después que el citado libro llegó al público.

Desde entonces, cinco años pasaron por debajo del puente. Pero parece que fue mucho más tiempo. Entre 2013 y 2017 asistimos a: grandes manifestaciones de masas, promovidas tanto por la izquierda como por la derecha; dos procesos electorales, en 2014 y 2016; un golpe mediático-parlamentario-judicial contra la presidenta Dilma, consumado con un *impeachment* ilegal en agosto de 2016; una campaña sistemática de medios y una persecución judicial contra el PT, en la cual se está pensando incluso quitarle el registro legal al partido; la prisión y condena de innumerables

dirigentes partidistas; la aprobación por el Congreso Nacional de diversas medidas antipopulares, antidemocráticas y antinacionales; y un empeoramiento significativo de las condiciones de vida del pueblo brasileño.

Más recientemente, el día 24 de enero de 2018, se produjo la condena en segunda instancia judicial al presidente Lula, lo cual puede resultar en su prisión. Por motivos obvios, lo que ocurra en las próximas semanas impactará no solo en las elecciones presidenciales de 2018, sino también definirá dentro de qué parámetros va a transcurrir la lucha política y social en Brasil, con fuertes repercusiones internacionales.

Para un sector importante de la derecha, se trata de una guerra de exterminio contra lo que consideran una «organización criminal», que tiene en agenda cancelar el registro electoral del Partido de los Trabajadores, condenar y encarcelar al mayor número posible de sus líderes, criminalizar la lucha social y estigmatizar el pensamiento de izquierda. En este sentido, el objetivo va mucho más lejos que impedir que Lula dispute la elección presidencial de 2018.

Existen contradicciones en el seno de las fuerzas golpistas. Se expresan en diferentes pre-candidaturas presidenciales, en diferentes visiones acerca del activismo judicial, en mayor o menor disposición de aplicar todos los elementos del programa neoliberal «Puente hacia el futuro». Pero estas contradicciones no impiden que, por acción o por omisión, el conjunto de las fuerzas golpistas contribuya a la guerra de exterminio contra el PT.

Por consiguiente, es mucho más reducida la posibilidad de hacer alianzas, con sectores de centro-derecha y derecha, en defensa de la democracia y contra el fascismo. Más que reducida, es nula la posibilidad de seducir a sectores del gran empresariado con promesas de que el regreso de la izquierda al gobierno traería de vuelta los buenos tiempos de «crecimiento» y la «paz social», que supuestamente hubo en algunos de los años de los gobiernos nacionales petistas. El gran empresariado es el principal autor del golpe, su mandante y fiador. Como se observa en todo el mundo, el gran capital, especialmente el financiero, no le tiene miedo a la recesión, al desempleo ni a la crisis social. Por el contrario, estimula todo esto. En definitiva, el gran empresariado luchó contra los pocos aspectos progresistas existentes en la Constitución brasileña de 1988.

Las candidaturas presidenciales petistas fueron victoriosas en cuatro elecciones presidenciales consecutivas, pero la izquierda no pudo impedir el golpe consumado en agosto de 2016. Tampoco pudo impedir la aprobación, en el Congreso, de varias medidas antinacionales y antipopulares, ni pudo impedir la condena judicial de Lula en segunda instancia. Y no ha conseguido impedir el crecimiento del conservadurismo político e ideológico, ni siquiera en sectores importantes de la juventud y la clase trabajadora.

Claro que la izquierda brasileña mantiene la resistencia, la capacidad de movilización y un apoyo popular que se manifiesta en las encuestas de intención de voto que ubican a Lula en primer lugar. Pero es preciso reconocer que nada de esto fue suficiente, hasta ahora, para derrotar la ofensiva golpista.

El presidente Lula encabeza las encuestas hechas y publicadas hasta febrero de 2018, pero la mayor parte del electorado aún no tiene candidato. O sea, Lula lidera en la mitad del electorado que ya escogió por quien va a votar. Y no se debe minimizar el desgaste causado por años de propaganda negativa. Además de eso, en caso que, al fin y al cabo, prospere la interdicción electoral de Lula, la izquierda brasileña como un todo, y el PT en particular, enfrentarán un dilema de difícil solución.

Este dilema se resume en la consigna: *elección sin Lula es fraude*. El problema se presentará en caso que la derecha lleve hasta el final su propósito de impedir que Lula sea candidato en las elecciones presidenciales de 2018. En esta circunstancia, habría fundamentalmente dos alternativas respecto a las elecciones presidenciales: o participar de una elección que consideramos fraudulenta, en ese caso apoyando otra candidatura a la presidencia; o mantener la candidatura de Lula, aunque su nombre no aparezca en la urna electrónica.

Para las fuerzas golpistas de centroderecha y derecha, para el oligopolio mediático, para la cúpula del sistema judicial y de las Fuerzas Armadas, para el gran capital, especialmente el financiero, es absolutamente inaceptable que la izquierda pueda volver a gobernar Brasil. Por eso «escalaron»: del *impeachment* pasaron a la condena de Lula, ahora están preparando su prisión, y si es necesario recurrirán a medidas aún más extremas, como la cancelación del registro del PT, el aplazamiento de las elecciones, el cambio de régimen político y la intervención militar abierta (en el momento en que hago la

revisión final de este artículo, el gobierno de Brasil ha decretado una intervención de las fuerzas armadas en la seguridad pública de la segunda más importante unidad de la federación brasilera, el conocido estado de nombre Rio de Janeiro).

Por todos estos motivos, el clima hoy predominante en la izquierda brasileña es totalmente distinto al imperante en 2013. La discusión ya no es sobre el «salto al futuro», pero sí sobre el regreso al pasado, como resultado de la implementación del programa de los golpistas. No predomina el optimismo de 2013, sino el pesimismo, aunque disfrazado de realismo.

Lo curioso es que, tanto hoy como en aquella época, sigue siendo igualmente difícil realizar un debate sobre los problemas de la izquierda brasileña y cómo superarlos. En uno y otro caso, uno de los mayores obstáculos para el debate es lo que voy a llamar aquí *sentido común de corto plazo*.

Pues bien: la negativa a debatir, aún en 2010, el necesario cambio de rumbos, tanto del gobierno encabezado por el PT, como de los sectores de la izquierda liderados por nuestro partido, contribuyó a que nuestro tercer y cuarto mandatos zigzagueasen entre tres posiciones: a) repetir la dosis de lo hecho en el segundo mandato de Lula, b) tratar de enfrentar a los enemigos sin plan ni organización, y c) hacer un *shock* ortodoxo.

Pero el desastre resultante de este zigzagueo no fue suficiente para que se abandonase el sentido común de corto plazo: hoy gran parte de la izquierda brasileña no piensa en otra cosa sino que no sean las elecciones de 2018.

Es evidente que la izquierda debe y necesita tener fuertes candidaturas a gobernadores, a senadores, a diputados federales y estatales para disputar con la derecha en las elecciones de 2018.

El problema no reside en eso, sino en lo siguiente: incluso suponiendo que la izquierda tenga un óptimo resultado en las elecciones de 2018, incluso si se elige a Lula presidente de la República, eso no tendría las mismas implicaciones que en 2002, 2006 y 2010. Esta vez, si la izquierda gana, la otra parte seguirá actuando como en 2014 y continuará operando en la frecuencia del golpe; y hará todo para impedir nuestra toma de posesión y para sabotear de manera violenta nuestro gobierno.

Contra eso, no basta tener una política electoral exitosa. Es preciso tener otro tipo de estrategia política, acompañada de niveles de organización y movilización totalmente distintos de los que tuvimos hasta hoy.

El mismo raciocinio vale para el caso de una derrota total o parcial en las elecciones de 2018: lo que vendrá después de eso no serán menos, sino más ataques violentos, contra los cuales aportarán muy poco las posiciones institucionales que la izquierda haya conquistado en 2018, en especial si estas posiciones se hubieren conquistado en una línea de «respeto al orden» y «conciliación de clases».

Obviamente no se está diciendo que tener posiciones institucionales sea inútil. Lo que se está diciendo es que la «utilidad» estratégica de parlamentarios y gobernantes aumenta o disminuye mucho, en dependencia de la línea política y del nivel de organización extra institucional adoptadas por las organizaciones de izquierda.

Vale decir que gran parte de la izquierda brasileña admite que es necesario adoptar otra línea política, diferente a la implementada entre 1995 y 2016. Gran parte también reconoce la necesidad de cambiar profundamente los métodos de funcionamiento de la izquierda, con énfasis en la recuperación de los espacios perdidos junto a la clase trabajadora.

Pero hay una distancia enorme y evidente entre el discurso y la práctica. En parte esto ocurre por inercia, en otros casos por falta de imaginación y/o experiencia, pero principalmente porque una parte importante de la izquierda brasileña simplemente no comprende las consecuencias de lo ocurrido en 2016, y sigue creyendo en la posibilidad de cambiar el país sin infringirle una derrota profunda a los grandes capitalistas brasileños.

La dificultad de comprender el papel de la clase de los grandes capitalistas no es un problema cognitivo. El problema es de otra naturaleza: existe un sector de la izquierda brasileña, así como existe un sector de la clase trabajadora, que no considera necesario ocasionarle una derrota profunda a la clase de los grandes capitalistas. Por el contrario, creen que el camino de «derrotar profundamente» a nuestros enemigos de clase es, además de inviable, perjudicial a nuestros objetivos de corto y mediano plazo: sería como lo *óptimo utópico*, que termina por convertir al *bueno* en enemigo.

De ahí proviene, igualmente, la indiferencia y hasta la repulsa de estos sectores a cualquier referencia al socialismo, y su predilección por palabras de orden del tipo «nación», «soberanía», «Estado» y «desarrollo».

En última instancia, esta postura de conciliación de clase es la que está detrás de las políticas de alianza con fuerzas de derecha y centro-derecha, detrás de las ilusiones republicanas en las instituciones del «Estado democrático de derecho», y detrás de las actitudes que nuestros gobiernos no adoptaron contra el oligopolio de los medios. En el fondo, todo se remite a un problema de clase, más exactamente a sobre cómo tratar a la clase dominante.

En el pasado reciente, la hegemonía del pensamiento conciliador no puso en riesgo la sobrevivencia a corto plazo de la izquierda brasileña. Por el contrario, a corto plazo aquella actitud pragmática puede haber contribuido, en algunos casos, al crecimiento institucional de la izquierda. Sin embargo, en el mediano plazo sabemos cuáles fueron las consecuencias de la conciliación, inclusive en términos de reducción de la presencia electoral e institucional de la izquierda.

En la actual coyuntura y en el futuro visible, mientras tanto, la hegemonía del pensamiento conciliador puede llevar a desdoblamientos catastróficos para la izquierda brasileña, no solo en el mediano, sino también en el corto plazo.

¿Y qué hacer ante esta situación? Ya no se trata, como decíamos antes, de aprovechar la ventana abierta. De lo que se trata es de abrirla nuevamente. Esto implicará un conjunto de medidas, algunas de naturaleza práctica, organizativa, política, y otras de naturaleza ideológica, cultural, teórica, intelectual. De ellas, considero que será útil para los lectores de este artículo mencionar tres.

En primer lugar, como resultado del veloz desmontaje de aquello positivo que se hizo entre 2003 y 2016, estamos viendo aparecer una nueva configuración social de lucha de clases, diferente de aquellas en que actuamos la mayor parte de los últimos treinta años. ¿Cómo lidiar con esta «nueva» situación, en particular con la «nueva» clase trabajadora?

En segundo lugar, en parte como desdoblamiento de la ofensiva del capital contra nosotros, en parte resultado de los métodos utilizados para derrotar al PT, estamos viendo aparecer una «nueva normalidad» institucional, diferente de aquella a la que nos acostumbramos desde la promulgación de la Constitución de 1988. ¿Cómo actuar en esta «nueva» institucionalidad?

En tercer lugar, las operaciones de la derecha para destruir al PT, así como las tentativas que varias izquierdas hacen de «superar» al PT, están alcanzando el clímax y su combinación puede llevar a una situación que no vimos en ninguna de las elecciones presidenciales, desde 1989 hasta 2014. ¿Cómo actuar frente a esta situación, tomando en consideración que una eventual destrucción del PT, arrastraría tras de sí a toda la izquierda?

Ya se dijo que todo lo que está vivo un día muere; y todos los vivos morimos un poco cada día, sin tener jamás la certeza de cuánto nos queda por delante. Hecha esta excepción, no hay razón alguna para que el PT no sobreviva aún por mucho tiempo.

Para citar ejemplos brasileños, basta constatar el caso del Partido Comunista y también el caso del Partido Laborista, uno fundado en 1922, el otro en 1945. Ambos siguen actuando hasta hoy.

La cuestión relevante, claro está, no es saber si el PT sobrevivirá, sino con qué influencia social y con qué línea política. Ninguna de estas cuestiones está dada de antemano. Variables internacionales y nacionales van a influir en esto, comenzando por los desdoblamientos de la lucha actualmente en curso entre el gran capital y la clase trabajadora.

Pero una cosa es segura: cualquiera que sea lo que ocurra en los próximos años, incluidas las modificaciones de la propia clase trabajadora, esta continuará necesitando un partido de clase, de masas, socialista y revolucionario.

Si nosotros, que somos militantes del PT, no somos capaces de solucionar y superar las dificultades actuales, para las futuras generaciones será mucho más difícil hacerlo.

Si, por el contrario, somos capaces de alterar nuestra línea política, nuestra política de organización y movilización de la clase trabajadora, nuestro legado a las futuras generaciones no será un problema, sino una solución: el Partido de los Trabajadores.

¿Seremos capaces? Parte importante de la respuesta la sabremos en los próximos días, semanas y meses. Nuestra reacción frente a una posible orden de prisión contra Lula, así como nuestra postura ante las elecciones de 2018 tendrán, para el futuro del PT, un significado similar al que tuvieron nuestras posturas frente al Colegio Electoral y frente a la Constitución de 1988.

Ya se verá si seremos un partido integrado o un partido dispuesto a subvertir el orden.

El flujo y reflujo de la correlación de fuerzas entre izquierda y derecha en América Latina: un análisis crítico constructivo

Roberto Regalado*

En América Latina, tras una acumulación de fuerza social y política iniciada en los años ochenta con la lucha de los movimientos populares contra el neoliberalismo, incrementada en los noventa con la ocupación de espacios en gobiernos locales y legislaturas nacionales, que alcanza el clímax en la década de 2000 con el ejercicio del gobierno nacional en una decena de países, desde finales de esta última, la correlación de fuerzas comienza a cambiar a favor de los sectores oligárquicos proimperialistas y, en apenas cinco años, la pérdida de capacidad de movilización popular, la falta de estrategias, medios y métodos adecuados para derrotar la desestabilización de espectro completo,⁹⁶ los reveses electorales y los golpes de Estado «de nuevo tipo», llegan a tal punto que la derecha se ufana en proclamar el «fin del ciclo progresista».

¿Es este un vuelco tan imprevisible o inesperado de la situación política, que no se pudo evitar o no dio oportunidad para una preparación a tiempo que permitiese enfrentarlo en mejores condiciones? Sería imposible responder esa pregunta sin hacernos otra: ¿vuelco imprevisible o inesperado... para quién?

La involución de la situación política y económica de la región en general, y de cada país gobernado por fuerzas progresistas y de izquierda en particular, de ningún modo fue ignorada por todas y todos los dirigentes, cuadros, militantes, activistas y analistas del bloque popular. Sin embargo, los liderazgos principales y las corrientes políticas e ideológicas hegemónicas en los partidos, frentes y coaliciones progresistas y de izquierda, primero ignoraron o subestimaron el deterioro creciente de la correlación de fuerzas, que pudieron y

* Doctor en Ciencias Filosóficas, Licenciado en Periodismo, miembro de la Sección de Literatura Socio-histórica de la Asociación de Escritores de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, consultor del Instituto Schafik Hándal de El Salvador.

⁹⁶ El término *desestabilización de espectro completo* es una paráfrasis de los términos *guerra de espectro completo* y *dominación de espectro completo* formulados por la Dra. Ana Esther Ceceña, que abarcan una multiplicidad de elementos políticos, ideológicos, económicos y sociales, incluida la amenaza y el uso de la fuerza y el uso de técnicas de guerra psicológica, cuyo efecto es similar al de un terremoto que no se detiene y al de un pulpo que golpea, a un mismo tiempo, con todas sus patas. Véase: «Los golpes de espectro completo», en (<https://www.alainet.org>), 25-5-2014 (consultado 26-2-2018).

debieron enfrentar cuando tenían mayores y mejores posibilidades de éxito, y luego quedaron impávidos ante sus consecuencias.

¿Por qué ese inmovilismo? ¿Es atribuible a la «mala intención» o incluso a una «traición»? La respuesta es no, salvo casos específicos que ciertamente pueden existir. Los liderazgos individuales y colectivos de los gobiernos, partidos, movimientos, frentes y coaliciones progresistas y de izquierda, también son productos de correlaciones de fuerzas, tanto en la sociedad en su conjunto, como dentro de ese espectro político e ideológico en particular, y en la América Latina de finales del siglo XX e inicios del XXI, la hegemonía de las fuerzas políticas multitendencias características de la etapa, la ejercen el «progresismo», proveniente de sectores democráticos de los partidos tradicionales, y lo que podríamos llamar la «nueva socialdemocracia latinoamericana».⁹⁷ Ambas corrientes comparten:

[...] la maniquea concepción de la democracia burguesa como sistema político supuestamente imparcial e incluyente, que en América Latina solo funcionó con relativa estabilidad en Uruguay y Chile, y solo lo hizo mientras el imperialismo y las oligarquías de esos dos países no identificaron a la izquierda como una amenaza al sistema, pero tan pronto la percibieron como tal, en ambos implantaron férreas dictaduras. [...]

De ahí parte la sorpresa e incompreensión que incluso hoy, después de haber sido expulsadas del gobierno o estar en riesgo de serlo —sin haberlo visto venir, ni saber, a ciencia cierta, cómo evitarlo y revertirlo—, y de haber sido criminalizadas y judicializadas, o de estar a punto de serlo, siguen manifestando [...], y también de ahí que la mayor parte de los análisis y reflexiones publicados al respecto, se limiten a denunciar las manipulaciones, transgresiones y violaciones que la derecha hace

⁹⁷ «Lo esencial de la nueva socialdemocracia latinoamericana no es que esté integrada por partidos miembros de la Internacional Socialista, aunque algunos pertenezcan a ella; tampoco que sean fuerzas políticas que se consideren a sí mismas como socialdemócratas, aunque algunas lo hagan. Ese nuevo vector, agrupamiento o tendencia está compuesto por una amalgama de corrientes políticas e ideológicas que sería imposible caracterizar aquí. Al margen de cualquier elemento organizativo o doctrinario de la socialdemocracia tradicional que pueda estar presente en él, lo esencial es que piensa y actúa de manera muy similar a la socialdemocracia europea de finales del siglo XIX y las primeras seis décadas del XX». Roberto Regalado: «Poder permanente y poder temporal en América Latina: un debate pendiente», (<https://www.alainet.org>), 30-1-2018 (consultado 26-2-2018).

contra los gobiernos y las fuerzas progresistas y de izquierda, y poco o nada se mencionen las deficiencias y errores de estas últimas que contribuyeron a torcer la correlación regional de fuerzas en su contra.⁹⁸

Aunque el predominio de lo que, en genérico, categorizamos en este ensayo como *progresismo y nueva socialdemocracia*, se aprecia con mayor nitidez en los partidos, organizaciones, frentes y coaliciones políticas «multitendencias» que ejercieron o aún ejercen el gobierno en Argentina, Brasil y Uruguay, su influencia «está presente, en mayor o menor medida, en toda fuerza progresista y de izquierda que ejerce o ha ejercido el gobierno, aunque su liderazgo principal y su rumbo estratégico se orienten a la transformación social revolucionaria, pues son fuerzas plurales que incluyen a dirigentes, cuadros, militantes y corrientes internas partidarias del progresismo y/o de la nueva socialdemocracia».⁹⁹

En el debate sobre los cambios ocurridos en las condiciones y características de las luchas populares en América Latina, de los que se deriva el flujo y reflujo en la acumulación de las fuerzas políticas progresistas y de izquierda objeto de análisis, por primera vez incursioné en 2006, con la publicación del libro *América Latina entre siglos: dominación, crisis, luchas populares y alternativas políticas de la izquierda*,¹⁰⁰ y al debate sobre las posibilidades de éxito, fracaso o derrota de las experiencias de reforma progresista o transformación revolucionaria me incorporé en 2012, con la publicación de *La izquierda latinoamericana en el gobierno: ¿alternativa o reciclaje?*¹⁰¹ En las «Palabras del autor» de esta obra, se plantea:

[...] tenemos que preguntarnos cuáles son las probabilidades de que los gobiernos integrados por fuerzas políticas y social-políticas de izquierda y progresistas —algunos de los cuales se encuentran en su tercer

⁹⁸ *Ibíd.*

⁹⁹ *Ibíd.*

¹⁰⁰ Roberto Regalado: *América Latina entre siglos: dominación, crisis, luchas populares y alternativas políticas de la izquierda*, segunda edición en español, Ocean Sur, México, 2006. (278 pp. ISBN 978-1-921235-00-09). [En: www.oceansur.com].

¹⁰¹ Roberto Regalado: *La izquierda latinoamericana en el gobierno: ¿alternativa o reciclaje?*, Ocean Sur, México, 2012. (259 pp., ISBN 978-1-921700-45-3). Ver también a Roberto Regalado (coordinador): *La izquierda latinoamericana a 20 años del derrumbe de la Unión Soviética*, Ocean Sur, México, 2012 (404 pp. ISBN 978-1-921700-65-1). [Ambas obras en: www.oceansur.com].

período consecutivo y otros en su segundo— están enrumados hacia la edificación de sociedades «alternativas», y cuáles son las probabilidades de que se conviertan en un paréntesis que, en definitiva, contribuya al reciclaje de la dominación del capital. En este texto se parte de la premisa que ambas posibilidades están abiertas [...].

A esos libros me remito porque contienen los fundamentos analíticos y reflexivos en los que me baso para abordar la situación actual de los gobiernos y las fuerzas políticas progresistas y de izquierda.

Procesos determinantes en la situación política de América Latina

¿Cuáles son los procesos determinantes en los cambios ocurridos en la situación de América Latina a partir de la década de 1970, de los cuales se derivan, tanto la mutación ocurrida en las condiciones y características de las luchas populares, como las posibilidades y límites de los procesos de reforma social o transformación revolucionaria desarrollados por los gobiernos progresistas y de izquierda, cuyo apogeo se produjo entre 1999 y 2009?

Son cuatro procesos escalonados y con efectos acumulativos:

1. En la década de 1970, ocurre el salto de la concentración nacional a la concentración transnacional de la propiedad, la producción y el poder político (conocido como globalización), cambio cualitativo en la formación económico-social capitalista cuyo detonante fue el irreversible agotamiento de la capacidad de reproducción expansiva del capital iniciado en ese decenio. Para paliar sus efectos, se desata una ofensiva sin precedentes del capital contra el trabajo, destinada a intensificar la concentración de la riqueza y la exclusión social. En el caso de América Latina, este proceso modifica el lugar que la región ocupaba desde principios del siglo XX en la división internacional del trabajo, y destruye las estructuras y relaciones socio-clasistas características de esa etapa.
2. En la década de 1980, la avalancha universal del neoliberalismo apunta, legítima e institucionaliza la concentración transnacional de la propiedad, la producción y el poder político, incluida la reestructuración y refuncionalización de los mecanismos de dominación imperialista mundiales y regionales existentes, y la creación de otros. Además de sufrir los efectos generales de este proceso, al igual que el resto del mundo subdesarrollado y

dependiente, América Latina sufre los efectos específicos de un nuevo sistema de dominación continental del imperialismo norteamericano, desplegado en lo fundamental durante el mandato presidencial de George H. Bush (1989-1993).

3. Entre finales de la década de 1980 y comienzos de la de 1990, el derrumbe de la Unión Soviética y el bloque europeo oriental de posguerra nucleado en torno a ella, catalizador del llamado cambio de época, le facilitó al imperialismo encubrir su propia crisis sistémica, despejó el camino para el avance incontestado de la avalancha universal del neoliberalismo, y sumió en el descrédito a, corto y mediano plazo, a las ideas revolucionarias y socialistas.
4. En la década de 1990, cristaliza la neoliberalización de la socialdemocracia europea. Ese heterogéneo vector político e ideológico, que durante las primeras seis décadas del siglo XX contribuyó a la reproducción de la hegemonía burguesa y se erigió en portaestandarte del «Estado de bienestar», a raíz del derrumbe de la URSS y para paliar el creciente rechazo de los pueblos al neoliberalismo, terminó de renegar por completo de sus orígenes, lo cual ya venía haciendo desde inicios de ese siglo XX, asumió como propia a la doctrina neoliberal y, desde entonces, con un discurso *light*, disfrazado de «alternativo», «contestatario» y hasta «opositor», se dedicó a reproducir la hegemonía burguesa de la presente etapa de la involución del capitalismo: la hegemonía neoliberal.

Factores que fundamentan la elección de gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina, a contracorriente del nuevo orden mundial

¿Cómo se explica que, a contracorriente del derrumbe del campo socialista y la imposición del llamado nuevo orden mundial, a raíz de los cuales cabía esperar un prolongado retroceso de las luchas populares en todo el mundo, en América Latina se abriera una etapa de luchas caracterizada por el aumento de la organización y la combatividad de los movimientos populares, y por la conquista de espacios institucionales dentro del sistema político democrático burgués, que por primera vez impera en todo el continente, incluido el ejercicio del poder ejecutivo del Estado?

Se explica por la combinación de cinco factores:

1. El acumulado de las luchas de las fuerzas populares libradas a lo largo de su historia y, en particular, en la etapa abierta por el triunfo de la Revolución Cubana (1959-1989), en la cual, aunque su desenlace no fue el cumplimiento de los objetivos que las organizaciones político-militares se habían planteado, a saber, la conquista del poder y la instauración de un nuevo Estado y un nuevo sistema social, los pueblos demostraron una voluntad y una capacidad de combate de tales magnitudes que obligaron al imperialismo y a las clases dominantes de la región a reconocerles los derechos políticos que hasta entonces les habían sido negados.¹⁰²
2. El repudio mundial al genocidio y la fuerza bruta históricamente utilizados en el subcontinente como medios de apuntalar la opresión y la explotación, en especial, por parte de los Estados de «seguridad nacional» que asolaron a la mayor parte de la región entre 1964 y 1989, que impulsó al imperialismo norteamericano y a las oligarquías criollas a buscar formas más mediadas de dominación.
3. El aumento de la conciencia, organización, movilización, y lucha social y social-política, ocurrido en el fragor de la batalla contra el neoliberalismo, que estableció las bases para un aumento sin precedentes de la participación electoral de la gran parte de los sectores populares tradicionalmente marginada de ese ejercicio político, y un cambio en los patrones de votación de la otra parte de ellos que estaba subsumida en la lógica del sistema de dominación.
4. El voto de castigo de amplios sectores sociales contra los efectos devastadores de las políticas neoliberales impuestas a partir de finales de la década de 1970, cuya pionera fue la dictadura militar chilena encabezada por el general Augusto Pinochet.
5. Tratamiento especial merece el «error de cálculo» del imperialismo norteamericano, que creyó poder dejar de oponerse «de oficio», de manera abierta y directa, a todo triunfo electoral de la izquierda, tal como había

¹⁰² Por solo mencionar dos ejemplos claros: si no hubiese triunfado la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua y si el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional no hubiese librado una intensa lucha armada durante más de una década en El Salvador, no se habrían creado las condiciones que hicieron posible la elección de los actuales gobiernos de izquierda en esos países.

hecho históricamente, confiado en que su nuevo sistema de dominación continental, cuyo pilar político es la implantación de «democracias neoliberales» en todos los países de América Latina y el Caribe, sujeto a mecanismos transnacionales de control y sanción de «infracciones», blindaría a los Estados de la región contra cualquier intento de penetración por parte de fuerzas políticas de izquierda y progresistas. Esta confianza lo llevó a establecer un pacto de élites de defensa de la democracia representativa, es decir, de la *democracia burguesa* que asume explícitamente la forma de *democracia neoliberal*, y al establecimiento de una llamada cláusula democrática en todos los organismos y mecanismos continentales y subcontinentales. No previó entonces que, con estricto apego a las normas de la democracia representativa, fuesen electos candidatos presidenciales como Chávez, Lula, Kirchner, Tabaré, Evo, Correa, Daniel, Cristina, Dilma y otros.

No era la primera vez que, convencido de tener garantizado el control de una subregión o de la región en su conjunto, el imperialismo norteamericano impuso pactos de «defensa de la democracia» y sanción a las interrupciones del orden constitucional. Así hizo en Centroamérica en la década de 1920 como medio de disuasión a las constantes guerras entre conservadores y liberales, pero la gesta antiimperialista del general Sandino en Nicaragua y la insurrección indígena campesina y popular de enero de 1932 en el Salvador, aplastada con métodos genocidas por el dictador Maximiliano Hernández Martínez, lo llevaron a desistir de ese empeño. Así ocurrió también tras el triunfo de la Revolución Cubana, cuando el presidente John F. Kennedy decidió aislarla y estigmatizarla rodeándola de «democracias representativas», y terminó derrocando gobiernos constitucionales que no se plegaban al bloqueo contra Cuba, y apoyando a dictaduras militares que sí lo hacían. Todo ello ratifica que el imperialismo no tiene principios, sino intereses. Con claridad lo expresó el sucesor de Kennedy, Lyndon B. Johnson, cuando, al apoyar el golpe de Estado contra Joao Goulart en Brasil, en 1964, proclamó la doctrina que lleva su nombre: *Los Estados Unidos prefieren tener a aliados seguros, que vecinos democráticos*. A la aplicación de la Doctrina Johnson regresa el imperialismo norteamericano para borrar del mapa a los gobiernos progresistas y de izquierda, no

mediante los golpes de Estado tradicionales, sino mediante la desestabilización de espectro completo y los golpes de Estado «de nuevo tipo».

Periodización del flujo y reflujo de la correlación de fuerzas en América Latina a partir de finales de la década de 1980

¿Cuáles son las etapas por las que atraviesa la situación política de América Latina desde finales de la década de 1980 hasta la actualidad?

En estas tres décadas, la situación política de América Latina atraviesa por cinco etapas, en cada una de las cuales está regida por un proceso predominante:

- La primera, de 1989 a 1994, comprende los cuatro años de la administración de George H. Bush y el primero de la de Bill Clinton, hasta la celebración de la Primera Cumbre de las Américas. Fue una etapa favorable para el imperialismo norteamericano y las oligarquías latinoamericanas. El proceso predominante fue la reestructuración del sistema de dominación continental, basada en tres pilares: la implantación de democracias neoliberales sujetas a mecanismos transnacionales de imposición, control y sanción de «infracciones»; el establecimiento de los llamados tratados de libre comercio, bilaterales y subregionales, unidos a la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), derrotada en 2005; y, el aumento de su presencia militar directa de los Estados Unidos en la región, con el pretexto del combate al narcotráfico y el terrorismo
- La segunda, de 1994 a 1998, abarca desde la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el estallido de la crisis financiera mexicana de 1994, hasta el triunfo de Hugo Chávez en la elección presidencial venezolana de diciembre de 1998. Fue una etapa desfavorable al imperialismo norteamericano y a las oligarquías latinoamericanas. En ella hay dos procesos predominantes interrelacionados: la crisis del Estado neoliberal recién impuesto; y el auge de la lucha de los movimientos populares contra el neoliberalismo
- La crisis del Estado neoliberal es resultado de su incapacidad de cumplir las funciones que le corresponden en la cadena de la dominación capitalista, a saber, redistribuir cuotas de poder político y económico

entre las élites, mantener «a raya» las luchas populares, mediante su cooptación y represión

- La lucha de los movimientos populares llegó al punto en que había fuerza social suficiente para derrocar a gobiernos neoliberales, pero no fuerza política para elegir gobiernos propios, por lo que el neoliberalismo reflotaba con la elección del siguiente gobierno
- La tercera etapa, de 1998 a 2009, incluye desde la elección de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, hasta el golpe de Estado «de nuevo tipo» contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras. Fue una etapa favorable con la elección y reelección continua de gobiernos progresistas y de izquierda en Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Paraguay y El Salvador
- La cuarta etapa, de 2009 a 2015, se extiende desde el golpe de Estado contra Zelaya hasta la derrota del candidato presidencial del Frente para la Victoria en Argentina. Fue una etapa caracterizada por la agudización de la disputa derecha-izquierda. La derecha tuvo a su favor los golpes de Estado «de nuevo tipo» en Honduras (2009) y Paraguay (2012), y la izquierda tuvo a su favor los triunfos electorales de Venezuela (2012 y 2013) y El Salvador (2014), aunque con tendencia a ganar por un margen decreciente
- La quinta etapa, 2015 hasta nuestros días, se caracteriza por la derrota del candidato presidencial del Frente para la Victoria en Argentina, la pérdida de la mayoría en la Asamblea Nacional de Venezuela, la derrota en el referendo convocado para habilitar una nueva candidatura presidencial de Evo Morales, el golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rousseff en Brasil, y la división de Alianza País tras la toma de posesión del presidente Lenín Moreno. Esta es la etapa pico, hasta este momento, de desacumulación de fuerzas de los gobiernos y las fuerzas progresistas y de izquierda

¿Son todos los gobiernos progresistas y de izquierda idénticos o siquiera semejantes?

Si bien hay elementos generales a partir de los cuales se abrió en América Latina una tendencia sin precedentes favorable a la elección de gobiernos progresistas y de izquierda, en cada país impera una situación política específica. De los diecisiete países de lengua española o portuguesa del

subcontinente, de acuerdo al criterio de este autor, no ha habido gobiernos progresistas o de izquierda en siete (México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Chile), y en los otros diez, en los cuales sí hay o hubo gobiernos de ese espectro político, en sentido general, es posible hacer cuatro agrupamientos sobre la base de similitudes y diferencias:

1. En Venezuela y Bolivia, la izquierda estableció su control sobre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y en Ecuador, sobre los poderes ejecutivo y legislativo, en virtud de la ruptura o debilitamiento extremo de la institucionalidad neoliberal, factor que les permitió hacer cambios políticos inmediatos y radicales *dentro* del sistema social capitalista y del sistema político de democracia burguesa, a través de la adopción de nuevas Constituciones. Los procesos políticos de estos países tienen en común que el liderazgo personal de Chávez, Evo y Correa fue el elemento dominante en torno al que se construyeron y actuaron sus respectivas fuerzas políticas, y que entre sus prioridades resaltan la recuperación de los recursos naturales, y sus políticas democratizadoras, de redistribución de riqueza y desarrollo social.
2. En Nicaragua y El Salvador hay un elemento común: las fuerzas de izquierda gobernantes eran movimientos revolucionarios político-militares devenidos partidos políticos legales. En Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional conquistó el poder político mediante una guerra revolucionaria, y años después fue desplazado de él por la agresión indirecta del imperialismo norteamericano, pero logró conservar el control de una parte de las instituciones del Estado y una correlación social y política de fuerzas, gracias a lo cual poco más de tres lustros después ganó tres elecciones presidenciales consecutivas, y recuperado el control de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En El Salvador, tras doce años de guerra revolucionaria, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional obligó al imperialismo norteamericano y la oligarquía salvadoreña a firmar unos Acuerdos de Paz, en virtud de los cuales, por primera vez en la historia nacional, se abrieron espacios democráticos, en los que esa organización político-militar se transformó en partido político legal y devino la segunda fuerza política del país, hasta que en 2009 y 2014 logró ocupar el poder ejecutivo.

3. En Brasil, el Partido de los Trabajadores se convirtió en el núcleo de la coalición que ejerció el gobierno y, en Uruguay, el Frente Amplio estableció su control sobre los poderes ejecutivo y legislativo del Estado, en ambos casos, debido al auge de las luchas sociales y populares, combinado con el voto de castigo de amplios sectores sociales contra los gobiernos neoliberales que les antecedieron. A diferencia de Venezuela, Bolivia y Ecuador (donde existían crisis políticas), en Brasil y Uruguay el debilitamiento institucional no era suficiente para permitir la realización de cambios políticos radicales, y tampoco existe, dentro de sus respectivas fuerzas progresistas y de izquierda multitendencias, la correlación necesaria para emprenderlos. Si bien los liderazgos personales, en especial el de Luiz Inácio Lula da Silva y en menor medida el de Tabaré Vázquez, jugaron importantes papeles en sus triunfos electorales, en ambos casos hubo una mayor correspondencia entre el liderazgo personal, y la fortaleza y madurez de esas fuerzas políticas, que en Venezuela, Bolivia y Ecuador.
4. En Argentina, Honduras y Paraguay, debido a la debilidad y atomización de las fuerzas políticas progresistas y de izquierda, las coaliciones que ocuparon el poder ejecutivo en Argentina y Honduras fueron lideradas por figuras democráticas provenientes de partidos tradicionales, Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina y Manuel Zelaya en Honduras, y una figura proveniente de la Iglesia Católica, Fernando Lugo, en Paraguay.

El cambio en la correlación de fuerzas desfavorable a los gobiernos y fuerzas políticas progresistas y de izquierda

Transcurridos casi veinte años de la primera elección de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, primer eslabón de la cadena de gobiernos latinoamericanos progresistas y de izquierda, cabe preguntarnos: ¿cómo se ha modificado cada uno de los cinco factores que, en aquel momento, desencadenaron esa tendencia?

- El primer factor fue el acumulado histórico. En la conciencia social el acumulado histórico es volátil. Los efectos de esa ralentización y difuminación pueden aminorarse y postergarse mediante un sistemático trabajo de educación y formación política e ideológica, junto a la satisfacción de las necesidades populares, no solo las históricas, sino también las que

surgen y pasan a primer plano en la medida en que se atienden las anteriores, siempre y cuando ambas cosas, tanto la educación y la formación, como la satisfacción de las necesidades, se hagan con apego al principio: *crear riqueza con la conciencia, y no conciencia con la riqueza.*

Pero eso es difícil, entre otros, por los siguientes factores:

- La democracia burguesa no está hecha para que la izquierda ocupe y ejerza el gobierno, mucho menos para que cambie el gobierno desde el sistema, y menos aún para que rompa con el sistema y construya otro que lo supere históricamente. Esta es una dura batalla que se libra a contracorriente
- La erosión ideológica y/o la cooptación de dirigentes, funcionarios y militantes de izquierda, ya sea por la frustración y la resignación que anida en ellos debido a la resistencia del sistema a los cambios que creyeron poder hacer sin tantos obstáculos, o por la asimilación de los valores del sistema y acomodamiento a sueldos y beneficios, o por la combinación de ambos factores
- La insuficiente correlación de fuerzas propias para realizar las reformas progresistas o las transformaciones revolucionarias planteadas, que obliga a hacer alianzas con fuerzas de centroizquierda, centro e, incluso, de la derecha «moderada»
- El carácter heterogéneo de la fuerza progresista y de izquierda que ejerce el gobierno, y la asignación de puestos en los poderes del Estado y sus dependencias a aliados e incluso a cuadros propios que no apoyan el programa de reforma progresista o transformación revolucionaria

Por estas y otras razones, toda fuerza política progresista y de izquierda debe preguntarse, en forma constante: ¿en qué medida fortaleció el acumulado histórico que tenía en el momento que asumió el gobierno? ¿En qué medida ese acumulado se estancó? ¿En qué medida se deterioró y desgastó?

- El segundo fue el repudio mundial al genocidio y la fuerza bruta, que obligó al imperialismo a buscar formas más mediadas de dominación, y está interrelacionado también con lo que antes llamamos el «error de cálculo» del imperialismo, consistente en creer que la democracia neoliberal sería suficiente para garantizar su dominación. En este aspecto, el imperialismo

ha «rectificado» el «error de cálculo» mediante el desarrollo de la estrategia de *desestabilización de espectro completo* destinada a derrotar electoralmente o derrocar a los gobiernos progresistas y de izquierda, y al mismo tiempo criminalizar y judicializar a sus líderes y lideresas, y destruir a sus organizaciones políticas. Este es prolíficamente documentado en trabajos científicos y periodísticos, por lo que me abstengo de profundizar en él. Hasta el momento, solo la Revolución Bolivariana de Venezuela, en mi modesta opinión algo tardíamente, reaccionó con energía y efectividad frente a esta estrategia.

- El tercer factor fue el sustancial incremento de la participación electoral motivado por el auge de la lucha de los movimientos populares. Contra su vigencia conspira el hecho de que el acumulado histórico de las fuerzas progresistas y de izquierda —ya abordado como primer factor— se produjo desde la oposición, en la lucha contra el Estado y en defensa de las reivindicaciones de los sectores populares, pero esas fuerzas ahora tienen que rendir cuentas por el desempeño de un Estado en el que ocupan espacios, pero no ejercen el poder. Conocida es la «camisa de fuerza» a la que los gobiernos neoliberales precedentes dejaron sujeto al Estado latinoamericano, cargado de concesiones a potencias extranjeras y deudas externas impagables. Si bien los precios de los productos de exportación durante la primera mitad de la década de 2000 permitió atender esos compromisos y, al mismo tiempo, saldar parte de la deuda social, ya ambas cosas son excluyentes. También hay una cuota de elitismo y distanciamiento de los gobiernos progresistas y de izquierda con respecto a los «molestos» movimientos populares que «no entienden» la postergación de la satisfacción de sus reivindicaciones en función de cumplir los compromisos con el capital transnacional y nacional. Todo esto repercute en lo que llamo la «abstención de castigo» contra los gobiernos progresistas y de izquierda, ya que son sectores concientizados que no votarían por la derecha.
- El cuarto y último factor —puesto que ya el «error de cálculo» del imperialismo se comentó en el punto 2—, es el voto de castigo contra los gobiernos y fuerzas políticas neoliberales que se vuelve contra los gobiernos y las fuerzas políticas progresistas y de izquierda. Esta es la masa ciudadana que sufraga de acuerdo a percepciones circunstanciales de

perjuicio y beneficio, y es susceptible a ser movida a la derecha mediante la desestabilización de espectro completo y la mercadotecnia electoral. Es una masa fundamental, pues cabe recordar que ningún gobierno progresista o de izquierda fue electo con el voto de una mayoría concientizada, sino con el de una minoría comprometida y enaltecida —parte de la cual en la actualidad se abstiene— y una mayoría fluctuante que no se hizo todo lo posible para concientizarla.

Consideraciones

1. Si analizamos los efectos de los procesos determinantes en la situación de América Latina —la concentración transnacional de la propiedad, la producción y el poder político, la avalancha universal del neoliberalismo, el derrumbe de la Unión Soviética y el bloque europeo oriental y la neoliberalización de la socialdemocracia europea— y los entrecruzamos con los factores que fundamentan la acumulación de fuerzas conducente a la elección de gobiernos progresistas en la región —el acumulado de luchas, el rechazo a los métodos violentos de dominación, el auge de la lucha de los movimientos populares, el voto de castigo contra los gobiernos neoliberales y el error de cálculo del imperialismo norteamericano—, resulta evidente que la elección y reelección de gobiernos progresistas en el subcontinente, no se corresponde con las tendencias dominantes en el mundo, sino que se produce a contracorriente de ellas. Lo dominante a escala mundial no es la democratización, sino el desmontaje del tipo de democracia burguesa y «Estado de bienestar» imperante durante la posguerra en los países del norte de Europa Occidental, y su sustitución por un tipo de democracia y de Estado neoliberal, cuya función es apoyar la más intensa posible concentración de la riqueza y masificación de la exclusión social.

De lo anterior se deriva que la concepción de que en América Latina se había instaurado una «democracia sin apellidos», expresión asumida y defendida por el progresismo y la nueva socialdemocracia latinoamericana, muy escuchada en los duros debates que se dieron en los primeros Encuentros del Foro de São Paulo, es una concepción errada que repercutió en la falta de previsión y de preparación para enfrentar el cambio en la

correlación de fuerzas adverso a los gobiernos y las fuerzas progresistas y de izquierda de la región, identificable a partir de 2009.

La sorpresa y la incompreensión que esas corrientes manifiestan, incluso hoy, después de haber sido expulsadas del gobierno o estar en riesgo de serlo —sin haberlo visto venir, ni saber, a ciencia cierta, cómo evitarlo y revertirlo—, y de haber sido criminalizadas y judicializadas, o de estar a punto de serlo, es consecuencia de haber asumido la concepción de la democracia burguesa como sistema político y electoral pretendidamente imparcial e impoluto, que supuestamente no estaría sometido a la presión y la injerencia de los centros de poder imperialista, ni a la acción de los defensores de los intereses de las oligarquías criollas incrustados en los poderes del Estado y organizados en poderes fácticos, en el que los opresores de antaño reconocerían civilizadamente sus derrotas electorales y, con igual civismo, le permitirían gobernar a las fuerzas progresistas y de izquierda, frente a las cuales se limitarían a realizar la comedida función opositora característica de la alternancia entre partidos del sistema, y en el que ejercer el gobierno —un gobierno cuyo ejercicio sería compartido con aliados tácticos de centro y hasta de derecha— sería equivalente a ejercer el poder.

Una cosa es que, en las condiciones actuales y en el futuro previsible de América Latina, las fuerzas progresistas y de izquierda tengan que luchar dentro del sistema político de democracia burguesa, e incluso que tengan que apegarse de modo estricto y escrupuloso a sus reglas del juego, hasta tanto se creen las condiciones para establecer verdaderas formas de democracia, participativas, deliberativas, comunitarias, populares y protagónicas, mientras la derecha también las respete, y otra cosa distinta es que se asuma como válida y como propia la mitología creada para legitimar y garantizar la reproducción de dicho sistema.

2. Si al análisis incorporamos la periodización del flujo y reflujo de la correlación de fuerzas favorable a los gobiernos y fuerzas progresistas y de izquierda en América Latina, cuya curva, primero evolutiva y luego involutiva, demuestra los efectos de la desestabilización de espectro completo, las derrotas electorales, los golpes de Estado de «nuevo tipo», y las campañas de criminalización y judicialización, destinadas a proscribir y encarcelar a los

líderes y lideresas del bloque popular, y a ilegalizar y desarticular a sus partidos, movimientos, frentes y coaliciones, observamos una tendencia a que los actuales gobiernos progresistas y de izquierda sean un paréntesis en la dominación del capital. No necesariamente es una tendencia fatal, irremediable, irreversible, pero sí es la tendencia real. Para que no llegue a ser fatal, para que sea remediable y reversible, lo primero es cortar de raíz los enfoques justificativos y complacientes, y trazar objetivos, estrategias y tácticas basados en el conocimiento y comprensión de la realidad.

Hay que denunciar y combatir la desestabilización de espectro completo que el imperialismo y las oligarquías nacionales realizan contra los gobiernos y las fuerzas progresistas y de izquierda, pero ello no basta. Urge una evaluación autocrítica de las fortalezas y debilidades de nuestros proyectos, procesos, gobiernos y fuerzas políticas, no para autoflagelarnos o darle armas al enemigo, sino para potenciar esas fortalezas y erradicar esas debilidades. La desestabilización de espectro completo nos debilita y destruye más cuando aprovecha nuestras deficiencias y errores, y tenemos mejores condiciones para derrotarla cuando somos rigurosos y eficientes en nuestra labor organizativa, política e ideológica, y nuestra relación con el pueblo es fluida, constructiva e interactiva.

3. Discrepo con los compañeros y compañeras que afirman que, no obstante los reveses sufridos, las fuerzas de izquierda y progresistas de América Latina aún están en mejores condiciones que en épocas anteriores, porque siguen habiendo condiciones para la lucha política legal, se mantiene un amplio, aunque disminuido apoyo popular, y se conserva presencia en los poderes e instituciones del Estado. Si bien *todo eso* es cierto, *nada de eso* constituye un fin en sí mismo. El fin es la reforma progresista y la transformación revolucionaria de la sociedad, y ya el imperialismo encontró una forma actualizada de frustrarlas y revertirlas. Tienen razón quienes argumentan que en las condiciones actuales y previsibles, ganen las elecciones las fuerzas progresistas y de izquierda, o gáñenlas las fuerzas oligárquicas y proimperialistas, salvo excepciones, el triunfo de una u otra oscilará entre 1% y 5%, pero triunfos político-electorales por ese margen, o incluso por márgenes muy superiores no son suficientes para emprender, desarrollar y culminar una transformación social revolucionaria.

4. Comparto el concepto leninista de apertura y cierre de «ventanas de oportunidad» para las transformaciones sociales, que rescata Valter Pomar en su «Ensayo sobre cómo abrir nuevamente la ventana», incluido en esta antología. De eso se trata: la ventana de oportunidad abierta en América Latina durante las décadas de 1980 a 2000, se está cerrando y hay que ver cómo y cuándo abrirla nuevamente.

Se cerraron los espacios para las reformas y transformaciones sociales realizadas dentro de la democracia burguesa, dirigidas o muy influidas por liderazgos y corrientes progresistas y neosocialdemócratas. Salvo casos específicos de países como México, donde hasta el momento el sistema ha impedido la elección de gobiernos progresistas y de izquierda, y de ocurrir esa elección sería un proceso nacional tardío que, al menos intente sacar al país del estancamiento y la involución, en tendencia, este tipo de liderazgos y proyectos ya está agotado. Las fuerzas políticas multitendencias hegemónicas por el progresismo y la nueva socialdemocracia están siendo expulsadas del Estado y del sistema.

Con pleno y sincero reconocimiento a los méritos de figuras como Lula, Kirchner, Cristina y Correa, cabe preguntarse si, en caso de volver a ocupar la presidencia, podrían relanzar sus proyectos de reforma social, o si sería una victoria pírrica, a partir de la cual la escalada contra ellos de la desestabilización de espectro completo sería fulminante. En esencia, están expulsando al progresismo y a la izquierda del sistema. Es preciso romper con él, superarlo, pero para hacerlo, en especial, cuando no existe una situación revolucionaria, se requiere de una gran acumulación de fuerza social y política, y las nuestras están menguadas.

5. El cambio en la correlación de fuerzas desfavorable a los gobiernos y las organizaciones políticas progresistas y de izquierda ocurrido en los últimos años, reafirma una verdad conocida, pero por lo general olvidada, subestimada o aceptada solo de palabra: los espacios de poder estatal conquistados por la izquierda son frágiles y efímeros si no se sustentan en la construcción de hegemonía y poder popular. Una cosa es creer que estamos construyendo hegemonía y poder popular desde el gobierno, y otra construirlos de verdad. La hegemonía y el poder popular no se construyen

«de arriba para abajo», sino en interacción fluida «de abajo para arriba» y «de arriba para abajo».

6. Al contrario de lo que muchos creímos, la práctica demuestra que necesariamente era más sólido el blindaje contra los embates sistémicos de los procesos de transformación social revolucionaria (Venezuela, Bolivia y Ecuador), que el de los procesos de reforma no rupturista (el resto de los existentes). La resiliencia del poder permanente funciona contra ambos: unos y otros son sujetos potenciales de expulsión de los espacios institucionales que lograron ocupar.
7. La revolución mediante rupturas parciales sucesivas con el sistema social capitalista es una hipótesis aún no validada en la práctica que, en Venezuela y Bolivia, puede convertirse en tesis demostrada. Ese camino, inicialmente proclamado por la socialdemocracia europea de origen marxista, fue abandonado por ella en la medida en que ocupó espacios institucionales dentro de la democracia burguesa y terminó siendo un elemento orgánico del sistema. En la América Latina actual está, de nuevo, abierta la posibilidad de transitar ese difícil y peligroso camino. El paso de la democracia burguesa a formas superiores de democracia puede darse en Venezuela y Bolivia, pero la continuación de sus respectivos procesos transformadores no dependerá solo del imprescindible atrincheramiento en los poderes del Estado que sus respectivas dirigencias están realizando en legítima respuesta a la ofensiva imperialista destinada a destruirlos y aniquilarlos. Aún más imprescindible es resolver, de manera real, efectiva y duradera, los errores, deficiencias y vacíos existentes en la construcción de hegemonía y poder popular que provocaron los desfavorables cambios en la correlación de fuerzas en esos países. Toda experiencia inicialmente revolucionaria que se atrinchera en los poderes del Estado, sin una verdadera base de hegemonía y poder popular, se divorcia del pueblo y termina negando su propia historia. Sobran los ejemplos conocidos de en que desviaciones no incurrir, y en Venezuela y Bolivia aún hay tiempo para no incurrir en ellas.
8. En Ecuador, tras haber vencido por muy estrecho margen la acción concertada de las fuerzas oligárquicas que buscaban impedir la elección del candidato presidencial de Alianza País, Lenín Moreno, se produjo la ruptura entre la corriente encabezada por el nuevo mandatario, a la que las

autoridades electorales adjudicaron la conservación de la identidad de Alianza País, y la liderada por el expresidente Rafael Correa, que fundó el Movimiento de la Revolución Ciudadana. Al margen de las consideraciones que pudieran hacerse sobre sus motivos, la ruptura ratifica la validez del principio de que, llámese partido, organización, alianza, movimiento o de cualquier otra forma, la fuerza política progresista o de izquierda que aspire a desarrollar un proyecto reformador o transformador tiene que contar con estructura, organización, objetivos y programa que garanticen su unidad, coherencia y continuidad, incluidos los mecanismos para identificar las diferencias, debatirlas, procesarlas de modo oportuno y efectivo, y crear consensos o adoptar decisiones de mayoría y minoría que no pongan en peligro el proyecto.

Palabras finales

Los dos formidables retos que enfrenta la izquierda latinoamericana son: evitar ser expulsada del sistema, y evitar ser asimilada por el sistema, lo cual nos conduce a preguntarnos: ¿podrá la izquierda latinoamericana enfrentar con éxito estos retos? ¿Podrá evitar ser asimilada por el sistema? ¿Podrá concluir, con éxito, el proceso de rupturas parciales sucesivas con el capitalismo que la socialdemocracia de origen marxista abandonó?

En cualquier caso, no estamos ante el «fin de la historia». El capitalismo senil de nuestros días necesita, imperiosamente, concentrar riqueza, excluir población y depredar el planeta de manera incontrolada y vertiginosa. Ello se expresa en que, tal como sucedió en Argentina y Brasil, de inmediato reimpone el neoliberalismo puro y duro, que vuelve a agudizar la crisis del Estado y vuelve a estimular la protesta social, solo que, después de las derrotas sufridas, el salto de la acumulación social a la acumulación política puede ser más lento y difícil que en las décadas de 1980, 1990 y 2000:

- En los países donde las respuestas a las tres interrogantes planteadas en estas Palabras Finales sean positivas, es posible que la «ventana de oportunidad» no llegue a cerrarse por completo o que se logre reabrirla en un plazo relativamente corto
- En los países donde las respuestas sean negativas, cabe esperar una refundación de la izquierda, reminiscente pero distinta, en cuanto a forma y

contenido, del nacimiento de los partidos multitendencias a finales de la década de 1980. La cantera de líderes y lideresas, cuadros, militantes y activistas para esa refundación, ya existe en las nuevas generaciones. Le tomará algún tiempo madurar, tomar conciencia de su misión, organizarse y asumir el papel que la historia les depara.